

La deuda defraudada

consolidación de 1850
y dominio económico en el Perú

Alfonso W. Quiroz



La deuda defraudada

consolidación de 1850
y dominio económico en el Perú

Alfonso W. Quiroz

instituto nacional de cultura
editorial y productora gráfica "nuevo mundo" e.i.r.l.

11/13
9001

1era. edición: 1987

Copyright de esta edición: ◇ instituto nacional de cultura
ancash 390 - lima 1 - Perú
◇ editorial y productora gráfica "nuevo mundo" eirl.
av. brasil 3959 - lima 17 - Perú
◇ alfonso quiroz

cuidado de la edición: juana iglesias
jaime urco

carátula: octavio santa cruz
fotografía: maria piazza de cueto

impreso en el Perú - printed in Peru

*A Edith Norris
por su paciencia*

ABREVIATURAS

AGN	Archivo General de la Nación, Lima
ABPL	Archivo de la Beneficencia Pública de Lima
AHRA	Archivo Histórico Riva Agüero
BMNH	Biblioteca del Museo Nacional de Historia
BN	Biblioteca Nacional

INDICE

Introducción	9
Parte I. ORIGENES DE LA CONSOLIDACION	15
Capítulo 1. Economía y deuda interna	17
1.1 La economía antes de 1850	19
1.2 Los acreedores marginados	29
1.3 Los acreedores privilegiados	38
Capítulo 2. La legislación de la consolidación	49
2.1 Primeros reconocimientos	50
2.2 La ley de 1850	53
2.3 La conversión	58
2.4 La tacha	60
2.5 La rehabilitación	62
2.6 Porción del guano	66
Capítulo 3. La repartición de vales	71
3.1 Los que recibieron vales	72
3.2 Concentración en pocas manos	75
3.3 Identidad de los beneficiados	83
3.4 Cifras globales	87
Ilustraciones	
Parte II. DESTINOS DE LA CONSOLIDACION	93
Capítulo 4. Los consolidados	95
4.1 Corrupción	96
4.2 Despilfarro	103
4.3 Fraude y conversión	105
Capítulo 5. Los sectores populares	109
5.1 Alza de precios	109
5.2 Ingresos populares	119
5.3 Reacción de los desposeídos	123

Capítulo 6. Hacendados y rentistas	143
6.1 Manuel Aparicio	143
6.2 Fernando Carrillo de Albornoz	149
6.3 Manumisión	159
6.4 Domingo Elías y Pío Tristán	166
6.5 Doña Ignacia Novoa	170
Capítulo 7. Grandes Comerciantes	175
7.1 La práctica de Gonzales Candamo	176
7.2 Cotización de los vales	179
7.3 Acreedores hacia 1857	184
7.4 Una actividad mercantil exitosa	185
7.5 El patrimonio del gran comerciante	191
Conclusiones	199
Apéndice 1. Precios de Alimentos en Lima, 1847-1865	203
Apéndice 2. Expedientes observados por la Junta de Examen Fiscal	209
Bibliografía	215

LISTA DE CUADROS Y GRAFICOS

Cuadro 1:	Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la costa central, 1820 y 1839	32
Cuadro 2:	Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841 y 1843.	44
Cuadro 3:	Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1852, 1853 y 1855.	46
Cuadro 4:	Relación de personas que recibieron mayor cantidad de vales de consolidación, las cantidades convertidas y amortizadas, y la ocupación o actividad de dichas personas, 1850-1854.	76
Cuadro 5:	Individuos importantes que recibieron entre 30,999 y 10,000 pesos en vales, 1850-1852.	81
Cuadro 6:	Distribución porcentual de la deuda reconocida por cantidades recibidas.	82
Cuadro 7:	Comparación de las cifras oficiales de consolidación con las de Casós.	84
Cuadro 8:	Oposición de las actividades económicas de 126 poseedores de vales de consolidación, 1850-1852.	86
Cuadro 9:	Cifras globales de la consolidación.	89
Cuadro 10:	Amortizaciones y pagos de intereses en los periodos de Castilla (primero y segundo) y de Echenique, 1850-1862.	90
Cuadro 11:	Funcionarios y comerciantes que negociaron con vales tachados por fraudulentos.	99
Cuadro 12:	Alza de precios en porcentajes, 1847-1860.	111
Cuadro 13:	Evolución real del jornal en Lima, 1849-1869.	120
Cuadro 14:	Distribución por ocupaciones de la fuerza laboral de Lima en 1857.	122
Cuadro 15:	Propiedades del mayorazgo y testamentaría Carrillo de Albornoz, 1817.	151
Cuadro 16:	Principales indemnizados por la manumisión de esclavos en 1855.	161
Cuadro 17:	Nuevos propietarios de los vales de manumisión en 1857.	164
Cuadro 18:	Cotización de los vales consolidados, 1849-1865.	181
Cuadro 19:	Mayores acreedores de vales de consolidación hacia el año 1857.	186
Cuadro 20:	Clasificación de los valores y acciones de Pedro Gonzales Candamo, año 1866.	193
Cuadro del	Apéndice 1: Precios promedios anuales de artículos de primera necesidad, 1847-1865.	205
Gráfico 1:	Evolución del promedio anual de precios en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865.	206
Gráfico 2:	Fluctuación del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865. Escala semilogarítmica.	207

INTRODUCCION

La noticia circuló en periódicos y de boca en boca con gran entusiasmo; era marzo de 1850 y por fin se anunciaba que gracias a los ingresos del guano, el Estado peruano podría indemnizar a sus atribulados acreedores. Se promulgarían leyes que garantizarían el pago puntual y justo de la deuda interna descuidada por décadas de morosidad. Se otorgarían intereses a los valores de reconocimiento que emitiría el Estado. En otras palabras, la deuda flotante se consolidaría. La consolidación, es decir, la homologación de deudas de distintos orígenes bajo un solo tipo de obligación contra el Estado y con un solo fondo especialmente destinado para la amortización de su principal, abriría las puertas para restituir el desprestigiado crédito público al interior del país.

Así se difundió la idea de emplear socialmente los réditos fiscales providencialmente proporcionados por el guano en su temprana explotación y comercialización. La balanza comercial favorable, el presupuesto del gobierno bajo control, la pacífica transmisión de mando asegurada por las vías democráticas de la época, hacían pensar que, conjuntamente con la medida de la consolidación, se iniciaba un proceso regenerador en el Perú. Atrás quedarían, según el optimismo reinante, los largos años de lucha caudillesca, el caos social y la zozobra económica que se produjeron después de la independencia.

Sin embargo, pronto se delinearon los contornos en materia económica, política y social, que hicieron del periodo de la consolidación uno de los de mayor desasosiego para la joven república. La más cruenta guerra civil desde las luchas por la independencia enfrenta, en 1854, a los generales Ramón Castilla y José Rufino Echenique, los caudillos que pocos años antes habían realizado la transferencia democrática de la presidencia. Se decreta la abolición del tributo indígena en julio de 1854, y la manumisión de esclavos en diciembre de 1854, al compás de las necesidades bélicas de la renovada lucha entre caudillos. Ocurre una alarmante alza de precios hacia 1855 que afecta sensiblemente a los sectores populares urbanos. En medio del hambre en Lima se alza el clamor del público contra los enriquecidos fraudulentamente gracias a la consolidación. En 1857 Castilla se enfrenta a otro caudillo militar más, el general Manuel Ignacio de Vivanco, con graves consecuencias para la autonomía del país. En 1858 los empobrecidos artesanos protestan violentamente exigiendo medidas proteccionistas en defensa de su oficio.

En esta agitada coyuntura, los grandes comerciantes nativos y extranjeros logran encumbrarse aún más en las esferas económica, social y política del país. Ellos son los poderosos acreedores que cobran altísimos intereses a hacendados empobrecidos y al propio Estado, bajo severísimas condiciones de escasez de capitales. Estos comerciantes ejercen decisiva presión política y diplomática para revertir la oscilante legislación de la consolidación a su favor, introducir la conversión de la deuda interna a externa, y garantizar el triunfo de una política económica de corte liberal. En medio de este panorama, la cotización libre de los valores de la deuda interna actuaba como termómetro de la situación política y social.

Así, las preguntas que guiaron nuestra investigación sobre la escandalosa consolidación de la deuda interna han sido: ¿quiénes fueron los verdaderos beneficiados por la consolidación de 1850 y en qué forma?, y ¿hacia dónde se dirigieron los capitales finalmente erogados por la consolidación? Para contestar estas preguntas hemos utilizado fuentes que permanecieron ignoradas por otros estudios sobre el tema: documentos manuscritos de contabilidad fiscal y otros de carácter legal y social. Nuestra hipótesis considera la consolidación como un caso notable de utilización de fondos fiscales provenientes del guano para favorecer al grupo de grandes comerciantes nativos y extranjeros con base en Lima, en desmedro de mineros y hacendados empobrecidos, grises empleados estatales, dueños provincianos, pequeños propietarios y otros amplios sectores de la mayoría de la población. Se argumenta que el recurso se utilizó mal y afectó a pequeños pero abundantes acreedores que perdieron mucho en la transacción, y que sirvió para incrementar la acumulación de los comerciantes y cimentar su creciente influencia en materia de política económica. La consolidación no fue, como algunos autores la han descrito sin mucho fundamento empírico, una medida eficaz con miras a formar un sector capitalista. Ese proceso se había iniciado anteriormente sin ayuda del Estado y, en cierta medida, a pesar de las medidas estatales. Fue, eso sí, un episodio fundamental en la configuración de un destino de atraso económico, al impedir usos alternativos de los fondos fiscales para promover una más equitativa distribución de la riqueza, y sentar las bases de una persistente dependencia con respecto al crédito externo.

Explorar la consolidación de ninguna manera significa seguir un camino recto, sino uno lleno de vericuetos y extravíos. Su historia empieza en 1850, cuando se dan sus primeras leyes y se inicia la especulación de sus valores, y termina hacia 1865, cuando se logra amortizar y cancelar totalmente la deuda,

después de los acontecimientos fiscales y políticos que se originaron en su torno. En este transcurrir se evidencia el fracaso de los objetivos originales de la consolidación la cual; por el contrario, reforzó la acumulación de la riqueza en pocas manos y desaprovechó abundantes recursos públicos.

La consolidación de 1850 ilustra con evidencia cuantificable, las precarias bases sobre las cuales se erige un crédito público interno plagado de abusos y endémicos daños a la economía del país. Al mismo tiempo su conocimiento es esencial para entender la política económica estatal en relación al ascenso de los grandes comerciantes de Lima como un grupo social dominante. A pesar del interés inherente de este fenómeno histórico, juicios equívocos sobre la consolidación se repiten con terquedad. Todavía hoy se citan las palabras de Echenique, uno de los protagonistas e interesados claves de esta medida financiera estatal, como si fueran las definitivas sobre el tema. En vista de las pruebas documentales, prácticamente desconocidas anteriormente, es difícil ser convencido por los argumentos y convicciones que consideran al gobierno de la época, o a los más recientes, como forjadores de la riqueza nacional privada. Todo lo contrario, el Estado peruano ha dado amplias muestras, a través de sucesivos endeudamientos internos y externos, de su incapacidad de asegurar inversiones no especulativas en valores estatales o de distribuir con eficacia la riqueza nacional a través de mecanismos de deuda interna. La forma prioritaria que ha tomado la deuda interna es la de empréstitos forzosos que se consolidan y restituyen con tardanza, inadecuadamente y fomentando la especulación que beneficia a sectores privilegiados ajenos a la deuda original.

La inversión privada en valores del Estado es un caso especial, distinto a la inversión en otros valores financieros. Constituye una inversión a largo plazo con la garantía estatal. En ciertos países desarrollados los endeudamientos públicos internos han garantizado apropiadamente los intereses de inversionistas que pusieron su confianza en las finanzas estatales. En el Perú, el Estado defraudó las más de las veces esa confianza favoreciendo, por el contrario, al endeudamiento externo. Recordemos que, aparte de la deuda interna consolidada de 1850 están, entre otros, los casos de los bonos estatales impuestos sobre los bancos para financiar el presupuesto al reducirse los ingresos del guano, acción que generó una profunda crisis financiera y monetaria hacia 1873; también, la ruinosa consolidación de los depreciados billetes fiscales y otras obligaciones contra el Estado en 1889; las consolidaciones de 1898, 1918 y 1924; o los más recientes casos de los bonos de reforma agraria velasquista y los de "reconstrucción" belaudista. En las próximas páginas trataremos de recorrer

lo que a nuestro parecer constituye el laberinto de la deuda interna peruana de 1850.

El presente estudio está dividido en dos partes. La primera parte, compuesta por tres capítulos, analiza los orígenes económicos, sociales, legales y político-administrativos de la consolidación. La segunda parte, dividida en cuatro capítulos, se dedica a seguir los destinos de los fondos distribuidos por la consolidación.

El primer capítulo se dedica a describir someramente la situación económica antes de 1850, la cual dio como resultado un conjunto de acreedores contra el Estado, la mayoría de los cuales fueron marginados por los distintos gobiernos, y sólo unos pocos recibieron un trato preferencial. El segundo capítulo analiza los vaivenes de las sucesivas leyes de la deuda interna entre 1824 y 1857, al compás de los diferentes intereses políticos y económicos que moldearon finalmente el carácter legal de la consolidación. El capítulo tercero pone en evidencia las cantidades pormenorizadas y globales repartidas por la consolidación en la forma de vales, así como proporciona información minuciosa de la identidad individual y socio-económica de los que recibieron dichos vales entre 1850 y 1854.

En el cuarto capítulo se toca el aspecto de los "consolidados", es decir, los que se agenciaron de fondos mediante corrupción, venalidad y fraude, y los gastaron con todas las evidencias de un despilfarro suntuoso; este es un tema que causó gran resonancia en la época y que la historia ha privilegiado por encima de los efectos sociales más duraderos de la consolidación. El capítulo cinco se centra sobre las causas y consecuencias del alza de precios en Lima hacia 1854-1856, para determinar si ésta se debió o no a los efectos que sobre la circulación y los sectores populares pudo tener la consolidación. El sexto capítulo tiene como objetivo indagar sobre el destino que le dieron algunos hacendados y rentistas a las cantidades que recibieron a través de la consolidación y manumisión. Finalmente, el séptimo capítulo analiza el rol central que desempeñaron los comerciantes que supieron negociar y especular con los valores de la consolidación, mediante sus actividades mercantiles, financieras y políticas, tanto a nivel interno como a nivel internacional.

En este estudio me ha guiado la convicción de que es necesario sentar bases de investigación especializada para complementar y criticar algunas de las generalizaciones históricas que hoy son verdades aceptadas, con la esperanza de que las tendencias renovadoras de la historiografía sobre el Perú puedan avanzar sobre terreno más fértil.

A muchas personas les debo mi reconocimiento por su contribución al presente trabajo. Desde un comienzo Heraclio Bonilla brindó su estímulo constante. Las discusiones con Alberto Flores Galindo, Félix Denegri Luna, Franklin Pease y Pablo Macera fueron muy valiosas para la gestación de importantes aspectos del estudio. Merece mención especial el peruanista Paul Gootenberg, amigo infatigable de archivos, conversador y crítico tenaz, cuya novedosa y aguda obra ha abierto nuevos caminos para la investigación sobre el siglo diecinueve peruano. Así mismo, hubo personas amables que prestaron su asistencia desinteresada en el Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Instituto Histórico Riva Agüero y Beneficencia Pública de Lima. Jorge Sotelo y Lola Salas colaboraron generosamente en la edición final del trabajo. Finalmente, mis compañeros de la Universidad Católica, los de la "generación de la crisis", brindaron su amistad y aliento en tiempos estudiantiles y profesionales ciertamente difíciles.

PARTE I

ORIGENES DE LA CONSOLIDACION

Capítulo 1

ECONOMIA Y DEUDA INTERNA

La deuda interna es un recurso del Estado que le permite agenciarse fondos provenientes de ciudadanos particulares, y puede tomar la forma positiva de una iniciativa estatal para reactivar o balancear la economía de un país. En este caso, el Estado garantiza la adecuada compensación y retribución de la inversión particular. Al ampliarse el crédito interno se expanden las posibilidades de inversión rentable y se hace posible la efectiva financiación de proyectos públicos y privados viables. Cuando existe una desigual distribución de la riqueza que obstaculiza el efecto multiplicador de las inversiones en un país, la deuda interna puede así mismo ser un medio saludable para una distribución más equitativa del ingreso, si el Estado aprovecha los fondos obtenidos para beneficiar a los sectores menos privilegiados.

Sin embargo, si los recursos movilizados por el dispositivo de la deuda interna refuerzan las tendencias a la especulación y sostienen una desigual distribución, los efectos económicos resultan, por el contrario, negativos. En lugar de que la tasa de interés del capital baje, como sucede en el caso de un eficaz endeudamiento estatal, las tendencias especulativas elevan dicha tasa y, por lo tanto, las inversiones decrecen.

A nivel histórico, el mecanismo de la deuda interna fue cada vez más utilizado a medida que el Estado iba diversificando sus funciones al interior de una economía en tránsito al capitalismo. En una economía en crisis de producción, como lo era la peruana de la primera mitad del siglo XIX, el Estado recurre a la deuda interna -un mecanismo utilizado desde finales de la época colonial- para poner paliativos ineficaces a la bancarrota fiscal que va paralela a la crisis económica. En tales circunstancias, el crédito interno y externo del Estado se deterioran ante el incumplimiento de las obligaciones estatales. Para poder acceder nuevamente a dichos créditos, el Estado debe brindar garantías de mayor solidez, las cuales van recortando su capacidad de movilizar recursos propios, y elevar los intereses sobre los préstamos contraídos. Por ejemplo, el Estado español de mediados del siglo XIX, al carecer de fondos para sostener a su pesada burocracia en el periodo posterior a la pérdida de sus colonias sudamericanas, otorga altos intereses a prestamistas españoles y extranjeros quie-

nes prefieren invertir sus capitales en préstamos al Estado antes que hacerlo en el desarrollo productivo del país¹. La burocracia española comprometió los fondos de una gigantesca desamortización de la tierra, que afecta en gran medida a la Iglesia, con el fin de garantizar los empréstitos internos y externos, de lo cual se aprovechó una clase capitalista latifundista. Sin embargo, el desarrollo industrial español no se beneficiará mayormente de aquellas medidas financieras².

En el Perú republicano inmediatamente posterior a la independencia, se echó mano de antiguos fondos coloniales, secuestros de bienes de españoles y del desgravamen de censos y capellanías (imposiciones rentistas sobre propiedades de origen colonial), con el fin de proporcionarle al Estado, inadecuadamente, las garantías necesarias de la deuda y empréstitos internos. Continuó, así mismo, la costumbre iniciada durante las luchas de la independencia de recurrir a requisitorias y empréstitos forzosos durante las múltiples contiendas entre caudillos militares. Pronto se tuvo que otorgar otro tipo de garantías a los prestamistas nacionales y extranjeros para conseguir el financiamiento de los gastos estatales al agotarse los tradicionales. Los presupuestos fiscales entre 1831 y 1837 demuestran la existencia de déficits de alrededor de un tercio de los gastos y una dependencia marcada sobre los ingresos de aduanas y tributo indígena. Los gastos militares consistían alrededor del 59 al 75% del total de egresos³. Para cubrir el déficit presupuestal, los ingresos fiscales en los ramos de arbitrios, casa de moneda y aduanas, prácticamente se hipotecaron para garantizar préstamos con elevados intereses del 1, 1.5 y hasta el 2% mensual (12, 18 y 24% anual). En contraste con estas cifras, la renta agrícola anual en esos mismos años se calculaba entre el 2 y 3% anual⁴. Por lo tanto, se eviden-

1. Durante y después de la ocupación napoleónica, el Estado español atraviesa por un periodo de penurias fiscales parecidas a las de las repúblicas sudamericanas luego de la independencia. Así, el Estado español, durante periodos tanto liberales como monárquicos, recurrió al endeudamiento público interno y externo, garantizados por confiscaciones de tierras, para rescatar al Tesoro y asegurar apoyo político: Vicens Vives, J. *An Economic History of Spain* (Princeton: Princeton University Press, 1964), pp. 629, 637; Nadal, J., "The Failure of the Industrial Revolution in Spain", en Cipolla, C. (ed.), *The Fontana Economic History of Europe* (Glasgow: Collins Sons & Co., 1975), vol. 4, p. 556.
2. Ibid. En el caso español el Estado utiliza la expropiación o la desamortización de la propiedad territorial eclesiástica, real y municipal para agenciarse los fondos necesarios para la consolidación de la deuda interna, iniciando así una reforma agraria de la cual se benefició una clase capitalista latifundista. Ver también Tamames, R., *Estructura económica de España* (Madrid: Alianza Ed., 1978), vol. 1, p. 407.
3. Gootenberg, P. "Merchants, Foreigners and the State: the Origins of Trade Policies in Post-Independence Peru" (Tesis doctoral: University of Chicago, 1985), p. 317.
4. Macera, P. *Trabajos de Historia* (Lima: INC, 1977), tomo 3, p. 293.

cia una retracción de la inversión en el sector agrario prefiriéndose la colocación de inversiones con mayor margen de ganancia en el sector mercantil y estatal.

Pero, ¿qué tipos de acreedores de deuda interna existían en el Perú antes de 1850? Nos inclinamos a considerar básicamente dos tipos de acreedores. Por un lado, aquellos marginados que soportan todo el peso de la crisis productiva, principalmente hacendados, mineros y propietarios provincianos. A este tipo de acreedores no se les satisface debidamente sus reclamos de deuda y ellos se hacen, en consecuencia, más dependientes del capital comercial para poder satisfacer sus necesidades financieras. Los acreedores marginados han sufrido las requisitorias y empréstitos forzosos durante la guerra de independencia y las pugnas caudillescas. Además, se les grava con impuestos dañinos para sus actividades, mientras que el Estado otorga a cambio sólo valores de deuda depreciados y sin garantías tangibles.

Por otro lado están los acreedores privilegiados que prestan a elevado interés tanto al Estado como a los sectores de productores empobrecidos. A ellos sí se les paga con relativa puntualidad y tienen el poder suficiente para exigir la satisfacción de sus intereses en la deuda interna. Entre este segundo grupo de acreedores podemos distinguir a los grandes comerciantes extranjeros, los cuales preferían invertir en abonos o adelantos sobre los rubros fiscales de aduanas y Casa de Moneda, y a los comerciantes nativos quienes, organizados en el Tribunal del Consulado, se encargaban de administrar el ramo de arbitrios y otorgar préstamos al gobierno de turno sobre esta base.

Así, antes de que se contase con los ingresos del guano y se declarase la consolidación de 1850, ya se podía vislumbrar el patrón por el cual los nuevos recursos de la deuda interna se repartirían. En el presente capítulo discutiremos la relación entre una economía en crisis y la satisfacción inadecuada de la deuda interna antes de 1850, brindando evidencias para tipificar con mayor especificidad a los dos tipos de acreedores a que hemos hecho mención.

1.1 La economía antes de 1850

Dos cambios fundamentales caracterizaron el tránsito de la producción colonial a la republicana: un decaimiento de la producción minera global de recuperación pausada e irregular, y el agravamiento de la crisis agraria secular⁵.

5. Hunt, S. "Guano and Growth in Nineteenth Century Peru", (Discussion paper 34, Woodrow Wilson School, Princeton University, 1973), pp. 19, 28-31.

La guerra de la independencia entre 1821 y 1824 -periodo de destrucción e inestabilidad para las propiedades productivas- inicia este contraste con la situación colonial. Se pierden irremediamente mercados tradicionales para la venta de productos mineros y agrícolas, el capital para financiar actividades agrícolas y mineras se torna excesivamente escaso, y se produce un retraimiento en la oferta de la fuerza de trabajo. Ante esta situación, el marcado abaratamiento de productos de importación europeos va preparando el terreno para un renovado vínculo con el mercado internacional⁶.

La independencia de España no trajo, como los liberales de la época pensaron, una inmediata bonanza comercial al abolirse las restricciones mercantiles coloniales. Después de una primera y efímera oleada de intercambio, estimulada por el bloqueo de casi una década, el mercado peruano afectado por las contiendas bélicas se satura y las actividades de importación se estancan. En 1821, más de 5,000 toneladas de cargamento de mercancías británicas aguardaban en la bahía de Ancón las órdenes de San Martín para abarrotar inmediatamente el reducido mercado de la recién liberalizada Lima⁷. Como consecuencia de este estancamiento comercial decae, así mismo, el "boom" especulativo de acciones de inversión basado en un supuesto renacimiento minero que tanto entusiasmó a los capitalistas ingleses. Los ávidos comerciantes ingleses quedaban desalentados ante esta situación, a excepción de aquellas casas comerciales con experiencia y solidez previas; es el caso de la casa *Gibbs e hijos*, instalada en el Perú desde antes de la independencia. En 1824 había solamente 240 ingleses residentes en Lima, 20 casas comerciales de esa nacionalidad en Lima y 16 en Arequipa, números que se fueron reduciendo durante los primeros años republicanos.

El comercio de textiles ingleses se realizaba solamente por temporadas hasta la limitada recuperación de la producción de plata hacia 1840, y la aparición del guano entre las exportaciones peruanas. El verdadero despegue del intercambio comercial externo y, por lo tanto, de una inserción irreversible de la economía peruana en el sistema capitalista mundial, se da a partir de la década de 1840. Según cifras de Hunt, las exportaciones peruanas aumentaron un 250% entre 1831 y 1841, y un 500% entre 1831 y 1851. Así mismo, las importaciones británicas y francesas en el Perú aumentaron alrededor de 160% entre el quinquenio de 1830-1834 y el de 1840-1844, mientras que entre 1830-

6. Engelsén, J. "Social Aspects of Agricultural Expansion in Coastal Peru, 1825-1878" (Tesis Doctoral: UCLA, 1977), pp. 8-9. Gootenberg, op.cit., p.44.

7. Platt, D.C.M. *Latin America and British Trade* (Edinburgo: T & A Constable, 1972), pp. 25, 29.

1834 y 1850-1854 se dio un alza del 350%⁸. Por lo tanto, el sector exterior ejerció una mayor influencia sobre la evolución económica peruana a partir de los años 1845-1850.

El débil vínculo de la economía peruana con el mercado mundial antes de 1845 no se debía a causas internas únicamente. Es arriesgado fechar el inicio del "boom" capitalista internacional de productos industriales antes de dicha fecha. En la primera mitad del siglo XIX la industrialización capitalista podía estar avanzando notablemente, pero todavía no era capaz de ampliar proporcionalmente los mercados de sus productos a nivel mundial. Con los adelantos técnicos que ofrecieron el ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo se sientan las bases para esa esperada ampliación⁹. Por otro lado, el descubrimiento de reservas de oro en California y Australia a partir de 1848, multiplicó los medios de pago, bajó la tasa de interés y estimuló la expansión del crédito. Así pues, las condiciones mundiales eran favorables para la recuperación de las importaciones y exportaciones peruanas en la década de 1840.

Antes de la explotación comercial del guano, las principales exportaciones del Perú continuaban siendo los productos mineros, principalmente la plata. El período que va de 1824 a 1840, aproximadamente, tendrá características críticas debido a la baja inversión productiva. La búsqueda de productos rentables para la exportación fue la principal ocupación de extranjeros y nativos, como lo demuestra la avidez con que los cónsules ingleses presentaban sus prospecciones e informes acerca de las posibilidades de la economía peruana para el comercio exterior. En la década de 1820 las exportaciones prácticamente se limitaban a los productos mineros. La lana y el salitre hicieron su aparición tímida en la década de 1830; para dicha época un cónsul belga calculaba que alrededor del 79% del total de exportaciones anual era en oro y plata¹⁰. Dancuart, basándose en la obra de Córdova y Urrutia, nos informa que en 1838 el 90% de las exportaciones peruanas lo constituía la plata, el 5% el oro y el resto

8. Hunt, op. cit., p. 97. Hunt, S. "Price and Quantum Estimates of Peruvian Exports, 1830-1962" (Discussion Paper No. 33, Woodrow Wilson School, Princeton, 1973), pp. 64-65. Las cifras proporcionadas por Bonilla, H., "La expansión comercial británica en el Perú", *Revista del Museo Nacional* 40 (1974): 254-275, y "La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú", *Desarrollo Económico* 12 (1972): 305-331, deben ser tomadas con cuidado debido a omisiones en su elaboración.

9. Hobsbawm, E. *The Age of Capital* (Londres: Wiedenfeld & Nicholson, 1976), p. 33. Algunas cifras que Hobsbawm consigna nos indican que las exportaciones británicas de manufacturas de algodón fueron por un volumen de 1,300 millones de yardas entre 1850 y 1860, mientras que en los treinta años que mediaron entre 1820 y 1850 sólo alcanzaban 1,100 millones de yardas. Así mismo, el comercio mundial obtuvo un crecimiento del 260% entre 1850 y 1870, contra uno de 100% entre 1800 y 1840.

10. Macera, op. cit., tomo 3, p. 279.

otros productos (perlas, esmeraldas, lanas, cueros), sobre un total de 1'576,370 pesos¹¹.

En 1840 las exportaciones peruanas alcanzaban 1'562,140 libras esterlinas en oro y plata, 141,724 en lanas, 90,942 en salitre, 85,889 en algodón y 23,600 en quinina¹². De acuerdo a los cálculos de José María Pando, Ministro de Hacienda en 1830, la plata amonedada en ese año era por un valor de 1'700,000 pesos, contra 1'230,000 pesos en 1829 y 2'800,000 en 1826. En contraste, el promedio anual para cada uno de los años del período 1790-1794 era de 5'300,000 pesos. Dicho ministro atribuía esta disminución de la plata amonedada a la poca capacidad de las casas de moneda de Lima y Cusco, pues estimaba que la plata piña extraída ilícitamente del país ascendía a 4 ó 5 millones de pesos¹³. Mariano de Rivero, Director de Minería en 1826, señala que durante ese año la amonedación en la Casa de Moneda de Lima era de 1'847,885 pesos de plata y 89,352 pesos de oro; en 1827 las cifras eran de 2'706,560 en plata y 62,832 pesos en oro¹⁴.

El grueso de la producción de plata en el Perú de esos años provenía del asiento de Cerro de Pasco, aproximadamente un 70% del total de la plata producida. Es notable la recuperación de la producción de Cerro de Pasco, que en 1842 alcanza la máxima producción de su historia con 407,919 marcos de plata¹⁵, después de una postración de décadas a partir de la destrucción de su capital fijo durante la guerra de la independencia. Sin embargo, la producción de Cerro de Pasco decaerá desastrosamente en las décadas de 1850 y 1860. Por otro lado, existen evidencias para argumentar que, a excepción de los lavaderos de oro en Puno, los asientos mineros de la sierra norte (Trujillo y Cajamarca) y del sur (Arequipa) se estancaron irremediablemente durante la época estudiada¹⁶. En Hualgayoc, por ejemplo, luego de un inicial intento por emprender nuevamente la explotación del Cerro San Fernando con 18 vetas distintas de

11. Dancuart, E. *Anales de la Hacienda Pública* (Lima: G. Stolte, 1902), tomo 2, p. 26.

12. Platt, op. cit., p. 32.

13. Pando, J. M. *Memoria sobre el estado de la Hacienda de la República Peruana, en fin del año 1830 presentada al Congreso por Jose María Pando* (Lima: J. Masías, 1831).

14. Rivero, M. y Piérola, N. *Memorial de ciencias naturales y de industria nacional y extranjera* (Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1828), tomo 1, p. 102.

15. Manrique, N. "El desarrollo del mercado interior de la sierra central, 1830-1910" (La Molina: Taller de Estudios Andinos, 1979), pp. 61-64.

16. Opinión sustentada por Deustua, J. *La minería peruana y la iniciación de la República, 1820-1840* (Lima: IEP, 1986).

mineral, cunde el desánimo entre los mineros que prácticamente lo abandonan hacia 1830.

Tomemos el caso de Cerro de Pasco para analizar las causas de la postración de la minería en los años mencionados. En el aspecto técnico, las constantes inundaciones hacían imprescindible un método eficaz para desaguar los 558 socavones, entre activos y abandonados, y poder así explotar las vetas de mayor profundidad. Efectivamente, en 1839 al completarse el dilatado proyecto del Socavón de Quiulacocha, iniciado en 1806, se aprecia una sensible alza de la extracción de mineral en el periodo 1840-1845. Recordemos que durante las guerras de la independencia se destruyeron las máquinas de desagüe instaladas en tiempos de la colonia y que hasta 1851, no se lograron reponer eficazmente.

Un segundo problema al que se enfrentaron los mineros de Cerro de Pasco, fue las reducidas fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión y de adquisición de insumos. Varios proyectos de financiamiento propuestos para establecer Bancos de Rescate terminaron por frustrarse. La pequeña escala de la empresa minera la hacía dependiente de créditos que otorgaba el capital comercial en condiciones onerosas. Los comerciantes limeños aprovecharon estas circunstancias para ampliar su control sobre el comercio de la plata en épocas de bonanza de producción, y para retraer su inversión en épocas de crisis.

Los mineros se quejaban con frecuencia del alto precio del azogue que elevaba los costos de producción. Todavía se seguía utilizando la técnica de amalgamación para separar la plata del mineral y, debido a la franca decadencia de las minas de mercurio de Huancavelica, el insumo tenía que importarse de España.

Deustua considera que la política oficial de precios establecida por el Estado a través de las casas de moneda y bancos de rescate, constituía un serio perjuicio para la minería¹⁷. Calcula que existía cerca de un 40% de diferencia entre el precio de la plata en el centro minero y el precio internacional, y un 18% entre el del centro minero y el de los principales centros urbanos al interior del país. Al imponerse tal política de precios se recortaba el margen de ganancia y acumulación de los mineros. Era una forma que le permitía al Estado apropiarse de una porción de los beneficios de la producción minera para dedicarla a los gastos fiscales improductivos. Marginalmente, la política de pre-

17. Idem. Lo que sigue se basa en el valioso estudio de Deustua.

cios beneficiaba a los comerciantes que podían evadir al Estado, mediante el contrabando o la exportación, en la venta de la plata, conseguida a bajo precio en los asientos mineros.

A estos recargos a los mineros habría que agregar los altos impuestos, que ascendían en ciertos años a un 20% del valor de la plata producida, además de las otras imposiciones de la callana de fundición oficial, y de los derechos sobre la exportación de la plata, que los comerciantes habilitadores podían transferir a los mineros mediante el aumento del interés del capital prestado a éstos. Las más amargas protestas de los mineros se elevarían contra estos desmedidos impuestos a la producción.

En conclusión, los altos costos de producción, lo atrasado del nivel técnico, el alto precio del capital para financiar inversiones mineras, y la política asfixiante de precios oficiales y crecidos impuestos, conspiraban para mantener estancada la minería y limitar fuertemente el progreso social de los mineros. Significativamente, los beneficios mineros decayeron del 25%, en 1828, al 7.5%, en 1851, llegando al margen negativo de -11.75%, en 1875¹⁸.

Si hubo márgenes de ganancia para los mineros esto se debió a una sobreexplotación de la fuerza de trabajo; su régimen en las minas, al desaparecer la mita, tenía dos formas. Por un lado, cuando las minas tenían buenas vetas se trabajaba "a partido", es decir que se le daba nominalmente al trabajador minero la mitad del mineral que lograba sacar a la superficie, descontándose los derechos del propietario y una quinta parte para cubrir los gastos de la maquinaria de desagüe. Cuando las minas no eran muy ricas en minerales, la forma que adquiría el régimen de trabajo era la de pagar de cuatro a seis reales por jornada, además de la coca y velas que se les daba a los operarios¹⁹. Los trabajadores que estaban bajo el régimen de partido se veían obligados en la práctica a vender su parte al propietario de la mina, el cual cotizaba a su manera el precio del mineral, o al bolichero intermediario, que ofrecía precios bajos para sacar provecho en la comercialización que realizaba al trasladar el mineral de la mina al lugar de amalgamación. Los propietarios mineros eran los poderosos de las minas, sobre todo en Cerro de Pasco donde contaban con un gremio que fue perdiendo paulatinamente importancia a partir de las guerras de la independencia. Los bolicheros, por su parte, eran aquellos mineros sin propiedad que buscaban extraer y comercializar el mineral por su cuenta, muy vinculados al

18. Hunt, "Guano and Growth", p. 50.

19. Rivero, op. cit., tomo 1, p.102.

arrieraje; la mayoría de estos bolicheros terminaba trabajando para los propietarios.

Con tal régimen no es de asombrarse de que los mineros se quejaran por la "falta de brazos". Se carecía de una fuerza de trabajo permanente en la mina, pues los indígenas no necesitaban vender la suya más que en determinadas épocas del año. Habían dos categorías de trabajadores mineros: los barreteros, encargados de desprender el mineral al interior de las minas, y los *apiris* o *japires*, que transportaban el mineral a la superficie en bolsas que cargaban sobre sus espaldas. En las minas más grandes el número de operarios no pasaba de sesenta.

Un ejemplo de las dificultades que atravesaba la minería de esa época lo tenemos en la *Compañía Peruana de Minas de Cobre*, la cual tenía que mandar cada tres o cuatro meses "comisionados" a las provincias de Jauja "donde vivían el mayor número de barreteros para contratarlos adelantándoles dinero y gratificando a los alcaldes o gobernadores para que, como fiadores del cumplimiento de las contratas, interpongan sus respetos sobre ellos"²⁰. Una vez en Morococha, la compañía les pagaba a los apires 4 reales y a los barreteros 5 reales en 1845. Generalmente los operarios volvían a sus tierras para la cosecha y la siembra.

El minero propietario Carlos Renardo Pflucker intentó superar el problema de la inexistencia de una fuerza de trabajo permanente mediante la inversión de ocho mil pesos para cubrir los gastos de viaje de veinte operarios de nacionalidad alemana, a los que contrató en Europa con un sueldo de 5 reales por jornada de trabajo. Este intento de importar mineros no tuvo éxito pues varios de los trabajadores alemanes se rebelaron ante las condiciones de vida tan adversas que encontraron en Morococha, sublevándose varias veces y emprendiendo la fuga a Lima. La inversión de la compañía en Morococha era de cien mil pesos anuales, de los cuales 30,000 se dedicaban exclusivamente a los gastos de transporte y fletes. Debido a que no se logró instalar un horno de reverberación -una de las ideas del propietario para reducir costos-, los gastos de arrieraje del mineral calcinado a Lima eran muy altos. Adicionalmente, el propietario tenía que invertir fuertes cantidades cada vez que se les requisaban las mulas a los arrieros, algo frecuente durante las numerosas luchas de caudillos en la zona. Inclusive, se tuvo que equipar una recua de propiedad de la compa-

20. Pflucker, C. R. *Exposición que presenta Carlos Renardo Pflucker al Supremo Gobierno, con motivo de las últimas ocurrencias acaecidas en la Hacienda Mineral de Morococha* (Lima: Imprenta del Correo Peruano, 1846), p. 12.

ña, con peones traídos de Piura, a un costo de diez mil pesos, ante la capacidad copada de esa forma de transporte en los meses de verano debido al traslado de hielo a Lima.

Con la bonanza guanera y el repunte de las haciendas azucareras hacia 1860, los créditos a la minería debieron volverse más exigüos, pues los capitales se quedaban en la costa²¹. La situación era diferente en 1844, cuando había prosperidad en Cerro de Pasco por su alta producción de plata, la que no duró mucho y atrajo a muchos comerciantes limeños dedicados a la exportación de plata piña. Ante las necesidades de las tropas estacionadas en Jauja durante los años de conflictos entre los caudillos Castilla, Vivanco y Elías, los comerciantes Guillermo Donovan, Manuel Argumanis, Faustino Caviezes, Francisco Larco, Manuel Villate, Baltazar Lequerica, Bernardo Iturriaga y José Fuentes buscaron sacar provecho. Firmaron contratos con el prefecto y comandante general de Junín, el general Juan José Salcedo, para pagar por adelantado cuatro reales por cada marco de plata piña que intentaban exportar vía Lima y Huacho. En total se hicieron contratos por 60,876 pesos, monto a que ascendían aquellos impuestos adelantados. Esto constituyó una forma de préstamo que brindaba el comercio a los caudillos, al adelantar sumas que los comerciantes habían recargado a los mineros. Los comerciantes se beneficiaban con esta transacción pues los derechos normales para la exportación de plata piña eran de ocho reales por marco. El contraste con la política de empréstitos y requisitorias forzosos impuesta sobre los mineros y arrieros de la zona se hace evidente²².

La situación del agro durante la primera mitad del siglo XIX demuestra, tal vez, tendencias depresivas más serias que las de la minería. Las devastaciones y cambios de la propiedad de las haciendas ocurridos durante la lucha por la independencia, así como las fuertes fluctuaciones del precio del azúcar, se agregaban a las causas de la crisis agraria que se remontaban a la época colonial. La pérdida de los mercados de Bolivia, Río de la Plata, Quito y Santiago ya había erosionado las bases de la agricultura costeña y de su clase terrateniente. Al igual que los mineros, los hacendados se vieron obligados a depender del costoso crédito por consignación otorgado por comerciantes al irse extinguiendo las fuentes de financiamiento eclesiástico. En consecuencia, los fun-

21. Mallon, F. "Minería y agricultura en la sierra central: formación y trayectoria de una clase dirigente regional, 1830-1910", en "Lanas y capitalismo en los Andes centrales" (La Molina, Taller de Estudios Andinos, 1977), p.4.

22. "Expediente para el funcionamiento de una Casa de Moneda en Cerro de Pasco, 16 de julio de 1844", Documentos N° 002082, BMNH.

dos se deterioraron significativamente al añadirse a todos los problemas anteriores, la escasez de mano de obra esclava debido a la legislación abolicionista ("vientre libre") y a las dificultades internacionales del tráfico de esclavos²³. En la agricultura de la sierra se notará una creciente autonomía local y el predominio del gamonalismo que se aprovecha del cambio en la propiedad de las haciendas impuesto por el nuevo orden republicano.

Macera ensaya una cronología del agro costeño en base a las descripciones de Santiago Távora y de otros contemporáneos. En ella se evidencia una influencia muy fuerte de los distintos ciclos en la comercialización del azúcar sobre las distintas coyunturas por las que pasa la agricultura costeña entre 1830 y 1850. Según esta cronología, el agro costeño pasa por su peor época entre 1829 y 1839 debido a la baja de precios del azúcar y los problemas surgidos por la dificultad de colocar productos en los mercados tradicionalmente accesibles. Debido a esta situación, la renta de la tierra en la costa decaerá de un 5%, a principios de siglo, a un 2 ó 3%, a mediados del mismo. Ciertos síntomas de paulatina recuperación se observarán entre 1840 y 1850. Cultivos comerciales de algodón empiezan a aparecer en la década de 1840 en los valles de Piura, Casma, Santa, Ica, Nazca, Camaná, Tambo, Sama y Azapa. Hacia 1849 la producción total de algodón era de cincuenta mil quintales, a pesar de que su cultivo se realizaba en forma tradicional. Sin embargo, la verdadera transformación de la agricultura costeña ocurrirá en la década de 1860 con la aparición de plantaciones azucareras con cierto nivel de inversión en las zonas del norte y costa central, y la utilización masiva de la fuerza de trabajo china²⁴.

La agricultura de la costa central producía en las provincias del departamento de Lima, en 1839, alrededor de tres millones de pesos básicamente en productos alimenticios. La provincia de mayor producción en esta zona era Chancay con 700 mil pesos, de los cuales una cantidad considerable correspondía a lo producido por la crianza de cerdos. En Cañete el cultivo de caña de azúcar era el prioritario²⁵.

23. Engelsen, op. cit., pp. 8-18. Flores Galindo, A. *Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830* (Lima: Mosca Azul, 1984), pp. 84, 224-229, 231.

24. Macera, op. cit., tomo 3, p. 293; tomo 4, p. 44; Engelsen, op. cit., pp. 24-26. Ver también Távora, S. *Abolición de la esclavitud en el Perú* (Lima: Imprenta de El Comercio, 1855).

25. Córdova y Urrutia, J. M. *Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima* (Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1839), tomo 1, p. 33.

En 1833, un vocero de los hacendados del departamento de Lima reclamaba que "ninguna de las clases del estado ha sufrido pérdidas tan considerables, ni agravios tan manifiestos, como la de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima"²⁶. Denunciaba la fuerza brutal utilizada para desposeer a los hacendados de sus productos, numerario y brazos de labranza para sostener al ejército libertador, aparte de sembrar la insubordinación entre los esclavos. Además, al decretarse la ley de "vientre libre" se perjudicó aún más a los hacendados haciéndoles soportar el costo de la emancipación de los hijos de esclavos nacidos después de 1821 que debería haber sido cubierto por la deuda pública. Como resultado de esto, los hacendados se vieron obligados "por una parte, a disminuir sus consumos, las utilidades de otra clase industriosa [los comerciantes], y los impuestos indirectos que pagaban al erario público, reduciéndolos, por otra parte, a la necesidad de cultivar mal sus fundos, privando a la nación de grandes productos"²⁷. Sindica al ministro Bernardo Monteagudo, radical iniciador de la política de secuestros a españoles, como uno de los principales responsables de tal crítico estado de cosas.

Salaverry intentó beneficiar al grupo de hacendados hacia 1834 con una legislación pro-esclavista pero su periodo de mandato fue muy corto. La modalidad de chacra de esclavos se difundió ampliamente en el agro costeño hasta la llegada de los culís chinos, verificándose el hecho de que los hacendados no fueron un grupo de presión decisiva para obtener del Estado la protección de sus intereses ni una porción mejor del reparto de beneficios de la cancelación de la deuda interna.

Entre 1825 y 1845 el sector comercial ubicado en Lima resulta tal vez el único sector de la economía peruana que no participó de las dificultades que aquejaron tanto a la minería como a la agricultura. Esto se debió al carácter altamente rentable que iban adquiriendo las actividades de importación de mercancías, préstamos y créditos comerciales a los sectores privado y público y, cuando las exportaciones se lograron recuperar, el comercio con productos de exportación. En un minucioso trabajo basado en el análisis de matrículas de patentes -impuestos del 4% sobre los beneficios de los negocios de Lima-, Gootenberg logra probar cuantitativamente que aquellos dedicados a la actividad comercial entre 1830 y 1860 obtuvieron los mejores ingresos, por encima del sector manufacturero, el de servicios y del agregado de los negocios limeños sujetos a los patentes. Mientras que entre 1830-1845, años de guerra interna, los ingre-

26. Pando, J. M. *Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del departamento de Lima* (Lima: J. M. Concha, 1833), p. 3.

27. *Ibid.*, p. 43.

sos de otros sectores decaían hasta en un 30%, el sector comercial logró mantener sus ganancias aproximadamente al nivel de 1830 y, hacia 1845-1850, las incrementa en un 50-60% por encima del nivel de 1830²⁸. Esto demuestra la posición privilegiada que van logrando adquirir los comerciantes durante la primera mitad del siglo XIX, lo que a su vez les otorgará la oportunidad de obtener preferencial trato en relación a la cancelación de la deuda interna y en materia de política económica. Con esto quedan delineados los factores económicos que condicionarán la división entre acreedores marginados y acreedores privilegiados frente a la solución del asunto de la deuda interna pendiente.

1.2 Los acreedores marginados

Uno de los sectores claramente afectados por el naciente Estado republicano fue la aristocracia colonial en franca decadencia. La política de secuestros, entre 1821 y 1824, ahondó la crisis del agro y del sector terrateniente noble, así como parte del sector mercantil²⁹. Alrededor de 43 haciendas en los valles de la costa central pasaron al control del Estado, el cual adjudicó algunas de ellas a líderes militares patriotas, y cerca de 47 comerciantes de supuesta filiación realista se vieron obligados a emigrar³⁰. Se modificó bruscamente el carácter social de la propiedad de la tierra en la costa central. Los dueños que se marcharon definitivamente perdieron en forma irremediable sus propiedades. Sin embargo, hacia 1825 se abrió una brecha legal por la cual algunos de ellos se convirtieron en acreedores del Estado por concepto de propiedades secuestradas. Al encontrarse los gobernantes de esos años con que nadie quería invertir en la tierra, la legislación de los secuestros retrocedió abruptamente, primero, al ser abolidos los juzgados privativos en 1823 y luego, al decretarse, el 2 de marzo de 1825, que la mayoría de las propiedades de los emigrados quedaban libres de secuestro y que los parientes de los secuestrados debían renunciar a solamente la quinta parte de sus propiedades en favor del Estado. La propiedad de la tierra constituía un peso demasiado grande para el Estado republicano

28. Gootenberg, P. "Artisans and Merchants: The Making of an Open Economy in Lima, Peru, 1830-1860" (Tesis de Maestría, Oxford University, 1981), capítulo 1.

29. El general San Martín inició esta medida el 18 de junio de 1821 al expropiar las propiedades de los emigrados con el ejército español, los cuales iban abandonando Lima por temor de acciones violentas contra ellos por parte de la multitud limeña. Un decreto del 1 de febrero de 1822 dispuso el secuestro de la mitad de los bienes de los españoles forzados a emigrar del país. En 1824 se dictó el secuestro de todos aquellos que se encontraban con Rodil en el Real Felipe. Los bienes secuestrados se depositaron bajo la administración del Juzgado de Secuestros creado en octubre de 1821. Burga, M. *De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle de Jequetepeque del siglo XVI al XX* (Lima: IEP, 1976), pp. 148; Flores Galindo, op. cit., pp. 220.

30. Flores Galindo, op. cit., pp. 256-257.

que buscaba deshacerse de las tierras de conventos supresos, Temporalidades, Inquisición y otras heredadas del Estado colonial. No se vio mejor forma de hacerlo que adjudicando tierras a caudillos militares y, ante la incapacidad de éstos en materia de negocios, devolviendo parte de las propiedades expropiadas. Así tenemos que muchos de los verdaderos perjudicados por la destrucción y cambio de propiedad que acompañaron a las campañas militares de la independencia, se verían marginados al no contar con los necesarios recursos para defender sus casos ante el Estado. Es un proceso que va de la mano con los tempranos intentos por consolidar la deuda interna, entre 1826 y 1827, al otorgar tierras a cambio de depreciadas cédulas de reforma y otros valores de la deuda interna³¹.

Un caso de secuestro notable es el de Fernando Carrillo de Alborno, Conde de Montemar, quien demoró muchos años en adquirir nuevamente sus tierras que ya habían sido adjudicadas a otros privilegiados acreedores del Estado. Así mismo, doña Ignacia Novoa pierde sus haciendas Montalván y Cuiva, en Cañete, a manos del prócer chileno Bernardo O'Higgins. Doña Petronila Zavala, expropiataria de la hacienda San Regis, en Chincha, y los marqueses de Valle Umbroso, Montesclaros y otros consignados en el cuadro 1, perderían sus haciendas a manos de los generales Sucre, Echenique, Balta, Reyes y otros. Algunos de estos miembros de la aristocracia colonial quedarían permanentemente marginados del proceso de cancelación de la deuda interna. Otros, sin embargo, como lo demuestra el cuadro 1, lograron recuperar parte de sus propiedades hacia 1839. Además, los pocos, buscarán fortalecer su vulnerable posición mediante estratégicos arreglos crediticios con poderosos comerciantes, lo cual garantizará reconocimientos de deuda interna que serán compartidos con sus acreedores mercantiles.

En las provincias de la costa norte también se evidencian cambios en la propiedad de la tierra a través de transacciones con valores de la deuda interna que dejan rezagados a legítimos acreedores. En su estudio sobre el valle de Jequetepeque, Burga demuestra que al inicio de la República había una carencia de tierras disponibles en los alrededores del pueblo de Guadalupe, debido a la temprana tendencia al latifundio instaurada por un convento agustino. Al suprimirse los conventos con menos de 8 religiosos, en 1826, el Estado pasó a ser el propietario de las tierras de dicho convento. Los antiguos arrendatarios enfiteutas³², quienes subarrendaban parcelas a los pobladores del pueblo de Guadalupe y que, antes de la supresión, pagaban una renta al convento agustino, aho-

31. Ver capítulo 2.

32. Locatarios por largos periodos o de por vida.

ra debían pagarle al Estado. Sin embargo, los enfiteutas criollos del valle buscaban la propiedad directa de la tierra, primero desplegando hostilidad contra el convento al convertirse en los primeros en proclamar la independencia en el valle, y luego gestionando la compra directa de la tierra al Estado republicano³³.

En este proceso también intervinieron foráneos al lugar, acreedores del gobierno, funcionarios y militares quienes, junto a los enfiteutas, compraron tierras a precios devaluados, debido al deterioro de las propiedades, y con papeles de la deuda interna sobrevaluados, entre 1829 y 1846. Por ejemplo, al general José María Plaza, a quien el Estado le reconoce una deuda de 9,600 pesos en 1828, se le entrega en 1829 como pago a cuenta la hacienda Mari-Núñez, de 100 fanegadas, la hacienda Talla, de 291 fanegadas, y otros terrenos cerca de Guadalupe. Así mismo, a José Colens se le otorga la hacienda Tecape, y a Domingo Casanova se le adjudica en 1845 la hacienda Limancaro por créditos insolutos³⁴. En 1850 Casanova recibirá además 62,500 pesos en vales de consolidación.

A partir de 1842, las ventas por parte del Estado a los antiguos enfiteutas se incrementan: el coronel Jacinto Rázuri compra la hacienda Lurifico en cuatro mil pesos, pagados en créditos de la deuda interna. Ante la intensificación del proceso de transferencia de la propiedad de la tierra, que benefició a algunos pocos que sabían acaparar y colocar provechosamente los valores depreciados de la deuda interna, el primer gobierno de Castilla brindó, en 1849, un paliativo a favor de los desposeídos pobladores de Guadalupe, verdaderos perjudicados por la depresiva situación del agro del valle. Se aceptaron cédulas de deuda interna para la compra de predios urbanos en el pueblo. Las viviendas de Guadalupe pertenecían al Estado, que decidió venderlas a aquellos ocupantes que hubiesen adquirido créditos de la deuda interna por cupos o empréstitos en años anteriores. En enero de 1851, se acordó pagar 3 pesos, en cédulas de la deuda interna, por cada fanegada. Se presentaron 203 personas que compraron 325 fanegadas, quedando sobrantes 332 fanegadas que luego fueron repartidas entre los primeros compradores. Sin embargo, aunque ahora dueños de sus viviendas, los habitantes del pueblo de Guadalupe siguieron careciendo de acceso a la propiedad de las tierras de cultivo, las que se concentraron en pocas manos³⁵. Así, a pesar de que los pobladores de Guadalupe fueron mejor tratados por los ejecutores de la deuda interna que los habitantes de otros lugares, constituyen un claro ejemplo de acreedores marginados.

33. Burga, *De la encomienda...* pp. 148-156.

34. *Ibid.*, p. 153.

35. *Ibid.*, pp. 159-160.

CUADRO 1

Cambio y permanencia de los dueños de propiedades rurales de la Costa Central, 1820 y 1839

Razón de las haciendas secuestradas, 1821-1823*

Dueños de haciendas en 1839**

Hacienda	Partido	Dueños	Nac. (1)	Hacienda	Distrito	Dueños
Andahuasi	Sayán	Anselmo Salinas	E			
Boza	Chancay	Marqués de la Boza	L	Boza	Chancay-Aucallama	Gerónimo Boza
Buenavista	Lurín	Josefa Jacot				
Caqui	Chancay	Francisco Aliaga		Caqui	Chancay-Aucallama	Señores Cueva
Carrisal	Pisco	Vicente Algorta				
Caucato	Pisco	Fernando del Masco				
Concha	Surco	Antonio Tarranco				
Chacra Alta	Bellavista	Antonio Solórzano	E			
Chancaillo	Chancay	Manuel Elguera	E	Chancaillo y Viña Ramírez	Chancay	Manuel Elguera y familia
Chacaca	Huaura	Luis Baseno	E			
Chuquitanta	Carabayllo	Marqués del Valle Umbroso		Chuquitanta y Villaseñor Alto	Carabayllo Bocanegra	Grimanesa de la Puente (2)
Chunchanga	—	Román Idiáquez				
El Convento	—	Manuel García	E			
Gala	Lurigancho	Bruno Vitoseco				
Huando	Chancay	Rosendo Gao	E	Huando	Huaral	Dr. Pedro Reyes
Lanchas	Pisco	Vicente Algorta				
La Huaca	Chancay	Juan Pasquel	E			
Las Salinas	Chancay	José Laos	L	Las Salinas y Huascata	Chancay Late	José Laos
Motocachi	Santa	Matías Antiga	E			
Palpa	Chancay	José Basurco	L			
Paramonga	Pativilca	Anselmo Salinas	E	Palpa	Aucallama	Conv. Sto. Domingo
Pando	—	Josefa Ramírez de Arellano				
Pasamayo	Chancay	Antonio Solórzano	E			
Santa Clara	Late	Francisco Goytizolo		Santa Clara	Late	Fco. Goytizolo
Santa Cruz	—	Pedro Abadía				
San Jacinto	Santa	Matías Antiga (finado)	E			
San Regis	Chincha	Fern. Carrillo de Albornoz		San Regis	Chincha	José y Fernando Carrillo de Albornoz
Tecuán	Chancay	Antonio Pomar	E	Tecuán	Chancay	José Alzamora

Villa y San Tadeo	Surco	Juan Bautista Lavalle	Cuadrado, Villa, San Tadeo y Pacallar	Surco	Juan Bta. Lavalle
Zapán Zavala	Late	Conde de Montesciaros Marqués del Valle Umbroso	Zavala	Late	Grimanesa de la Puente(2)
Secuestros de bienes urbanos y del ramo comercial					
Propiedades		Dueños			
Guardaban bienes de emigrados, mina Vistaalegre. Fincas del mayorazgo.		Pedro Abadía y José Arizmendi			
15 casas Residencia y fincas		Juan Aliaga : Conde de San Juan de Lurigancho Juan Bautista Andraca Fernando Carrillo de Albomoz: Conde de Montemar José Gonzales: Conde de Villar de Fuente (casado con Josefa Pando) Francisco Xavier Izcue Martín Osambela		Guacoi y Cerro o Sambrano	Carabayllo Juan Aliaga
Guarda bienes de emigrados 8 fincas y cochera 1 callejón		Gaspar Osma(casado con Josefa Ramírez de Arellano) Felipe Sancho Dávila		La Menacha y Panteón	Late María Osambela
Residencia y fincas				Lomolargo, Pa- riache, Asesor, Quiroz, Porto- carrero, Paca- llar Pino	Late Testamentaría Sancho Dávila
Finca del Mayorazgo Casa de Pastrana, almacén en la calle Mercaderes 5 casas Fincas Escrituras, pagarés, etc.		Manuel Salazar Francisco Quirós Torre Tagle Juan Bautista Valdeavellano Juan Bautista Zarándegui		Surco	Manuel Salazar

(1) Nac.: nacionalidad, E = europeo (español), L = limeño (2) Esposa del marqués de Valle Umbroso

* Datos gentilmente proporcionados por Alberto Flores Galindo, quien prestó uno de sus cuadernos de apuntes de la investigación que realizó sobre la aristocracia mercantil colonial a fines del siglo XVIII, y comienzos del XIX: *Aristocracia y plebe*, (Lima, 1984). Los datos de este cuaderno los obtuvo del Juzgado de Secuestros, años 1821-1822, legajos 1 al 11, Tribunal de Cuentas, AGN.

** Datos obtenidos de los cuadros que aparecen en la obra de José María Córdova y Urrutia, *Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima*, (Lima, 1839), Tomo I; pp. 88-90, 91-93, 98-100, 124-25. Tomo II, pp. 5-6.

La agricultura de Cajamarca pasaba por una situación tal vez más crítica que la de la costa norte³⁶. Existía una vinculación entre la deprimida producción ganadera de la zona y la depresión de la demanda de dichos productos en la costa norte. Debido a ese cuadro de abatimiento, las propiedades se depreciaron y ocurrió un proceso de adjudicaciones análogo al que observamos en la costa norte y en otros lugares del Perú durante los primeros años republicanos.

En Chota se adjudicaron haciendas a militares a quienes se les adeudaba sueldos y a los que se quería premiar por su participación en las contiendas de la independencia. Es el caso de la adjudicación de la hacienda Llaucán al general de división Blas Cerdeña³⁷. Esta hacienda tenía especial importancia pues lindaba con el Cerro San Fernando, principal fuente del mineral de Hualgayoc, cuyas vetas todavía se seguían explotando en 1820 pero luego decayeron irremediablemente en años posteriores. En una petición fechada el 8 de enero de 1830, el general Blas Cerdeña expone méritos y servicios en las campañas de la independencia, Bolivia y Colombia, pidiendo que se le recompense con la adjudicación de la hacienda Llaucán a cambio de seis mil pesos que se le debían, por ajustes de cuentas realizadas en la tesorería departamental de Arequipa

36. La agricultura de Cajamarca experimentaba la siguiente situación en los años del primer gobierno de Castilla, según una descripción que de ella nos hace Fernando Casós, en su libro *Los amigos de Elena* (Paris: E. Renne Schmitz, 1874), pp. 36-37: "aquí se trabaja para morirse de hambre, hay producción, pero el mercado de consumo es infinitamente pequeño, los productos van a los terrados a perderse, o darlos a los colonos y gentes necesitadas: nuestro país sólo tiene la agricultura en las costas, aquí no hay más que ricos pobres, que no salen ni pueden salir de su rusticidad y la miseria. No obstante vendrán de Motupe a la compra de ganados, podemos realizar 200 cabezas, que producirán 300 duros".

37. Según una biografía de Cerdeña, éste nació en la Gran Canaria en 1792. Se trasladó a Venezuela en 1809 y se dedicó al comercio hasta 1815. Ingresó al ejército y, como teniente del batallón real de Numancia, es enviado a Paita. Se pasa con todo su batallón a las filas del ejército de San Martín en 1820. Participa en la campaña de Arenales en la sierra y llega al grado de coronel. Bolívar lo nombra intendente de Lambayeque y comandante general de la costa norte en 1824. Se retira del servicio en 1825 con una pensión mensual de 192 pesos, luego de haber perdido una pierna en la batalla de Zepita. Acepta el nombramiento de intendente de la provincia de Ica y el de comandante general de las costas del sur. Desempeña luego la administración de la aduana de Lima y es nombrado general de brigada en 1826. En 1829 es ascendido a general de división y participa en la campaña contra Colombia; desempeñó luego la comandancia general de Junín y Ayacucho. Durante el gobierno de Gamarra se le nombra comandante general del Cusco, y en 1831 prefecto de Arequipa, sirviendo luego bajo la Confederación Perú-boliviana. Migra a Guayaquil y es honrado en la lista militar por el Congreso de Huancayo. En 1835 es ascendido a gran mariscal por Orbegoso. Muere en 1854. Camacho, J. *Apuntes para la biografía del gran mariscal don Blas Cerdeña dedicados a su hijo el señor mayor de artillería don José Cerdeña* (Lima: Tip. El Heraldo, 1854).

en noviembre de 1828, y en la comisaría general de Cajamarca en febrero de 1820³⁸.

En un decreto supremo dictado por el Presidente Gamarra en enero de 1830, se lee:

"Teniendo en consideración los importantes servicios que ha prestado a la Nación el Benemérito General de División Dn. Blas Cardena (...) se adjudica a favor del referido Gral. en todas sus partes la Hazienda denominada San Francisco Llaucán cita en la Provincia de Chota Departamento de la Libertad, pues aunque por el ajustamiento que presenta sólo es deudor el Estado de cinco mil setecientos cinco pesos (...) y el valor de la referida Hazienda sube a la cantidad de diez y ocho mil pesos (...) cede a su favor los doce mil novecientos ochentaicinco pesos (...) que resultan de aumento"³⁹.

De esta forma se cancelaban las deudas con los militares ilustres, utilizando los fondos administrados por el Tribunal del Consulado y la Dirección de Consolidación, creada en 1826. Dichos fondos provenían en su mayoría, como veremos en el capítulo 2, de los bienes cautivos de la antigua administración colonial (Temporalidades) y de los conventos supresos (a los cuales se añadían las propiedades del Tribunal de la Santa Inquisición extinto).

En el caso de la hacienda Llaucán, se trataba de una propiedad implicada en el concurso de acreedores del banquero Juan de la Cueva, que quebró en 1635. Los bienes de este banquero fueron asumidos por el Real Tribunal del Consulado, que los administraba con el objeto de indemnizar a los 579 acreedores (entre ellos el Tribunal de la Santa Inquisición —debido a que algunos de los clientes de de la Cueva fueron acusados de judaizar—, cuyas rentas luego pasarían al Estado republicano), a quienes se les debía por un monto de 1'068,284 pesos. Sin embargo, estas sumas acreedoras nunca serían canceladas pues la antigua deuda colonial nunca se consolidó, a pesar de que hubo algunos débiles intentos por hacerlo.

El Real Tribunal del Consulado arrendaba la hacienda Llaucán, que perteneció a Juan de la Cueva, y el producto del arrendamiento ingresaba al fondo de indemnización destinado a satisfacer a los acreedores del concurso. Después

38. "Expediente sobre la adjudicación de la hacienda Llaucán al Sr. general de división Blas Cerdeña y liquidación de sus arrendamientos, desde el año de 1819 hasta el presente con la testamentaría del locador, d. Pablo Espinach de que es albacea el teniente coronel de civil don Manuel Espino. Año 1830". Tribunal del Consulado, Caja de Consolidación, Contencioso, concurso Juan de la Cueva, legajo 37, AGN.

39. Idem.

de la independencia, el Estado republicano continuaba arrendando dicha hacienda a los antiguos locatarios, los ex-coroneles del ejército colonial Miguel y Pablo Espinach, vecinos de Cajamarca; a la muerte de Miguel, en 1827, se intenta cambiar de arrendatario. La testamentaría de Miguel Espinach, que continuaría en posesión de la hacienda hasta 1830, debía, según el Director de Consolidación, el arrendamiento vencido entre los años de 1820 y 1827, a razón de dos mil pesos anuales. Entre 1828 y 1830, año en que se verifica la adjudicación de la hacienda a Cerdeña, sería Manuel Espino, el albacea de la testamentaría Espinach, el administrador de la hacienda.

En 1830, el apoderado legal de Blas Cerdeña, don José Mariano Cavada, coronel comandante de los cívicos de Celendín, tomará posesión de la hacienda a pesar de las protestas del minero de Hualgayoc, Domingo de la Cueva, descendiente de Juan de la Cueva, quien reclamará para sí la propiedad de la hacienda. En 1832 Cerdeña renuncia a la posesión de la hacienda por "inconvenientes para el goce pacífico" de la misma. El Estado le otorga a cambio, por decreto presidencial, mil pesos mensuales de la tesorería del Cusco y quinientos pesos mensuales por la de Ayacucho, hasta cubrir la cantidad de veinte mil pesos. En 1852 Cerdeña recibe 25,700 pesos en vales de consolidación.

Tanto en el caso del general Plaza como en el del general Cerdeña, observamos la compensación privilegiada a caudillos militares en desmedro de los que mayor perjuicio sufrieron debido a la destrucción y expropiación de propiedades. Al repartirse los recursos de la deuda interna, antes de 1859, con obvio favoritismo, se contribuye a una inicial concentración de las mejores tierras en manos de gamonales que se aprovecharon del ausentismo de los dueños de las adjudicaciones.

En la sierra central, dos casos de beneficiados por la deuda interna en desmedro de acreedores menos influyentes fueron los de Francisco de Paula Otero y los hermanos Olavegoya del valle del Mantaro. Paula Otero se inicia como arriero en la zona estableciéndose en Tarma a fines del siglo XVIII. Durante la independencia fue comandante general de las guerrillas del centro y gobernador de Tarma. A partir de 1833 adquiere varias haciendas, entre ellas la hacienda Cachi-cachi, situada entre Jauja y Tarma y, a través de la parentela de su esposa, entra en el negocio minero de Cerro de Pasco. Era acreedor del Estado por adeudos y montepíos por servicios prestados en la campaña libertadora, por lo cual recibe en 1852 treinta y un mil pesos en vales de consolidación. A su muerte lega a sus hijas las haciendas Quijano, en Salta; Florida, Acochay y otras fincas, en Tarma, y varias minas en La Rinconada, Cerro de Pasco⁴⁰.

40. Manrique, op. cit., p. 37.

Los hermanos Demetrio y Domingo Olavegoya poseían inversiones diversificadas y eran dueños de una casa comercial en Lima. Comercializaban los productos de sus propiedades, estableciendo así una red amplia de actividades entre Lima y la sierra central. Debido a esta multiplicidad de contactos, que los colocaban en posición propicia para vincularse con los negocios del Estado, es que logran obtener un alto reconocimiento de deuda interna en 1852, unos 68,500 pesos en vales, cifra que fue la más alta entre los propietarios de la sierra central. Otros propietarios de la zona que alcanzaron a ser beneficiados por esta medida fueron, entre otros, Francisco Alvaríño, hacendado de Tarma y propietario del valle de Chanchamayo, quien recibió 55,800 pesos en vales en 1850, y Manuel Ortiz de Zavallos, propietario en Huancayo, al que se le otorgó 42,000 pesos en vales en 1851.

Sin embargo, muchos arrieros y propietarios de tierras y minas de la sierra central fueron completamente ignorados por la deuda interna, o recibieron exiguas compensaciones, a pesar de haber sufrido directamente las consecuencias de las campañas militares en la zona.

Los grandes terratenientes Pío Tristán, de Arequipa, y Ancelmo Centeno, del Cusco, también se beneficiaron de la deuda interna⁴¹. Los casos de Paula Otero, Olavegoya, Tristán y Centeno son ejemplos de hacendados que lograron hacer respetar sus derechos sobre la deuda interna, aunque sea tardíamente. Como en el caso de Carrillo de Albornoz y Novoa, despojados propietarios coloniales, sus contactos con comerciantes notables y figuras políticas de Lima parece que resultaron determinantes en la adecuada satisfacción de sus reclamos. Por el contrario, como veremos en el capítulo dedicado a los "consolidados", los expedientes tachados por la Junta Depuradora en 1855 dan amplias pruebas de que existieron abundantes y desconocidos hacendados, arrieros, propietarios provincianos y mineros que se vieron marginados durante largas décadas en sus reclamos, y acabaron perjudicados por la consolidación de 1850 que los excluyó definitivamente del reparto de los nuevos fondos de la deuda interna, o les proporcionó sólo una mínima porción. Entre otros, podemos mencionar a varios hacendados en los valles de Santa (por ejemplo, Manuel Zuloaga), Cajatambo y costa central; mineros de Cerro de Pasco; propietarios provincianos y arrieros en Ayaviri, Tambillo y Huaitaná, marginados por nego-

41. Para el caso de Tristán ver capítulo 6 más adelante, y Flores Galindo, A. *Arequipa y el sur andino* (Lima: Ed. Horizonte, 1977), p. 50; Colección Jiménez, N° 123, AH-RA. Para el caso de Centeno ver Morner, M. *Notas sobre el comercio y los comerciantes del Cusco desde fines de la colonia hasta 1920* (Lima: IEP, 1979), p. 11; Tamayo H., J. *Historia social del Cusco republicano* (Lima: Industrial Gráfica, 1978), p. 51.

ciantes en vales de consolidación de 1850⁴². La mayoría de los créditos reconocidos por la consolidación de 1850 provenían de deudas por daños y perjuicios durante las guerras de la independencia y caudillescas, como lo demuestra la descripción del concepto original de las cantidades reconocidas como deuda durante los gobiernos de Castilla y Echenique. La suma total de los expedientes por daños ocasionados por dichas contiendas ascendía a 16 millones de pesos en deudas que se reactualizan exageradamente de la noche a la mañana después de décadas de olvido. A raíz de estos reconocimientos se enciende una sorda pugna por su acumulación y concentración que despojó a los reclamantes originales y privilegió a los pocos que supieron negociar y especular con ellos.

1.3 Los acreedores privilegiados

Aparte de los caudillos premiados con adjudicaciones y con otros fondos limitados destinados al arreglo de la deuda interna, los prestamistas, cuyo giro se concentraba principalmente en la esfera comercial de Lima, lograron hacerse garantizar por el Estado el pago de sus cuentas acreedoras.

El poderío social de este grupo se sustentaba en la concentración del capital comercial en Lima. Los comerciantes obtenían altos beneficios, los más rentables de las actividades en la Lima de la época, mediante la importación-exportación y préstamos otorgados a crecidos intereses⁴³. Después de un periodo de selección competitiva, a través de la competencia comercial durante los periodos de crisis, se reduce el número de comerciantes que domina en la coyuntura de los años 1840, cuando se incrementa la producción de Cerro de Pasco y empieza a exportarse el guano. Entre los más importantes estuvieron *Gibbs e hijos, Alsop y Cía., Huth Gruning y Cía., Templeman y Bergman, Pedro Gonzales Candamo, Graham Rowe y Zarándegui y Cía.*

Al inicio de la República el sector mercantil colonial se vio afectado por la política de secuestros. Sin embargo, este sector dio signos de recuperación mucho antes que el de los hacendados coloniales. Los comerciantes Pedro Abadía, Francisco Javier de Izcue, José Gonzales conde del Villar de Fuente, Juan Bautista Andraca y Francisco Quirós figuraron entre los principales secuestra-

42. Ver capítulo 4.

43. Gootenberg, "Artisans and Merchants", p. 28. Ver también Gootenberg, P. "The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth-Century Lima", *Journal of Latin American Studies* 14 (1982): 329-358.

dos en el periodo 1821-23. Ellos nos darán la clave de cómo inicia su actividad este sector mercantil bajo condiciones nuevas después de la independencia. Muchos de ellos fugaron al Real Felipe temerosos de la reacción popular ante el desguarnecimiento de la ciudad de Lima a la salida de las tropas españolas en 1824. Izcue y Abadía fueron denunciados por poseer bienes de los españoles emigrados Zараcondegui, Soregui y otros, lo que coincidía lógicamente con su función de habilitadores y accionistas de empresas mineras y préstamos comerciales (ver cuadro 1). Izcue era un importante comerciante que cumplió en varias oportunidades el cargo de cónsul del Tribunal del Consulado entre 1822 y 1823, acompañando en la dirección del Tribunal al conde del Villar de Fuente, prior de dicho gremio. Después de su rehabilitación, Izcue, "habiendo visto frustradas algunas especulaciones mercantiles se dedicó con esmero a la exportación de frutos del país, y teniendo que abandonar los algodones y lanas por los obstáculos que presentaban el cultivo de aquellos, y la competencia en el acopio de éstas, dirigió su atención a los minerales de cobre de que abunda este país..."⁴⁴. Se embarca en una empresa de extracción de cobre en Tuctu-Morococha juntamente con el alemán, residente muchos años en el Perú, Carlos Renardo Pflucker, formando la *Compañía Peruana de Minas de Cobre* en 1840; a pesar de estos esfuerzos, Izcue no pudo recuperar su anterior posición de encumbramiento bajo el régimen republicano.

Pedro Abadía fue, junto a José Arismendi, uno de los principales promotores de la *Compañía de Máquinas de Vapor* de Cerro de Pasco, que en 1815 importó cuatro máquinas que luego de su instalación no resultaron suficientes para desaguar las minas debido a las constantes inundaciones. Hacia 1852 tenemos evidencia de que Abadía se dedicó a comerciar en vales de consolidación, de los que recibió 25,000 pesos nominales en vales a su nombre, que luego serían tachados por la Junta Examinadora en 1855. ¿Será éste un caso de exitoso cambio de rubro de un comerciante de origen colonial?

El caso de Francisco Quirós reviste especial interés en nuestro seguimiento de los comerciantes que se iniciaron en la etapa colonial y luego se convirtieron en privilegiados acreedores del Estado. A pesar de haber sido hacia 1820 una autoridad con una actitud favorable a la separación de España en Cerro de Pasco, lugar donde nació en 1798, Quirós fue sindicado como emigrado. En consecuencia se le levantó un expediente de secuestro en 1821 sobre su propiedad en la plazuela de San Lázaro, la Casa de Pastrana, y sobre un almacén

44. Pflucker, op. cit., p. 7.

en la calle Mercaderes⁴⁵. En 1822 Quirós viaja a Londres debido a las dificultades que tuvo en Lima, y allí se asoció con capitalistas ingleses interesados en la minería peruana, aportando sus conocimientos del comercio en dicha zona. La fenecida *Compañía de Máquinas de Vapor* dejó muchas deudas que permitieron al grupo de capitalistas, representados por Quirós, adquirir intereses en la minería a bajo precio mediante el establecimiento de la *Compañía Pasco Peruana*, al tiempo que cierto exceso de capitales en la Bolsa de Londres permitió a las casas comerciales *Brigs, Gibbs, Crawley, Naylor, Kendall, Templeman* y *Bergman*, el invertir en el ramo, junto con capitalistas nativos como Juan de Aliaga conde de San Juan de Lurigancho y Pedro Gonzales Candamo. Los agentes directos de la *Compañía Pasco Peruana* eran Quirós, Guillermo Cochrane, Joseph Andrés Fletcher y D. T. Holland⁴⁶. La empresa se reorganizó en 1829 con la participación de Gonzales Candamo, pero finalmente fracasó en 1833⁴⁷.

Quirós también se dedicaba a los negocios de importación de mercancías. En 1825 se le acusó de haber ingresado siete cajones de artículos españoles expresamente prohibidos por decretos de abril y mayo de 1825. Estos cajones habían llegado procedentes de Londres en el bergantín inglés *Mackarell* y, ante el peligro de decomiso, Quirós argumentaba haber pedido dichos artículos antes que los decretos se conociesen. En tercera instancia Quirós será absuelto de los cargos⁴⁸. Sus actividades de importador y de intermediario de capitalistas ingleses le darán a Quirós la oportunidad de recuperar el terreno que perdió con el advenimiento de la independencia, convirtiéndose luego en uno de los principales exponentes de la clase comercial dominante, así como en un persistente acreedor del Estado entre los años de 1835 y 1855, como se puede apreciar en los cuadros 2 y 3.

Por otro lado, Juan Bautista Andraca, uno de los grandes propietarios urbanos a fines de la época colonial, a quien se le intentó secuestrar 15 casas en

45. Ver San Cristóbal, E. *Apéndice al Diccionario histórico-biográfico del Perú* (Lima: Imprenta Gil, 1935), pp. 159-160. También "Expediente sobre la Casa de Pastrana (...) de supuesta propiedad del emigrado Francisco Quirós", Juzgado de Secuestros, legajo 2, cuaderno 51, año 1821, Tribunal de Cuentas, AGN: dato gentilmente proporcionado por Alberto Flores Galindo.

46. Alvarez Mayorga, M. "Capital comercial y capital industrial en la minería, sierra central siglos XIX y XX" (Tesis de Bachiller, Universidad de San Marcos, 1979), p. 56.

47. Basadre, J. *Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú* (Lima: P.L.V., 1971), tomo I, p. 323.

48. Quirós, F. *Demostración legal que presenta el ciudadano Francisco Quirós sobre que es inalterable la sentencia pronunciada en tercera instancia absolutoria del comiso denunciado contra el bergantín inglés Mackarell* (Lima: Imprenta Republicana, 1827), p. 8.

1821, fue también otro de los grandes beneficiados por la consolidación de 1850 al recibir 61 mil pesos en vales. Muchos de estos comerciantes y propietarios de origen colonial aparecerán entre los primeros nativos que otorgaron empréstitos, no siempre forzados, al Estado republicano⁴⁹.

Las deudas que el Estado tenía con acreedores que prestaban mayoritariamente, aunque no siempre, en efectivo, percibían un interés mensual elevado y el Estado se veía obligado a contraer y pagar puntualmente sus intereses y amortizaciones. Si no lo hacía, corría el riesgo de perder una fuente de financiamiento importante, una de las más necesitadas previas a la aparición del guano. Se trata de los créditos colocados en el ramo de arbitrios, Casa de Moneda y abonos de aduana, utilizando como garantías, respectivamente, el producto de los impuestos sobre mercadería internada (arbitrios), los derechos de acuñación y los derechos de aduana. El ramo de arbitrios lo administraba el Tribunal del Consulado, amortizando mensualmente los créditos al mejor postor con la modalidad de propuestas cerradas. Luego el ramo de arbitrios se trasladó al de la Caja de Consolidación, junto con los créditos sobre la Casa de la Moneda, con preferencia en su amortización y pago de intereses.

En el Archivo General de la Nación se puede verificar en la sección de libros manuscritos republicanos, una colección de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios entre 1838 y 1855. Así, es factible obtener información de cómo fue evolucionando la inversión interna en deudas estatales y el nombre de los principales prestamistas que van configurando un importante sector del poderío económico de la época. Los cuadros 2 y 3 muestran a los principales acreedores componentes de este sector.

Según estos cuadros, los grandes prestamistas en el ramo de arbitrios serán en su mayoría prácticamente los mismos que se pueden encontrar entre los encumbrados poseedores y negociantes de vales de consolidación entre 1852 y 1858. El caso de José Vicente Oyague, que de ser un acreedor de sólo 573 pesos en el período 1841-1843, y de 177,650 pesos al 1% de interés mensual en 1855, es el ejemplo más saltante del progreso de algunos comerciantes en su capacidad de realizar préstamos al Estado y obtener beneficios de ello. Otros personajes que incrementan sus créditos contra el Estado entre esos años son

49. Ver más adelante, en el segundo capítulo, el caso del préstamo del 18 de setiembre de 1839 por 160 mil pesos otorgados, en parte, en valores de la deuda interna depreciados, que llegó a ganar un altísimo interés en sólo tres meses. También considerar los préstamos levantados en 1841, durante una contienda entre caudillos, donde aparecen los nombres de Francisco Quirós, Nicolás Rodrigo, Manuel Bringas, Juan Bautista Valdeavellano, entre los principales prestamistas.

Isidro Aramburú, José Canevaro, Ancelmo Centeno, Andrés Gamarra, Micaela Lozano de Blanco, y Meléndez y Castañeda⁵⁰. Un análisis más profundo sobre estos acreedores sería muy útil para evidenciar cambios entre los principales poseedores de capital comercial antes y después de la aparición del guano; sin embargo, para los efectos del presente estudio, es suficiente la constatación de la existencia de privilegiados prestamistas entre los principales beneficiados por la consolidación.

En conclusión, antes de la consolidación de 1850 se evidencia una predilección o favoritismo por concentrar la cancelación de la deuda interna entre acreedores que colocaron préstamos con sólidas garantías de rentas estratégicas del fisco. Estos prestamistas por lo general son personas ligadas a la actividad comercial, uno de los pocos rubros de la economía de la época con márgenes aceptables de ganancia y acumulación. Aquellos sectores ligados a la deprimida producción agraria, provincial o minera, obtuvieron una participación mínima en la por demás reducida satisfacción de la deuda interna antes de 1850. Eran sectores que demandaban patéticamente capitales para su reconstitución. El Estado no solamente se veía imposibilitado de satisfacer a estos sectores deficitarios en sus reclamos, sino que los relegaba aún más con su indiferencia y hasta los gravaba con impuestos excesivos. En consecuencia, los productores del sector agrario y minero recurren al endeudamiento con el sector comercial, cediendo muchos de sus derechos sobre la deuda interna y perdiendo en numerosos casos sus propiedades.

Este fenómeno encuentra entre sus causas el carácter de empréstito forzoso que originó los reclamos de la deuda interna por parte de hacendados, mineros, y propietarios provincianos. Este tipo de deuda era muy aleatoria y de difícil cancelación en circunstancias de pugnas entre caudillos y destrucción de propiedades. Los empréstitos en los ramos de arbitrios, Casa de Moneda y aduana, eran por el contrario préstamos con la expectativa de obtener altísimos intereses. El aparato estatal sufría endémicamente de un desbalance presupuestal, y necesitaba urgentemente de financiamiento interno debido a su pésimo crédito externo. Los caudillos que se disputaban el control del Estado estaban dispuestos a acceder a las exigencias de prestamistas comerciales ante la carencia de capitales.

50. Comparar con la siguiente relación de acreedores de la Casa de Moneda, en 1849, ante la propuesta del gobierno de trasladar sus créditos al ramo de arbitrios; "Razón de los acreedores a esta Casa por capitales que reconoce a su favor, con pago de intereses": Alsop y Cía, Sra. Micaela Lozano de Blanco, José Campos, Santiago Campos, Pedro Denegri, José Fleitsman, José María Galdeano, Ricardo Humpreis, Melendes y Castañeda, Andrés Mena, Montané y Cía., Emilio Nora, José Vicente Oyague, Federico Pfeiffer, Read y Cía., Juan Renner, Andrés Reyes, Colegio de San Carlos, Miguel Winder; Manuscritos 1849, D1646, BN.

Sin embargo, los préstamos con rentas fiscales poseían una cuota de riesgo debido a lo inestable de la situación política, aunque poco a poco los comerciantes nativos y extranjeros logran defender exitosamente sus inversiones al constituirse en el principal grupo de presión. Adicionalmente, el grupo de hacendados y mineros no constituyó un grupo políticamente poderoso como para presionar el pago de lo que se les debía. Los caudillos militares, al manejar en su favor la violencia institucionalizada, prefirieron beneficiarse ellos mismos de los exiguos fondos de la deuda interna antes de 1850 con adjudicaciones escandalosas. A la vez, se aliaban coyunturalmente con los comerciantes-prestamistas para satisfacer sus necesidades monetarias inmediatas, sin dejar de abusar del sector productivo a sus anchas, continuando la política de empréstitos forzosos e impuestos asfixiantes. Finalmente, como se analizará en el próximo capítulo, este juego de intereses afectará decisivamente la evolución de la legislación de la deuda interna.

CUADRO 2

Principales acreedores del ramo de arbitrios, 1841-1843
(en pesos)

Nombres de Acreedores	Años del Reconocimiento	Saldo 1841	Saldo 1843	Intereses: % mensual
Aramburú, Isidro	1834-38	1,463	3,464	1, 1.5
Alvarez Calderón, Francisc	1834-39	10,220	9,226	2, 1.5
Aranzaenz, Buenaventura	1835-37	5,400	5,400	1.5
Allier, Aquiles	1841	15,591	*	1
Blanco, Miguel	1834-37	16,841	**	2
Balega, Félix	1835-36	4,250	4,250	2
Buenamuerte, Convento	1839	13,146	11,364	1, 1.5
Bringas, Manuel	1841	11,378	12,978	1
Campoó, José	1834	5,931	5,931	2, 1
Comparet, Sebastián	1836-39	11,333	11,333	1.5
Canevaro, José	1835-36	75	75	1, 2
Chumet Desfiloses o B. Navejas	1837	8,000	8,000	2
Candamo, Pedro Gonzales	1841	12,533	12,533	1
Elías, Domingo	1838	838	838	2
Feyfer, Federico	1836	500	500	2
Fuente Hermosa, sus herederos	1839	24,300	24,300	1, 1.5
García de la Plata, Manuel	1835-41	7,044	10,994	1.5
García y Compañía	1841	7,872	1,451	1
Galdeano, José María	1834-39	31,400	32,400	1
Gil, Juan (por Roncal)	1834-36	11,000	11,000	2, 1
Gibbs Crawley y Compañía	1835-38	35,993	35,993	1, 1.5
Huth Gruning y Compañía	1834-36	21,838	11,138	1.5
Juan Fco. Izcue	1834-39	5,142	5,142	1.5, 2
Iturregui, Juan Manuel	1834-39	12,380	12,380	1.5
Junín, Departamento de	1834	12,902	8,660	1.5
Lavalle, Juan Bautista	1834-37	9,490	9,490	1.5
Larragoitia, Rafael	1834-39	6,823	923	2, 1.5
Lecuona, José Nic.	1834-36	4,500	2,500	2, 1
Macall y Compañía	1837	5,906	5,906	2
Navarrete, Ramón	1835-36	10,163	10,843	1, 2
Quirós, Francisco	1834,37,38	5,618	5,618	1, 1.5, 1
Revoredo, Felipe	1834-38,41	26,167	26,167	1.5, 1
Romero y Compañía	1834-36	13,548	15,558	1, 1.5, 2
Roncal, Fermín.	1835-37	1,913	12,913	1.5
Rodrigo, Nicolás	1839	266	2,475	1, 1.5
Ruis Dávila, Manuel	1834-39	13,829	13,829	2, 1
Salvi, Pedro	1834-37	7,100	9,600	2, 1
Salazar y Baquijano, Manuel	1835-39	13,122	12,585	1
Santiago é hijo, su viuda	1836,38	14,424	14,424	1, 2
Salinas, Antonio	1839,41	37,940	10,000	1
José Ma. Sotomayor	1835,36,41	5,938	7,164	2, 1
Tracy, Samuel	1834-36	4,666	4,666	1.5

Ugarte, Mariano Miguel	1840	24,621	24,621	
Waddington, Josué	1839	7,791	7,791	1.5
Thorne y Compañía, Rollin	1835-41	5,142	9,142	1, 1.5
Colina, Narciso	1841	6,421	6,421	1
Castillo, Francisco	1839	12,646	12,646	1
Gallo, María Antonia	1839,41	12,646	12,646	1
Castillo, Manuel	1839	12,646	12,646	1
Comparet, su testamentaría	1834-39	14,358	14,358	1.5
Blanco, su testamentaría	1834,36,37	17,341	17,341	1.5
Hegan-Hall y Compañía	1834-36	4,666	4,666	1.5, 1
Templeman y Bergman	1835,39	8,086	8,086	1, 1.5
Oyague, José Vicente	1837-38	573	573	0.5
Suma (principales acreedores)		595,720	534,948	
Total de acreedores del que se sacó la muestra: 553				

* Subrogados a Felipe Revoredo.

** Cancelada.

Fuente: "Libro de cuentas corrientes de los empréstitos sobre el ramo de arbitrios",
Libros Manuscritos Republicanos, año 1843, H-4-1849, AGN.

CUADRO 3
Principales acreedores del ramo de arbitrios,
1852, 1853, 1855
(en pesos)

Nombre de Acreedores	1852	1853	1855	Intereses % mensual
Aramburú Isidro	16,200	9,750	3,600	1, 0.75
Alison Cumberlegue y Cía.		6,000	6,000	0.5
Allende, María	9,450	9,450	9,450	0.75
Abadía, Pedro	1,100	1,100	1,100	0.75
Bringas, Manuel	9,100	9,100	9,100	1
Buenamuerte, Convento	8,150	8,150	8,150	1
Barrera, Lino; testamentaria		2,850	2,850	0.75
Bryce, Juan		4,500	4,500	0.75
Bulnes, Manuel (general chileno)			50,000	0.75
Campoó, José	9,250			1
Candamo, Pedro Gonzales	2,250	2,250	2,250	1, 0.5
Canevaro, José		7,300	2,000	1
Centeno, Ancelmo	34,100	20,750	20,050	1, 0.75
Calderón, Juan de Dios	1,150	1,150	1,150	1.5
Charon, Melchor			17,800	
Comparet, Sebastián	18,300	13,700	13,700	1.75
Cruz, José María			30,000	
Cruz Carrasco, María	14,600			
Cucalón, Antonio	18,450			1
Denegri, Pedro	23,350	21,500		1
Fuente Hermosa, herederos	29,500	17,400	17,400	1.75
Fleifman, José	27,500			1
Ferrocarril, Empresa	29,100	29,100	29,100	0.75
García y Calmet		10,150	10,150	1.5, 0.5
Galdeano, José María	20,350	10,000		1
Garrido, Victoriano	20,000	20,000	20,000	0.75
Gallagher, Juan	6,400	6,400		1
Gamarra, Andrés	79,200	67,800	61,850	0.5, 1
Gibbs, Guillermo	35,900	25,600	17,550	1.5, 1
Gutierrez de la Fuente, Antonio	13,050	7,300		1
Heroward, José	15,000	10,000	10,000	1
Jaramillo, Antonio	5,959			1, 0.5
Lozano de Blanco, Micaela	31,400	28,150	10,000	0.75, 1
Larratea, Juan José		54,650	54,650	0.75
Lazo, Benito		5,000		0.75
Martínez, Mercedes	11,950	11,950	11,950	0.75
Melendes y Castañeda	15,650	12,550		1
Montané y Cía.	21,400	20,500	13,950	1
Navarrete, Ramón	13,650	13,650		1
Puch, Cruz	9,450	5,350		1
Oyague, José Vicente	19,350		117,650	1, 0.75
Prevost Stanope	6,500	5,500		1
O'Brien, Juan		8,750		
Olavegoya, Demetrio			1,950	1

Quirós, Francisco	14,850	9,850	9,850	0.5, 1
Revoredo, Felipe	32,650	32,650	32,650	1
Roncal, Fermín	14,550			1
Rodrigo, Nicolás	10,500			1
Ruiz Dávila, Manuel	13,350	13,350		0.75, 1
Río, Manuel	6,900			1
Rei Riesco, Ignacio	20,500	5,000		1
Romero, vda. de	24,100	11,800		1
Salazar, Manuel	8,000			1
Seminario, Miguel	7,500			1
Severin, Enrique	6,850			1
Templeman y Bergman	10,700			
Tristán, Pío	46,600	42,600	42,600	0.75, 1
Tristán, Victoria	8,000			
Tristán, Francisca	15,500	15,000		1
Tristán, Josefa	7,100			
Tapuc, Feligreses		8,100		1
Tagle de Zevallos, Josefa			36,650	
Thorne, Rollin	63,000	31,800	15,850	1
Ugarte, Mariano Miguel	28,650	28,650		1
Winder, Miguel	69,300	54,200	41,000	0.75, 1
Suman (principales acreedores)	985,350	740,350	736,500	
Total deuda arbitrios	1'266,445	990,050		

Fuente: "Manual duplicado de la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado, años 1852 y 1853", Libros Manuscritos Republicanos H-4 1986/1995. AGN.

"Auxiliar principal del ramo de arbitrios en la Caja de Consolidación que administra el Tribunal del Consulado", Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2019, AGN.

Capítulo 2

LA LEGISLACION DE LA CONSOLIDACION

El análisis de la legislación de los gobiernos republicanos de la primera mitad del siglo XIX nos muestra que éstos tuvieron presente, en teoría, la necesidad de indemnizar a los propietarios afectados por las contiendas de la emancipación y, en general, tratar de reconstituir las bases materiales de una determinada parte de la sociedad peruana de la época. La argumentación oficial de este reconocimiento de deuda del Estado a particulares sustentaba que la contribución de la independencia, llevada a costas por sólo un sector de la sociedad, debía repartirse entre todos los individuos que la componían. Uno de los ministros de Hacienda del segundo gobierno de Castilla, Manuel Ortiz de Zevallos, decía lo siguiente acerca del principio de repartir las pérdidas de la independencia entre todos los peruanos, en un discurso ante la Convención Nacional de 1857:

"Reconociendo pues este principio, todas las instituciones que han rejido en la República lo han consagrado como una base fundamental: han garantido la deuda pública, y han atribuído al poder legislativo la facultad de reconocer, consolidar y fijar los términos de pagar la deuda pública. Establecida se hallaba también esta base en la Constitución de 1839 que rejía cuando se sancionó la ley de 11 de Marzo de 1850..."¹.

El reconocimiento de la deuda interna estaba pues en las mismas bases constitutivas del naciente Estado Republicano. Sin embargo, debemos precavemos y considerar que detrás de esta argumentación oficial, que tenía su contrapartida en posiciones de contemporáneos opuestos al reconocimiento de la deuda interna², subyacía una corriente de intereses ligados a los propietarios de

1. *El Peruano*, tomo 32, Nº 62, 16 de mayo de 1857.

2. Acerca de la falta de validez de la indemnización de la deuda interna mediante la consolidación, Fernando Casós, argumenta: "¿En qué parte de la tierra una nación se paga a sí misma sus esfuerzos para sacudir el pupilaje, la humillación y su esclavitud? ¿Revela la historia un ejemplo semejante? (...) ¿No era un deber la asociación jeneral de los peruanos para adquirir su propia independencia? (...) Todos estuvimos en un tiempo obligados a contribuir en común para expeler un gobierno que no nos convenía, ni tenía origen de derecho. Pero como en toda sociedad hay ricos y pobres, cada individuo contribuyó por su parte con los elementos de que disponía; el rico puso su contingente fortuna, porque no quiso exponer su persona; el pobre que no disponía de nada puso su más precioso elemento, el elemento vital, su sangre". Casós F. *Para la historia del Perú: revolución de 1854* (Cusco: Imprenta Republicana, 1854), pp. 26-27.

origen colonial desposeídos y a los aspirantes a adquirir o acrecentar nuevas riquezas.

La clase aristocrática de linaje colonial demostraba evidente debilidad. Esta clase que incluía tanto a terratenientes como a una élite mercantil, con títulos nobiliarios comprados en la segunda mitad del siglo XVIII, pugnaba por lograr su recomposición en base a nuevas alianzas político-económicas a inicios de la República. Este grupo presionaba con mayor o menor éxito para que se le reconociese parte de la deuda de la época de la independencia, en cambiantes pactos con los gobernantes de turno y los sectores que empezaban a vislumbrarse como los más poderosos: básicamente los grandes comerciantes y prestamistas de origen nativo y las casas comerciales extranjeras. Tanto a la ex-aristocracia colonial como al nuevo sector comercial les convenía presionar para lograr la efectiva indemnización de sus respectivas deudas. Los aristócratas mercantiles y terratenientes, por su situación precaria después de la independencia, producto de requisitorias y pérdidas durante las luchas que dieron inicio a la República, eran deudores de los comerciantes-prestamistas que esperaban ávidos la consolidación para cobrar sus créditos pendientes a un altísimo interés mensual, a la vez que especulaban con los valores provisionales de deuda interna emitidos por el Estado. El beneficio que los grandes terratenientes hubieron de obtener a través de la consolidación quedaba estrictamente mediatisado desde antes de que ésta se produjera, debido a las deudas que contrajeron con el comercio después de la independencia y, como veremos más adelante, por una indemnización sólo parcial de sus reclamos que no incluyó la deuda que reclamaban habían contraído con el Estado colonial. Estos dos sectores, el de terratenientes y mercaderes coloniales y el de los grandes comerciantes-prestamistas, fueron los sustratos sociales que impulsaron, en nuestra opinión, la legislación de la consolidación.

En el presente capítulo intentaremos un análisis crítico de los principales decretos y leyes oficiales dictados en materia del reconocimiento y consolidación de la deuda interna, con el objetivo de delinear un adecuado marco de referencia sobre la evolución de la política estatal en este respecto, y ver hasta qué grado se dejó sentir la influencia de los sectores dominantes en formación sobre el plano legal de la consolidación.

2.1 Primeros reconocimientos

Durante los primeros años de la República, y ante las dificultades financieras del naciente gobierno republicano, se contraen diversas deudas con co-

merciantes ingleses y peruanos en Lima³. Se inicia así el reconocimiento de créditos de un tipo distinto al de las requisitorias, secuestros y préstamos externos.

El decreto del 16 de octubre de 1824 y el reglamento del 12 de noviembre de 1825 inician la depuración de la deuda interna, y el 22 de setiembre de 1826 se constituye, por otro decreto, una Caja de Consolidación del Crédito Público durante el gobierno del general Andrés de Santa Cruz. A través de esta Caja, el Estado pagó créditos depurados con la emisión de billetes del crédito público que percibían nominalmente un interés del 3% anual, según un decreto del 1 de abril de 1827. La deuda reconocida en ese año la constituían los libramientos girados por el Congreso Nacional, los billetes emitidos por el Ministerio de Hacienda y por la Junta de Liquidación, los reconocimientos por decretos promulgados por el Ministerio de Hacienda, y las libranzas giradas contra los empréstitos levantados en Londres en 1822 por un monto de 1'816,000 libras esterlinas (los cuales habían cesado de pagarse en abril de 1826). Los fondos que se asignaron a la Caja de Consolidación, administrada por la Junta de Crédito Nacional, eran por demás insuficientes: aquellos de la extinta dirección de censos, los bienes raíces confiscados en el Callao, las fincas y censos de la comisaría de Jerusalén, la redención de cautivos y los restos del montepío de ánimas de Lima, los bienes y rentas de la abolida inquisición y los bienes y censos de ex-jesuitas y Monasterio del Escorial. Difícilmente podían estos viejos fondos dar solución a la deuda pendiente. En 1830 los fondos de la Caja eran utilizados por el Tesoro para sus gastos corrientes y las cantidades restantes alcanzaban a pagar sólo algunos sueldos y pensiones. Así y todo el nascente Estado republicano logró amortizar, entre 1825 y 1827, aproximadamente un millón ochocientos mil pesos entre deuda interna y externa. La Junta de Crédito Nacional será finalmente eliminada por decreto dictatorial el 9 de marzo de 1835, aunque luego reaparecerá con nuevas funciones en 1857⁴.

3. Basadre señala algunos de los primeros empréstitos importantes en los años 1822 y 1823: 74 mil pesos de comerciantes ingleses, 200 mil pesos del comercio y propietarios de Lima, 80 mil quinientos pesos del Tribunal del Consulado, 50 mil pesos en efectivo y 150 mil pesos en víveres de Juan Ignacio Palacios y otros comerciantes. Basadre, J. *Historia de la República del Perú* (Lima: Ed. Universitaria, 1969), tomo 1, p. 222.
4. Dancuart, *Anales*, tomo 2, pp. 88, 107-108. Palacios Moreyra, C. *La deuda anglo-peruana 1822-1890* (Lima: Studium, 1983), pp. 38, 50. Según la memoria del ministro Larrea y Loredó, los fondos de la Caja de Consolidación sumaban, en 1830, siete millones de pesos: seis millones por razón de los censos, obras pías y ex bienes de Jesuitas o Temporalidades, y un millón por razón de bienes confiscados o secuestrados a españoles. Romero, E. *Historia económica del Perú* (Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1969).

En 1827 se hicieron tentativas ante el Congreso para el reconocimiento de deudas contraídas por los gobiernos españoles sin resultados tangibles. Estas deudas de origen colonial fueron calculadas por los supuestos acreedores en 14'200,000 pesos a establecimientos de Lima, correspondiendo 7'760,000 de esa cantidad al Tribunal del Consulado y 2 millones a los emigrados⁵. La ley del 25 de agosto de 1831, emitida durante el primer gobierno de Gamarra, reconoció en principio la deuda adquirida por el Estado colonial, dejándola en suspensión hasta que no se cancelara la deuda contraída durante la emancipación. Sin embargo, esta deuda colonial no fue pagada efectivamente en los años posteriores, lo cual significó un revés más para la aristocracia de origen colonial. Lo que sí se hizo fue adjudicar minas y haciendas, como forma de pago, a ciertos acreedores privilegiados y caudillos militares, como fue el caso de Blas Cerdeña citado anteriormente. En esta coyuntura, el Congreso Constituyente de 1839 estableció en la constitución política de dicho año la obligación de reconocer y consolidar la deuda interna en su atribución 22, artículo 55.

Otra característica fundamental de esta etapa del reconocimiento inicial de la deuda interna fue que el Estado ofreció, como garantía para los préstamos en efectivo, las entradas en dependencias estatales como las aduanas, las tesorías departamentales y la Casa de Moneda, evidenciándose así la influencia de ciertos acreedores sobre la hacienda fiscal en estos rubros. El empréstito al gobierno por 160 mil pesos, aprobado el 16 de setiembre de 1839, constituye un ejemplo de cómo algunos comerciantes utilizaron y consiguieron beneficios de los iniciales valores de la deuda interna emitidos. Los términos de dicho empréstito establecían que el comercio de Lima prestaría cien mil pesos en dinero y sesenta mil en valores de la deuda interna (créditos, billetes y cédulas), que en dichos años no pasaban de un valor nominal del 10% en cotización libre. La cancelación del empréstito la realizó el Estado descontando hasta las dos terceras partes de los derechos de aduana que los comerciantes y prestamistas debían abonar. En tres meses el Estado cubrió la suma prestada, con lo cual los comerciantes obtuvieron un interés del 28% a un muy corto plazo⁶. De esta forma concreta se combinaban las garantías y ventajas que el Estado ofrecía a los comerciantes en materia de deuda interna. Así mismo, en 1841, el gobierno de Lima recurre a empréstitos para contrarrestar la rebelión de Vivanco: participaron en ellos importantes prestamistas del nivel de Pedro Gonzales Candamo con doce mil pesos, Nicolás Rodrigo, Manuel Bringas y Pío Tristán con seis mil entre los tres, la viuda de Pedro Blanco con cuatro mil, y

5. Basadre, *Historia...*, tomo 1, p. 223.

6. Basadre, op. cit., tomo 2, p. 373.

Francisco Quirós, Juan B. Valdeavellano y Domingo Elías, con tres mil pesos entre los tres⁷.

El decreto del 21 de marzo de 1846 y las leyes del 15 de setiembre y 20 de diciembre del mismo año, y 9 de marzo de 1848, durante el primer gobierno de Castilla, fueron preparando el camino para la efectiva consolidación de la deuda interna, al estipular estos dispositivos cuáles eran los créditos que se reconocerían en cédulas de reforma, que con ese motivo se expedirían. Estos créditos eran constituidos por las sumas tomadas para el auxilio del ejército, suministros, cupos, contribuciones de guerra, empréstitos voluntarios y forzosos, ocurridos desde el 19 de setiembre de 1820. A fines de 1849 dichas cédulas sumaban la cantidad de 3'472,284 pesos y en 1852 ascendían a 6'668,643 pesos⁸. En los números de *El Peruano* entre 1850 y 1851, aparecen publicados los nombres de los individuos a quienes se les reconocían estas cédulas; sin embargo, estos nombres difieren sustancialmente de los de las personas que, entre 1850 y 1852, canjearon las cédulas por vales de consolidación, u obtuvieron dichos vales directamente según la ley de marzo de 1850. Estas últimas personas, en representación de intereses ajenos o suyos propios, fueron los directamente vinculados a la consolidación y, entre ellos, encontramos a los verdaderos beneficiados y "consolidados" que se encargaron de acumular y tramitar expedientes con amplios márgenes de beneficio personal, como veremos más adelante.

Los valores de la deuda interna también fueron utilizados provechosamente por las casas comerciales extranjeras y nativas de importación-exportación, para bajar sus costos por concepto de derechos de importación y de comercialización del guano. Por ejemplo, el 13 de junio de 1847, el gobierno aceptó la propuesta de la casa francesa Montané para adelantar en calidad de préstamo 600 mil pesos en efectivo y cien mil en créditos de la deuda nacional, a cambio de libranzas sobre el producto de la comercialización del guano a Inglaterra⁹.

2.2 La ley de 1850

La ley del 16 de marzo de 1850 cerró la etapa anterior en el reconocimiento de la deuda flotante e inició la verdadera consolidación de aquellos reco-

7. Ibid., p. 311.

8. Datos obtenidos de *El Registro Oficial*, sucesivos números del año 1852.

9. Ibid., tomo 3, p. 154.

nocimientos anteriores a través de su canje por vales de consolidación. Estos vales podían ser endosables y percibían intereses anuales pagaderos trimestralmente. Los intereses serían del 3% en 1851, 4% en 1852, 5% en 1853 y 6% a partir de 1854 y años posteriores, para los vales emitidos en 1850; los vales emitidos después de 1850 empezarían a percibir el 3% a partir del sexto mes de su emisión¹⁰. Según algunos entendidos, esta ley fue la principal causante de los excesos cometidos en la consolidación de la deuda debido a su amplitud y vaguedad¹¹.

Las cédulas de reforma se integraron a la deuda consolidada aunque con ciertas limitaciones debido a que recibían otro tipo de interés que se regía por una ley dada en 1829. En cambio, la deuda que pesaba sobre el ramo de arbitrios y que percibía intereses del 0.5, 0.75 y 1% mensual, así como las deudas que gravaban en la aduana y la Casa de Moneda, fueron integradas, con preeminencia en su amortización y pago de intereses, al conjunto de la deuda interna anterior por la ley de 1850. En 1852 la deuda sobre los arbitrios ascendía a un millón de pesos¹².

Los arbitrios eran impuestos suplementarios a las importaciones, creados a partir de 1834 para garantizar la amortización de los préstamos hechos por el Tribunal del Consulado durante y después de la independencia. En la ley de marzo de 1850 se dio preferencia a la amortización de esta deuda, otorgándosele un fondo de cinco mil pesos mensuales, la misma cantidad asignada a esta deuda desde la promulgación de la ley de 3 de junio de 1846. El gobierno de Echenique buscará extinguir este tipo de deuda sobre los arbitrios por lo onerosa que le resultaba al Estado pues llegó a percibir un interés mensual del 2% en el período 1851-1853. En dichos años se asignaron hasta quince mil pesos mensuales para la amortización de esta deuda; la amortización se realizaba con el sistema de propuestas cerradas en el local del Tribunal del Consula-

10. Ley del 16 de marzo de 1850, *El Peruano*, tomo 23, N° 23, 16 de marzo de 1850.

11. Un analista de la ley opinaba que "la ley de marzo de 1850 había abierto la consolidación de la deuda interna y en negocio de tanta importancia el Congreso había caído en inesperienza e imprevisiones que hacían muy defectuosa su medida. No se exigía que todo cargo contra el Estado se depurase en un juicio en forma: en un caso de duda acerca de la validez de los documentos debía estarse a los más favorables para el acreedor. Con todas estas circunstancias y las mil formas de que el ajio y el fraude revisten en estos casos, la consolidación era un verdadero peligro para cualquier gobierno: para el del general Echenique fue un torrente que lo arrastró impetuosamente haciéndole perder el resto de simpatías que el país conservaba hacia él". Barriga y Alvarez, F. [Tímoleón], *El Perú y los gobiernos del general Echenique y de la revolución* (Lima, 1855), p. 22.

12. Mendiburu, M. "Memorias" (inéditas), versión mecanografiada propiedad del Dr. Félix Denegri Luna, p. 615.

do, llegando a cotizarse las obligaciones de esta deuda a un 98 y 100%, es decir, casi a la par¹³.

Para administrar estos distintos tipos de deudas, con distintos intereses y fondos de amortización, se asignó al Tribunal del Consulado la administración de una nueva Caja de Consolidación, bajo la inspección de la Dirección General de Hacienda, con los siguientes fondos para su funcionamiento: los derechos de arbitrios, el derecho de alcabala sobre enajenaciones y donaciones, novenos sobre subastas en tesorerías, 120 mil pesos de la renta del guano, 1% sobre las importaciones (llamado derecho "de consolidación"), los fondos restantes de los antiguos censos, Temporalidades y Caja de Consolidación, capellanías legas y de patronato nacional vacantes, los bienes de conventos y comunidades religiosas cuando se extinguiesen o hubiesen sido destinados al pago de la deuda interna según ley de 13 de febrero de 1833, y los fondos restantes de las tesorerías de la república. Así mismo se reconocía generosamente como deuda interna "todas las cantidades tomadas por cualesquiera autoridades de la república en dinero o en especies, por empréstito, cupos, contribuciones, parciales de guerra, suministros, depósitos, embargos y secuestros"¹⁴. Se podía reclamar el reconocimiento de dichas sumas si su origen se remontaba hasta el 8 de setiembre de 1820. Para la aprobación de los títulos de crédito de esta deuda era necesario cualquiera de los siguientes: el reconocimiento del Congreso, una declaración hecha por el gobierno conforme a la ley de consolidación o una sentencia ejecutoria. De esta forma se abría una ancha brecha para que se apadrinaran innumerables favores por parte de los encargados gubernamentales de la deuda interna.

Se establecía, además, en la ley de consolidación, que los vales de consolidación se admitirían en las ventas de propiedades nacionales, en la redención de capitales de censos y sus intereses, en la enajenación de terrenos, y en las aduanas para el pago de derechos de importación. Por otro lado, se estipulaba que la deuda del tiempo del gobierno español continuaba en el estado en que la había colocado la ley de 1831.

En julio de 1851 hubo un proyecto de ley presentado al Congreso por el entonces Ministro de Hacienda del gobierno Echenique, Juan Crisóstomo Torrico¹⁵. En dicho proyecto se intentaba incorporar a la deuda consolidada la antigua deuda del gobierno español, esto es, "las imposiciones y subrogaciones

13. *El Registro Oficial*, tomo 1, Nº 10, 23 de junio de 1851.

14. *El Peruano*, tomo 23, Nº 23, 16 de marzo de 1850.

15. Los otros ministros de Hacienda del gobierno Echenique fueron Manuel de Mendiburu, Nicolás de Piérola (padre del que llegará a ser ministro de Balta y futuro presidente), José de Mendiburu y Pascual Saco.

hechas en Tesorería, Tribunal del Consulado, Casa de Moneda, Estanco de Tabacos y Caja de Consolidación por corporaciones, establecimientos o personas, hasta 9 de junio de 1821; los capitales procedentes de empréstitos en dichos ramos; y las sumas que hubiesen entregado en dichas dependencias en depósito libremente"¹⁶. Este proyecto no prosperó. Su aprobación hubiera inflado exageradamente los montos de la consolidación en beneficio del grupo en torno a Torrico, aunque los acreedores y comerciantes de origen colonial también hubieran podido aprovechar la oportunidad.

El 27 de setiembre de 1851 se deja de expedir por decreto las cédulas de reconocimiento, para dar lugar a la expedición directa de los vales de consolidación. Estas cédulas se expedían desde marzo de 1846 y ascendían en 1851 a la suma de 6'668,643 pesos, y fueron otorgados en un número cercano a cuatro mil.

El 29 de diciembre de 1851 una ley firmada por Manuel de Mendiburu daba por suspendidos la liquidación, reconocimiento y consolidación de la deuda interna a partir de los seis meses posteriores a su promulgación en Lima, y de diez meses en los demás departamentos, hasta nueva resolución del Congreso¹⁷. Esto motivó una febril carrera en la gestión de expedientes que dio como resultado los más abultados reconocimientos en las fechas límites de junio y octubre de 1852.

Los vales de consolidación empezaron a circular cada vez con mayor intensidad en el comercio de Lima debido a que la cotización de los mismos iba aumentando entre 1851 y 1854 debido a la amortización que hacía el Estado en las aduanas. Debido a la gran cantidad de transacciones entre vendedores y compradores de vales, resultaba embrolloso inscribir el nombre del comprador del vale ante la Caja de Consolidación como lo estipulaba la ley. Por ese motivo se emitieron disposiciones legales¹⁸ que sancionaron el carácter al portador de los vales de consolidación, admitiéndose desde esas fechas en adelante en todas las dependencias estatales designadas para amortizarlos con solamente la firma del dueño original. Algunos contemporáneos argumentaron que esas disposiciones legales de 1851 y 1853 convertían los vales en papel moneda o moneda corriente. Se entabló toda una polémica legal al respecto¹⁹.

16. *El Peruano*, tomo 24, Nº 10, 3 de julio de 1851.

17. *El Registro Oficial*, tomo 1, Nº 45, 31 de diciembre de 1851.

18. Disposición del 28 de setiembre de 1850 y decreto del 23 de mayo de 1853.

19. Anónimo, *Al Gobierno*, a la Convención Nacional y a la *opinión pública* (Lima: Imprenta Libre, 1856), pp. 9, 20, 70, 71. También ver artículos sobre la consolidación aparecidos en sucesivos números de *El Comercio*, año 1853.

En términos económicos es necesario distinguir entre dinero y valores financieros del Estado. Existe una relación entre ambos pero no es exacto considerarlos como sinónimos. Los bonos del Estado, por ejemplo, al venderse en las oficinas públicas para financiar gastos gubernamentales producen como consecuencia la reducción de la oferta de dinero, al extraer de la circulación el valor monetario de dicho bono. En este caso el público ahorra (invierte) a través de bonos estatales. Si por el contrario el Estado compra bonos en el mercado, está vendiendo dinero y, de esa forma, amplía la oferta de dinero y el público aumenta su capacidad de consumo.

En el caso de los vales de consolidación de libre cotización real sobre su valor nominal y con un interés fijo, el Estado amplía la oferta de dinero siempre y cuando los amortice efectivamente y cancele sus intereses en términos monetarios. La emisión de vales desde 1850 no constituye sino un reconocimiento de deuda adquirida por el Estado con anterioridad, deuda que sirvió para financiar gastos gubernamentales en el pasado. Por lo tanto, el vale de consolidación en sí no constituye moneda o papel moneda en el sentido estricto de la palabra. El consumidor promedio de la época rara vez se topaba con los vales cuando iba a la tienda a hacer sus compras pues éstos se concentraban en manos de negociantes de vales y grandes comerciantes.

A lo que se refiere la polémica sobre la condición de "moneda corriente" del vale de consolidación es que éste se podía comprar libremente en el mercado de valores. En otras palabras, la discusión gira en torno al derecho a la especulación en vales de consolidación sin restricción alguna²⁰.

-
20. Hubo varias oportunidades en las que se pusieron trabas a la especulación libre en vales. La misma ley de consolidación de marzo de 1850 era ambivalente al respecto. La compra y venta de vales debía hacerse constar en un libro especial de transferencias. Al mismo tiempo se les admitía el carácter de endosables. En setiembre de 1850, una resolución elimina la formalidad de inscribir las transferencias. Sin embargo, el código de comercio de 1852 estipulaba en su artículo 1468 que los vales al portador deberían llevar el endoso del dueño original. Ante el hecho de que muchos vales circulaban sin estar endosados, algunos dueños originales iniciaron acciones judiciales para recuperar vales cedidos o vendidos a otras personas en el pasado, logrando así obtener algunos fallos judiciales ordenando la suspensión de pagos de intereses a terceros y hasta la retención de los vales en disputa. Frente a este contratiempo, la resolución del 23 de marzo de 1853, considerando "que dichos vales giran en plaza como moneda corriente haciéndose con ellos transacciones de todo género...", decreta que los vales sean considerados de propiedad del último poseedor sin necesidad de endose alguno, y que las oficinas de Hacienda los amorticen al portador. Parecía que la polémica quedaba terminada con esta resolución, pero en el mes de febrero de 1855 se ordenó la suspensión de intereses y amortización de los vales emitidos en tiempo de Echénique alegando el origen fraudulento de los mismos. La ley del 11 de marzo de 1857 zanja este impase al rehabilitar la libre circulación de todos los vales, sean éstos los tachados por la Junta de Examen o no. Finalmente, en 1861, volvió a plantearse el

En condiciones de una deficiente oferta monetaria debido a una carestía notable de circulante producida por la exportación de la moneda de plata peruana, lo cual motivó la introducción de la moneda feble boliviana, bastaba que los vales de consolidación se cotizaran unos puntos más arriba (a consecuencia, por ejemplo, de una amortización efectiva ordenada por el gobierno), para que se los utilizara en transacciones comerciales diversas. Así tenemos que un grupo de comerciantes opinará que desde 1853 "los vales fueron con más razón que antes considerados como verdadera moneda corriente...circulaban libremente sin ninguna formalidad, sin la más pequeña traba, fueron objeto de cuotidianas [sic] y numerosas transacciones"²¹. Sin embargo, habrá que insistir en que la tipificación de "moneda corriente" es inexacta, y en todo caso aparentaríase serlo así para los comerciantes y personas ligadas a la especulación de vales, no para el consumidor promedio.

2.3 La conversión

En 1853 se firmaron dos contratos que no llegaron a publicarse durante la gestión Echenique; uno de ellos en Londres entre Manuel Mendiburu, entonces ministro plenipotenciario ante Su Majestad británica, y la casa comercial Uribarren de París, y el otro en Lima con la casa comercial francesa Montané. Estos contratos se referían al traslado de cantidades por nueve y cuatro millones de pesos, respectivamente, en vales de la deuda interna, que percibían un 6% de interés anual, a bonos de deuda externa con un interés del 4.5%²². Estas casas adquirieron los vales de la deuda consolidada en el mercado de Lima cuando la cotización de los mismos fluctuaba entre el 25 y 32% de su valor nominal, los entregaron a la Caja de Consolidación y recibieron a cambio títulos de la deuda externa con compromisos a cumplirse en Europa, con un fondo fijo de amortización del 1% del total de la deuda, que luego se elevó al 4%.

problema del carácter al portador de los vales en el Congreso. Comerciantes importantes protestaron ante este nuevo intento de recortar su capacidad de especular con ellos. El 1 de setiembre firmaron un pedido ante el Congreso los siguientes propietarios y comerciantes: Juan de Dios Calderón, Canevaro Pardo y Barrón, Bernardo Poumaroux, R. Lacroix, Manuel Amunátegui por Tomás Lachambre y Cía., Miceno Espantoso, Mateo Tordoya, Juan Figari, Pedro Gonzales Candamo, Federico Lembcke, Zaracondegui y Cía., Sescau y Valdeavellano, y Pedro Denegri. El informe de la comisión de Hacienda del Senado, encargado de contemplar esta petición, les otorgó su fallo favorable y los reafirmó en su derecho sobre los vales en cuestión. Amunátegui, M. et al, *Señor, los abajo firmados propietarios y comerciantes de esta ciudad y tenedores de vales de consolidación, ante el Soberano Congreso respetuosamente exponen...* (Lima, 1862), pp. 4, 10, 20

21. Ibid., p. 16.

22. Basadre, *Historia...*, tomo 4, p. 38.

La compañía de José Hegan, contratista del ferrocarril Tacna-Arica, siguió un procedimiento similar para conseguir fondos externos destinados a la construcción de la vía férrea.

El contrato con Hegan y Cía. se celebró en agosto de 1852 con el compromiso de que el encargado de negocios del Perú en Londres le adelantaría un total de dos millones de pesos en bonos con el interés del 4.5%, a razón de cinco pesos por libra esterlina, una vez que Hegan hubiese depositado inicialmente 500 mil pesos en vales de consolidación, cantidad que aumentaría a su conveniencia hasta completar los dos millones de pesos que se le adelantarian en Londres. A estos bonos del 4.5% se le pagaban intereses cada semestre. Manuel de Mendiburu argumentaba que esta operación resultaba beneficiosa para el erario al rebajarse el interés que gravaba sobre la deuda pública de un 6 a 4.5%²³. Lo que no tomó en consideración Mendiburu fue que mientras los vales de consolidación al 6% se cotizaban a un valor real del 70.9% y 85.3% en 1859 y 1860, respectivamente, la deuda trasladada del contrato Hegan se cotizaba casi a la par (99.9%) en dichos años²⁴. Se evidencia así que el beneficio a que hace mención Mendiburu resultó muy relativo. Los bonos de los contratos Uribarren y Montané se cotizaban en esos mismos años al 79.9/84% y 79.6/84%, respectivamente²⁵.

En 1857 se publicaron las cifras de la deuda efectivamente convertida: 2'015,500 de la deuda del ferrocarril de Tacna, 5'941,000 del contrato Uribarren, y 3'130,000 del contrato Montané²⁶. La intención de realizar la conversión de la deuda interna a externa la hace explícita Echenique en una nota que dirige al ministro plenipotenciario en Londres, Mendiburu, en 1852: "Piensa el gobierno que otra operación, no menos importante en economía y ventajas nacionales, podría servir de aliciente a los banqueros. Esta es de trasladar cinco millones de la deuda interna de consolidación"²⁷. En esta nota Echenique daba las instrucciones iniciales para el contrato con la casa Uribarren, con claros objetivos de estimular y beneficiar a los "banqueros" o grandes comerciantes prestamistas y casas comerciales extranjeras, lo que efectivamente medió

23. Mendiburu, op. cit., pp. 589-591.

24. Leubel, A. *El Perú en 1860 o sea anuario nacional* (Lima: Imprenta de El Comercio, 1861).

25. Idem.

26. *El Peruano*, 31 de marzo de 1857.

27. Mendiburu, op. cit., p. 615.

pues inclusive algunos comerciantes nativos se convirtieron en acreedores externos del Estado. Debido a que estos contratos no se publicaron, sólo un reducido número de personas privilegiadas participó en ellos.

2.4 La tacha

Después del triunfo de Castilla sobre Echenique se crea una Junta de Examen Fiscal el 5 de febrero de 1855 para revisar los vales reconocidos durante la administración echeniquista. Esta junta examinadora estaba compuesta por el director general de Hacienda, el presidente del Tribunal de Cuentas, el administrador de la Tesorería Departamental y el contador de la Caja de Consolidación. Desempeñaban esos cargos, respectivamente, Manuel Ferreyros, José Fabio Melgar, Tomás de Vivero y Toribio Sanz²⁸. La junta tenía amplios poderes para la indagación, y sus averiguaciones constituyen información valiosa para la investigación sobre el destino de la deuda interna y el sector social beneficiado por ella.

Por decretos del 11 de enero y el 26 de febrero de 1855 se suspenden los trámites legales de los vales emitidos después del 20 de abril de 1851, hasta que no se pronuncie la junta examinadora sobre la validez de los mismos. El 10 de julio de 1855 se expide un decreto que establece que la Caja de Consolidación se separa de la administración del Tribunal del Consulado, creándose en su lugar la Dirección del Crédito Nacional. Anteriormente se había dado otro decreto suprimiendo la Dirección General de Hacienda, otorgándole por tanto a la Dirección del Crédito Nacional una capacidad de centralización y poder de decisión sobre la deuda interna, a la que se había agregado la deuda de manumisión de esclavos; además, se le otorgaba el manejo de la deuda externa, la cuenta de la exportación y venta del guano y todo aquello que tuviese que ver con el crédito público. Las cuentas de este organismo son esenciales para investigar los volúmenes y destinatarios de la repartición de los productos del guano a partir de 1855.

El 31 de octubre de 1856 se da un decreto que ordena a la Dirección del Crédito Nacional pagar cerca de medio millón de pesos por intereses devengados de la deuda consolidada, en los once trimestres corridos desde el 1 de enero de 1854 hasta el 30 de setiembre de 1856, teniendo prioridad el orden de anti-

28. La tarea de la Junta de Examen consistía en "revisar los expedientes sobre que han recaído los decretos para emisión de vales de la deuda interna, y examinar las disposiciones fiscales de la última administración, en que puedan haberse defraudado de alguna manera los intereses del Estado". *El Peruano*, tomo 28, N° 3, 7 de febrero de 1855.

güedad del reconocimiento. Seguían en suspenso los vales emitidos durante el gobierno de Echenique. El 29 de diciembre de 1856 se da una ley que otorga el visto bueno a la continuación de la amortización de los vales consolidados hasta el 20 de abril de 1851 y los posteriores a dicha fecha, siempre que los expedientes que les dieron origen no hubiesen sido observados por la Junta de Examen. Se permite así la circulación de muchos vales de la época de Echenique. Se establecía además, en la misma ley, que los vales que entraron en la conversión de la deuda se ajustaban a las mismas disposiciones que los vales comunes, si fuera el caso de estar bajo observación. Se acordó un fondo de amortización del 2% para los vales consolidados y se estableció que los informes de la Junta de Examen sean publicados. Estos informes arrojaron un total de 12'180,172 pesos en reconocimientos irregulares en 141 expedientes tachados por la junta y 4 sustraídos²⁹. La Junta de Examen Fiscal concluía lo siguiente en un informe de julio de 1856:

"En la Consolidación de la deuda bajo la última administración, se han cometido crímenes de toda especie: suplantaciones de nombres, de cifras, de documentos, mutilación de expedientes, testificaciones falsas, abreviaciones de trámites, omisiones voluntarias y otros delitos no menos graves, sea por parte de los supuestos acreedores al Fisco, sea de funcionarios públicos: estos delitos reclaman el enjuiciamiento de sus autores con tanta más urgencia, cuanto que esos delitos son causa del gravamen que ha sufrido y tiene que sufrir el fisco bajo cualquier arreglo que se haga"³⁰.

En los informes que se publicaron sobre los expedientes observados se pueden indicar algunos ejemplos concretos de los excesos de la consolidación durante el gobierno de Echenique, los mismos que serán detallados en el cuarto capítulo de este estudio. Así mismo, se realizaron procesos judiciales contra los acusados por falsificaciones. Es el caso del juicio seguido contra el coronel Torrico, y otros casos similares, según aparece en notas del diario oficial el 18 de junio y el 5 de agosto de 1856.

Con el objeto de depurar la deuda consolidada durante el gobierno de Echenique la Junta de Examen se basaba en la argumentación legal de que "el vale no es una letra al portador, en que se prescinda de la persona acreedora y de la causa de la deuda, para recaer sólo sobre la firma del que lo emite, como sucede en la letra. Es endosable y enagenable como lo es toda obligación, y

29. Junta de Examen Fiscal, *Informes de la Junta...* (Lima: Imprenta del Estado, 1857).

30. Comisión Especial de Crédito Público, *Informe de la Comisión Especial del Crédito Público sobre los vales consolidados y tachados* (Lima: Imprenta Félix Moreno, 1856).

como lo es toda propiedad; pero la cualidad de endosable no cambia su naturaleza de obligación"³¹. Sin embargo, como hemos visto arriba, la argumentación de la junta carecía de fundamento para los intereses de los comerciantes que lo utilizaban en la práctica para sus negociaciones como simples vales al portador. Este debate jurídico sobre la terminología a aplicar se solucionaría a favor de los comerciantes, como veremos enseguida.

Por fin, en marzo de 1857, se zanja la discusión acerca del reconocimiento o no reconocimiento por igual de la totalidad de vales emitidos, hubieran sido éstos tachados o no por la junta examinadora. Esta discusión se venía arrastrando desde 1855. El artículo 1 de la ley del 11 de marzo de 1857 establecía: "Se rehabilita el curso de los vales de consolidación que proceden de los expedientes del crédito público, tachados por la Junta de Examen, creada en 7 de febrero de 1855; y se nivelan, sin restricción alguna, a los demás vales de la deuda consolidada en cuanto a la cuota y pago de intereses, beneficio de amortizaciones y demás goces prescritos por las leyes vigentes"³². Así mismo se daba validez plena a los contratos de conversión de la deuda. Los intereses devengados y suspendidos de la deuda trasladada se pagarían en el mismo año de 1857. ¿Qué obligó a este cambio radical en la política del gobierno Castilla con respecto a los vales tachados en oposición a lo dictaminado por la Junta de Examen y algunos representantes de la Convención Nacional?

2.5 La rehabilitación

Castilla utilizó como arma política contra Echenique la acusación de un reconocimiento desmedido de expedientes de la deuda interna y la firma ilegal de los contratos de conversión de la deuda. Sindicó al gobierno de Echenique de corrupto y responsable de la ruina de la hacienda pública. Se puede comprobar la dureza inicial con que se trataron los reconocimientos efectuados desde el 20 de abril de 1851 en los decretos de 1855 y 1856. Los principales propulsores de esta política contra los reconocimientos de Echenique fueron Domingo Elías, ministro de Hacienda en 1855, el congresista José Gálvez y la Junta de Examen. Sin embargo, paulatinamente, se va evidenciando una mayor condescendencia hacia los vales observados que culmina, en 1857, con el pleno reconocimiento de dichos vales tachados, luego de un conflicto entre el poder ejecutivo, representado por Castilla y su ministro Ortiz de Zevallos, y el legislativo —la Convención Nacional—, del que saldría triunfador el ejecutivo.

31. *Ibid.*, p.6.

32. *El Peruano*, tomo 32, No. 58, 11 de marzo de 1857.

Algunas medidas del mismo Elías evidencian los retrocesos de su inicial rigurosidad en la depuración de vales. Elías, por ejemplo, ordena al encargado de negocios de París satisfacer los intereses devengados de la "deuda franco-peruana convertida" y dio autorización a la casa Montané y Cía., el 21 de mayo de 1855, para que proporcione la suma necesaria para dicha operación³³. Estas acciones acarrearón serios problemas al ministro, quien poco después tuvo que abandonar el despacho de Hacienda. Castilla negó la autenticidad de la firma presidencial en la orden de Elías, según el testimonio de Juan Gualberto Valdivia, entonces miembro de la Convención Nacional, quien habló con Castilla en su residencia de Chorrillos sobre el asunto³⁴. Se alzaron las protestas de aquellos tenedores de vales consolidados y bonos convertidos, acusando al Gobierno de preferencias en la rehabilitación de los vales tachados. Castilla aprovechó la oportunidad para deshacerse de Elías, un peligroso aliado con ambiciones presidenciales.

Castilla atravesaba entonces momentos difíciles debido a la sublevación de 1857 en Arequipa comandada por el general "regenerador" Manuel Ignacio de Vivanco; la escuadra sublevada a favor de Vivanco amenazaba constantemente el Callao y las principales ciudades de la costa, llegando inclusive a tomar posesión de las islas guaneras de Chincha. Se producían, además, pronunciamientos esporádicos contra Castilla en varias provincias. El 13 de mayo de 1857, Castilla, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Ortiz de Zevallos, llega a un acuerdo con el ministro británico, Steven Sullivan, y el francés, Albert Huet, para que las flotas de guerra inglesa y francesa ejerzan la protección de las islas guaneras en resguardo de los intereses de bonos de la deuda externa. Esto le garantizó a Castilla un apoyo externo para su causa contra Vivanco. Se establece así una especie de "protectorado", aunque las cancillerías de Londres y París desautorizaron ese pacto luego de su inicial aplicación efectiva³⁵.

No faltaron las presiones de los gobiernos británico y francés, los cuales discutían incluso la posibilidad de un bloqueo del Callao, o la captura de las Islas Chincha, por parte de las escuadras que mantenían el "protectorado", en defensa de los comerciantes extranjeros en Lima, quienes poseían la mayoría de los bonos de la deuda convertida. Debido a esta situación crítica se terminó

33. Anónimo, *Al Gobierno*, p. 15. El autor presenta como prueba una nota firmada por Domingo Elías el 24 de mayo de 1855 dirigida al encargado de negocios en Londres.

34. Valdivia, J.G. *Memorias sobre las revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866* (Lima: Imprenta de La Opinión Nacional, 1874), pp. 335-336.

35. Basadre, *Introducción a las bases*, tomo 1, pp. 307-308.

por dictar la ley de marzo de 1857 que rehabilitó todos los vales tachados. En una comunicación de Ortiz de Zevallos a la Convención Nacional "por encargo del Libertador y el Consejo de Ministros", el 19 de febrero de 1857, se argumentaban las razones que hacían imperiosa la aprobación del anteproyecto presentado por el ejecutivo e inicialmente rechazado por la Convención.

"Razones de alta política, que no pueden escaparse a la perspicacia de la Convención Nacional, obligan al Gobierno a abstenerse de consignar en esta nota las poderosas y en extremo apremiantes causales que lo impulsan, no sólo a presentar el adjunto proyecto, sino a recomendar su preferente despacho; y me encarga que las esponga verualmente a esa honorable Asamblea"³⁶.

Ya lo advertía en 1856 un anónimo defensor de los tenedores peruanos de bonos convertidos. Reflejando el pensamiento y los deseos íntimos de esas personas, decía: "Los peruanos miran con indolencia el resultado que tenga la deuda, como si no existiera justicia en su patria dicen: 'los cañones extranjeros nos harán pagar, exigiendo que paguen a sus súbditos, que negociaron bajo la buena fe del Gobierno y bajo las garantías de la leyes existentes': triste recurso ¡Apelar a la fuerza extranjera para conseguir justicia en su propio país!"³⁷. Ocurre que los comerciantes nativos tenían en este caso intereses coincidentes con la casas comerciales extranjeras, poderosos aliados cuyos gobiernos extendían su protección a los comerciantes nativos.

Paralelamente a las "apremiantes causales" a que hizo referencia Ortiz de Zevallos, hubo una seria presión legal en Lima por parte de tenedores de bonos de la deuda trasladada. Estos participantes en los contratos Uribarren, Montané y Hegan nombraron como representantes ante el Gobierno a José Vicente Oyague, José Hegan y Angel Richon, con el fin de llegar a un arreglo sobre el delicado punto de la distinción entre vales tachados y vales legales. Estos tenedores presentes en Lima decían hablar también en nombre de los tenedores de la misma deuda en Europa. El 29 de enero de 1857 envían una comunicación al gobierno de Castilla donde exponen, después de un detenido estudio de "los documentos de entradas y gastos del Erario", una serie de medidas para llegar a un acuerdo, cuyo punto central era la derogatoria de la ley del 29 de diciembre de 1856 que establecía distinciones y depuraciones con respecto a los vales tachados. Así mismo, el comunicado se permitía sugerir el estableci-

36. *El Peruano*, tomo 32, No. 42, 19 de febrero de 1857, p. 173.

37. Anónimo, op. cit., p. 51.

miento de condiciones para la amortización y pago de intereses del resto de la deuda consolidada³⁸.

Semanas más tarde se sanciona la ley del 11 de marzo, ratificada por la Convención Nacional con posiciones de mayoría y minoría, la cual incluye en sus medidas lo sustancial de las recomendaciones de los tenedores de la deuda trasladada, esto es: la derogatoria de la ley de diciembre de 1856, la rehabilitación de todos los vales de consolidación sin distinción alguna, la ratificación de los contratos Uribarren, Montané y Hegan, el establecimiento de fechas fijas para el pago de intereses y de un fondo de amortización del 5% anual desde el año 1858.

¿ Quiénes eran los tenedores de bonos de la deuda convertida que lograron influir tanto en las decisiones del gobierno Castilla? Los que firmaron la comunicación al Gobierno en enero de 1858 fueron: José Hegan y Cía., José Vicente Oyague, Angel Richon, Thomas Lachambre y Cía., José Canevaro, José Sarmiento, José Gibson, Guillermo Davidson por Graham Rowe y Cía., Green Nicholson y Cía., Naylor Conroy y Cía., William Mclean, Lang Pearce y Cía., Juan Grime, Bernardo Roca y Garzón, Eduardo Stubbs por Guillermo Gibbs y Cía., Nicolás Pruneda, Pedro Gonzales Candamo, J. Domingo Castañeda, Sescau y Belloc Hnos. Se distinguen entre estas personas a importantes comerciantes nativos que lograron realizar provechosamente el negocio de la conversión de la deuda interna a externa, y transformarse en acreedores externos del Estado peruano. En resumen, fueron los grandes comerciantes con conexiones extranjeras los que presionaron con efectividad para obtener un giro clave a su favor en la legislación de la consolidación. Esto demuestra que detrás de la promulgación de las leyes de la consolidación se jugaban intereses de grupos vinculados directamente a la coyuntura político-económica de la época. Los defensores de un liberalismo comercial salían triunfantes una vez más en su pugna por acceder a una mayor porción de la distribución de la riqueza del guano.

38. *El Peruano*, tomo 32, No. 42, 19 de febrero de 1857. Las condiciones que el comunicado establecía incluían lo siguiente: derogatoria de la ley de 29 de diciembre de 1856; un cronograma para el pago de los intereses atrasados, años 1855 y 1856, de la deuda convertida; la postergación de las amortizaciones del 4% anual para los años 1858, 1858 y 1860; la expedición de nuevos vales para la liquidación de intereses vencidos en 1856 y la puesta al día de los intereses trimestrales del año 1857; que no hubiera distinción de la amortización por derecho de aduana, censos y capellanías.

2.6 Porción del guano

Las leyes de la consolidación fueron sancionando, en los sucesivos años de su evolución, lo que el Estado debía hacer teóricamente con respecto a la deuda interna. Se necesita saber, sin embargo, cuál era la capacidad real de ese Estado para satisfacer las presiones hacia la efectiva amortización y servicio de intereses de la consolidación, y qué lugar ocupó ésta entre el total de los gastos públicos de la época. En otras palabras, necesitamos tener una idea clara de cuál fue el significado real de la consolidación para las arcas fiscales dentro de la evolución temprana del aparato estatal republicano.

Sabemos de antemano que antes de 1850 hubo una reducida amortización efectiva de la deuda interna, principalmente entre los acreedores privilegiados, y que fue gracias a los ingresos del guano que empezó a cancelarse la deuda interna a la vez que se ampliaba el aparato estatal. Algunos autores (Dancuart, Hunt) ya han tratado sobre el impacto del guano en la estructura estatal y en la sociedad peruana desde la perspectiva de los ingresos y egresos fiscales. Se trata aquí de ubicar en esa dimensión el significado de la consolidación a lo largo de los años en que hubo operaciones relacionadas a ella. Para ello nos valdremos de distintas liquidaciones y balances de la cuenta de la deuda interna.

Hacia 1850 la estructura del Estado republicano estaba integrada teóricamente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, según lo estipulaba la constitución de 1834. El poder legislativo funciona sólo esporádicamente, aunque entre los años 1856 y 1857 la Convención Nacional se desempeñó con relativa autonomía; durante los gobiernos de Castilla y Echenique se dio mayor continuidad formal al ejercicio de este poder del Estado. Del poder judicial, un contemporáneo decía en 1854 que se encontraba "en su esencia completamente deprimido por el ejecutivo, que armado de numerosas atribuciones se le interpone a cada uno de sus pasos", lo cual se aplicaba tanto al nivel de juzgados de primera instancia, como a los de cortes superiores y Corte Suprema. El poder ejecutivo estaba compuesto por la presidencia y cinco ministerios, los de Relaciones Exteriores; Gobierno, Policía y Obras Públicas; Justicia, Beneficencia, Instrucción Pública y Culto; Hacienda y Comercio; y Guerra y Marina. Las municipalidades estuvieron en receso desde 1839 hasta 1857, y sus funciones fueron cumplidas por la prefectura, en la capital de los departamentos, y la sub-prefectura e intendencia de policía, en las capitales de provincia³⁹.

39. Fuentes, M. *Estadística general de Lima* (Lima: Tip. Nacional, 1858).

La polémica entre los liberales y conservadores de la época fue formando esta estructura estatal ambigua a través de las sucesivas constituciones. Las ideas liberales prevalecieron finalmente en materia de política económica, lo cual se dejó constatar claramente en los manejos hacendarios hacia 1850, especialmente en los reglamentos de comercio, aduana y deuda interna. José Casimiro Ulloa, un peruano muy influido por el liberalismo francés opinaba en 1854, después de criticar duramente a los elementos conservadores del país, lo siguiente:

"...las cuestiones económicas [son] las que más absorven las preocupaciones del Perú. La cuestión del crédito acaba de plantearse. No tenemos trabajo que organizar; ni cuestiones de subsistencia, ni salario. Son las cuestiones de orden comercial las que más debatidas se hallan en el Perú. Sea dicho en honor suyo que el principio de la libertad de tráfico ha salido al fin victorioso en estos debates y que el código comercial del Perú (de 1852) es más liberal que el de muchas naciones civilizadas de Europa"⁴⁰.

El aparato estatal que traducía esta amalgama de ideas y realidades contradictorias del Perú de entonces, era constituido por una burocracia de alrededor de cinco mil empleados en Lima, de los cuales 3,474 pertenecían a instituciones militares, dentro de una población laboralmente activa de 41 mil personas en 1857⁴¹. Los servidores públicos no siempre fueron adecuadamente compensados en los años anteriores a 1845 y sus salarios devengados se contuyeron en parte integrante de la deuda interna. El gasto que demandaba el salario pagado a esa burocracia ascendía, en 1852, a 1'043,532 pesos⁴². En dicho año, a pesar del abultado gasto de sueldos, hubo un intento por parte de Echenique de subir las remuneraciones del ejército con el objeto de ganarse mayor popularidad dentro de la institución. Se impuso un gravamen de 200 mil pesos anuales a la hacienda pública, y la ley del 17 de agosto de 1853 autorizó los gastos para el aumento de sueldos al ejército y a la Guardia Nacional⁴³.

Antes de la aparición del guano los principales ingresos del Estado eran la contribución de los indígenas y castas, y los derechos de aduana. En 1830 el

40. Ulloa, J.C. *El Perú en 1853: un año de su historia contemporánea* (París: Imp. Maulde y Renou, 1846), p. 16.

41. Fuentes, op. cit., p. 621.

42. Dirección General de Hacienda, año 1852, O.L. 373, AGN.

43. Mendiburu, op. cit., pp. 545-546, 730.

rendimiento de los tributos indígenas y de castas era de 1'471,190 pesos⁴⁴. Los departamentos que más contribuían en ese rubro eran los de Cusco, Puno, Junín, Trujillo y Ayacucho, en ese orden de importancia. Entre los años de 1838 y 1845, el total de las contribuciones indígenas fue de sólo 1'757,290 pesos. A manera de comparación, las patentes e imposiciones prediales llegaron a 53,684 pesos en esos mismos años, y hasta 66,982 pesos en 1859⁴⁵.

Las aduanas de la República produjeron las cantidades de 2'013,375 pesos en 1849 y 1'905,208 pesos en 1850. La aduana del Callao, la más rentable de todas, produjo por su lado 2'094,837 pesos en 1851, 2'317,515 en 1852 y 2'236,652 en 1853. En 1827 lo producido por las aduanas llegaba a sólo 1'697,000⁴⁶. Por lo tanto se verifica un incremento del 74% en los ingresos aduaneros entre 1827 y 1853. El mayor aumento se dio en los años 1849-1853, con una disminución relativa en 1854, para seguir su expansión en 1855.

A partir de 1849 se dio un superávit de poco más de 500 mil pesos anuales entre los ingresos y egresos del gobierno, que se podía aplicar a la satisfacción de la deuda interna. Antes de 1854, esa suma la pudo aportar el ingreso de aduanas; el aumento registrado por ese concepto entre 1849 y 1853 permitió la aplicación de los ingresos aduaneros a la amortización de la deuda interna. Después de 1855 serán los ingresos del guano, administrados por la Dirección del Crédito Nacional, los que se aplicarán a la deuda interna.

Fueron en efecto las aduanas las que soportaron el mayor peso de la amortización de la deuda interna durante el gobierno de Echenique. De hecho, a partir de 1852, las aduanas amortizaban unos 500 mil pesos anuales de la deuda interna. Los fondos de conventos supresos y antiguos bienes cautivos coloniales fueron agotándose a través de la satisfacción de deudas a los ejércitos locales y extranjeros, y caudillos militares. Por decreto del 29 de mayo de 1852 se resolvió que la aduana del Callao diese 20 mil pesos mensuales, y las demás 6 mil, a la Caja de Consolidación⁴⁷. Las aduanas aceptaban los vales de consolidación como pago por los derechos de importación según los artículos 160 y 161 del Código de Comercio de 1852. Esta ley establecía además que

44. Romero, op. cit., p. 62.

45. Flores Galindo, A. *Arequipa*, p. 87. Padrón de patentes de los gremios de Lima, 1859, Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2040, AGN.

46. Mendiburu, op. cit., p. 522. Romero, op. cit., p. 67.

47. Mendiburu, op. cit., p. 525.

las importaciones de efectos extranjeros que se hiciesen en buques peruanos de menos de 200 toneladas de registro gozarían de una regalía de 10% sobre sus derechos pagaderos en vales de consolidación. Igualmente, se admitían esos mismos vales en el 25% del pago total de derechos de importación de barcos de cualquier bandera que viniesen directamente a los puertos mayores del Perú procedentes de Europa, Norte América y Asia. Las amortizaciones de la deuda consolidada, efectuadas por concepto de aduanas hasta el 26 de febrero de 1857, llegaron al monto de 2'046,828 pesos, especialmente entre los años 1850 y 1854, mientras que las de censos y capellanías ascendían a sólo 122,193 y 228,183 respectivamente.

A partir de 1857, se destinaron hasta 600 mil pesos anuales de los ingresos del guano (esto es, el 5% de la deuda total restante) para la amortización de la deuda consolidada, a razón de 50 mil pesos mensuales, utilizando la modalidad de propuestas cerradas en concurso.

La deuda interna ascendía para entonces a 12'846,685 pesos y sus intereses atrasados a 1'857,147. En base a las cifras del producto del guano de los años 1857 y 1858, los que representaron 27'760,000 pesos, el monto de amortización anual de 600 mil pesos representaba el 4.3% del ingreso anual por concepto del guano. Así, a manera de ilustración, la cifra global de la consolidación, 24 millones de pesos en vales (ver cuadros 9 y 10), amortizada a lo largo de quince años (1850-1865), representó alrededor del 86% de lo producido al Estado por el guano en los años 1857 y 1858. El total de la deuda interna amortizada y sus intereses, deducida de ese total la cifra de la deuda convertida, representó, según cálculos de Hunt, alrededor del 6.9% del total de los gastos de los ingresos del guano en toda la época de su explotación (1846-1877). Unida a la deuda convertida y a la deuda de la manumisión de esclavos, representó el 11.5% del total de esos gastos⁴⁸. Sin embargo, como hemos visto, no toda la deuda interna consolidada se pagó con el producto del guano; parte del total fue cubierto por la recaudación de aduanas. Adicionalmente, la amortización efectiva se realizó de acuerdo a la cotización de los vales en años sucesivos. Por tanto el cálculo de Hunt debería rebajarse proporcionalmente según el monto efectivamente amortizado, que fue menor a la cifra nominal total en vales de consolidación. El impacto de la consolidación sobre las cuentas fiscales fue, además, mucho más intenso en el período 1850-1865 -años en los que se amortizó la deuda- que en el de 1846-1877 utilizado por Hunt en sus cálculos.

48. Hunt, "Growth and Guano", pp. 78-80.

De esta manera, en el pago de la deuda interna de 1850 se repartió cerca de la décima parte del ingreso del guano, que en esos años se creía no iba a durar más de una década, pero que en realidad duró en forma rentable para el Estado alrededor de 30 años. Veamos ahora hasta qué punto se aprovechó este gasto estatal en la repartición de una porción del guano entre los peruanos de la época.

Capítulo 3

LA REPARTICION DE VALES

El fenómeno de la consolidación de la deuda interna suscitó una encendida polémica entre los peruanos entendidos de la época y, posteriormente, aun hasta nuestros días, ha sido y es materia de juicios y especulaciones diversas. Se atribuye a la consolidación, entre otras cosas, el de constituir el origen dudoso y oscuro de varias fortunas a expensas del fisco, y una de las primeras causas del desaprovechamiento de los ingresos del guano en su etapa inicial de explotación. Por otro lado, si se comparan las cantidades involucradas en la consolidación con las de otros manejos fiscales posteriores -como, por ejemplo, el contrato Dreyfus-, la consolidación compromete, al parecer, cantidades más modestas. Sin embargo, no debemos olvidar que los montos implicados deben ser comparados teniendo en consideración su relación con el nivel de riqueza general en distintas épocas. En 1850 las fortunas eran más exiguas que en años posteriores, como lo evidencia el hecho de que la concentración de capitales en bancos recién aparece en la década de 1860 y, por lo tanto, los 24 millones consolidados en vales pueden resultar una cantidad significativa en un contexto de falencia de capitales.

Muchas de las interrogantes que así surgen sobre el efectivo papel de la consolidación y conversión en la formación de fortunas a mediados del siglo XIX, no han sido contestadas con adecuadas pruebas documentales. Un sondeo sobre la existencia de fuentes relacionadas a este asunto nos mostró que era posible una mayor aproximación al problema de las fortunas y la clase dominante en formación hacia 1850. La pregunta elemental que nos fue conduciendo a través de esta masa de información fue ¿quiénes fueron los beneficiados por la consolidación? Para empezar encontramos que los documentos que consultamos podían contestarnos otra pregunta, muy parecida, aunque no igual del todo, que era ¿quiénes recibieron vales de consolidación y qué cantidad? El contestar a esta última pregunta nos coloca directamente en la problemática de no sólo conocer los nombres de esos individuos, sino, averiguar igualmente, cuál era la función o actividad económica que ellos desempeñaban; en otras palabras, el constatar su identidad socio-económica.

3.1 Los que recibieron vales

En 1855 se produjo una repulsa general contra los sospechosos de beneficio ilegal con la consolidación, vinculándolos a las autoridades corruptas del gobierno Echenique. Se extendió una ola de desprestigio que alcanzó a muchos poseedores de vales, aun si se hubieran conseguido con todas las prescripciones de la ley de marzo de 1850. Esta ley fue lo suficientemente imprecisa como para dejar pasar reconocimientos abultados sin el suficiente examen acerca de su validez.

Existen, además, pruebas de evidente corrupción de las autoridades, aunque, claro está, no se puede aplicar a todas ellas tal imputación. Hubo funcionarios que, a pesar de realizar tareas que no resultaron acertadas desde el punto de vista fiscal, cumplían sin embargo sus labores con márgenes de probada honradez. Nos referimos a Manuel de Mendiburu, a quien no se le pudo probar ninguna responsabilidad de fraude, a pesar de haber firmado el contrato secreto de conversión de la deuda interna a externa en Londres en el año 1853, como se ocupa él mismo de demostrar en sus memorias inéditas. Argumenta Mendiburu que se vio obligado a firmar tal contrato a pesar de su voluntad debido a órdenes expresas de Echenique. El segundo contrato de conversión con la compañía Montané se firmó luego en Lima sin el conocimiento de Mendiburu. Hemos podido comprobar así mismo que Mendiburu no figura entre los principales receptores de vales de consolidación y, por lo tanto, no se le puede calificar como "consolidado". Sin embargo, a pesar de que en sus memorias dice que no recibió ni un solo peso de la consolidación, tal vez refiriéndose a que no obtuvo vales durante el gobierno de Echenique, lo cual parece ser cierto, sí se le llegó a asignar 1,700 pesos en vales en 1850, durante el gobierno de Castilla, cantidad no muy apreciable y que seguramente se le adeudaba por concepto de sueldos impagos¹.

1. "Libro de la deuda interna consolidada conforme a la ley de marzo de 1850", tomo 1, f. 690, Libros Manuscritos Republicanos, H-4-1966, AGN. Otro caso de probidad administrativa comprobada lo constituye el contador de la Caja de Consolidación, entre 1850 y 1854, don Toribio Sanz, gracias al cual tenemos en la actualidad una relación exacta y pormenorizada de las cantidades consolidadas, amortizadas, intereses pagados, y el concepto de los mismos, que consta en los libros de contaduría que administraba, primero el Tribunal del Consulado, y luego la Dirección del Crédito Nacional. Por su escrupulosidad en el manejo de cuentas sirvió a los dos gobiernos de Castilla y al de Echenique, siendo un raro caso de continuidad administrativa. Por su labor desempeñada desde 1830 como contador del Tribunal del Consulado y a partir de 1850 como contador de la Caja de Consolidación, fue nombrado miembro de la Junta de Examen Fiscal en 1855, y luego director del crédito público. Después de su importante labor de denuncia de los excesos cometidos por la consolidación durante el gobierno de Echenique, y muy probablemente debido a poderosos intereses que resultaron afectados por esta denuncia, fue sometido a juicio por cargos de mala administración en su puesto de director. Sin embargo, el 13 de abril de 1857, fue absuelto de dichos cargos y restituido en su cargo, sin habérsele podido comprobar culpabilidad o irregularidad alguna: *El Peruano*, tomo 32, No. 69, 25 de mayo de 1857.

A pesar de algunas honrosas excepciones, la corrupción existió. Más adelante dedicaremos un espacio a este tema y a las distintas modalidades de fraude comprobado en la aprobación y negociación de los expedientes de consolidación. Empero no es nuestra intención centrarnos en los aspectos fraudulentos pues creemos que, siendo ilustrativos del "patriotismo" y la moral de los que ocupaban altos puestos en dicha época, no proporcionarían información positiva acerca de los aspectos socio-económicos que son los que interesan primordialmente a nuestro enfoque de la consolidación. Sin embargo, el tema de la corrupción de autoridades está indisolublemente ligado con la consolidación y conversión de la deuda externa. Para llegar al tema socio-económico debemos recorrer, aunque sin intentar detenernos demasiado, este tenebroso callejón (ver Capítulo 4).

Un autor de la época estudiada, Fernando Casós², señaló a un grupo de personas que, según él, defraudó al fisco al apropiarse de cantidades elevadas en vales de consolidación obtenidos ilegalmente. Casós cita como fuentes utilizadas en su polémico "Cuadro secreto de la distribución de la deuda consolidada de 14'000,000", los libros duplicados de la Caja de Consolidación y los expedientes de reconocimiento³. Independientemente de que Casós haya revisado efectivamente estos documentos, de que realmente haya tenido acceso a ellos cuando desempeñó los cargos de archivero del Ministerio de Hacienda y diputado por Jaén, o que habiendo revisado algunos documentos, haya finalmente exagerado sus conclusiones, los documentos a que hace mención son los mismos especificados por la ley de marzo de 1850. Así mismo, según los expedientes revisados en 1855, algunos de los cuales aparecieron casi en su integridad en sucesivos números de *El Peruano* en 1856, la pormenorización de los

-
2. Fernando Casós (Trujillo 1828, Lima 1881), estudió en el Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, pasando luego a Lima en 1847 para completar en 1849 sus estudios en Guadalupe y San Marcos, de donde se graduó como abogado. Es nombrado oficial del Ministerio de Justicia en 1851 y luego archivero del Ministerio de Hacienda en 1852, lo cual le permitió conocer, desde dentro, las irregularidades de la consolidación. Fue echeniquista y desde el periódico *El Rimac* apoyó a Echenique. Salio elegido diputado por Jaén, provincia de La Libertad, en 1852. En 1858 es elegido diputado por Patate, lo que le permitió dirigir al grupo liberal de la oposición en la Cámara. Participó en el combate del 2 de mayo. Desempeñó los cargos de diputado por Trujillo en el Congreso de 1867 y cónsul en Liverpool en 1868. En 1872 colaboró como secretario general en la fracasada revolución de los Gutiérrez, lo cual lo obligó a emigrar a Chile primero, y a Francia después. En 1874 vuelve al Perú para dedicarse a la abogacía. Tauro del Pino, A. *Diccionario enciclopédico del Perú ilustrado* (Lima: Ed. Mejía Baca, 1975), pp. 292-293.
 3. Los expedientes incluían (1) el cuadro de relación de suministros, daños y perjuicios presentado por avalúo y tasación al Gobierno, (2) tasación hecha por peritos, (3) informe del Tribunal de Cuentas, (4) visita fiscal, (5) cuadro de suministros, daños y perjuicios presentado al despacho para reconocimiento supremo, (6) reconocimiento supremo. Casós, *Para la historia*, p.62

documentos y trámites que componían los expedientes coincide exactamente con la descripción de Casós, como pudimos comprobarlo igualmente en una versión original del expediente promovido por doña Manuela Afino en 1852, conservado en la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional⁴. En consecuencia, cualquier nómina de individuos que hubieran recibido vales de consolidación debe basarse en algunos de los documentos descritos por Casós para ser aceptable.

Fue solamente cuando comprobamos la existencia de dichas fuentes que iniciamos con pie seguro la investigación sobre la identidad socio-económica del grupo de la consolidación⁵. Con estas fuentes elaboramos una relación de personas que recibieron las mayores cantidades en vales de consolidación, entre 1850 y 1852. El total de individuos que recibieron vales fue cercano a las dos mil personas. Consignamos en el cuadro 4 solamente la relación de los que recibieron cantidades que van desde los 31 mil al millón de pesos (la cifra más alta reconocida). Una vez establecidos los nombres de los dueños de vales y las cantidades que recibieron, nos abocamos a la tarea de ubicar la actividad eco-

4. "Expediente promovido por Dña. Manuela Afino solicitando indemnización por el Estado de los perjuicios que causaron en su propiedad los miembros del ejército libertador que vinieron comandados por el general San Martín". Manuscritos, 1852/D2213, BN. Este expediente es el único original que hemos podido ubicar.

5. En el Archivo General de la Nación, en la sección de Libros Manuscritos Republicanos, se puede encontrar un amplio repertorio de libros de contabilidad fiscal pertenecientes a la consolidación: libros de cuenta o manuales duplicados de la Caja de Consolidación y de la Dirección del Crédito Nacional, libros de arbitrios, etc. Entre estos documentos ubicamos el "Libro manual duplicado de la Caja de Consolidación", que registraba las partidas diarias, bajo la supervisión del ya citado tesorero del Tribunal del Consulado, don Toribio Sanz; así mismo ubicamos el "Libro de la deuda interna consolidada, conforme a la ley de marzo de 1850", que es el libro general basado en los libros manuales de la Caja de Consolidación, y por lo tanto el más completo, pues consigna datos de nombres, cantidades, amortizaciones y sus conceptos, fechas de expedición de vales y de sus amortizaciones que van de 1850 a 1865. Este libro constaba de cuatro tomos, de los cuales pudimos hallar sólo tres porque, al parecer, el cuarto y último se ha perdido; estos tres tomos comprenden un total de 2,200 fojas; a pesar de que en el último tomo se deberían encontrar datos de los últimos y, por lo tanto, más abultados reconocimientos, así como el complemento de anteriores fojas, es posible llenar este vacío con otros libros pertinentes. Es el caso del "Libro de cuadros de los capitales amortizados, convertidos y vigentes de los intereses corrientes de la deuda consolidada", llevado por la Dirección del Crédito Nacional a partir de 1858, de 400 fojas. Otro libro que complementa la información que falta es el de la "Liquidación de los intereses devengados en los años 1854, 1855 y 1856 por los vales de Consolidación emitidos después del 20 de abril de 1851". Tenemos pues una amplia gama de fuentes para elaborar una lista bastante completa de las personas que recibieron vales de consolidación. Por si fuera poco, la Junta de Examen Fiscal creada en 1855, publicó en el periódico oficial *El Peruano*, en 1856, y en una publicación oficial de 1857, una lista de los expedientes tachados con sus respectivos informes acerca de su origen, el nombre de los acreedores originales y los poseedores finales. Estas fuentes guardan entre ellas coherencia y exactitud internas. En total se recabó información sobre 1,500 personas que recibieron vales de consolidación.

nómica de estas personas, y a recabar información de la manera cómo los vales fueron cambiando de dueños. Utilizamos para ello guías de domicilio de Lima y guías de forasteros, además de las abundantes fuentes de los protocolos notariales existentes en el Archivo General de la Nación y otras listas de comerciantes, patentes, arbitrios, Casa de Moneda, etc. que iremos citando debidamente.

3.2 Concentración en pocas manos

Según cifras obtenidas del cuadro 4, podemos describir de la siguiente forma el grado de concentración en el reconocimiento y repartición de vales de consolidación: sobre un total de dos mil individuos que recibieron vales, los cinco primeros recibieron 4'242,000 pesos, es decir el 17.7% de aproximadamente 24 millones a que ascendía el total de la deuda consolidada; los diez primeros recibieron, a su vez, 6'333,600, esto es 26.4% del total; los veinte primeros obtuvieron 8'446,700 (35.2%); los cincuenta primeros recibieron alrededor del 49.9%, mientras que los 100 primeros obtuvieron el 62.3%. En nuestro cuadro aparecen 126 beneficiados que recibieron el 66.3%, cuyas sumas individuales oscilaban entre un millón y 31 mil pesos. Así mismo, 402 personas recibieron entre 30,999 y 5 mil pesos, los cuales no han sido incluidos en el cuadro. Entre los que recibieron sumas entre 20 mil y 10 mil pesos, contamos 220 individuos que recibieron 3'971,000 pesos, 16.5% del total de la deuda. Algunos personajes importantes que ubicamos en estos últimos grupos se muestran en el cuadro 5.

Por otro lado, entre los que recibieron sumas entre 9,999 y 5 mil pesos contamos 182 individuos con una suma total que ascendía a 1'271,000 pesos (un 5.3% del total). Por lo tanto el resto de la cantidad consolidada, es decir 2'862,957 pesos, se distribuyó entre cerca de 1,500 individuos, quienes recibieron sumas menores de 5 mil pesos. Porcentualmente la distribución de los vales de consolidación entre 2,028 personas sería la que se indica en el cuadro 6.

En el cuadro 6 se ve claramente una relación inversamente proporcional entre la cantidad de deuda reconocida y el número de personas a las que se les repartió vales. En otras palabras, en la distribución inicial de la deuda interna consolidada de 1850 ocurrió una flagrante desigualdad: el grueso de la cantidad reconocida se concentró en pocos individuos que recibieron crecidas cantidades. Esto confirma la hipótesis esbozada en el primer capítulo sobre la tendencia, anterior a 1850, a la acumulación de valores de la deuda interna en pocas manos. Veremos luego que esta tendencia se acentuará en los años posteriores a 1850.

CUADRO 4
Relación de personas que recibieron mayor cantidad de vales de
consolidación, las cantidades convertidas y amortizadas, y la
ocupación o actividad de dichas personas, 1850-1854
(miles de pesos)

NOMBRE	CANTIDAD CONSOLID	C/E*	CONVER- SION	AMORTIZACIONES**				Total Amort	OCUPACION O ACTIVIDAD: IDENTIDAD SOCIO-ECONOMICA
				(1)	(2)	(3)	(4)		
1. Antonio Leocadio Guzmán	1,000.0	E	795.0						- Apoderado de los familiares de Simón Bolívar residentes en Caracas.
2. Ignacia Novoa vda. Arredondo	948.5	E	703.5	1.0			108.0	109.0	- Propietaria rentista.
3. Fernando Carrillo Albornoz	900.0	E	611.4	4.0		10.0	78.2	92.2	- Exconde de Monteblanco, hacendado (Chincha).
4. Gregorio Videla	662.3	E	355.8				131.8	31.8	- Comerciante, chileno. Consolidado.
5. Felipe Coz	731.2	E	190.0					75.0	- Consolidado.
6. Nicanor Gonzales	516.3	E	341.0					35.5	- Perito tasador. Consolidado.
7. Juan José Concha	478.4	E	275.3			50.9	24.4	75.3	- Comerciante, chileno. Consolidado.
8. Ejército Chileno Restaurador	400.0	C	400.0						- Convertida a deuda externa peruano-chilena.
9. José Castañeda	397.9	E	131.9			10.0		220.0	- Comerciante limeño.
10. Miguel Winder	299.0	C y E	2.0	2.3			25.4	27.7	- Comerciante inglés, administrador del ramo de suertes en 1852.
11. Beneficencia de Lima	276.7	E							- Institución estatal.
12. Andrés del Castillo (Testamentaria)	276.3	E	107.0	7.0		30.0		37.0	- Hacendado (español).
13. Domingo Solar	250.0	E	85.0		25.0	20.0	47.5	92.5	- Sargento mayor del Ejército. Consolidado.
14. Convento de la Concepción, Lima	212.9	E							- Institución Eclesiástica.
15. José Pérez Vargas	198.7	E	72.0	1.0				1.0	- Coronel del Ejército Consolidado.
16. Manuel Aparicio	196.5	E	55.0	0.5			59.0	59.5	- Hacendado (Chancay) y comerciante Lima (mantiguero).
17. Lorenzo Lequerica (Testamentaria)	189.0	E	133.1	0.6	6.1			6.7	- Comerciante español. Compañía Filipinas. (Indemnización por el secuestro de sus bienes. Beneficiarios: su esposa Ana María y su hijo).
18. Pedro Gonzales Candamo	183.9	C	3.2	3.1			72.3	75.4	- Comerciante y financista de Lima, nacido en Chile. Tra. clase contribución de patentes.
19. Manuel Bahamonde	176.8	E	30.0	2.0	1.0		26.5	29.5	- Comerciante (compañía de almacén, Lima).
20. Rollin Thorne	172.3	E		2.9		4.0		6.9	- Compañía comercial inglesa. 4ta. clase patentes.

21. Juana Rosa Heros	171.6	E	69.2			84.1	84.1	- Viuda de Manuel Heros (comerciante)
22. Manuel Gonzales	158.8	C	34.9	1.1	3.0		4.1	- Comerciante de Lima.
23. José Manuel Piedra	152.4	E	51.0	2.9	0.2		3.1	- Propietario; apoderado de accionistas de la Casa de Moneda de la Quinua, Pasco.
24. Julián Eguren	148.5	E	48.5			45.0	45.0	
25. Montané y Compañía.	148.6	C y E	4.6	17.9	18.4	5.5	41.7	- Casa Comercial francesa. 2da. clase patentes.
26. Camilo Gonzales	146.5		106.5	3.9	4.7		9.6	- Comerciante. Consolidado.
27. Viviano Gómez Silva	146.1	E	13.0	0.5			0.5	- Sargento mayor del Ejército.
28. Isidro Aramburú	142.0	E	122.0	1.5			1.5	- Comerciante de Lima.
29. Mariano Revoredo	132.0	E	25.0			3.0	3.0	- Hacendado terrateniente (Canta).
30. Juan de Dios Carrón	132.8	E	49.0		0.5		6.8	- Comerciante limeño.
31. Demetrio O'Higgins	130.0	E	4.0				42.2	- Hacendado (Cafete).
32. Juan Renner	124.9	E	62.5	7.5			7.5	- Comerciante.
33. Martín Daniel de la Torre	118.6	C	76.0	0.4	1.0	0.2	4.0	- Comerciante. Consolidado.
34. Juan Grime	117.7	E	46.5				71.2	- Comerciante. Socio de la casa Gibbs.
35. Josefa y Pedro Vásquez de Velasco	117.5	E	5.0		6.0		6.0	- Hacendados (Pasco).
36. Bernardo Roca y Garzón	113.9	C y E	29.6	1.8		70.8	72.6	- Comerciante de Lima.
37. José de la Riva Agüero	111.9	E	11.9					- Propietario; Gran Mariscal.
38. Antonio Cucalón	111.6	C y E		3.1	9.8	0.5	17.3	- Propietario, Comerciante de Lima.
39. Ignacia Ramírez de Arellano	107.5	E						- Propietaria.
40. Manuel Elguera	105.0	E	55.0			50.0	50.0	- Propietario-agricultor (Chancay).
41. Antonio Fernández Prada	105.0	E	45.0			60.0	60.0	- Hacendado de Cafete.
42. Testamentaría de Mariano Vidal	103.6	C	42.6	4.0	1.8	19.5	25.3	
43. María Asunción Jáuregui	100.9	E	61.0			19.0	19.0	- Hacendada terrateniente (valle de Ate).
44. Maximiliano Albertini	99.8	C y E	20.6	4.2	0.3		9.4	- Prestamista de Lima, italiano. Comerciante.
45. La empresa Uchusuma	83.8	E	23.7	1.1			1.1	
46. Antonio Gutiérrez de la Fuente	82.5	C y E	44.0			38.5	38.5	- Gran Mariscal.
47. Juan y Julia Elizalde	80.0	E						- Terratenientes (Chancay).
48. Stanope Prevost	82.2	C	5.0		2.0	77.7	79.7	- Propietario
49. Juan del Campo	80.0	E	56.0	14.0			14.0	- Hacendado (Trujillo).
50. Pascual Saco	78.8	E	20.0			44.0	44.0	- Coronel del Ejército. Ministro de Hacienda. Consolidado.

51. Baltazar Caravedo	78.5	E	13.1	12.1	2.1	45.0	59.2	- General del Ejército.
52. La Beneficencia del Cuzco	78.2	C						- Institución estatal.
53. Felipe Rivas	77.5	E						- Coronel del Ejército.
54. Salvador Soyer	76.6	E			36.3	31.1	67.4	- Propietario.
55. José Valderalmey	73.6	C y E	2.4	8.1	1.0		9.1	- Comerciante.
56. Tomás Concha	71.5	E	63.0	6.0	2.0		8.0	- Comerciante.
57. Manuela Ruiz de Caveno	70.1	E	22.0				22.4	- Propietaria.
58. Guillermo Gibbs y Cia.	69.3	C y E		31.4	8.8	17.9	58.1	- Casa de comercio inglesa. 1ra. clase patentes.
59. Lino Barrera	69.3	C y E	38.8	1.6	1.7	10.2	13.5	- Coronel del Ejército y oficial mayor del Ministerio de Guerra.
60. Demetrio Olavegoya	68.5	E	16.4			34.0	34.0	- Hacendado (sierra central). Comerciante.
61. Mariela Sendaja de Beltrán	67.9	C y E				66.0	66.0	- Propietaria.
62. José Zavala	67.2	E	2.2	1.0	2.0	62.0	65.0	- Coronel de caballería.
63. Diego Ugalde	66.8	C y E	10.2	2.7	2.3	3.3	6.0	
64. Mariano y Domingo Laos	66.2	E	56.2					- Hacendados terratenientes (Huaura).
65. José de la Vía	65.4	E	12.0			53.4	53.4	- Agricultor (Chancay).
66. Baltazar Bezada	64.3	C y E	5.0		3.2		3.2	
67. Domingo Casanova	62.5	C	52.5	34.9	10.0		44.9	- Coronel del Ejército, vecino de Trujillo.
68. Guillermo Benett	61.5	C y E	3.2	5.8	2.1	1.0	9.0	- Comerciante.
69. Nicolás Rodrigo	61.1	C y E	20.0	1.0	0.4		1.4	- Comerciante, propietario-hacendado, nacido en España.
70. Juan Bautista Andraca	61.7	E	61.2	0.5	1.0		1.5	- Comerciante (panadero). Propietario.
71. Hipólito Bouchard	61.2	E	23.0					- Comerciante
72. Manuel Oyague	61.0	C y E	58.5	1.0				- Comerciante (almacenes)
73. Manuel José Palacio	58.5	E						- Comerciante.
74. Felipe Barreda	59.0	C y E		1.5	0.6			- Comerciante.
75. Pedro Antonio Vértiz	58.7	E						- "por el crédito de la Casa de Moneda trasladado a esta dirección". Rentista.
76. Juan B. Lavalle	58.2	E			57.3	0.9	58.2	- Hacendado terrateniente: haciendas Villa, San Tadeo, Pacallar y Cuadrado (Surco).
77. José de San Martín	58.1	C y E	50.0			2.0	2.0	- Prócer, militar.
78. Ramón Errasuri	58.0	C y E	10.0			48.0	48.0	
79. José Arancibia	60.0	E	10.0	7.7			7.7	- Comerciante.
80. Manuel Mariano Román	56.3	E	0.2	6.4	0.3	3.7	10.1	- Administrador del Tribunal de Cuentas.

81. José Hegan y Cia.	56.3	CyE	14.9	6.3	1.0	5.4	22.9	35.7	- Casa de Comercio (contratista) 2da. clase patentes.
82. Francisco Alvarito	55.8	C		1.4		4.0	0.1	5.5	- Hacendado (Tarma, Valle de Chanchamayo).
83. Compañía Nallors Grley	52.9	C	0.2	18.7		14.0	13.0	45.7	- Casa de Comercio.
84. Manuel Pérez Tudela	52.3	C					38.3	38.3	- Vocal de la Corte Suprema.
85. Juan Yates	52.2	CyE	23.1	4.7		4.0	5.2	13.9	- Comerciante.
86. Manuela Quintanilla	51.5	E	5.9			0.2	25.4	25.6	- Hacendado terrateniente: Hacienda Monterrico (Surco) y en Pasco.
87. Francisco Forcellodo	51.2	E			8.0		35.7	43.7	- Comerciante.
88. Pablo Condorena	51.1	CyE	23.6	1.7	0.5		25.3	27.5	
89. José Rmdo. Urbina	50.9	E	30.9				20.0	20.0	- Comerciante.
90. General Buines	50.0	C							- General del ejército restaurador chileno; esta deuda se trasladó al ramo de arbitrios.
91. Mariano Jurado de los Reyes	61.7	E	11.8	1.0				1.0	- Terrateniente (Ica).
92. Ramón Castilla	49.6	CyE		0.6		19.0		49.6	- Gran Mariscal.
93. José Vicente Oyague y hno.	48.5	CyE		3.0		1.0		4.0	- Compañía comercial, financista.
94. Manuel María Cotes	48.4	CyE	36.3		0.7	0.7	10.7	12.1	- Comerciante (tienda de muebles), primo político de Echenique.
95. Francisco Casós	46.9	CyE	12.9	3.0		10.0	19.0	32.0	- Juez.
96. Julián Zarándegui	46.6	E	46.0	0.6				0.6	- Comerciante, Cónsul del Tribunal del Consulado. 1ra. clase patentes.
97. Pedro Mariano Villena	46.3	CyE	8.0	0.9	0.9	1.2		3.0	- Comerciante.
98. José Canevaro	46.0	CyE	2.8			1.1		1.1	- Comerciante italiano, Cónsul del Reino de Cerdeña. 3ra. clase patentes.
99. Juan Arancina	44.8	E	10.0	1.4		7.6	15.8	24.2	
100. Nicolasa Valdivieso	44.6	E	3.6	2.0			21.3	23.3	
101. José Ramón Idiaquez	43.4	E	15.4			8.0	10.0	18.0	
102. Templeman y Bergman	42.8	CyE	3.1				30.8	33.9	- Casa de comercio. 1ra. clase de patentes.
103. Manuel Villena	42.3	CyE	1.6	2.0		0.6		2.2	- Tesorero interventor.
104. Manuel Ortiz de Zevallos	42.2	C	1.2					2.2	- Propietario, abogado, intereses en Huancayo.
105. Juan Francisco Elizalde	42.1	E	32.0				10.1	10.1	
106. Antonino Cavello	40.0	E	20.0		5.0		15.0	20.0	- Hacendado (Surco, Chancay).
107. Mariano Román	39.7	C	3.2	3.2	7.7		1.0	8.7	- Propietario.
108. José Maneri de la Cuba	39.1	C	3.0				36.1	39.1	
109. Manuel Suárez	38.0	E					33.0	33.0	- Coronel del ejército.
110. Domingo Elias	37.9	E	19.4	1.2		4.0	11.3	16.5	- Comerciante, hacendado (Ica).

111. José Antonio Terry	36.8	E	36.0						
112. José María Plaza	36.6	E	32.6				4.0	4.0	
113. Antonio Chacón	36.5	C y E	17.0	0.5	4.3		4.0	5.2	- Comerciante y propietario.
114. Rafael Aparicio Rutz	36.0	C	1.0	3.0		1.0	26.0	30.0	
115. José Miguel Medina	35.2	C y E		5.0		0.5	12.1	17.6	- General del Ejército y Consejero de Estado
116. Abraham Wendel	35.1	E		0.2		34.9		35.1	- Médico
117. José Mariano Alvarado	34.7	C y E	14.2	1.5			6.3	7.8	- Oficial del Ejército.
118. Benedicto Valdivia	34.4	E	17.0	6.0			11.4	17.4	- Dependiente.
119. Pedro Olate	33.7	E	33.7						
120. Matías León	33.7	C					18.7	18.7	- Vocal de la Corte Suprema.
121. Mariano Félix Torres	33.0	E	13.0	4.0		1.0		5.0	
122. José María Galdeano	32.4	C					32.4	32.4	- Hacendado (Surco).
123. Pedro Antonio Cisneros	31.4	C y E	14.8	4.0			10.5	14.5	- Oficial de Hacienda.
124. Benito Dorca	31.1	E	21.0			4.1	3.0	6.1	- Comerciante.
125. Francisco de Paula Otero	31.1	E	11.3				19.8	19.8	- Hacendado terrateniente (sierra central). Ortundo de Salta.
126. Bartolomé Manrique	31.0	C	30.0	1.0				1.0	
Suman	15,925.7		6,519.2						

* C = vales expedidos durante el gobierno de Castilla. E = vales expedidos durante el gobierno de Echenique.

** Amortizaciones hacia 1858: (1) Aduanas; (2) Censos y Capellanías; (3) Tesorerías; (4) Dirección de Crédito Nacional.

Fuentes: Las detalladas en la nota 5 del presente capítulo; guías y estadísticas de la época.

CUADRO 5

Individuos importantes que recibieron entre 30,999 y
10 mil pesos en vales

Nombre	Deuda reconocida	Deuda convertida
Luis José Orbegoso	29,800	26,400
Tomas Lachambre y Cía.	28,700	16,700
Convento de la Buenamuerte	28,700	—
Jac y Hermanos	26,800	—
Pedro Bermúdez	26,100	2,500
Justo Figuerola	25,900	—
Blas Cerdeña	25,700	—
Aquiles Allier	25,300	—
Pedro Abadía	25,000	—
José Santos Castañeda	24,900	4,100
Manuel Lopera	23,700	21,300
Julio A. Pflucker	24,100	24,100
Manuel Teodoro del Valle	23,600	—
Juan Crisóstomo Torrico	23,100	23,100
Carlos Delgado y Hermanos	22,700	—
Francisco Larco	22,600	3,000
Juan Manuel Iturregui	22,100	—
Manuel Larco	18,000	8,000
Juan Antonio Pezet	17,800	—
Francisco Quirós	14,900	—
Miguel San Román	14,400	—
José Rufino Echenique	13,800	—
Juan Bautista Elespuru	14,000	—
José María Sancho Dávila	17,500	—

Fuentes: Las mismas del cuadro 4.

CUADRO 6

**Distribución porcentual de la deuda reconocida
por cantidades recibidas**

Cantidades recibidas (pesos en vales)	Número de receptores	% del total de receptores	% del total de la deuda
Entre 1 millón y 31 mil	126	6.2	66.3
Entre 30,999 y 10 mil	220	10.8	16.5
Entre 9,999 y 5 mil	182	9.0	5.3
Menos de 5 mil	1,500	74.0	11.9
Totales	2,028	100.0	100.0

Fuentes: Las mismas del cuadro 4.

Volviendo al cuadro 4 apreciamos que entre los primeros diez beneficiados por la consolidación se concentran cerca de 3.5 millones de vales convertidos a deuda externa. Esto significa que, descontando la deuda trasladada del ejército chileno restaurador⁶, entre los vales de estas personas hubo un 38% del total de vales convertidos a la deuda externa en los contratos Uribarren y Montané (en las fuentes utilizadas no se consignan datos sobre la deuda convertida del contrato Hegan). De entre los vales de las 126 personas que consigna el cuadro 4, se convirtieron un total de 6'119,200 pesos, esto es, 67% del total de la deuda convertida de la cual se tiene información. Se evidencia así un marcado favoritismo por convertir los vales de los grandes poseedores. Se garanti-

6. Entre los primeros diez beneficiados en la repartición de vales no incluimos en nuestros cálculos el caso de la deuda reconocida al ejército chileno restaurador que realizó campañas contra Santa Cruz en territorio peruano. Durante el primer gobierno de Castilla se le reconoció a este ejército 400 mil pesos en vales de deuda interna, pero más tarde se trasladó este reconocimiento a la deuda peruano-chilena sin que haya sido parte de los contratos de conversión.

zó de esta forma la amortización efectiva de las grandes sumas consolidadas al impedir que posteriores gobiernos cuestionaran el origen dudoso de muchos reconocimientos iniciales de la deuda.

Estamos ahora en condiciones de evaluar la exactitud de las aseveraciones de Casós en su "Cuadro secreto"⁷. Comparando los datos proporcionados por Casós con aquellos obtenidos en nuestra investigación utilizando fuentes oficiales, se evidencia una gran discrepancia en las cifras atribuidas a importantes echeniquistas (ver cuadro 7). Los casos más notables son los de Echenique, Mendiburu, Torrico y otros, a los cuales Casós atribuye cifras mucho más elevadas que las que señala la fuente oficial. Por otro lado, Casós se queda corto en su cálculo de lo que recibieron los siguientes: Aparicio, Pérez Vargas, Coz, Solar. Lo interesante de los datos de Casós es que mencionan nombres de personas sobre las cuales hemos podido reunir información que prueba su participación ilícita en la consolidación.

3.3 Identidad de los beneficiados

La muestra de 126 personas del cuadro 4 puede ser descompuesta según la función socio-económica que desempeñaba cada individuo en dicha época. Utilizando varias fuentes hemos podido identificar a 108 de los individuos de la muestra⁸. Debemos mencionar aquí las dificultades que ofreció tal clasificación. Muchos de los favoritos y funcionarios del gobierno Echenique no tenían posición definida en la estructura socio-económica según las fuentes con-

7. El cuadro aparece en la página 62 de Casós, *Para la historia*. Este libro es un evidente instrumento de denuncia y acusación, con intenciones políticas de oposición al gobierno de Echenique, escrito por un ex echeniquista. Según Mendiburu, muchos ejemplares de esta obra fueron quemados en Lima por autoridades del gobierno de Echenique en 1854. A pesar de que Casós menciona los nombres de Bartolomé Herrera, Charún, Deustua, José Mendiburu, Lama, Piérola, Fuentes, Osma, Tirado Alzamora, no encontramos pruebas de que estas personas recibieran vales de consolidación. Sin embargo, no hay que olvidar que se utilizaron nombres de terceros en el reconocimiento de vales que luego pertenecieron a los grandes "tramitadores".

8. Algunas de las fuentes utilizadas fueron las siguientes: Schutz, C.D. y Moller, J. *Guía de domicilios de Lima y Callao para el año de 1853* (Lima:1854); Carrasco, E. *Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año de 1850* (Lima: Imprenta de Justo Montoya, 1849); Cabello, P. *Guía del Perú para 1858* (Lima: Imprenta Masías, 1858); Córdova y Urrutia, *Estadística histórica*; "Expedientes observados", *El Peruano*, tomo 33, No. 37, 31 de octubre de 1857, p. 173 y números anteriores (ver anexo 2); Junta de Examen Fiscal, *Informes*; "Razón de comerciantes de esta plaza que se hallan con establecimientos abiertos y tienen giro conocido", Comunicación del Tribunal del Consulado al Ministerio de Hacienda, Manuscritos, año 1850, 1850/D7034, BN. "Padrón de patentes de distintos gremios de Lima, 1859", Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2043, AGN.

CUADRO 7

**Comparación de las cifras oficiales de consolidación
con las de Casós**

Nombre	Cifra atribuida por Casós (pesos en vales)	Cifras oficiales (pesos en vales)	Foja del Libro de la Deuda Interna
Echenique, José Rufino	2'050,000	13,800	417
Mendiburu, Manuel de	508,000	1,700	890
Torrico, Juan Crisóstomo	2'000,000	23,100	1684
Cerdeña, Blas	180,000	25,700	1119
Gutiérrez de la Fuente, A.	85,000	82,500	442
Aparicio, Manuel	75,000	196,000	1539
Pezet, Juan Antonio	190,000	17,800	977
Cisneros, Pedro A.	210,000	31,400	495,618
Medina, José Miguel	308,000	35,200	612--13,944
Forcelledo, Francisco	149,000	51,200	1701
Saco, Pascual	35,000	78,800	1403
Rivas, Felipe	680,000	77,500	1208
Pérez Vargas, José	34,000	198,700	1937
Zavala, José	37,000	67,200	2015
Barrera, Lino	150,000	69,300	729
Coz, Felipe	91,000	731,200	1587,1817
Solar, Domingo	97,000	250,000	2083
Barrera, L. Mariano	158,000	10,200	1599
Concha, Juan José	1'110,000	478,400	1695,2458
Winder, Miguel	261,000	299,000	462,1189,1717
Cotes, Manuel María	353,000	48,400	152
Tristán, Pío	128,000	*	*
Piedra, José Manuel	40,000	152,400	1911
Aramburú, Isidro	89,000	142,000	1959-60
Gómez Silva, Viviano	87,000	146,100	1361
Pheiffer, Federico	72,000	4,800	482
Iturregui, Juan Manuel	140,000	22,300	904

* No encontramos datos que lo sindiquen como que recibió vales de consolidación en 1850-52. Sin embargo en 1857 se le pagó intereses por 124,000 pesos de principal en vales de consolidación (ver Capítulo 7).

Fuentes: Casós, F. *Para la historia del Perú, Revolución de 1854* (Cuzco, 1854).
Dirección del Crédito Nacional, "Libro de la deuda interna consolidada",
AGN.

sultadas, aunque el mismo Echenique los clasificó como negociantes y tramitadores en sus memorias y *Vindicación*. En algunos casos, hemos optado por clasificar a estos últimos como comerciantes, cuando su actividad estaba muy cercana al giro comercial y, en otros, como propietarios rentistas. Así mismo se debe considerar que, a pesar de que muchos de los expedientes originales eran reclamados por hacendados y otros propietarios, eran los comerciantes quienes adquirían los expedientes y recibían a su nombre los vales de consolidación con el objeto de negociar luego estos vales⁹. Este proceso será progresivo de tal manera que podremos ver, más adelante, que los propietarios de vales en 1858 serán del sector comercial en mayor proporción que en 1850-1852, y que a fin de cuentas será este sector el principal beneficiado a largo plazo por la consolidación.

Las conclusiones que se puedan extraer del cuadro 4 de los 126 principales receptores de vales de consolidación deben revisarse considerando, por tanto, la libre negociación en vales que los hizo pasar de mano en mano a partir de la misma promulgación de la ley de 1850, e inclusive anterior a dicha fecha en lo que respecta a los valores de deuda interna anteriores a la aparición de los vales. Esto significa que en muchos casos el nombre del individuo que originalmente recibió los vales en 1850-1852, no será el mismo del que los posee en años posteriores. Sin embargo, las fuentes oficiales nos pueden proporcionar datos para rastrear quiénes concentraban y compraban vales hacia 1858-1865, a través de listas de personas a las cuales se les amortizaba cantidades y pagaba intereses, las cuales serán analizadas en detalle más adelante en el capítulo 7. Baste por ahora el análisis de la actividad económica de las 126 personas de nuestro cuadro 4, la cual se expone en forma sucinta en el cuadro 8.

9. Un contemporáneo, en polémica contra el hecho de que el gobierno de Castilla tachara vales en 1855, clasificaba de la siguiente manera a los poseedores de vales en 1856: "Los poseedores de vales de consolidación pueden reducirse a tres clases: 1a. Los que obtuvieron vales defraudando al fisco y a particulares al confeccionar los expedientes. A éstos, que la sociedad ha calificado de *consolidados*, sinónimo de ladrones, no los defenderemos; 2a. Los que legalmente cobraron aquello que se les debía, ya por sueldos devengados, ya por suministros, contribuciones forzosas, etc. etc., éstos no necesitan de defensa; 3a. Los que compraron vales en circulación, autorizados legalmente para ello y, honrando el crédito público del Perú con dar por él, en plata u oro sellado, el equivalente a su valor intrínseco, según el interés que se sacaba del dinero colocado de este modo; éstos son los que necesitan defensa hoy, porque se les ha puesto en duda su derecho. De los de esta última clase podemos hacer tres divisiones: los acreedores extranjeros que tienen sus créditos trasladados a Europa; que son los más poderosos. Los extranjeros que tienen aquí su crédito en vales paralizados, y que por consideraciones al país de sus hijos aplazan sus reclamos. Los hijos del país que aguardan a que las excepciones de los extranjeros favorezcan sus derechos". Anónimo, *Al Gobierno*, pp. 88-89.

CUADRO 8

Composición de las actividades económicas de 126
poseedores de vales de consolidación, 1850-1852

Actividad	Nº de individuos	% del total de individuos	Cantidad recibida (pesos en vales)	% de total de deuda
1) Comerciantes o compañías comerciales*	45	36	6'052,000	38
2) Hacendados y terratenientes	21	16	2'754,000	17
3) Funcionarios estatales: militares (16) civiles (5)	21	16	2'047,800	13
4) Propietarios urbanos	12	10	1'929,303	12
5) Instituciones de beneficencia	2	2	354,900	2
6) Instituciones eclesiásticas	1	1	212,900	1
7) Profesionales	1	--	35,100	--
8) Otros (deuda a Chile, Bolívar)	5	4	1'568,000	10
9) No clasificados	18	14	971,500	6
Totales	126	100	15'925,703	100

* Se incluyen aquí algunos "consolidados", "negociantes" y tramitadores de vales.

Fuente: Cuadro 4.

De acuerdo a los porcentajes del cuadro 8, se pone en evidencia que los comerciantes lograron que se les reconozca hacia 1850-1852 alrededor de dos quintos del total de la deuda consolidada de la muestra. Por lo general se trata de grandes comerciantes dedicados a la especulación de vales, aunque entre ellos encontremos asimismo algunos de los "consolidados". Los comerciantes constituyen también el grupo más numeroso de individuos, seguido por hacendados, funcionarios públicos (grupo en el cual se concentra el mayor número de "consolidados") y propietarios urbanos. Entre hacendados y propietarios urbanos se logra concentrar cerca de un tercio de lo consolidado en la muestra.

Obtenemos así un primer esbozo de los efectos socio-económicos de la consolidación: el capital comercial tiene mayor capacidad para acaparar valores de la deuda interna, y los demás sectores económicos mencionados se verán beneficiados en menor proporción. Solamente estamos ante el umbral de los verdaderos destinos de la consolidación. La tendencia de los comerciantes hacia la concentración de vales y su preeminencia sobre los demás sectores económicos se reforzará en los años siguientes.

3.4 Cifras globales

Para completar nuestra aproximación cuantitativa a la consolidación en este capítulo, es necesario reparar en las cifras totales de lo reconocido como deuda por la consolidación y la proporción en la cual la deuda se fue amortizando durante los gobiernos de Castilla y Echenique, entre 1850 y 1862/1865 aproximadamente. Este ejercicio nos permitirá tener una noción más precisa del monto global envuelto en la consolidación para colocar en perspectiva las cantidades que se repartieron entre individuos.

Una primera distinción que se debe hacer es la que existe entre los vales emitidos durante el primer gobierno de Castilla y los emitidos durante el gobierno de Echenique. En el cuadro 4 se aprecia esta división en la columna ECH/CAS (abreviaciones por Echenique y Castilla). De un folleto de la época¹⁰ obtenemos la descomposición de las cifras globales reconocidas por ambos gobiernos. A pesar del evidente favoritismo a la gestión de Castilla, el folleto reproduce fielmente los datos del estado de la Caja de Consolidación, según pudimos verificar con otras cifras oficiales aparecidas en *El Peruano*. Las cifras globales así recabadas de lo reconocido y amortizado se presentan en los cuadros 9 y 10.

10. Anónimo, *Refutación*.

En resumen, aunque la administración Castilla hubo de reconocer como deuda sólo alrededor del 20% del total consolidado, y la de Echenique el 80%, en el segundo período de Castilla (1855-1862) se amortizó cerca del 60% por concepto de deuda vigente e intereses. Este porcentaje se eleva si consideramos que la conversión de la deuda, que importó 9'071,000 pesos en vales (sin incluir aquí el contrato Hegan), fue a gravar la deuda externa que Castilla se preocupó de atender puntualmente. Echenique sólo amortizó efectivamente, a través de los rubros de aduanas, censos y capellanías, un total de 2'451,504 pesos en vales, lo cual significa sólo un 10.2% del total de la deuda finalmente amortizada. A partir de 1859 se fue amortizando a razón de 600,000 pesos anuales en metálico, según cotización de los vales en plaza. Entre 1859 y 1862 la administración Castilla amortizó 2'400,000 pesos en metálico (unos 3'200,000 pesos en vales), a los que habría que agregar 145 mil pesos en vales amortizados en su primera administración, y unos 4'815,749 pesos más en vales amortizados entre 1855 y 1859: lo cual hace un total de 8'160,749 pesos amortizados por Castilla, o un 54.6% del total de la deuda reconocida, sin contar la deuda convertida.

Así tenemos que, según el cuadro 4, de los 126 principales dueños de vales en 1850-1852, 19 (15%) los obtuvieron durante el periodo Castilla, 74 (58.6%) en el periodo Echenique, y 33 (26.1%) en ambos periodos. Como conclusión se puede afirmar que, a pesar de que Echenique reconoció mayor cantidad de la deuda interna, fue Castilla quien amortizó y pagó intereses en un grado mayor, cuando los vales de consolidación ya habían pasado a otras manos u otros grupos de presión e interés. La historia de la consolidación no se acaba con el reparto de vales. En cierta manera sus efectos socio-económicos de largo alcance, es decir, los destinos de la consolidación, deben buscarse en acontecimientos posteriores al inicial reparto de vales.

CUADRO 9

Cifras globales de la consolidación
(en pesos y reales)

PERIODO CASTILLA		PERIODO ECHENIQUE	
Deuda interna consolidada desde el 1º de julio de 1850 a 20 de abril de 1851 en cumplimiento de la ley de marzo de 1850.		Deuda interna reconocida por la administración de José Rufino Echenique.	
<u>CLASIFICACION</u>		<u>CLASIFICACION</u>	
Billetes	1'228,637 2 1/2	Billetes	78,300
Cédulas	3'120,071 5 1/2	Cédulas	2'120,500
Letras de Ancash	173,813 5 1/2	Letras de Ancash	248,200
Cédula de Reforma	357,065 6	Cédula de Reforma	59,000
Totales	4'879,608 3 1/2	Expedientes	16'648,200
Dinero con que se han completado números redondos.	1,026 1/4	Suma	19'154,200
Suma	4'880,634 3 3/4		
Cedidos a favor de la Nación para que los créditos se reconociesen según ley.	3,934 3/4		
Suma equivalente a 7,202 vales de consolidación.	4'876,700		
Amortización en las oficinas desde 1º de setiembre de 1850 a 20 de marzo 1851.	145,000		
Deuda consolidada vigente	4'731,700		
"Sección de la Cuenta Central. Lima, Enero 22 de 1856. J. de D. Melgar.			

Nota.— Se ve en este cuadro no sólo la diferencia entre la deuda consolidada durante la administración Castilla, sino que la primera viene de cédulas, letras de Ancash y otros documentos reconocidos por anteriores administraciones y que circulaban ya en plaza; mientras que la segunda proviene casi en su totalidad de reconocimientos hechos por el expresidente Echenique".

Por lo tanto el total de la deuda consolidada durante los dos gobiernos asciende a 24'030,900 pesos en vales de consolidación repartidos entre cerca de 2,900 individuos e instituciones; sin embargo la concentración de los vales en pocas manos es muy elevada. Según las cifras arriba citadas, la proporción entre los reconocimientos de uno y otro periodo es de: periodo Castilla: 20.3%; periodo Echenique: 79.7%.

Fuente: Anónimo, *Refutación del folleto titulado "Vindicación" de don José Rufino Echenique* (Lima, 1856).

CUADRO 10

**Amortizaciones y pago de intereses en los periodos de Castilla
(primero y segundo) y de Echenique, 1850-1862
en pesos y reales**

I. TOTAL RECONOCIDO

Primer periodo Castilla	4'876,700	
Periodo Echenique	19'154,200	24'030,900
Traslación de capitales que gravaban en arbitrios a favor de manos muertas (1856)		4,050
	Total reconocido	24'034,950

II. AMORTIZACIONES**Primer periodo Castilla**

(1^º de setiembre 1850 a 20 de marzo 1851) 145,000

Periodo Echenique (20 abril 1851 a 5 de enero 1855)

- En redención de capitales impuestos a censo	122,493 1 1/4
- En redención de capellanías	282,183 7
- En aduanas	2'046,828 3/4
- Convertido contrato Urribarren	5'941,000
- Idem. Montané	3'130,000
(no se incluye el contrato Hegan)	
	11'522,505 1

Total "amortizado" periodo Echenique: **11'522,505 1**

Deuda interna vigente al 5 de enero de 1855 12'367,444 7

Segundo periodo de Castilla (1855-1862)**Intereses (1857):**

Vales emitidos antes del 20-4-1851 186,506 3/4

Vales emitidos después del 20-4-1851:

- intereses año 1854 555,053 5

- " " 1855	555,053	5
- " " 1856	555,053	5
Arbitrios manos muertas	243	
Total interés acumulado en 1857	1'851,909	7 3/4
que se agregan a la deuda vigente por pagarse en nuevos vales de consolidación		1'851,909 7 3/4
Total deuda vigente (1857)	14'219,354	6 3/4
Amortización hasta 30 de marzo de 1860 (incluidos los intereses)	6'369,701	3

(Ejemplo de amortizaciones:		
Año 1859 (amortización anual)		
Valor nominal de lo amortizado:	849,973	3/4
Valor real (según cotización en plaza):	600,000	
Diferencia (aprovechamiento)	249,973	3/4
Año 1860		
Valor nominal de lo amortizado:	703,979	1/2
Valor real:	600,000	
Diferencia (aprovechamiento)	103,979	1/2
Deuda vigente a 30 de marzo de 1860 (incluidos intereses) y amortizada hasta su extinción en 1865/1868	7'849,653	3 3/4

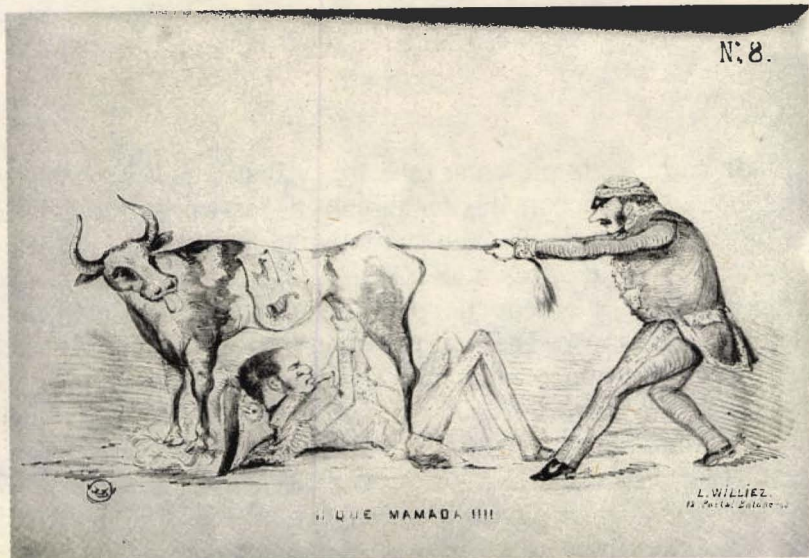
Fuentes:

"Estado que manifiesta la deuda interna del Perú en sus diversos ramos, con especificación de épocas, sus amortizaciones y adeudo pendiente en la fecha", *El Peruano*, 31 de marzo de 1857; Anónimo, *Refutación del folleto titulado "Vindicación"*, (Lima 1856); Leubel, Alfredo G., *El Perú en 1860 o sea Anuario Nacional* (Lima, 1861).

ILUSTRACIONES

Se ha buscado presentar muestras visuales contemporáneas a la época estudiada para ilustrar algunos de los aspectos tratados en el presente libro. Se trata, en su mayoría, de caústicas e ingeniosas caricaturas de varios autores anónimos que nos exhiben las pasiones y pugnas alrededor del problema de la consolidación en los agitados años 1854 y 1855. La principal fuente utilizada es una colección de caricaturas publicada en Lima en el año 1855, que lleva por título *Adefesios: colección por un cándido*, vendidas —según Jorge Basadre en su *Historia de la República del Perú*, 5ta. edición (Lima: Peruamérica, 1964), tomo 3, láminas pp. 1076-1077 y 1084-1085— en el establecimiento de L. Williez del número 12 del Portal de Botoneros. También se han incluido algunos grabados del hermoso y clásico *Atlas geográfico del Perú* (París: Librería A. Durand, 1865) de Mariano Felipe Paz Soldán.

N.º 8.



"¡Qué mamada!" La hacienda nacional representada como una vaca flaca cuya exigua leche es aprovechada por el caricaturizado presidente José Rufino Echenique, mientras que el general Juan Crisóstomo Torrico trata de exigir su parte (Williez, N.º 8).



"Cerro mineral de Hualgayoc" hacia 1865 por un dibujante francés: una de las abatidas fuentes de minerales durante los primeros años de la república (Paz Soldán, *Atlas*).



"El hombre de muelles". Domingo Elías, cual coloso del carguío del guano, producto base de los ingresos fiscales en los años de la consolidación. Al fondo, rodeadas por innumerables naves de la época, se aprecian las islas guaneras de Chincha (Williez, Nº 17).



"Vista de la calle de Mercaderes". Activa calle limeña donde los comerciantes y prestamistas locales y extranjeros realizaban muy rentables negocios durante la bonanza guanera (Paz Soldán, *Atlas*).



"Plaza Mayor de Lima y Palacio Arzobispal". Se observa gran profusión de tiendas de mayoristas y minoristas (Paz Soldán, *Atlas*).

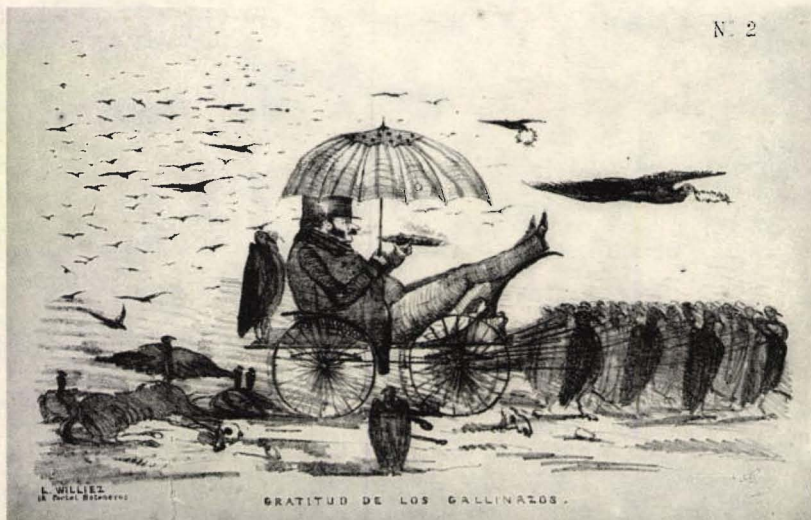


"Libre ejercicio de la soberanía". Crítica mordaz de un caricaturista de 1855 al sistema de elecciones, compra de votos y demagogia (Williez, N.º 22).



"Harán mi talento y maña..." Se alude al proyecto político de Echenique de ampliar la consolidación para cancelar la deuda de origen colonial. El personaje montado en la llamita podría ser Manuel de Mendiburu (Williez, N.º 6).

N.º 2

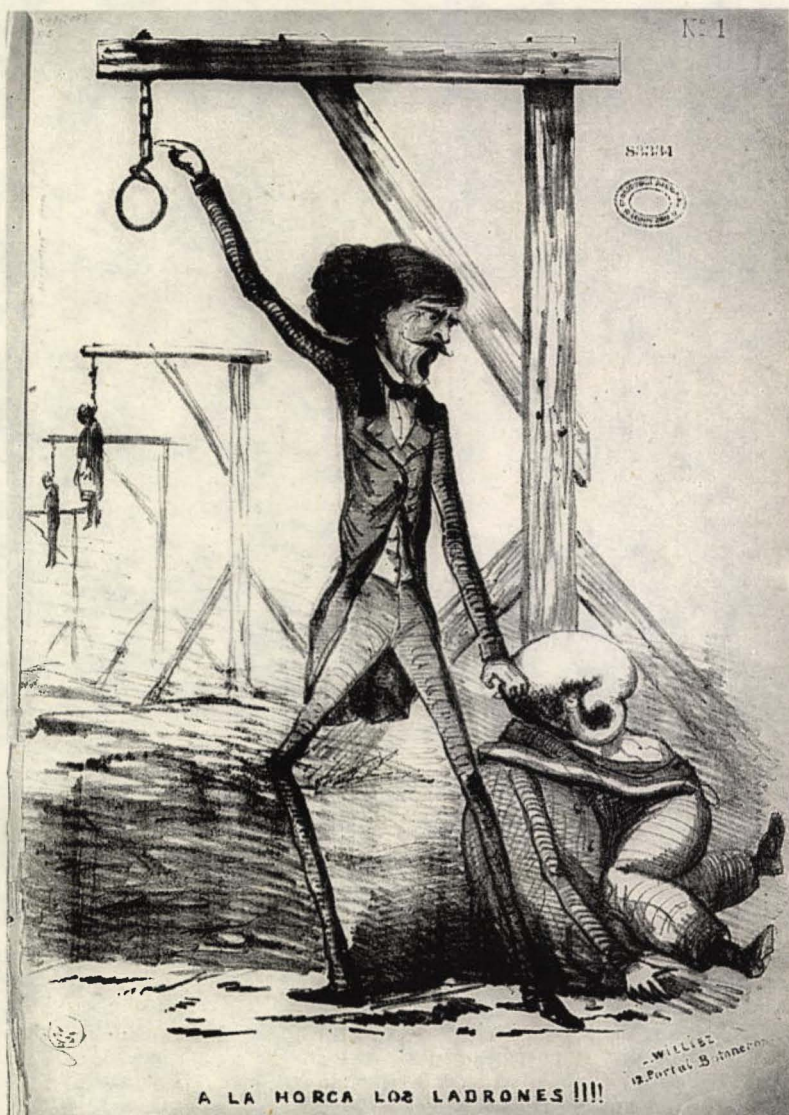


"Gratitud de los gallinazos". Se reconoce el perfil del general Torrico, acusado de favorecer a sus allegados los "mazorqueros" en los reconocimientos ilícitos de expedientes de consolidación (Williez, N.º 2).

N.º 9.



"... Estoy consolidado es verdad..." Burlona caricatura del ministro echeniquista José Gregorio Paz Soldán, acusado por Fernando Casós de manejos indebidos de los fondos de la consolidación, y parte interesada en el expediente de los Carrillo de Albornoz.



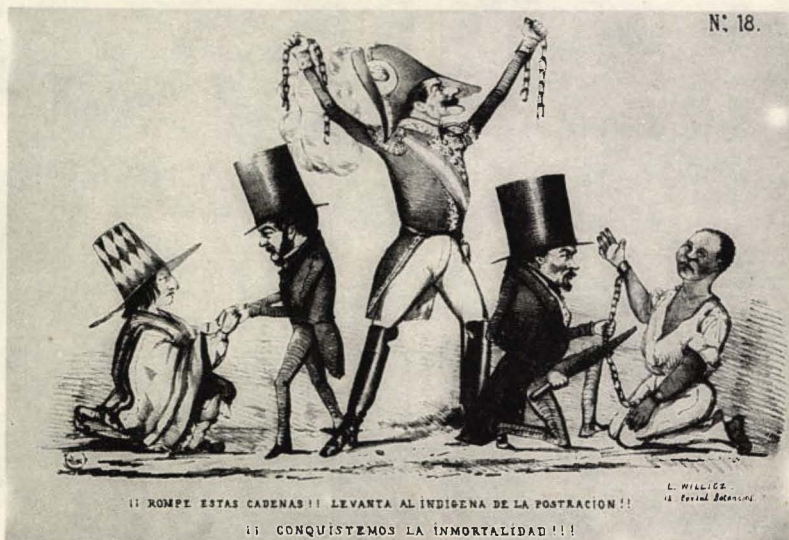
"¡A la horca los ladrones!" Reacción radical y popular en 1855 en contra de los enriquecidos fraudulentamente con la consolidación (Williez, N° 1).



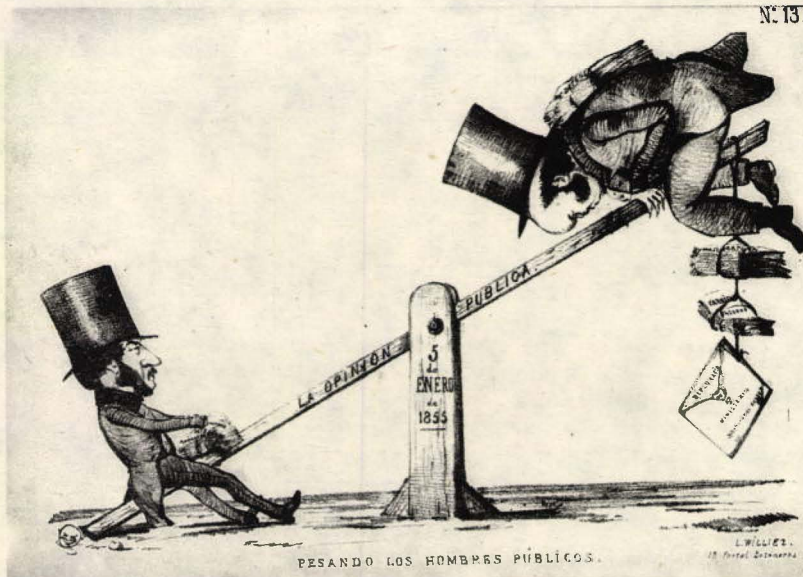
"Exposición de los motivos...", representación de dos caudillos tratando de ocultar intereses personalistas durante los sucesos de la revolución de 1854: Manuel Ignacio de Vivanco -izquierda-, y José R. Echenique (Williez, Nº 12).



"Audaces fortunat juvat". Tras la batalla de La Palma del 5 de enero de 1855, Echenique se asiló en la legación Británica al correr riesgo su vida (Williez, N° 7).



"¡Rompe estas cadenas!" El caudillo Ramón Castilla, al centro, y sus seguidores Pedro Gálvez, izquierda, y Manuel Toribio Ureta, derecha, tomaron la iniciativa de abolir el tributo indígena y la esclavitud al compás de la lucha política y militar contra Echenique (Williez, N° 18).



"Pesando los hombres públicos". La caricatura se mofa de la pérdida del poder político de José G. Paz Soldán —ex ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ex fiscal de la Corte Suprema, ex director general de Hacienda y autor del folleto "Mi defensa"—, después de la batalla de La Palma. Además se muestra la supremacía de Pedro Gálvez que, con sólo sus "antecedentes", parece inclinar la balanza de la opinión pública a pesar de los galardones y expedientes de consolidación acumulados por Paz Soldán (Williez, Nº 3).



"La pena del talcón". Gálvez aplicándole a Paz Soldán su propia medicina: el decreto sobre delitos de imprenta por motivos políticos (Williez, Nº 21).



DERECHO DE ASILO EN PRÁCTICA.

"Derecho de asilo en práctica". Las oscilantes fortunas de las figuras políticas de la revolución de 1854: Castilla y sus partidarios saliendo de la clandestinidad, mientras que Echenique y sus ministros (Torrico, La Fuente y Paz Soldán) deben apelar al asilo en legaciones extranjeras. El ministro inglés Steven Sullivan observa impasible (Williez, N.º 24).

PARTE II

DESTINOS DE LA CONSOLIDACION

Capítulo 4

LOS CONSOLIDADOS

"Se dice que se enriquecieron unos pocos y que sólo para ellos fue la ley [de la consolidación]. Yo quiero suponer que esos tres o cuatro, o que sean cinco o seis, sobre que se fija la atención pública que supieron negociar, como se negoció en todas partes, se hubieran hecho dueños de dos o tres millones de pesos, o cuatro que sean ¿y el resto hasta veinte y tres millones, dónde está? ¿No se ha repartido entre millares de individuos que tenían legal derecho? ¿No se han visto desahogarse mil familias y empe-zarse a poner en movimiento nuevos capitales?"

Echenique, José Rufino, *El general Echenique, presidente despojado del Perú, en su vindicación* (New York, 1855, p. 101).

Lo que se ha intentado demostrar hasta ahora, con pruebas basadas en libros de contabilidad fiscal, es el hecho de que los vales de consolidación que se expidieron en el periodo 1850-1852 se fueron concentrando en pocas manos. Este proceso no culminó en 1853-1854, años en que se realiza la conversión de la deuda interna a externa, sino que continúa después de 1855 y en adelante hasta que la deuda se cancela definitivamente hacia 1865. Sobre estas bases, la afirmación de Echenique, arriba citada, argumentando que los capitales de la consolidación se repartieron entre millares de individuos y dasahogaron a mil familias, nos parece imprecisa.

La prueba suficiente del éxito de la consolidación radica, según Echenique, en que se emitieron vales a nombre de cerca de dos mil personas, sin reparar que cerca de la mitad del monto total de los vales se repartió solamente entre 50 individuos. La concentración se hizo mayor en años posteriores. En este capítulo queremos centrar nuestra atención en aquellos individuos que "supieron negociar", según palabras de Echenique, que tramitaron, sin escrúpulos, expedientes comprados a bajo precio y lograron hacer reconocer luego, por sumas fabulosas. Así mismo, participaron del cohecho de funcionarios estatales en la repartición de las ganancias de reconocimientos fraudulentos. Formaron, además, un grupo o "argolla" con aspiraciones políticas. Muchos de los expedientes tramitados por estos personajes fueron tachados por la Junta de Examen Fiscal de 1855. Ellos fundaron sus esperanzas de poder económico al interior del régimen de Echenique y corrieron su misma suerte después de la derrota de las fuerzas echeniquistas a manos de Castilla. Se trata del grupo que se dio en llamar los consolidados.

En 1854, Fernando Casós utiliza la palabra "consolidado" con toda naturalidad, como si fuera un término común para la época¹. Juan de Arona en su *Diccionario de peruanismos* define la palabra "consolidado" como "peruanismo histórico-político-fiscal" que denomina a los enriquecidos con la ley de la consolidación de la deuda interna². En sus memorias inéditas, Mendiburu describe que la "viciosa y desalmada multitud" vociferaba los insultos de ladrón y consolidado contra los altos funcionarios del régimen de Echenique, incluido entre ellos el mismo Mendiburu, cuyas casas fueron saqueadas por turbas enardecidas tras la derrota sufrida por las fuerzas echeniquistas en la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855³. El autor de un folleto publicado en 1856 igualmente consideraba las palabras 'ladrón' y 'consolidado' como sinónimos⁴.

Queremos retomar en este capítulo el significado que, tanto las personas letradas como la gente común, le daban a la palabra 'consolidado' en el periodo 1854-1856. La palabra denomina a la persona beneficiada fraudulentamente con la consolidación a través del abuso de autoridad o alguna vinculación con funcionarios corruptos del gobierno de Echenique. Intentaremos delinear a continuación las acciones realizadas por estos oscuros personajes de la historia peruana que, aunque en su época tuvieron cierta importancia, no dejaron más que sombras para la posteridad. Frustrados y derrotados en sus aspiraciones luego de la derrota de Echenique, los consolidados nos brindan una pauta clave para empezar a descubrir hacia dónde fueron las sumas repartidas por la consolidación. No cabe duda que una porción significativa tuvo como destino los bolsillos de los consolidados.

4.1 Corrupción

En varios de sus escritos posteriores a 1854, Echenique se esfuerza por negar toda vinculación suya con aquellos a los que se sindicó como consolidados. Quiere dejar en claro que él no intervino en ningún expediente de consolidación, ni tampoco participó en negociado alguno que, según se decía, habían realizado los consolidados. Sin embargo, nombra a algunas personas sindicadas como consolidados y defiende la reputación de su primo político Manuel María Cotes. Menciona a don José Manuel Concha (¿será acaso un error de memoria, no se tratará de Juan José Concha, que aparece en nuestro cuadro 4 y

1. Casós, *Para la Historia*, p. 62

2. Basadre, J. *Perú: problema y posibilidad* (Lima: Banco Internacional, 1978), p. 337.

3. Mendiburu, *Memorias*, p. 879.

4. Anónimo, *Al gobierno*, p. 88.

que Casós también acusa?), al general Juan Crisóstomo Torrico y al coronel Rivas, como posibles consolidados⁵. Manuel de Mendiburu va un poco más lejos y señala al general Torrico como el principal consolidado:

"[Torrico] declaróse protector de solicitudes que hacían los de su bando para que el Gobierno reconociese cantidades de que la Nación debía responder. Hizo él diversos negocios comprando por medio de satélites, documentos y derechos no muy purificados y expeditos, y como se veían consolidadas estas acreencias, propagóse entre los del círculo de Torrico el deseo de hacer lo mismo y adquirieron créditos a poco coste, desahuciando o desanimando a los dueños de ellos y abusando de su incapacidad. El ministro, allanando los inconvenientes en las oficinas, hasta con mandato recababa los derechos. Aun se abrogó la facultad de sustanciar por el ministerio de Guerra muchos expediente que después los pasaba como concluidos al ministerio de Hacienda para su reconocimiento"⁶.

A pesar de que es conocida la relativa objetividad con que Mendiburu escribió sus obras, siempre es posible que, un hombre que participó en un régimen tan desprestigiado puedan intentar limpiar su reputación derivando culpas a otros. A Mendiburu, como a Echenique, no se le pudo comprobar culpabilidad alguna en casos de corrupción, a pesar de haber sido culpado de falsificar el presupuesto de 1853-1854, y de haber firmado el contrato de conversión con Uribarren en 1853⁷.

Por otro lado, Torrico fue un personaje que desapareció de la política después de la batalla de La Palma y no se tiene noticias de él posteriores a este acontecimiento. Sólo se sabe que fugó al exterior en 1855. No tenemos conocimiento de intento alguno por su parte para defenderse de las abundantes inculpaciones dirigidas hacia él. Asimismo, Mendiburu nos informa que Torri-

-
5. Echenique, J. R. *Memorias para la historia del Perú* (Lima: Ed. Huascarán, 1952), pp. 97-98. En contra de la prueba de descargo utilizada por Echenique se argumentó lo siguiente en 1856: "Tan risible es la excusa dada por Echenique [que su nombre no aparezca en ningún expediente de consolidación], que podría aplicarse lo mismo que a él, a cualquiera de los Torricos, Rivas y Conchas, que según él mismo confiesa, han tenido una fortuna en la consolidación. ¿Podría alguien que haya estado en Lima dudar de la improvisada riqueza de la esposa, hermano y otros parientes de Echenique?" Anónimo, *Refutación*, p. 25.
 6. Mendiburu, M. "Noticias biográficas de los generales que ha tenido la República desde 1821", *Revista Histórica*, 25 (1960-61), p. 160. Torrico se encargó del puesto de ministro de Hacienda en 1851 previamente a la gestión de Mendiburu en el mismo cargo. Al mismo tiempo Torrico desempeñaba el cargo paralelo de ministro de Guerra y Marina, puesto que ocupó hasta el 5 de enero de 1855.
 7. Las acusaciones contra Mendiburu aparecieron en varios números de *El Peruano* de los años 1855 y 1856. Según Dancuart, Mendiburu pidió que se le abriera un proceso judicial en el cual fue declarado inocente de dichos cargos.

co fomentó al grupo de sus incondicionales, los "masorqueros", dispuestos a sostenerlo en sus aspiraciones presidenciales, antes de que estallara la guerra civil de 1854.

Buscamos constatar estos testimonios de Echenique y Mendiburu a través de nuestra investigación basada en el conocimiento del nombre de las personas que recibieron vales de consolidación, la nómina de los vales tachados por la Junta de Examen Fiscal⁸ de 1855, y demás información existente en protocolos notariales sobre la actividad de estas personas en los años 1850-1855. De esta forma pudimos elaborar el cuadro 11, donde se demuestra la cantidad aproximada de pesos en vales que fue a caer en manos de los consolidados: cerca de cuatro millones, es decir, un 16% del total repartido por la consolidación.

Gregorio Videla ejercía en Lima la profesión de comerciante, pero era natural de Chile. El figura en los libros de la consolidación como la persona que recibió la cuarta cantidad más elevada en vales de consolidación, 662,300 pesos (ver cuadro 4), de los cuales se le tacharon 325,634 en 1855 por reconocimientos dudosos en cinco expedientes observados. Videla adquirió por distintas vías expedientes cuyos interesados originales eran hacendados que reclamaban daños y perjuicios sufridos durante los sucesos de la independencia en el valle de Santa, Pasco y Cajatambo, y prestamistas al Estado en Lima. Vemos claramente aquí que los verdaderos perjudicados por las contiendas de la emancipación tuvieron muy poco que obtener de la consolidación. Hacendados como Manuel Zuloaga del valle del Santa, propietario de las haciendas "Lecheral" y "Molino", con documentación que lo acreditaba como valioso colaborador a la causa de la independencia, no recibieron de los expedientes reconocidos más que una mínima parte, al cederlos o venderlos a bajo precio a los negociantes de expedientes. Una vez cedido, el expediente de Zuloaga fue reconocido por 90 mil pesos en vales; de ellos se repartieron 38 mil pesos al coronel Manuel Suárez y 52 mil a Juan José Concha quien, a su vez, los endosó a Videla.

8. Una crítica a la labor realizada por esta junta examinadora que fue publicada en *El Comercio* señalaba: "La Junta fue creada en 7 de febrero [de 1855]: en 20 de julio remitió sus trabajos al Ministerio con cinco estados: trabajaba de siete a nueve de la noche... y en este tiempo aun, sin rebaja de días y horas perdidas, es decir en 150 días ha examinado 2,446 expedientes; que corresponden a diez y seis en cada dos horas, ocho por hora; o uno en siete y medio minutos. Júzguese si ha podido consultarse 'bien' cada uno con tanta festinación cuando apenas bastan dos o tres horas para la lectura de muchos". Anónimo, *Al Gobierno*, p. 36. Sin embargo se podría agregar en descargo de la Junta el hecho de que su examen se limitaba a comprobar si los expedientes reconocidos cumplían con lo prescrito por la ley de consolidación, sin que necesariamente se tuviera que leer letra por letra del expediente en su totalidad para dictar tacha.

CUADRO 11

**Funcionarios y comerciantes que negociaron
con vales tachados por fraudulentos**

Nombre	Cantidad adjudicada (pesos en vales)	Ocupación
1. Felipe Coz	731,000	Comerciante
2. Gregorio Videla	662,300	"
3. Nicanor Gonzales	516,000	Funcionario
4. Juan José Concha	478,400	Comerciante
5. Domingo Solar	250,000	Militar
6. José Pérez Vargas	198,700	"
7. José Manuel Piedra	152,400	Propietario
8. Viviano Gómez Silva	146,500	Comerciante
9. Camilo Gonzales	146,500	"
10. Martín D. de la Torre	118,600	"
11. Pascual Saco	78,800	Militar
12. Felipe Rivas	77,500	"
13. José Zavala	67,200	"
14. Manuel Oyague	61,000	Comerciante
15. José Arancibia	60,000	"
16. Manuel Mariano Román	56,300	Funcionario
17. Manuel María Cotes	48,400	Comerciante
Total	3'849,600	
De este total recibieron, los comerciantes:	2'306,200 (60%)	
los funcionarios y militares:	1'391,000 (36%)	
un propietario:	152,400 (4%)	

Fuentes: Cuadro 4, capítulo 3: *El Peruano*, 31 de octubre 1857; Junta de Examen Fiscal, *Informes*.

Por otro lado, los prestamistas Juan Begg, Manuel Padilla y su esposa Josefa Jiménez, otorgaron empréstitos al Estado peruano entre 1821 y 1824, y luego cedieron sus créditos a segundos, y éstos a terceros. El poseedor final de estas obligaciones contra el Estado resultó ser Videla, quien logró hacerlos reconocer en la consolidación, elevando su valor inicial⁹. Lo que hace sospechoso a Videla de pertenecer al grupo de los consolidados no es el hecho de que haya acaparado expedientes y valores públicos que originalmente pertenecieron a otras personas, acaparamiento que seguramente realizó mediante el ejercicio de libre compra y venta de valores, pues cualquier comerciante de la época podía realizar tales operaciones. Son sospechosas sus relaciones con Juan José Concha, otro comerciante chileno ligado a los negocios de reconocimientos, asociado siempre en los informes de la Junta con Nicanor Gonzales, funcionario judicial que desempeñaba el cargo de perito tasador en los avalúos que se requerían de los reclamos de expedientes de consolidación¹⁰. Gonzales recibió 516,300 en vales y ocupó el sexto puesto entre los que recibieron mayores cantidades de la consolidación. Es escandaloso que un funcionario público encargado de tasar con su apreciación objetiva el valor de bienes presumiblemente perdidos muchos años antes, tuviera tan voluminosa participación en lo pagado por concepto de deuda interna.

En el "Manual duplicado de la Caja de Consolidación", en las partidas que corresponden a los días inmediatamente anteriores al 29 de octubre de 1852 —fecha límite impuesta para el reconocimiento de expedientes por la administración Echenique—, se constatan reconocimientos en cantidades y números bastante superiores a los de partidas de fechas pasadas, cuando se reconocían expedientes en número moderado¹¹. Se logran de esta forma reconocimientos apurados donde figuran los nombres de muchos consolidados.

Analicemos los casos de Nicanor Gonzales y Juan José Concha con mayor detenimiento. Obtuvieron de la consolidación la sexta y séptima cantidad de entre las mayores de la deuda interna. En 1855 les fueron tachados por reconocimientos dudosos, e inclusive por la desaparición de un expediente (el N° 5993, a nombre de Gonzales, por 54,900 pesos), 501 mil y 397 mil pesos en vales, respectivamente¹². En el informe de la Junta de Examen se lee lo si-

9. Junta de Examen, *Informes* expedientes Nos. 5666, 5742, 5771, 5848, 5958, 6013.

10. *Ibid.*, informe del expediente N° 5742.

11. Partidas diarias del "Manual duplicado", año 1852, Libros Manuscritos Republicanos, H-4-1986, AGN.

12. Junta de Examen, *op. cit.*, expedientes N° 5737, 6013, 5993 y 4995, 5006, 5545, 5994, 5104, 5462

guiente, como prueba de la estrecha colaboración de estos dos personajes entre sí:

"Los vales procedentes de este expediente se dieron a nombre de d. Nicanor Gonzales en la cantidad de 253,900 ps. a pesar de un endose que se lee en el expediente por el cual declara el expresado Gonzales que sólo le pertenecen 64,000 pesos y que los 182,852 ps. 4 rs. restantes son de Juan José Concha"¹³.

Mediante las relaciones periféricas que estos tres grandes consolidados—Videla, Gonzales y Concha—establecieron con otras personas, podemos agregar otros 'consolidados' de menor cuantía que también participaron en los negocios de este grupo: Gregorio Elizalde, Manuel Oyague, Camilo Gonzales, Manuel Suárez, José Manuel Piedra, José Zavala, José Pérez Vargas, José Arancibia y Pascual Saco¹⁴. Su participación en la consolidación se puede apreciar en el cuadro 4. No solamente nos basamos en los informes de la junta examinadora¹⁵ para aseverar lo anterior, sino que también sustentamos nuestra opinión a través de la lectura de los contratos que ante notarios de Lima establecieron los consolidados para delimitar su participación en los negociados. Como ejemplo podemos citar el contrato que ante el notario Eduardo Huerta firmaron, el 28 de diciembre de 1852, Manuel Gonzales y el coronel José Pérez Vargas, sobre la participación del expediente promovido originalmente por el español José María Noriega por 159 mil pesos, finalmente reconocido por 156,758 pesos en vales¹⁶. Los términos de este contrato eran los siguientes:

13. Ibid., p. 140.

14. El coronel Pascual Saco desempeñó el cargo de ministro de Hacienda entre el 18 de agosto de 1853 y enero de 1854. Era el sobrino del gran rentista Pío Tristán. Según el inventario de los bienes de Saco en 1868, sus propiedades, posiblemente adquiridas gracias a la consolidación, se componían de una finca en Lima, un rancho en Chorrillos, una hacienda en Camaná y, entre otras cosas, 48,000 pesos en vales de consolidación no amortizados; correspondencia, Colección Plácido Jiménez, AHRA. A Saco se le siguió un proceso judicial en 1855 para averiguar sobre sus gestiones como ministro.

15. Junta de Examen, op. cit., expedientes Nos. 5994, 5858, 5895, 6004.

16. Según este protocolo notarial el coronel Pérez Vargas expresa que don Manuel Gonzales le había hecho confidencialmente una cesión del expediente de don José María Noriega por 159 mil pesos, "con sólo el objeto de que yo [Pérez Vargas] practique ciertas diligencias necesarias para la expedición de los vales debiéndose entregar por recompensa de este servicio la cantidad de sesenta y dos mil pesos en vales de consolidación de los cuales tocan y pertenecen cincuenta y siete mil pesos en los mismos vales, a una persona que me ha indicado el mismo señor Gonzales quedando el resto de cinco mil pesos a mi favor como premio de mi servicio personal, obligándome como desde ahora me obligo en toda forma a sacar yo mismo de la Caja de Consolidación los vales expedidos y poner en manos de don Manuel Gonzales la cantidad que resulte líquida después de deducir los sesenta y dos mil pesos". Escribano Eduardo Huerta, protocolo N° 280, 28 de diciembre de 1852, f. 780, AGN. La fecha de este contrato está fuera del límite de tiempo (29 de octubre de 1852) fijado en diciembre de 1851 para realizar reconocimientos de expedientes. Sin embargo, fojas más adelante las dos partes se dan por satisfechas de la realización a plenitud del convenio. Ver también Junta de Examen, op. cit., expediente N° 6004.

Pérez Vargas practicaría las diligencias necesarias y se le compensaría con 62 mil pesos en vales, de los cuales tendría que entregar 57 mil a una persona anónima indicada por Gonzales, y quedarse con los 5 mil pesos restantes para sí. La cantidad sobrante del expediente, unos 97 mil pesos en vales, quedaba a disposición del comerciante Manuel Gonzales. Es muy probable que esa persona, a la cual "confidencialmente" se la dejaba en el anonimato, haya sido un funcionario público. Sirvió de intermediario otro funcionario que ponía como garantía el prestigio de su uniforme, como era el caso del coronel Pérez Vargas. Nos inclinamos a suponer que el funcionario anónimo muy bien pudo haber sido alguien como Nicanor Gonzales o Pascual Saco, participantes en negocios similares. Efectivamente, el monto del expediente N° 5895, por 133,282 pesos, fue repartido entre cuatro de los consolidados: Pascual Saco (50 mil pesos), José Arancibia (30 mil), José Pérez Vargas (38 mil) y Nicanor Gonzales (15,300 pesos).

De la misma forma como detectamos las relaciones entre Videla, Gonzales y Concha; o entre Pérez Vargas y los dos Gonzales, se puede establecer una vinculación entre Martín Daniel de la Torre, el coronel Félix Rivas, José Zavala y Pedro Vásquez de Velasco. Según una protocolización de la compra de un expediente en agosto de 1852, varios vecinos de los pueblos de Ayaviri y Tambillo (Castrovirreyna, Huancavelica), posiblemente arrieros, reclamando el reconocimiento de 96 mil pesos por el importe de mulas de carga confiscadas en octubre de 1820, vendieron dicho expediente a Martín Daniel de la Torre, vecino de Lima, en 13 mil pesos en efectivo; de esa suma, de la Torre, les entregó 3,400 pesos y el resto prometió pagarlo cuando se reconociera el expediente¹⁷. A su vez, de la Torre vendió el mismo expediente a Pedro Vásquez de Velasco por 14 mil pesos. Vásquez de Velasco logró hacer reconocer el expediente, que llevó el número 5411, por 46,480 pesos en vales, según consta en uno de los informes de la Junta de Examen que señala como cesionario a Manuel Carranza, "apoderado de varios individuos de Ayaviri y Tambillo". Por otro lado, Vásquez de Velasco, representando a varios individuos de Cerro de Pasco, otorgó poder para que los representase de la Torre en el expediente N° 5996, reconocido por 67,200 pesos en vales. Don Pedro Vásquez de Velasco y su hermana Josefa eran hacendados en Cerro de Pasco, dueños de la estancia "Huanca", donde se criaba ganado lanar. De la Torre también aparece como cesionario del expediente número 5480 en favor de Felipe Rivas, reconocido

17. Los reclamantes del expediente, dueños de las mulas de carga confiscadas eran: Vicente Matos, Faustino Jara, Antonio Ruiz, José Miguel Cachasco, Juan Jara, Felipe Gonzales, Nicolás Herrera, Patricio Pérez, Celedonio Matos, Mariano Chumpitaz, Pedro Ribera, Santiago Zegarra, Nicolás Huacaya, y los que no sabían firmar (Timoteo Cayllo y Santiago Paulla). Notario Eduardo Huerta, año 1852, protocolo 280, f. 708, AGN.

por 36,800 pesos en vales, que tuvo como promotores iniciales a "varios individuos del pueblo de Huaitaná por valor de 489 bestias de carga"¹⁸.

Seguramente las relaciones entre negociantes y funcionarios corruptos nos podría proporcionar una lista de nombres más amplia que la que se exhibe aquí, pero no es nuestra intención ahondar más en estos temas. Queremos saber cómo se aprovechó o dejó de aprovechar lo repartido por la consolidación. Entre los consolidados, el gasto suntuario y el despilfarro parece que fueron las principales formas como se utilizó los fondos fáciles que les proporcionó la consolidación.

4.2 Despilfarro

Sobre la vida de Gregorio Videla, Nicanor Gonzales y Juan José Concha y sus actividades anteriores o posteriores a la consolidación, fue muy poco lo que pudimos encontrar. Videla se desempeñaba todavía como comerciante en 1855. En abril de dicho año, otorga una escritura de obligación al cónsul del Tribunal del Consulado, don Rafael Saco, por la cantidad de 1,800 pesos prestados con 1% de interés mensual al plazo de un año, para que Videla pudiera comprar una casa-huerta en el Cercado con el fin de ocuparla como tienda de cerveza. Así mismo, en octubre del mismo año, Videla es fiador de cárcel de un tal Candelario Barrios¹⁹. Concha, otro comerciante de origen chileno, concede en setiembre de 1853 una escritura de obligación a Manuel Andrade por la suma de 60 mil pesos de un expediente de consolidación y por un término de seis años a un interés del 6% anual. Tal como se lee en la minuta de dicha escritura, podemos apreciar una muestra más de las diligencias de Concha:

"...habiéndome entregado D. José Manuel Andrade un expediente de Consolidación del valor de cuatrocientos mil pesos pertenecientes al señor D.

18. Junta de Examen, *Informes*. El coronel Felipe Rivas fue apresado después de la batalla de La Palma y recluido en el castillo del Callao, de donde logra escapar en febrero de 1855 con la ayuda de sus mismos carceleros, según nos informa un proceso judicial. Luego se dirigió a Valparaíso donde empezó a conspirar a favor de Echenique y Vivanco; "Sumario requerido para el esclarecimiento del modo como ha fugado de Casas Matas el reo ex-coronel don Felipe Rivas, año de 1855, mes de febrero" RPJ 617, AGN. En una comunicación firmada por Juan Gualberto Valdivia, uno de los comisionados de la Junta de Examen Fiscal, se menciona que en un testamento de la señora Isabel Negrete de Merino, natural de Huancavelica, se estipulaba que Felipe Rivas se aprovechó del reconocimiento del expediente de dicha señora, entregándole a ella vales por 20 mil pesos mientras que él logró el reconocimiento del expediente por 140 mil pesos. *El Peruano*, N° 16, 3 de setiembre de 1856.

19. Escribano Escudero de Sicilia, año 1855, protocolo 227, AGN.

Camilo Gonzales para que por mi cuenta corriere su reconocimiento, y todos los gastos que se ocasionasen, y que tan luego se reconociese por el Estado, y se espidiesen los vales, era obligado a entregarle al citado Andrade la suma de sesenta mil pesos en vales, y habiendo sido reconocido dicho espediente, y no teniendo a la mano los dichos sesenta mil pesos, por haber hecho uso de ellos, me obligo a favor del indicado Andrade a pagárselos de la fecha en seis años en esta plaza abonando el interés al año ... y si vencido el término señalado ... no hubiese pagado el mencionado capital ... le seguiré abonando el interés correspondiente hasta su cancelación"²⁰.

De esta cita podemos deducir que Concha se hacía de expedientes con mucha facilidad, solamente con el compromiso de correr con los gastos de tramitación, y otorgaba, por un capital que gastaba rápidamente, un interés bajo a un plazo largo de cancelación. Además, parece ser que Andrade jamás recibió la cancelación y los intereses prometidos por Concha, pues hacia agosto de 1853 este comerciante chileno está a punto de partir de viaje fuera del Perú, y deja como apoderado a José Amat, debido a su inminente partida al exterior, para que lo represente en el pleito de aguas sobre una toma que conducía agua a través de la "Chacra de Palos" de propiedad de Concha²¹. Al parecer, la compra de esta chacra fue uno de los destinos que le dio a lo percibido por sus negocios de expedientes.

El hecho de que estos grandes consolidados no figuren posteriormente en cualquier otro negocio de cuantía prueba que la utilización de sus capitales fue a muy corto plazo, derrochados o, una vez convertidos a la deuda externa, expatriados. Podemos apreciar en los casos de Videla y Concha que, a pesar de estar entre los mayores beneficiados por la consolidación, no logran destacar como grandes comerciantes en los años 1852-1855, de acuerdo a información de patentes y relación de comerciantes²². Estos individuos seguían pidiendo prestado a interés en esos años, con lo cual parece ser que lo que obtuvieron a tra-

20. Escribano José Cubillas, año 1853, protocolo 174, f. 580, AGN.

21. *Ibid.*, f. 517v.

22. Sobre el caso específico de Manuel María Cotes, primo político de Echenique, podemos decir que sí se acercaba a ser considerado un comerciante notable de la época. Cotes se desempeñaba como uno de los consignatarios del guano, según consta en una carta fianza otorgada, en agosto de 1851, por los conocidos comerciantes Nicolás Rodrigo y Manuel Espantoso, en garantía de 250 toneladas de guano consignadas por el gobierno a bordo de la barca nacional "Miceno": Escribano Escudero de Sicilia, año de 1851, AGN. A Cotes se le tachó un expediente por 21,551 pesos en vales que tramitó a nombre de varios prestamistas de Chota, por empréstitos que éstos hicieron a la tesorería de La Libertad entre los años 1834 y 1838. No se le pudo probar culpabilidad en este caso, y en 1857 cobraba personalmente los intereses de sus vales de consolidación en plena vigencia.

vés de la consolidación no satisfizo sus necesidades. Lo más probable es que, junto con la febril algarabía que produjo la conversión entre los poseedores de vales, lo que ellos obtuvieron a través del fraude se despilfarró rápidamente.

4.3 Fraude y conversión

Los contratos de conversión de la deuda interna a externa se firmaron en secreto en 1853 y 1854 con toda la apariencia de un gran fraude. Los textos de estos contratos no llegaron a publicarse oficialmente y, según Dancuart, no existían tampoco en el archivo histórico del Ministerio de Hacienda. Por estas razones resulta dificultoso describir el mecanismo utilizado por la conversión. Sin embargo, con lo que llevamos discutido en el Capítulo 2, sobre el aspecto legal de la conversión, y con algunas claves brindadas por Dancuart, Mendiburu y otros autores, podemos establecer lo que sigue a continuación.

Las casas comerciales contratistas de la conversión acordaron con el gobierno de Echenique recoger en Lima un monto propuesto de 14 millones de pesos en vales de consolidación, entregarlos luego cancelados en la Caja de Consolidación, y recibir a cambio del Estado peruano los nuevos bonos de deuda externa. Esto significó que las casas comerciales Uribarren, Montané y Hegan compraron en Lima, a través de sus agentes, cantidades de vales de consolidación al precio de la cotización del momento, es decir, a un 35 ó 40% del valor nominal.

Por la venta de dichos vales, un número regular de peruanos recibieron pagos en efectivo de las casas extranjeras contratadas. Fernando Casós describe la forma en que los tenedores ofrecían en venta los vales, muy por debajo de la cotización del momento, cuando se desató la compra masiva por parte de las casas extranjeras y sus socios. Describe además cómo se dilapidaron muchas fortunas así conseguidas, de la noche a la mañana, por consolidados beneficiados por la conversión, que compraron suntuosas casas en Chorrillos donde se realizaban millonarios juegos de dados y se desplegaban lujos suntuarios. De esta forma se termina por despilfarrar parte de los capitales de la consolidación.

El caso de doña Ignacia Novoa y el de Petronila Zavala, analizados en detalle en el sexto capítulo, demuestra asimismo qué parte de los capitales de la consolidación, obtenidos por rentistas que vendieron sus vales a las casas extranjeras, se utilizó en el pago de deudas a sus acreedores, y sólo una mínima porción se colocará en préstamos a interés.

El monto efectivo de la deuda interna convertida a externa sumó la cantidad de 11'086,500 pesos, es decir, aproximadamente 46% del total de la deuda interna consolidada. Por tanto, calculamos que alrededor de unos tres millones y medio de pesos en moneda se distribuyeron entre los que vendieron vales a los contratistas de la conversión en los años 1853-1854. Para este cálculo nos basamos en la suposición de que se pagaron los vales a una cotización aproximada de 35%, pero bien pudieron ser comprados en menos, pues a fines de 1854 la cotización llega sólo al 29%. Además, habría que reducir de la cantidad calculada los vales de aquellos comerciantes que se convirtieron en poseedores de bonos de la deuda convertida, como fue el caso de Pedro Gonzales Candamo y otros que prefirieron seguir especulando que recibir pagos a baja cotización.

Los nuevos bonos del 4.5% de interés, emitidos por el Estado a cambio de los vales, se expidieron en Londres y París por el encargado de negocios peruano en cumplimiento de órdenes expresas del presidente Echenique. El pago de intereses y la amortización, eran igualmente realizados por el Gobierno en dichas ciudades. Los bonos de la deuda convertida se cotizaban libremente en las bolsas de Londres y París, y se amortizaban a propuesta cerrada en reuniones de los tenedores de bonos con el encargado de negocios peruano. Para el pago de los intereses y la amortización de esta deuda se comprometieron los ingresos de la venta del guano en Inglaterra y Francia²³. Echenique defendió la medida argumentando que mediante la conversión se reducía el interés de las obligaciones del Estado del 6 al 4.5%.

El beneficio que esperaban obtener las casas que realizaron la conversión consistía en aprovechar la diferencia entre la cotización de los vales en Lima, al momento de la compra, y la cotización de los bonos en París o Londres. En 1853 los bonos de la antigua deuda anglo-peruana que se arrastraba desde la época de la independencia se cotizaban en Londres en más que a la par (por arriba del 100% del valor nominal), y percibían un interés anual del 5.5%, según los datos de Mendiburu en sus memorias. Era por lo tanto presumible esperar que los nuevos bonos de la deuda convertida, que percibían un interés del 4.5%, se cotizaran luego de un tiempo a niveles semejantes a los de la deuda antigua. Sin embargo, al comenzar la transacción hubo protestas en Londres contra la conversión, por parte de los tenedores de la deuda antigua pues, según decían, la medida perjudicaba sus intereses. Debido a estas protestas y a la guerra civil de 1854 los bonos de la deuda convertida no llegaron a cotizarse fa-

23. Dancuart, *Anales*, tomo 5, pp. 46-48.

vorablemente al principio. Luego, con la observación de vales de 1855-1857, que invalidó en la práctica la conversión, los bonos de la deuda convertida sufrieron una alarmante caída en su cotización.

Las protestas y presiones del grupo de tenedores de bonos de la deuda convertida²⁴ logran, en 1857, obtener del gobierno la rehabilitación de los vales tachados y, por lo tanto, el pago de intereses atrasados. En consecuencia, a partir de 1857 la cotización de dichos bonos se eleva, y en 1859 se encuentra a un 80% de su valor nominal, realizándose de esta manera un espléndido negocio por parte de los grandes comerciantes extranjeros y nativos a costas del Estado peruano.

De la forma arriba descrita se distribuye otra parte de los capitales de la consolidación. Mendiburu da algunos indicios sobre la participación de los consolidados en este negocio:

"El Gobierno sabe a ciencia cierta que Torrico y sus amigos tienen gruesas sumas en los bonos emitidos a Uribarren en Londres, por la traslación que contrató de nueve millones de deuda interna convirtiéndola en externa. Y para negarse Castilla a que ese negocio tuviese efecto, dió por razón, que no quería consentir en que Torrico y los suyos lograsen de los beneficios de aquella operación"²⁵.

Parece ser que los reclamos de los tenedores extranjeros y la presión diplomática llegaron a convencer a Castilla de que Torrico y los suyos ya no llevaban la voz cantante en ese negocio. La influencia de Torrico, junto con la de Bartolomé Herrera, sobre Echenique, fue un hecho importante que llevó a Castilla a oponerse frontalmente a las aspiraciones presidenciales de Torrico. Torrico mandó formar juntas de partido en las capitales provinciales, como las que en 1851 había formado Echenique, según señala Mendiburu. Los partidarios de Torrico -conocidos como los "mazorqueros"- eran una casta que logró beneficiarse con la consolidación y conversión, aunque vio frustrado su acceso al poder. No constituyó, después de estos episodios, un grupo de importancia económica al perder su oportunidad -con la llegada de Castilla al poder en 1855- y consumir sustantivamente sus ganancias de la consolidación.

24. Entre ellos las casas comerciales extranjeras Montané, Hegan, Lachambre, Graham Rowe, Gibbs, Gibson Mac Clean, Belloc; y los comerciantes locales José Vicente Oyangue, José Canevaro, Pedro Gonzales Candamo, Domingo Castañeda y otros.

25. Mendiburu, "Noticias biográficas", p. 167.

En resumen, los consolidados, al concentrar y derrochar cerca del 16% del total de vales de consolidación repartidos entre 1850 y 1852, provocaron una fuerte condena contra los funcionarios echeniquistas participantes en el negociado, lo que supo aprovechar la oposición política. Se contribuyó así a motivar formas violentas de protesta por parte de las clases populares en contra de los tristemente célebres consolidados.

Capítulo 5

LOS SECTORES POPULARES

Los sectores populares estuvieron tenazmente marginados de cualquier poder de decisión en materia económica durante el régimen decimonónico peruano. Las innovaciones en la política económica republicana desataban una ola de conmoción entre las capas sociales pobres y excluidas. La consolidación, con todas las expectativas creadas en su torno, no los benefició en lo más mínimo. Lo pertinente es preguntarse hasta qué grado la medida de la consolidación de la deuda interna los afectó en forma negativa.

Nuestro intento en el presente capítulo es enfocar el problema de los destinos de la consolidación desde el punto de vista del hombre del pueblo. Se utilizarán para ello fuentes de información distintas a las que hemos venido citando hasta ahora. Oiremos los ecos de la multitud a través del alza de los precios de las subsistencias, de su despertar violento en rebeliones, saqueos y guerra civil. Su inicial confianza y posterior decepción por el caudillo militar terminarán en prisión y represión sangrienta; su venganza contra la corrupción y los 'consolidados', en forzados perdón y olvido.

5.1 Alza de precios

Se argumenta equivocadamente que la consolidación, al vertir 24 millones de pesos en vales que circulaban como una especie de papel moneda, contribuyó decisivamente a la inflación de precios que se experimenta en Lima de la década de 1850¹. Partiendo de esta premisa se infiere que la consolidación afectó a las clases populares en su nivel de vida, mermando sus ingresos y deteriorando su condición económica. Nuestra investigación no halló las pruebas suficientes para asumir tal conclusión.

Para resolver el problema planteado, es imprescindible documentar, primero, si efectivamente ocurrió la mentada subida de precios y cuáles fueron las fases por las que pasó. En el apéndice 1 consignamos datos de fuentes primarias que nos han permitido graficar y medir tal alza para los años que van de

1. Varios son los autores que asumen tal argumento (Bonilla, Gootenberg, Tantaleán). La literatura de la época crea confusión al utilizar el concepto "moneda corriente". Al respecto, remitirse al análisis que sobre el carácter del vale de consolidación se desarrolló en el presente estudio, capítulo 2.

1847 a 1865. Antes de realizar nuestro experimento cuantitativo, fuentes de tipo cualitativo nos informaban del fuerte incremento en los precios de primera necesidad notado en Lima en los años 1854-1856². Sin embargo, a través de la información cuantitativa recogida nos es posible apreciar el siguiente comportamiento de los precios de artículos básicos de consumo:

a) La presencia de dos ciclos en la evolución de los precios de los artículos de primera necesidad. El primero entre 1847 y 1853, y el segundo de 1853 a 1860, de seis y siete años respectivamente, con picos en 1850 y 1856 cada uno de ellos. Entre 1847 y 1850 hay una subida moderada del precio de los productos, con la excepción del arroz y el chuño que suben pronunciadamente entre 1848 y 1850. Un pequeño descenso se nota entre 1850 y 1853, para luego iniciarse una subida muy pronunciada entre 1855 y 1856 (ver gráficos y cuadro en apéndice 1). Es evidente que no todos los artículos coinciden en el mismo pico, pero sin embargo se puede constatar la tendencia general de los dos ciclos descritos. Los artículos que mayores contrastes presentan en sus fluctuaciones son la manteca, el arroz, la quinua, los frijoles, los garbanzos, el chuño, el azúcar y la carne de vaca.

b) Sin embargo, debido a los vacíos que exhibe nuestro cuadro de precios, y con el fin de indagar las causas del alza de precios pronunciada, sobre todo entre 1854 y 1856, debemos analizar los porcentajes de las alzas de precios por artículos. En el cuadro 12 constatamos que el periodo que evidencia mayor alza de precios es el de 1847-1856, que inclusive supera en sus porcentajes al periodo más largo de 1847-1860.

c) Entre febrero de 1855 y agosto de 1856, un periodo de año y seis meses, se evidencia el alza más dramática. Entre dichas fechas el precio del arroz sube un 61%, el de los frijoles 163%, el de la manteca 57%, el de los garbanzos 110%. Serán pues los años 1855 y 1856 los de mayor penuria económica para los sectores populares. Es cierto también que alzas muy agudas, como el caso de los frijoles, tienden a bajar notoriamente hacia 1859. Esto último refuerza la idea de una crisis coyuntural aguda entre los años 1854 y 1859.

d) Por otro lado, no debemos olvidar las alzas regulares de los precios entre los años 1847 y 1855, que variaron entre el 52 y el 12%. Este dato nos será útil para la explicación de las causas económicas del acontecimiento violento en Lima el 5 de enero de 1855.

2. Mendiburu, "Memorias", pp. 544-545; Távara, *Abolición*; Basadre, *Historia*, tomo 4.

CUADRO 12

Alza de precios en porcentajes, 1847-1860

Artículos	%	%	%
	1847-1855	1847-1856	1847-1860
Pan	—	—	-20
Carne de carnero	48	—	—
Carne de vaca	12	—	102
Azúcar	—	24	51
Arroz	28	106	110
Fideos	—	19	14
Frijoles	—	166	1
Manteca	34	110	53
Chuño	22	—	22
Quinua	—	96	—
Garbanzos	11	132	—
Gallina	52	36	36
Harina amarilla	—	45	—
Lana	—	—	182

Fuente: apéndice 1.

e) Así mismo, se constata una subida muy modesta en el precio de los fideos y el pan. Estos importantes componentes de la dieta popular, según lo demuestran las dietas de los hospitales de la época, están relacionados con la harina, cuyos precios permanecen casi estáticos en dichos años. El precio del fideo, según nuestros gráficos, se mantiene con variaciones mínimas, casi constante, del 19 y 14%, en los años 1853 y 1865 con respecto al año 1847. El precio del pan muestra una asombrosa estabilidad e inclusive llega a bajar en un 20% entre 1848 y 1865.

Por más útil que sea el análisis del comportamiento de los precios de artículos individuales, esto no basta para extraer conclusiones definitivas con respecto a la relación entre el alza de precios y la economía popular. Para ello es imprescindible la elaboración de un índice de precios que nos permita evaluar el grado de inflación general de la época bajo estudio. El intento ha sido realizado eficaz y cuidadosamente por un estudioso de la economía peruana decimo-

nónica³. Con el objetivo de medir la inflación general en el período clave de la década de 1850, él utiliza los datos de nuestro apéndice 1 y, agregando información calculada de precios de rubros no alimenticios, asigna pesos específicos a cada tipo de alimento y a los otros componentes del presupuesto familiar (en base a distintas canastas populares de los años 1837, 1869 y 1957) de la siguiente forma: alimentación (70.99%), vivienda (16.15%), indumentaria (12.86%), porcentajes también utilizados para el período que va de 1847 a 1860.

Tomando como base el año de 1847, las dos fases o ciclos que distinguimos (1847-53 y 1853-60) tendrían -deduciendo la diferencia en el índice de inflación entre los años indicados-, el siguiente grado de inflación, según el índice de precios utilizado por Gootenberg:

Años		% inflación general (diferencia)
1847/1853		6.7
1853/1860		34.8
1847/1860	total	41.5

Es pues entre 1853 y 1860 que se experimenta un alza mucho mayor, como dedujimos analizando únicamente los precios de artículos alimenticios individuales. Podemos precisar aún más la cronología del alza general de precios; restando las diferencias inflacionarias entre los años indicados, tenemos el siguiente resultado:

Años		% inflación general (diferencia)
1847/1853		6.7
1853/1856		26.3
1856/1860		8.5
1847/1860	total	41.5

3. Gootenberg, "Artisans and Merchants", pp. 235-251. Este trabajo es muy valioso y aclara problemas claves relacionados a la implantación de la política económica liberal en la década de 1850.

Para distinguir los años claves en la inflación, encontramos las siguientes diferencias entre los años indicados:

Años	% inflación general (diferencia)
1847/1850	8.2
1850/1853	- 1.5
1853/1855	12.8
1855/1856	13.5
1856/1860	8.5
1847/1860	total 41.5

Resultados similares se obtienen utilizando el índice de precios de artículos alimenticios solamente. Ahora podemos afirmar con mayor precisión que los años claves para la subida de precios los constituyen los que van entre 1853 y 1856, sobre todo los años de 1855 y 1856.

Ahora bien, los vales de la consolidación entraron a la circulación desde 1850, se emitieron entre 1850 y 1852 por un total aproximado de 24 millones de pesos nominales, y se compraron y vendieron libremente, con algunas interrupciones, hasta 1865-1868. La más importante paralización en la comercialización de los vales ocurrió entre 1855 y 1857, cuando la Junta de Examen Fiscal tacha alrededor de 12 millones de pesos en vales. ¿Cómo puede ser posible entonces que exista una relación entre el alza de precios, que se acelera palpablemente en los años 1855-1856, y la emisión y puesta en circulación de vales de consolidación? Evidentemente no existe una correlación significativa entre inflación y emisión de vales según las pruebas cuantitativas expuestas aquí y en otros capítulos. Parece que el error de atribuir a los vales de consolidación un rol inflacionario notable proviene de la equívoca comprensión de las características de los vales.

Como discutimos en el Capítulo 2, la oferta monetaria no se incrementa cuando se emiten valores financieros del Estado. Solamente cuando el Estado "compra" los valores emitidos es que se agrega dinero a la circulación; eso sucederá, en el caso de los vales de consolidación, cuando el Estado amortiza efectivamente los vales y paga sus intereses. Esto ocurre muy tímidamente en-

tre 1850 y 1852. En esos años solamente se amortizó alrededor de 2.5 millones de pesos en vales, lo que resultó cerca de un millón de metálico, si consideramos que la cotización promedio de los vales en esos años era del 35% del valor nominal del vale. La amortización es más contundente entre 1857 y 1868, durante y después del segundo gobierno de Castilla, cuando se amortizan alrededor de 14 millones de pesos en vales, incluidos los intereses, que resultan en cerca de 12 millones en moneda metálica, debido a las altas cotizaciones alcanzadas por los vales entre 1857 y 1865.

La conversión, al "comprar" vales de la consolidación para convertirlos en bonos de la deuda externa, pudo haber contribuido en agregar algo a la oferta monetaria. Las casas comerciales extranjeras y sus socios nativos en el negocio compraron alrededor de once millones en vales de consolidación, a una cotización que fluctuó entre el 30 y el 50% entre los años 1853 y 1854. Teóricamente, hasta que el Estado no empezó a amortizar estos bonos en el exterior (lo cual eventualmente se realizó, resultando en una disminución de la oferta monetaria interna), la maniobra de la conversión pudo agregar alrededor de cuatro millones de pesos en moneda a la circulación peruana. Sin embargo, se dio el caso de que varios tenedores importantes de los nuevos bonos de la deuda externa convertida lo habían sido también en vales de consolidación (Gonzales Candamo y otros) y, por lo tanto, no recibieron pago en metálico por sus vales sino bonos de la conversión. A la larga, la conversión sirvió más bien para reducir la oferta monetaria pues hubo que exportar dinero o deducirlo de la balanza de pagos para cancelar aquellos créditos externos. Los efectos inflacionarios de la conversión fueron moderados si consideramos todos estos factores. A pesar de esto, la conversión bien pudo influir en cierta medida a corto plazo en el grado de inflación de los años 1853-1854, inferior en todo caso al de los años 1855-1856, cuando muchos vales y bonos sufrieron impedimentos legales para su libre circulación.

En la explicación del complejo fenómeno de la inflación de los años 1850-1860 intervienen distintas variables más significativas que la consolidación y la conversión. En lo que sigue nos centraremos en las más importantes a nuestro parecer: la manumisión de esclavos de 1855, la guerra civil de 1854, la devaluación del peso de plata peruano en el mismo año, y el aumento del consumo en Lima a lo largo de los años posteriores a 1850.

Nuestras cifras sobre el alza de los precios entran en contradicción con las opiniones de Távara sobre la no injerencia de la manumisión en la infla-

ción de precios de los años 1854-1856⁴. El alza notoria en los precios del arroz, frijoles, manteca, etc., componentes importantes de la dieta popular, en el preciso momento en que ocurre la manumisión, es demasiada coincidencia para pasar tan ligeramente por alto el análisis de una posible conexión entre ambas. Intentar, como hace Távara, disculpar aquellos efectos negativos de la manumisión deja sin una explicación clara el fenómeno de la inflación aludida.

Lo cierto es que el consumo popular sufre un desmedro moderado en los años 1849-1850 y uno drástico en 1854-1856. El carácter agudo del alza de precios de 1855-1856 es característica de una 'crisis de subsistencias', como lo demuestran los pronunciados altibajos de algunos productos; este fenómeno se explica por una merma considerable en la producción agraria de la costa. Lo interesante de esta crisis coyuntural agraria es que no hay evidencias de que se deba a causas naturales; por el contrario, las pruebas apuntan a causas de tipo político-social, como lo fueron las guerras civiles de 1854, y la manumisión de esclavos en ese mismo año. Según nuestros datos, a pesar de constatarse el inicio de la subida en 1853-1854, es a partir de 1855 en que se dará el alza mayor; por lo tanto, la guerra civil con la destrucción de sembríos y los gastos de manutención de ejércitos que acarreo, no debe ser considerada como la causa única de la subida de precios. Las campañas militares se realizaron principalmente en el sur y la sierra central (¿se interrumpió acaso el suministro de víveres a Lima provenientes de la sierra?), y solamente afectaron a la provincia de Lima en lo relacionando al mantenimiento de la guarnición de Lima del ejército de Echenique, y a la batalla de La Palma.

La manumisión de esclavos, que llegó a indemnizar generosamente a los hacendados y propietarios de esclavos, es la causa más aparente para explicar la subida de precios en 1855-1856. Al respecto Basadre opinará que las consecuencias inmediatas de la manumisión serían el incremento del bandolerismo y el aumento de precios de los víveres⁵. Son las haciendas y chacras a las orillas del Rímac y otros valles cercanos, las que proveían principalmente a la ciudad de Lima de artículos de primera necesidad. Así mismo, era Lima y sus

4. Sobre la abolición de la esclavitud y el alza de precios Távara razona de la siguiente manera: "La parte menesterosa de la sociedad no sufre gran perjuicio con la subida de precio de algunos artículos de subsistencia, a consecuencia de la abolición. Todos saben que tres cuartas partes de la población esclava estaba dedicada al cultivo del azúcar y del aguardiente; la otra parte casi toda a la cría de cerdos y sebas de ganado mayor. El aguardiente no es mantenimiento para nadie, la azúcar, y cochinos entran muy poco en la parte mísera de la sociedad. Un número pequesísimo de esclavos estaba destinado al cultivo de los granos y plantas tuberosas que entran en el alimento pobre". Távara, op. cit., p. 46.

5. Basadre, *Historia*, tomo 4, p. 113.

alrededores la zona del país con la mayor cantidad de esclavos. Por lo tanto, un retiro de la fuerza de trabajo esclavo de las tareas agrícolas en estos valles, que abultó de un momento a otro la presencia ya considerable de negros urbanos, parece haber sido la causa determinante del alza de precios hacia 1855. El sector de los hacendados no fue afectado por esta alza de precios, debido a que pudieron pagar sus deudas a los comerciantes con el capital que puso en sus manos el Estado a través de la manumisión. Además pudieron pedir nuevos préstamos para completar la sustitución de mano de obra esclava por la china, y afrontar el gran estímulo de una coyuntura de precios altos que ofrecía altas ganancias para los agricultores. El precio internacional del azúcar sube un 93% entre 1853 y 1859, en contraste con la situación anterior a 1853 de crisis periódicas de saturación de mercados; la manteca sube un 110% entre 1847 y 1856, lo que debió imponer fuerte dinamismo a la cría de cerdos en el valle de Chancay, especializado en esa actividad realizada por esclavos negros antes de la manumisión.

El caso de los fideos, el pan y la harina merece especial atención. Estos productos no sufrieron alzas significativas en el periodo estudiado. La razón de esta estabilidad en los precios de los derivados del trigo debe buscarse en el hecho de que era un artículo importado tradicionalmente de Chile. El precio del trigo, por tanto, no tenía por qué ser alterado por la crisis agraria interna. Esto es una prueba más de que el alza de precios se debió principalmente a la agudización de la crisis agraria entre 1854 y 1856.

Una ley de emergencia dictada en febrero de 1855 ejemplifica la diferencia entre los escasos artículos de producción interna, y los importados cuya oferta no sufrió alteración digna de tomarse en cuenta. Esta ley, una de las primeras y más urgentes dictadas por la recién formada Convención Nacional, prueba la preocupación de los representantes surgidos de la revolución de 1854 ante los indicios alarmantes del alza de precios. La ley decreta la libertad de derechos de importación por el plazo de un año y medio de aquellos productos que mayormente escaseaban: azúcar, arroz, quesos, charqui, manteca, mantequilla, sebo, papas, frijoles, garbanzos, habas, alverjas, lentejas y cebada. El artículo segundo de la ley no brindaba al trigo y la harina la misma facilidad para su importación excepto en los puertos de Arica, Iquique y Paita, donde se declaraban libres los derechos de importación de trigo y se reducían a la mitad los de la harina. Esto seguramente se debió a que la guerra civil había perturbado el comercio de los productos importados más que en Lima y la costa central⁶.

6. Ley de la Convención Nacional, Callao, 6 de febrero de 1855. Manuscritos, año 1855, D2087, BN.

El hecho de que los derivados del trigo no subieran de precio probablemente redujo en algún grado el golpe sobre el consumo popular. Hunt calcula, sin considerar el precio del pan, un aumento en el índice del costo de vida de 76% para el periodo entre 1855 y 1869; señala además que en una encuesta realizada en 1869 se llega a la cifra de 75% en el aumento de precios para el mismo periodo. Una vez considerado el pan dentro del índice elaborado por Hunt, asumiendo un precio constante de dicho artículo para todo el periodo, el costo de vida resulta aumentar sólo un 32% e inclusive menos, si se considera que en dicho lapso el precio del pan llegó inclusive a bajar⁷.

En la encuesta de 1869, los hacendados Enrique Swayne y Juan de Dios Quintana insisten en hacer referencia al hecho de que, desde la manumisión de esclavos, el precio de la fuerza de trabajo había encarecido los costos de producción. El ganadero Demetrio Olavegoya opinará por su parte que el aumento en el consumo de Lima, del orden del 70%, paralelo a un aumento de la población de Lima de cerca del 74%, entre 1836 y 1858, era una de las causas principales de la inflación⁸. Nos inclinamos a considerar que estos dos aspectos primaron en la inflación de 1854-1856, sobre todo el primero, como veremos cuando se trate la cuestión del jornal y los ingresos populares. El segundo factor fue de efectos a más largo plazo.

Desde otro punto de vista, la insuficiencia del 'stock' monetario, que mantenía de alguna forma la deflación de los precios desde 1830 aproximadamente, pudo servir de dique de contención para impedir una inflación. La exportación del circulante de plata, debido a la precaria condición de la balanza de pagos de dichos años, y a la subida del precio internacional del precio de la plata en relación al del oro, eran las causas principales de la escasez de circulante y consecuente deflación de precios. En consecuencia, se dieron medidas de política monetaria para tratar de solucionar el problema de la débil oferta monetaria y la existencia de moneda feble boliviana⁹. Estas medidas pudieron contribuir, aunque débilmente, a la inflación de los años 1854, al intentar solucionar la anomalía de la falta de circulante.

7. Hunt, "Guano and Growth", p. 87.

8. Concejo Provincial de Lima, *Datos e informes sobre las causas que han producido el alza de los precios de los artículos de primera necesidad que se consumen en la capital* (Lima: Imprenta del Estado, 1870), p. 56.

9. El problema de la moneda feble boliviana en el sistema monetario peruano se acarrea desde 1830, cuando se da una medida en Bolivia para alterar la ley de su moneda de plata. Se acuñaron 200 mil pesos en tostones, tomines, reales y medios, peso normal y de ocho dineros de ley. En 1836 Santa Cruz decreta que se acepte este tipo de moneda

En la década de 1850 ocurrió un desequilibrio en el coeficiente de bimetallismo internacional: subía el precio de la plata en relación al del oro debido a los hallazgos de reservas auríferas en California y Australia a partir de 1848. El Perú sufría las consecuencias de la subida en el precio de la plata al retirarse la plata acuñada fuera de la circulación. A consecuencia de este fenómeno Castilla dicta el decreto del 2 de junio de 1855 que devalúa en un 11.4% el peso fuerte peruano. Moreyra Paz Soldán explica este fenómeno de la devaluación del signo monetario como un intento de acercar el peso peruano a la moneda feble, frenando así el incremento del valor del precio fuerte frente al alza del precio de la plata¹⁰. Sin embargo, la medida no tuvo los efectos deseados porque el alza del precio de la plata superó el margen de la devaluación y el peso peruano siguió exportándose al exterior.

En la memoria de octubre de 1858 del ministro de Hacienda y Comercio, se señala que durante su ejercicio se constató una crisis monetaria en Estados Unidos y Europa que repercutió en una disminución del circulante en Lima. El ministro, Ortíz de Zevallos, atribuyó el fenómeno a "la influencia de las gruesas y constantes remesas de fondos al sur, y por la exportación metálica al Ecuador, causada por el alza extraordinaria del precio del cacao"¹¹. Ocurría esto en momentos en que se vencía el plazo, fijado por la ley de marzo de 1858, para amortizar y abonar intereses de los vales de consolidación y manumisión utilizando el escaso metálico existente. Es decir, los efectos deflacionarios de la escasez de moneda se dejaban sentir en fechas posteriores a 1854-1856. Como medida para impedir la huida del numerario en 1858 se giraron letras sobre Londres, es decir, se acudió al crédito externo.

Finalmente, el 2 de octubre de 1857 se promulga una ley monetaria que soluciona en parte el problema de la moneda feble. Se indemniza a los posee-

boliviana, de menor ley que la del peso de plata peruano, de ley de 10 dineros y 20 granos (1 dinero = 24 granos; 12 dineros = 1 marco de plata), para el pago de impuestos en el territorio peruano. La cotización externa del peso peruano era de 42 peniques, y la interna de 37 peniques debido a la existencia del feble boliviano: E.M., *La moneda en el Perú* (Lima: Tipografía A. Alfaro, 1859). Entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre de 1844 se amonedó la cantidad de 70,788 pesos con 8,233 marcos de ley de 8 dineros, en la callana de Pasco, según un contrato que aprobó el entonces jefe del ejército vivanquista en la sierra central, José Rufino Echenique. El tomó esa medida, según explica, "para sostener al ejército que está a mis órdenes". El Estado obtendría dos tercios de la utilidad en la operación, y el tercio restante iría a los socios de la sociedad fundadora de la Casa de Moneda de Quinua, compuesta por mineros de Cerro de Pasco: Documentos, 0020, BMNH.

10. Moreyra Paz Soldán, M. "El oro de California y Australia y su repercusión monetaria en el Perú", *Revista Histórica*, tomo 26 (1962-63), p. 245.
11. *El Peruano*, tomo 35, N° 17, 30 de octubre de 1858.

dores de esa moneda con una moneda devaluada de 465 granos, retirándose parte de la moneda feble de la circulación, reemplazándose por el sol de oro (equivalente a 20 pesos de plata). Con esta medida el coeficiente bimetálico se estableció en el Perú en una proporción de 1 : 16.69, cuando a nivel internacional esa relación entre los metales finos era de 1 : 15.24. Se le otorga por lo tanto una apreciable ventaja al oro en desmedro de la plata con la misma intención que la del decreto de 1855. Con esto la moneda feble boliviana es reemplazada por el oro al crearse tan favorables condiciones para la importación de éste. Los verdaderos beneficiados serán los comerciantes extranjeros que eran los principales interesados en hacer las transacciones en oro en tan buenas condiciones. En consecuencia, la moneda feble boliviana, muy difundida entre los sectores populares, se devaluó en un 23% hacia 1858¹².

En consecuencia, entre los principales causantes de la inflación de 1854-1856, la consolidación y conversión ocupan un lugar algo secundario. La manumisión de esclavos, la guerra civil, el aumento del consumo de Lima y la devaluación paulatina de la moneda, constituyen causales más aparentes en la explicación del revés económico que sufren las capas populares de Lima en esos años.

5.2 Ingresos populares

Es difícil medir la evolución de los ingresos populares en Lima de la década de 1850, y evaluar por tanto en qué medida los afectó el alza de precios discutida en el acápite anterior. La dificultad radica en la multiplicidad de tipos de ingreso entre los sectores populares. El 'jornal' proporciona tal vez mejores evidencias cuantitativas para ser estudiado. En la encuesta de 1869 se utiliza el jornal como medida de remuneración media del peón, y aparece también en cuentas de gastos de la época, a las que hemos tenido acceso. Guardando las debidas precauciones, pues nuestros cálculos no se basan en información seriada ni promediada sino esporádica, la evolución del jornal real en Lima, para la década de 1850, puede sintetizarse como se muestra en el cuadro 13.

Según el cuadro 13, el alza del jornal real es evidente, desde 1849 por lo menos, y especialmente notable entre 1854 y 1856 cuando sube en un 80%. Se desprende, como conclusión, la alta correlación entre subida de precios y el alza del jornal real. Este considerable aumento del jornal mínimo puede encontrar sus causas en la crisis de "falta de brazos" de dichos años. Un contemporáneo dirá con cierta indignación en 1858:

12. Esto se deduce en base a las opiniones del gerente del Banco de Lima, J. F. Lembcke, sobre las causas del alza de precios. Concejo Provincial, op. cit., pp. 10-11.

CUADRO 13
Evolución del jornal real en Lima, 1849-1869

Año	jornal nominal (reales)	jornal nominal (1849 = 100)	jornal real (nominal deflacionado)
1849*	2	100	100
1850	3	150	138
1854	3	150	126
1856	6	300	225
1869	6	300	198 [65**]

* el deflator utilizado corresponde a 1847.
 ** si el precio del pan no es incluido en índice.

Fuentes: Recibos y facturas, José M. Sancho Dávila, año 1856, Manuscritos, BN; Concejo Provincial de Lima, *Datos e informes*, p. 19; Cuentas del Hospital Santa Ana, año 1849, ABPL. Índices de precios: Gootenberg, "Artisans and Merchants", p. 246; Hunt, "Guano and Growth", p. 87.

"¿Queréis edificar una casa? Pues renunciad a tal idea, porque no hay operarios bastantes, ni tienen conocimientos técnicos (...) ya falta el albañil, ya el carpintero se antoja de descansar, ya vende el herrero las verjas y ventanas"¹³.

Aparentemente pues, el trabajador que dependía del jornal se benefició de la coyuntura económica de los años 1850, pues el costo de la fuerza de trabajo aumentaba en una proporción mayor que el costo de vida. Sin embargo, existía una diversidad de tipos de remuneración a los trabajadores, que no necesariamente seguían la tendencia del jornal mínimo. Por ejemplo, en una planilla de gastos en una obra de construcción se establece una diferencia de 150% entre los jornales más altos y los más bajos; los jornales más altos correspondían a mano de obra calificada. Un jornalero calificado por lo tanto debía ganar nominalmente, cuando era contratado para una obra de construcción, de 2 pesos a 2 pesos 4 reales en 1856. Esto nos induce a considerar los distintos estratos en la distribución ocupacional de Lima de la época; esto nos indicará qué porción de los sectores populares tenía, a través de la remuneración de su trabajo bajo la modalidad del 'jornal', cierta protección contra el alza de precios, y qué otra porción estaba desamparada económicamente cuando se dio el alza de precios entre 1854 y 1856.

13. Silva Santisteban, J. *Breves reflexiones sobre los sucesos ocurridos en Lima y Callao con motivo de la importación de artefactos* (Lima: Imprenta calle Nazareno, 1859), p. 33.

Según datos de Fuentes, la fuerza laboral de Lima en 1857, la constituían 41 mil personas, de una población total de 94 mil habitantes, distribuida de la manera señalada por el cuadro 14.

Se puede establecer, partiendo de las cifras del cuadro, que el 24.4% de la población ocupada lo constituían propietarios y sectores medios urbanos, y el 73.4% lo constituían trabajadores, jornaleros, artesanos, peones, sirvientes, etc., que formaban los sectores populares de Lima en 1857. Hemos visto cómo el alza de precios entre 1853 y 1860 pudo beneficiar en cierta medida a algunos sectores de la clase dominante al estimular la importación, las transacciones mercantiles y la producción agraria y de azúcar. También hemos constatado que aquella porción de los sectores populares que tenían colocación y recibían el pago de jornales pudo paliar de alguna forma el impacto de la inflación. Este sector, que tenía colocación y percibía jornales, estaba compuesto por dependientes del comercio, albañiles, peones urbanos y agrícolas, pocos artesanos y algunos sirvientes. Calculamos que el sector aludido debió comprender unas seis mil personas, el 20% de los sectores populares. Debemos subrayar el hecho de que gran porción de estos jornaleros eran contratados esporádicamente y no tenían trabajo permanente.

El resto de los sectores populares, el 58% del total de la población laboralmente activa, no tenía ninguna defensa contra la crisis de subsistencias y debieron sentir sus efectos frontalmente. La mayoría de los artesanos, los vivanderos, abastecedores, y los sirvientes de humilde condición, componían este estrato. Sus ingresos no dependían del jornal sino que eran ingresos independientes o simplemente inexistentes, como era el caso de los denominados "sirvientes de mano", categoría en la que se incluía negros, chinos, y otras castas dedicadas al servicio doméstico. Los artesanos independientes no sujetos al régimen del jornal debieron sufrir una merma considerable de sus ingresos, lo cual debió contribuir a su radicalismo hacia diciembre de 1858. Así mismo, parte de los sectores medios cuyos ingresos no se mantuvieron con el ritmo de la inflación, debieron haber sufrido el efecto de la crisis.

Se puede concluir que un 15% de las personas ocupadas en Lima, sufrieron los efectos del alza de precios en forma amortiguada, el 58% sufrió los efectos directamente y fueron tal vez los más afectados y, del 24% restante, sólo los grandes propietarios y comerciantes se beneficiaron. Las condiciones de vida adversas, por otra parte, preparaban el camino para la aparición de enfermedades epidémicas como el brote de fiebre amarilla en Lima y Callao en

CUADRO 14

Distribución por ocupaciones de la fuerza laboral de Lima
en 1857

Ocupaciones	Personas ocupadas	% del total de fuerza laboral
1) Militares (oficiales y tropa: 3,474); profesionales liberales; eclesiásticos (1,793); empleados de ministerios y otras dependencias (1,233).	6,954	16.9
2) Hacendados, dueños de tierra, agricul- tores, chacareros.	443	1.0
3) Dueños de establecimientos comer- ciales, hosteleros y posaderos.	2,612	6.3
4) Dependientes del tráfico mercantil (em- pleados).	629	1.5
5) Artesanos y obreros: sastres (1,742), zapateros (1,587), carpinteros (1,098), aprendices de carpintería (601), peones (337), albañiles (138), plateros, costureras (2,040), etc.	10,497	25.6
6) Abastecedores y vivanderos (chingare- ros, carniceros, aguaderos, dulceros, etc.) y pequeños comerciantes (buh- neros y mercachiles, tendejoneros, arrieros)	5,663	13.7
7) Peones agrícolas	949	2.3
8) Dependientes y sirvientes domésti- cos: lavanderas (3,147), sirvientes de mano (5,018), cocineros (2,205), ma- yordomos, etc.	12,474	30.3
9) Otros	970	2.4
Total	41,191	100.0

Fuente: Fuentes, M.A., *Estadística general de Lima* (Lima, 1858).

1854¹⁴. En contraste con las evidencias de la evolución positiva del jornal, la existencia de un crecido número de trabajadores independientes o marginales, sin defensa sólida contra la subida de precios, sentaba las condiciones para un descontento popular que potencialmente podía derivar en protesta violenta, la que no se hizo esperar.

5.3 Reacción de los desposeídos

La consolidación se dio en un contexto de profundos cambios económicos y agudos conflictos políticos. Jugó su papel en múltiples factores que hicieron del periodo 1850-1858 uno de los más violentos y caóticos de la joven República peruana. No podemos dejar de lado los efectos de la consolidación en la conciencia popular convulsionada por circunstancias políticas y económicas decisivas. Como vimos, la consolidación tuvo efectos económicos secundarios entre las causas del alza de precios. Otro es el problema de cómo reacciona el pueblo descontento contra la consolidación, o cómo se la utilizó en la agitación política contra Echenique que culminaría en la guerra civil de 1854, aspectos que a continuación analizaremos.

No cabe duda que la consolidación apareció en un lugar central en el conflicto político antes y después de la revolución de 1854. Cabe determinar cuál fue su real importancia entre las causas de dicha guerra civil, si es que se la utilizó como mero pretexto político, o si efectivamente influyó en los ánimos y la vida material de los que apoyaron la rebelión contra Echenique. Esta cuestión nos conduce a indagar sobre el carácter de la revolución de 1854 y la composición de los participantes en ella.

Lo primero que distinguimos sobre esta 'revolución' es su carácter generalizado a lo largo y ancho del país. El dilatado espacio en que se desarrolló, los temas sociales que puso en evidencia a amplios sectores, la diferencian de otros acontecimientos violentos anteriores. Hubo una participación de indios, negros, provincianos y sectores populares urbanos, tanto en los distintos ejércitos en pugna, como en los sucesivos levantamientos y motines acaecidos¹⁵.

14. Mendiburu, en sus "Memorias", da noticias sobre la aparición de la epidemia de fiebre amarilla en Lima en 1854. El general Vidal nos informa sobre su aparición en el Callao: "la fiebre amarilla, hacía tiempo diezmaba la población. Cuando tomé el mando de ese litoral, el muelle era un bosque, muladares inmensos en las calles públicas". Vidal, F. "Memoria escrita en 1855, después de la batalla de La Palma", (Lima, 1855), Manuscritos, D2227, BN; publicada en Fénix, 6 (1949), p. 636.

15. En palabras de Basadre, el estallido de 1854 lo fue "desde abajo, general, incontentible, mucho más vasto en extensión y en rigor que su precedente en 1834", así como constituyó "una expresión plebiscitaria del descontento contra un régimen al que esta vez se le acusaba de latrocinios". Además, "la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena inyectaron un sentido social, por primera vez, a nuestras guerras civiles. Todo el país se conmovió de un extremo a otro": Basadre, Introducción, tomo I, p. 312.

Esa participación popular inicial dio paso al predominio caudillesco. A nuestro modo de ver, un aspecto que da a la guerra civil de 1854 un carácter intermedio en la gama que va de una simple pugna entre caudillos a una revolución estructural, es la aparición del liberalismo radical que hizo eco de los acontecimientos europeos del año 1848¹⁶.

En 1855, representantes de la oposición en el Senado, entre ellos Vigil, Ureta, Quintana, Gálvez, Novoa, Costas y Cornejo, expresan el liberalismo radical nativo teñido de cierto hibridismo ideológico que resultará de su apoyo al caudillo Castilla. Este último pondrá freno a los proyectos más radicales, como lo fue la depuración de la deuda consolidada¹⁷.

La claudicación de sus principios más ambiciosos para dar paso a la dictadura de Castilla, será lo que criticarán, vivanquistas y conservadores, a la Convención de predominio liberal en 1855. Un contemporáneo que protesta contra la injerencia extranjera en 1857, describió así la situación:

"Continuó Castilla tranquilamente en posesión de la suprema y omnímoda autoridad: se instaló la Convención, y este cuerpo que debía pedirle cuentas de sus actos, se convirtió en el momento en biombo de sus iniquidades, prestándole su apoyo para todo lo malo y compartiendo con él la responsabilidad"¹⁸.

El periodista conservador Barriga y Alvarez acusa al gobierno de la revolución de decretar dos contribuciones nuevas como sustitutos al tributo indígena "después de halagar al indio con la libertad del tributo"¹⁹. Hubo por cierto alguna oposición al creciente dominio de Castilla que resultó insuficiente. Se

16. En Nueva Granada, Ecuador, Chile y Argentina, la actividad radical ya se había hecho presente con anterioridad a su aparición en el Perú. A Lima llegan durante los años 1850-1856 liberales desterrados de varios países. Los chilenos Pedro Félix Vicuña, José Victoriano Lastarria, Federico Errázuriz, el ilustre Francisco de Bilbao y el argentino Juan María Gutiérrez. Estos extranjeros contribuirán a la difusión del radicalismo en Lima. Bilbao escribió varias obras en Lima entre 1852 y 1855 que influyeron en jóvenes peruanos como José Casimiro Ulloa y Francisco Lazo. Bilbao tuvo también una participación comprobada en los acontecimientos sediciosos de los años 1854-1855 en Lima. Leguía, J. G. *Estudios históricos* (Santiago: Ed. Ercilla, 1939), pp. 124-125.
17. "Políticos ambiciosos de todo jaez, arribistas cínicos, jóvenes ilusos, doctrinarios enfáticos resultarán transitoriamente aliados en 1854 en una contienda que algunos calificaron como la lucha contra todo lo que había de experiencia republicana en el Perú". Basadre, op. cit., p. 312.
18. Anónimo, *El Tratado de 21 de mayo, o el protectorado anglo-francés* (Arequipa, 1857), p. 11.
19. Barriga y Alvarez, F. (Timoleón) *El Perú y los gobiernos del general Echenique y la Revolución* (Lima, 1855), p. 46.

evidenció en el conflicto entre el ejecutivo y el legislativo sobre la cuestión de los vales tachados. Al interior de la Convención en 1857, los representantes Tejada, Velarde, Ureta, Fernández, Gálvez, Escudero, y otros, se opusieron tercamente a que se rehabilitaran los vales tachados.

Los liberales Santiago Távara y Fernando Casós constituyen ejemplos de ideólogos atraídos por el caudillismo de Castilla. El primero defenderá fielmente la medida de la manumisión. El segundo no podía escapar de pertenecer a aquellos "hombres de clase media", que él mismo describe como "esa clase indefinible que no tiene lugar fijo en nuestra sociedad, ni que podría representar la bourgeoisie de Luis Blanc ni de Guizot"²⁰, y que el público limeño designaba con el nombre de "electores"²¹. Estos electores apoyaban a sus candidatos organizando banquetes, como el del hotel "La Bola de Oro" de los echeniquistas en 1851, y engrosaban luego las filas de la burocracia administrativa. El liberalismo de 1854 fue expresión de esos sectores medios urbanos, algunos de cuyos miembros se cobijaron bajo la sombra de un gran caudillo; el liberalismo radical no llegó a penetrar consistentemente a las capas populares. Sin embargo, el liberalismo radical contribuyó a su manera a preparar el contexto político que desencadenó la revolución de 1854 y la reacción popular.

La guerra civil de 1854 no fue una 'revolución social' a través de la cual las contradicciones sociales se resuelven más o menos con transformaciones socio-económicas orgánicas. Más bien cae dentro de la denominación de 'revolución política' que utiliza Fontana, en la cual los cambios económicos son coyunturales, aunque éstos luego obliguen a contemplar problemas más profundos y atraigan momentáneamente el apoyo de sectores sociales hasta entonces inactivos²². Si nos atenemos a la lucha de caudillos, característica que prevaleció al acercarse el final de la campaña de 1854, podríamos otorgarle al fenómeno de ese año el carácter de un simple golpe de estado. Sin embargo, si nos fijamos en el relativo arraigo popular inicial de algunas de las promesas de Castilla, en las provincias y en ciertos sectores populares urbanos, así como en la tenue toma de conciencia de sectores medios influidos por el radicalismo, nos interesaremos en el carácter social de ese golpe de estado.

20. Casós, *Para la historia*, p. 9.

21. Como ejemplo de un grupo relevante de electores tenemos a la sociedad electoral en apoyo a la candidatura de Echenique, formada en 1850, denominada "Sociedad Fraternidad y Unión Electoral". Significó un intento de encontrar cierta permanencia en el apoyo político al caudillo. De sus filas surgirán los echeniquistas que ocuparan cargos oficiales importantes, así como los más destacados 'consolidados', una vez que Echenique llegue al poder en 1851.

22. Fontana, J. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX* (Barcelona: Ariel, 1973), p. 102.

Echenique, en sus memorias, da algunas pautas para entender el estímulo al "espíritu revolucionario en todo el país", e inclusive en la costa norte y Lima, a la cual consideraba un sólido bastión suyo. Luego de la inicial pérdida de Arequipa y de la región sur del país a manos de Castilla, quedó Echenique sin otro apoyo que el de su ejército, pues "las masas estaban completamente fanatizadas y seducidas"²³. En la sierra de la provincia de Lima Echenique pudo asimismo comprobar que, en lo que se refería a la revolución de Castilla, "la indiada también era adicta a ella por la exoneración de tributo"²⁴. Partidas de negros vitoreaban a su libertador en motines, y bandas de montoneros y grupos armados, apoyados por hacendados, azuzaban a las tropas echeniquistas en Chancay²⁵.

Ante la complejidad de causas que dieron origen a la guerra civil de 1854, los opositores de Echenique simplificaron el problema con una serie de acusaciones que serían agitadas como los fundamentos de las rebeliones de Elías y Castilla. Se atribuyeron las principales razones siguientes: (1) La equivocada política de Echenique de apoyar la expedición del reaccionario general ecuatoriano Flores que intentaba derrocar al liberal Urbina en Ecuador, la cual resultó un rotundo fracaso (según Echenique esto buscó impedir la "propaganda socialista" difundida desde Nueva Granada y Ecuador hacia el Perú); (2) los excesos, fraudes y favoritismos de la consolidación y conversión de la deuda interna; (3) la incapacidad de la administración Echenique de defender el honor nacional frente a Bolivia, ante el "ultraje" sufrido por los delegados peruanos en su visita al presidente boliviano Manuel Belzú. Algunas de estas causas superficiales ocultaban ambiciones personalistas y buscaban promover pasiones nacionalistas que pudiesen aglutinar a masas manipulables. No hay, en esta enumeración de razones, un tratamiento serio de los conflictos sociales que contribuyeron a atizar la oposición a Echenique.

Un ejemplo de cómo se utilizaban argumentos de manipulación y las formas que adquiriría su agitación lo encontramos en el texto de un pasquín, o volante, y el proceso judicial que acarreó su diseminación en el Teatro Principal de Lima, en noviembre de 1853. Este pasquín era uno de los muchos que, según Casós, aparecieron en los últimos meses de 1853 en Lima y las capitales de departamento conteniendo "el primer rugido de un león todavía encadenado, del pueblo que disgustado de todo iba a romperlo y salvarlo todo"²⁶. Estos

23. Echenique, *Memorias*, tomo 2, p. 215.

24. *Ibid.*, p. 216.

25. Mendiburu, *op. cit.*, pp. 762, 879.

26. Casós, *op. cit.*, p. 98-99.

pasquines anunciaron el preludio de la revolución de 1854 y buscaban preparar a la opinión pública. Con audacia se arrojaban en la calle en pleno día y en las funciones de teatro donde asistían autoridades y personalidades diplomáticas. Precisamente, la noche del 16 de noviembre de 1853, unos osados e impunes opositores de Echenique arrojaron por una claraboya del techo del teatro varios ejemplares del siguiente pasquín:

"A LA NACION

¡Peruanos! El imbécil de Belzú se está enseñoreando en nuestro territorio, porque otro imbécil, tan estúpido como aquél, y el más corrompido de los gobernantes que hasta hoy se han conocido en el mundo, ha sacrificado el honor nacional a su sórdida avaricia, y la tranquilidad de los pueblos a las miras más ruines y rastreras. Mientras el Perú en masa clamaba por vindicar el honor nacional, vilmente ajado, nuestro inmoral gobernante se ha ocupado exclusivamente en cebar la voracidad rapacera de sus deudos y cómplices. Cuando el Perú poderoso pudo y debió emplear sus inmensos recursos en gloriosa lid, los desnaturalizados de Echenique y Torrico han estado asiduamente consagrados al saqueo de la hacienda nacional. No satisfechos con el ingente caudal que les produjere el interregno del ministerio enciclopédico*, descontentos aún del *escandaloso robo, que se llama consolidación*, con la sed del hidrópico y con el cinismo más supino, han esclavizado la suerte de cinco generaciones peruanas con la *inaudita maniobra de la conversión* que ha agotado el crédito del Perú en las circunstancias más premiosas, en los momentos más solemnes (...) ¡Peruanos patriotas! justo es combatir al boliviano osado que insulta a la Nación: pero es más justo todavía derribar del solio, que tan indignamente ocupa, a ese otro boliviano** que ha corrompido y envilecido al Perú hasta la infamia. Hombres tenemos que aún pueden salvar a la Patria de la abyección: recorred el catálogo de los valientes, y honrados patriotas y vereis descollar a ¡CASTILLA! ¿deseáis un gobierno civil en democracia y progreso? volved los ojos hacia el esclarecido ciudadano, que hoy mismo sacrifica su fortuna y su familia con heroico denuedo***" [Subrayado nuestro A.Q]²⁷.

27. * ¿Se alude al ministro Manuel de Mendiburu?

** Durante la campaña electoral de 1851 se acusó a Echenique de no ser peruano, como forma de oponer su candidatura, y de haber nacido en un pueblo de Bolivia.

*** Es una alusión directa a la campaña anti-echeniquista de Domingo Elías.

"El Supremo Gobierno contra d. Carlos Zuderell, empresario del Teatro Principal y de nacionalidad francesa, y Adrián Bielich de nacionalidad italiana, por diseminar pasquines subversivos al Gobierno en el interior del teatro". Expedientes Judiciales, Subversión, AGN.

La confusión de las autoridades y la xenofobia que las embargaba en esos momentos, se expresan en el proceso judicial que sigue al incidente del teatro. Se culpa a la esposa de un ciudadano italiano, Adrián Bielich, porque esa noche ocupaba un palco cercano al lugar por donde arrojaron los volantes. De paso se involucra, bajo el supuesto de complicidad, al dueño del Teatro Principal, el francés Carlos Zuderel. En el expediente del proceso se suceden varias declaraciones de ilustres asistentes a la función de esa noche, cónsules y comerciantes extranjeros, quienes testificaron la inocencia de los acusados.

El cónsul francés Ratti-Menton eleva su protesta ante la irracional acusación, y así se da fin a este tragicómico episodio con la inocencia reconocida de los acusados. Este incidente también debe ser tomado como ejemplo de las hostilidades existentes entre el gobierno de Echenique y las legaciones francesa e inglesa que brindaban ayuda a los rebeldes Elías, Castilla y otros.

Del texto del pasquín se desprende que la oposición a Echenique tenía en su centro el escándalo por la consolidación y la conversión, aparte del asunto de Belzú. Pero ¿qué había detrás de todo aquello? Dejemos hablar ahora a los acusados por el pasquín para ver si podemos extraer algo en claro; Mendiburu afirmará que:

"La consolidación y la guerra a Bolivia no pasaban de arteros pretextos en la conciencia del general Castilla: la realidad de su enojo con el Gobierno procedía de la candidatura del general Torrico, fomentada de un modo indiscreto por sus partidarios, y que para aquél era una amenaza insoportable"²⁸.

Por su parte Echenique considera como una importante causa de la rebelión de 1854 la desmedida ambición de Elías, que buscaba borrar algunos malos manejos del carguío del guano y librarse de la bancarrota con el triunfo de la revolución²⁹. Otras causas argüidas por Echenique incluyen las siguientes: las pretensiones de aquellos que buscaban acceder a empleos del Estado; la ley de la consolidación que permitió los abusos a que su régimen se vio expuesto; y los "partidos" que apoyaron a Torrico y Deustua que despertaron recelos en muchos. Las razones aludidas por Mendiburu y Echenique tienen tal vez demasiado en consideración los aspectos personalistas. Es evidente, sin embargo, que las exigencias de guerra contra Bolivia por los opositores de Echenique,

28. Mendiburu, *op. cit.*, p. 730.

29. Echenique, *op. cit.*, pp. 207-208.

no sirvieron más que de pretexto para desprestigiar a su régimen, pues cuando Castilla llega al poder; los afanes bélicos se olvidan. El caso de la consolidación necesita un análisis más detenido ya que se relaciona con las causas más profundas de la revolución de 1854.

La rebelión armada contra Echenique empezó en Ica en diciembre de 1853 bajo el mando del caudillo civil Domingo Elías. Paralelamente el coronel J. B. Goyburu y otros seguidores de Elías intentaron sin éxito tomar la ciudad de Chiclayo, defendida por Juan M. Iturregui y sus fuerzas, en enero de 1854. Elías sufre así mismo derrota en Saraja, Ica, el 7 de enero de 1854, a manos de Torrico, y huye a Chile para aparecer nuevamente en campaña contra Echenique en el sur, pero esta vez bajo las órdenes de Castilla.

Los alzamientos de Cajamarca, el 3 de enero, y de Arequipa, el 7 de enero de 1854, representan, a diferencia de los alzamientos de los seguidores de Elías, genuinas demostraciones de repudio provinciano al gobierno capitalino de Echenique. La participación popular es mayor y reivindicaciones propias son exigidas.

En Cajamarca es el pueblo provinciano el que precipita los acontecimientos al protestar con decisión contra el reclutamiento forzoso realizado por agentes del gobierno a mando del sub-prefecto. En momentos de crisis políticas, como lo fue el inicio del año 1854, el reclutamiento de ciudadanos era una medida adoptada por el gobierno con el fin de aquietar las protestas, reprimir la oposición y agenciarse soldados³⁰. En consecuencia el 3 de enero de 1854, el cuartel de Cajamarca, destinado como prisión de 180 reclutas, fue sitiado por el pueblo armado de objetos rústicos. Se fija un plazo para que se entregue a los cautivos; al vencerse el plazo, las fuerzas que defendían el cuartel desatan fuego, pero al acabárseles las municiones, luego de varias horas de asedio, la guarnición es escalada por varios puntos, tomada por el pueblo y liberados los reclutas. Esta acción es a las claras un acto espontáneo de las masas cajamarquinas que protestan contra la opresión centralista de un ejército repudiado.

30. En 1850 se utilizó el reclutamiento para internar a ciudadanos votantes en las vísperas de las elecciones de dicho año, con el evidente propósito de asegurar la victoria electoral de Echenique; en esa oportunidad ocurrieron protestas y hubo un enfrentamiento en Lima entre los agentes de policía y el pueblo el 9 de febrero de 1851. Martínez, M. (editor) *Relación sucinta de los principales hechos ocurridos en algunos pueblos del Perú, con motivo de la injerencia de funcionarios políticos en la renovación de los colegios electorales* (Lima: F. García, 1850), p. 36.

El 4 de enero, inmediatamente después de los acontecimientos descritos arriba, se erige una Junta Departamental presidida por los ciudadanos notables Juan A. Egúsquiza, Pedro J. Villanueva y Toribio Casanova. Esta Junta desconoce la autoridad de Echenique y decreta el establecimiento de Cajamarca como departamento. El departamento de Cajamarca tuvo así un origen de auténtica afirmación popular. Posteriormente hubo intentos por parte del movimiento cajamarquino de apoderarse de Huamachuco, pero no fueron exitosos; el 4 de marzo el general Vigil recupera Cajamarca para el gobierno de Lima³¹.

En Arequipa, la intervención de cabecillas en el tumulto popular fue más evidente que en el caso de Cajamarca. El 7 de enero de 1854 los hermanos Diego y Manuel Masías, con larga fama de sediciosos, encabezan las turbas que toman la intendencia de policía³². Otros líderes del levantamiento de 1854 en Arequipa fueron Domingo Gamio, José A. Abril y Fernando Alvizuri, cuyas fuerzas lograron dominar a las del prefecto. Hubo también participación de grupos de artesanos en el movimiento. Por otro lado, en el asedio del puerto de Islay por los rebeldes, luego de la toma de Arequipa, se distinguen los "rufianes" Hilario Muñoz, alias 'el bayetillero', y Fermín Fuentes, alias 'chicha fuerte'. Sin embargo, los que finalmente dirigen la Junta Departamental de Arequipa son los notables Francisco Llosa, el coronel Luis Lobato y José Narciso Campos, los cuales ratifican el 8 de enero a Fernando Alvizuri como comandante general y a Diego Masías como intendente de policía. El acta de pronunciamiento de Arequipa desconoce la autoridad de Echenique y pone en primer plano la necesidad de declarar la guerra contra Bolivia, como una de las reivindicaciones exigidas por los departamentos del sur³³.

Es en ese momento, cuando la rebelión de Arequipa y su Junta Departamental va perdiendo impulso y perspectiva, que Castilla aparece en el sur después de fugar de Lima, y asume el mando del ejército "libertador" del sur. Luego de una escaramuza con Torrico, Castilla queda dueño de los departamentos del sur. Mendiburu opinará sobre la sublevación de Arequipa de 1854:

"El levantamiento de Arequipa no habría tenido un carácter grave sin el jefe que supo aprovecharse de él: sin su proclama incendiaria no se habría

31. El texto del acta de Cajamarca y descripción de acontecimientos en *El Comercio*, 21 de enero de 1854.

32. *El Comercio*, 16 de enero de 1854. Los hermanos Masías tuvieron principal participación en los acontecimientos de abril de 1851 que enfrentaron a partidarios vivanquistas contra tropas del ejército. Valdivia, J. G. *Memorias sobre las revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866* (Lima, La Opinión Nacional, 1874), p. 290.

33. *El Comercio*, 20 de enero de 1854.

popularizado la revolución cuyo espíritu penetró luego y se apoderó de todas las clases sociales; sin ese caudillo la moral militar se hubiera librado de un funesto estremecimiento y la lealtad de las tropas mantenídose a cubierto de dudas y sospechas"³⁴.

Se debe considerar que, debido a que la consolidación fue un fenómeno que benefició básicamente a la clase dominante capitalina, los notables y pueblos provincianos utilizaron el escándalo de la consolidación como un motivo más para rechazar al gobierno Echenique y la corrupción capitalina. Sin embargo, en provincias, el impulso más preeminente fue la búsqueda del gobierno local autónomo mediante el establecimiento de las distintas juntas o consejos departamentales. A los pronunciamientos de Cajamarca habría que añadir los de Pasco, Jauja, Huánuco y Huaraz: las provincias se pronunciaban por primera vez en tal magnitud. Según Casós, los principales pronunciamientos provincianos fueron alrededor de catorce en el año 1854³⁵.

Las Juntas Departamentales lograron ser dominadas por personalidades notables, propietarios, militares de alta graduación, que luego perderían la iniciativa frente al caudillo Castilla. El "Libertador" supo, con astucia, acoger a estas juntas en un primer momento, así como también lo hizo con los afanes liberales de reforma, tales como la supresión del tributo y la abolición de la esclavitud, para luego modificar sustancialmente el carácter de estas reivindicaciones. En el sur, en los departamentos de Puno y Cusco, donde existía la mayor cantidad de tributarios indígenas, se da un inicial apoyo a Castilla. Sin embargo, muchas de las provincias que brindaron su apoyo a Castilla en 1854 reaccionaron luego en contra de él en 1857, como fue el caso de Arequipa y los departamentos del norte que apoyaron la rebelión de Vivanco.

El 4 de abril de 1854, Castilla asume el mando dictatorial de las zonas rebeldes del sur con el título de "Libertador" y promete llamar a una Asamblea Constituyente en un plazo de treinta días: "Que los pueblos, con sus desórdenes parece que se propusieran abrir paso a la tiranía, es una verdad que salta a los ojos"; es ésta la conclusión que Mendiburu obtiene de su versión de los resultados de la revolución de 1854.

En Lima, los graves acontecimientos del 5 de enero de 1855 tuvieron como precedentes una serie de acciones de oposición a Echenique en 1854. El

34. Mendiburu, "Memorias", p. 730.

35. Entre los principales pronunciamientos están los de Ica, Chiclayo, Cajamarca, Arequipa, Pasco, Huaylas, Huari, Huancané, Tacna, Lampa, Tarapacá, Lucanas, Cusco, La Unión, en ese orden. Casós, op. cit., p. xiii.

mismo Echenique reconoce que, contrariamente a sus previsiones, Lima se convirtió en un nuevo frente de lucha, a pesar de intentos suyos por ganar adeptos entre los sectores medios en busca de puestos en el Gobierno, y de haber otorgado aumentos de sueldos al ejército. Atribuye esto a la acción disociadora del liberal Colegio Guadalupe, así como a la existencia en Lima y sus provincias de una "indiada adicta" a la revolución de Castilla, como consecuencia de la supresión del tributo. Estos dos factores señalados por Echenique, expresan las dos vertientes en las acciones del 5 de enero: los sectores medios y los sectores populares.

Entre agosto y octubre de 1854, mientras Echenique estaba en campaña en el centro del país, se produjeron varios motines y desórdenes en Lima y Callao. El 24 de octubre ocurrió en Lima una tentativa sediciosa, promovida por rebeldes que a gritos atrajeron a la Plaza de Armas a un gran número de personas. Entre los agitadores se distinguieron al actor dramático D. N. Ologhlin, el coronel Joaquín Torrico, amigo de Castilla, y varios chilenos que "sin exponerse al peligro, azuzaban a la gente del pueblo para que se levantara"³⁶. Este intento de rebelión fue debelado por la guarnición de Lima al mando del Mariscal La Fuente³⁷. En el Callao se produjeron varios motines que fueron sofocados por el gobernador del puerto³⁸. De esta manera una acción represiva eficaz impidió desbandes populares promovidos por agitadores que actuaban bajo consignas de Castilla. Ante este peligro en Lima, el ejército de Echenique debe regresar a Lima.

La represión ejercida por las fuerzas de Echenique lo hacía cada vez más impopular. Algunos documentos demuestran la magnitud de dicha represión. Por ejemplo en Arica, luego del alzamiento del 3 de marzo de 1854, resultaron presas 55 personas, entre ellas 24 cabecillas³⁹. Como resultado de estos encuentros hubo 421 muertos en los primeros tres meses de la guerra civil⁴⁰. La suerte que corrían los apresados en actividades antigubernamentales, o los simples sospechosos, era que se les recluía en casamatas, y luego de un tiempo se

36. Mendiburu, *op. cit.*, p. 854.

37. Basadre, *Historia*, tomo 4, p. 108.

38. Vidal, "Memoria", p. 636.

39. "Lista de personas que han tomado parte en la revolución que estalló en esta ciudad el 5 de marzo del presente año de 1854", informe del comandante del Resguardo de Arica al prefecto de Tacna, Manuscritos, 1854-D2193, BN.

40. Casós, *Para la historia*, p. xii.

les remitía a las islas Chincha⁴¹. Las islas Chincha eran un lugar terrible por el régimen de trabajo forzado impuesto a los detenidos y las pésimas condiciones de salubridad; los presos políticos tenían que compartir su suerte con los culís cargadores del guano. Este procedimiento se aplicaba a los opositores humildes tanto de Lima como de provincias. Esto no ocurría con personajes ilustres de la oposición, por ejemplo Pedro de la Quintana y Francisco Quirós, a quienes se les deportaba o se les brindaba libertad bajo fianza⁴². Con todo esto, la impopularidad de Echenique crecía a cada momento.

El 5, y en parte también el 6 de enero de 1855, los pobladores de Lima inician una acción de saqueo, ataque a instituciones públicas, y destrozos en las residencias de los funcionarios del gobierno de Echenique y sus allegados, los "consolidados". La reacción fue violenta y se sacó provecho tanto de la situación de falta de vigilancia, pues la mayoría de las tropas gubernamentales estaban combatiendo en La Palma, Surquillo, como de la noticia de que el ejército de Echenique estaba siendo derrotado en la madrugada del 5 de enero. El análisis detallado de las características de este desbande popular nos proporciona una perspectiva más completa del fenómeno de la consolidación y del efecto que produjo en la conciencia de los sectores populares.

El 4 de enero a medianoche se inicia la batalla de La Palma entre el ejército de Castilla, situado en el pueblo de Miraflores, y el de Echenique, posesionado de la Huaca Juliana. En la madrugada del 5 de enero el ejército echeniquista empieza a desertar. El general Vidal que se encontraba en la retaguardia fue golpeado y su caballo herido al intentar contener el desbande. Los restos del ejército de Echenique empiezan a entrar desordenadamente a la ciudad de Lima a las siete de la mañana. El general Echenique pide asilo en la casa del encargado de negocios inglés⁴³. Fue en estas circunstancias que se produjeron las acciones siguientes:

- (i) Toma de los campanarios y repique de campanas en señal de victoria y desorden general; en la toma de San Pedro descuella el radical chileno Francisco Bilbao.
- (ii) Despojo de armas y municiones a los soldados fugitivos.
- (iii) Agrupación de los amotinados por partidas.
- (iv) Dispersión de las tropas

41. "Relación de los presos políticos que existen en casamatas que serán remitidos a las islas Chincha. Comandancia General del Departamento de Marina y Armas.... Lima, julio 18, 1854" Manuscritos, 1854-D1186, BN.

42. Vidal, op. cit., p. 636.

43. *El Comercio*, N° 4628, 5 de enero de 1855.

de las guarniciones de Palacio, Policía, Prefectura y carceletas por las partidas armadas; el fuerte Santa Catalina no fue tomado. (v) Toma de Palacio a las seis de la mañana, huyendo la caballería que lo defendía hacia el Callao. (vi) Sublevación del pueblo del Callao que nombró, improvisando, como su gobernador a un Sr. apellidado Roca. (vii) Saqueo de la casa particular de Echenique, la quinta de su esposa, y las residencias de algunos de sus familiares. (viii) Además, se saquearon las casas de los que recibían el nombre de "consolidados", aunque se menciona que algunas casas particulares, como la de las hijas del general Eléspuru, se confundieron por las de éstos. (ix) Ataque al Instituto Militar de la calle Espíritu Santo; se destruye el mobiliario y muere el cadete Nicanor Toledo. (x) Intentos por "turbas desenfrenadas.... vitoreando el triunfo de Castilla y acaudilladas por hombres perversos"⁴⁴, de asaltar la casa del ministro inglés Sullivan, que asilaba a Echenique; se tiene que extender la bandera inglesa para impedir el asalto.

Manuel de Mendiburu, en sus memorias, narra la situación cuando entró en Lima el 9 de enero de 1855, cuatro días después de los violentos acontecimientos descritos arriba:

"Aún había en la capital restos del espantoso desorden causado por el acontecimiento habido en sus campos suburbanos y que tenía conmovida a la sociedad entera. Pandillas de negros, vitoreando a su libertador, cruzaban las calles confundiendo con los grupos de gente vulgar y turbulenta, todavía alborotada y más propensa a excesos extremados que a celebrar triunfo alguno. El abrió ancho campo y fue poderoso excitante para que el día 5, y parte del 6, la viciosa y desalmada multitud se mostrase a los más repugnantes atentados. Mostróse impacable, furiosa, contra las personas elevadas del anterior régimen; porque ciertos demagogos envidiosos y vengativos le irritaban y azuzaban para que cometiese inicuos desafueros, a tiempo que con sus atronadoras voces hacían invocaciones a la libertad y la moralidad. Se apostrofaba con los epítetos de *ladrón* y *consolidado* a aquellos sobre quienes cargaba más el odio de los vencedores y el de los que atizaban los escándalos.

Fui uno de los malaventurados en esas horas aciagas; y, mientras mi nombre se vilipendiaba, mi familia era víctima de una persecución estúpida y se invadía a mi casa para robarla. El populacho, en que se distinguían no pocos facinerosos de aquellos que vienen a Lima huyendo de la justicia de su país, trajo consigo y rodado por el tránsito un cañón perteneciente al colegio militar....Preparábanse para hacer fuego a las puertas que se mantenían cerradas, cuando acudió de un cuartel próximo, a poner término a

44. Echenique, op. cit., tomo 2, p. 225.

aquel acto de barbarie, un oficial con tropa enviada por el mariscal San Román, quien hallábase en una casa cercana a la mía, fue rogado para que dictase orden que refrenase a los ejecutores de tan torpes extorsiones.

Las fincas del general Echenique, de sus deudos y de diferentes funcionarios, sufrieron crueles ataques, efectuándose en algunas como en el palacio de gobierno, un completo saqueo y destrozo que algo se extendió a los ministerios, oficinas públicas y archivos. La quinta del ex-presidente titulada "La Victoria" en la cual existían valiosos objetos, quedó totalmente vacía; y para talar sus sembradíos, se situaron en ellos las caballadas del ejército titulado Libertador...⁴⁵.

Por un despacho del prefecto de Lima al ministro de Justicia del gobierno Castilla, el 12 de abril de 1855, nos enteramos que, como consecuencia de los graves daños ocasionados a las oficinas de la Prefectura el 5 de enero, "desaparecieron todos los papeles y libros"⁴⁶. Así mismo el general Francisco Vidal se quejaba amargamente en su memoria después de la batalla de La Palma de la siguiente manera:

"A mi llegada [a Lima] encontré a la plebe desvandada, y saqueando una casa en la calle de los borricos, que si no hubiera sido [tachado : por la caridad de] por las señoritas Cocíos, habría caído en manos de esta (...). Mi casa robada en la noche del 5 de enero, entre otras cosas se llevaron una papelera en que tenía las diplomas y despachos de mis servicios prestados a la patria. Las Haciendas [tachado : que tenía en arrendamiento] Marqués y Copacabana, destruidos sus capitales por los montoneros de la revolución, mis esclavos que hacían el patrimonio de ocho hijos de menor edad todo lo he perdido en un día, con lo que se ha labrado la desgracia de mis hijos tiernos..."⁴⁷.

Se pueden distinguir dos tipos de acciones de la arriba enumerada serie de acontecimientos del 5 de enero: en la primera participaron agitadores -castillistas, radicales peruanos y extranjeros y otros-, los cuales movilizaron a parte de la masa para colaborar con los objetivos del ejército "Libertador"; la segunda consistió en actos desordenados, testimonio de los excesos de aquellos sectores que se dedicaron al saqueo, aprovechando el desprestigio de autoridades echeniquistas y consolidados, para asaltar sus domicilios y propiedades.

45. Mendiburu, "Memorias", p. 879.

46. Juan Buendía a ministro de Justicia, expedientes judiciales, AGN.

47. Vidal, op. cit., BN, ff. 161-162.

Se pueden contar entre las acciones del primer tipo, la toma de campanarios y repique de campanas anunciando el triunfo de Castilla y señal de la rebelión general, la organización de partidas armadas y el ataque a las dependencias estatales y residencias de echeniquistas notables. Sin embargo el control sobre las masas era débil y, en consecuencia muchas de las acciones corrieron a cuenta de la espontaneidad de las turbas. Así, por ejemplo, el ataque a la prefectura y el destrozo de su mobiliario, libros y papeles muestra una actitud de repudio a una institución que reprimió incesantemente por más de un año, y la intención de destruir evidencias contra inculpadlos. Lo anterior también se podría decir del ataque a carceletas. Estas acciones derivan asimismo en hurto y saqueos de propiedad privada.

El desordenado ataque a residencias de personas a quienes el acervo popular consideraba enriquecidas ilícitamente por la consolidación, demuestra que no había clara conciencia entre las masas de quiénes eran realmente los consolidados cabezas del negociado. Es muy probable que el ataque dirigido ese día contra las propiedades de los supuestos consolidados, no haya sido más que un pretexto para el saqueo de personas conocidas por su posición encumbrada, a quienes se les sindicaba como blanco del descontento popular. Por otro lado, la manipulación política se sirvió de la palabra 'consolidado' para descargar violencia contra funcionarios echeniquistas que no necesariamente fueron enriquecidos por la consolidación, como es el caso de Mendiburu.

El ataque a la casa de las hijas del general Eléspuru resulta ilustrativo. Se dijo en la prensa de la época que se tomó dicha residencia equivocadamente por la del vecino, Manuel María Cotes, sindicado como consolidado y pariente de Echenique. Hubo también otros casos, como el saqueo de las haciendas del general Vidal arrendadas a terceros, donde se saqueó el mobiliario de, se dice, inocentes inquilinos que tenían en arrendamiento propiedades de supuestos consolidados. Sin embargo, ¿cómo distinguir entre el saqueo a consolidados y el ataque a personas de alta posición social? El mismo general Juan Bautista Eléspuru, quien fuera prefecto de Lima en 1829, denunciado por participar junto al comerciante Pfeiffer en el monopolio de harinas provenientes de Chile⁴⁸, bien pudo ser objeto del descontento popular debido al alza de precios. Es claro que para la clase dominante era necesario soslayar estos excesos, desvirtuando las acciones del 5 de enero, presentándolas como la expresión del odio extrañado de las turbas contra los consolidados. Un artículo aparecido en 1856 dirá a propósito del "error" cometido contra las hijas inocentes de Eléspuru: "Así el furor de la 'santa indignación', hace dar palos de ciego y que paguen justos

48. Basadre, op. cit., tomo 4, p. 28.

por pecadores; así se hace hoy [1856] purgar al honrado comerciante la culpa del empleado impuro, o de algunos pillos consolidados"⁴⁹.

Bien dice el refrán que del árbol caído se hace leña. Así, a los consolidados se les culpó exageradamente. El término 'consolidado' sirvió en los momentos triunfantes de la revolución de Castilla para el desprestigio de opositores, utilizándolo con la fuerza del cliché popularizado. En oposición se resaltaba la honradez y el patriotismo de Castilla. Era un mecanismo para exaltar la figura del caudillo ante las masas; las masas, a su vez, se veían influidas por la figura y promesas del caudillo. El recibimiento jubiloso a Castilla después de la batalla de La Palma, y los grupos de negros vitoreando su nombre, expresan ese fenómeno.

Una interrogante importante queda aún por contestar. ¿Cuáles son las pruebas de la participación popular en los saqueos espontáneos que se dieron en la capital aprovechando el desorden? Nuestra búsqueda entre las listas de enterrados del 5 de enero y días posteriores, en los libros de entierros del archivo de la Beneficencia Pública de Lima, resultó infructuosa para determinar quiénes resultaron muertos en los saqueos y quiénes en la batalla de La Palma. *El Comercio* calculó que hubo unos doscientos muertos en la batalla, con lo cual siempre resulta secundaria la atención puesta por los contemporáneos en el número de muertos de las acciones en Lima del mismo día. Entre las causas criminales de la Corte Superior de Justicia sí logramos encontrar algunos indicios. Los resultados fueron limitados pero significativos. En un proceso seguido contra Rufino Paza y Eusebio Aguilar por robo ocurrido el 5 de enero pudimos encontrar algunas respuestas.

El día de la batalla de La Palma, luego del desbande de las tropas de Echenique, le fueron robados al arriero de los batallones Huancané y Motupe, del ejército "libertador", sus mulas y los bienes del coronel José María Tejada, cusqueño, soltero, de 41 años de edad. Los bienes de Tejada eran 30 onzas de oro sellado, 136 pesos de plata, ropa fina importada y un documento de cancelación por 40 mil pesos a su favor. El lugar donde ocurrió el hurto estaba situado entre las haciendas San Juan y San Tadeo en Surco. Los implicados en el caso fueron descubiertos a raíz del hallazgo del baúl vacío del coronel, dividido por una partida comisionada por el prefecto Buendía (con el fin de recuperar ganado disperso y bienes robados durante la batalla de La Palma), sobre el techo de un humilde rancho de la zona. El interrogatorio que siguió a este descubrimiento revela los detalles del caso:

49. Anónimo, *Al Gobierno*, p. 74.

Rufino Paza, 23 años, casado, natural de Arequipa, de "color cholo", residente en Chorrillos por siete años y de oficio pescador, salió el 5 de enero de Chorrillos con dirección a Surco; en la hacienda San Juan fue "reclutado" como guía por un coronel del ejército "libertador". Paza se quedó con un grupo de soldados de caballería que cerró el paso al arriero de los batallones Huancané y Motupe, despojándole del oro, la plata, ropa y huyendo enseguida. Paza ofreció su ayuda para cuidar el baúl saqueado y las mulas mientras que el arriero, abancaíno y quechua hablante, iba por ayuda. En lugar de prestarle su ayuda al arriero, Paza se apropió de las mulas, sus aparejos y el baúl vacío con la colaboración de Eusebio Aguilar, natural de Trujillo, mestizo, residente en Surco por seis años, casado y de oficio labrador, y del negro Raimundo de la Hacienda San Juan. Aguilar sería apresado el 16 de enero en el rancho de propiedad de su suegro donde se encontró el baúl. Paza fue ubicado en la casa del gobernador de Chorrillos donde se encontraba recluido por un escándalo; el negro Raimundo no pudo ser hallado.

Paza estuvo preso con anterioridad en 1848 por ser sospechoso del hurto de 1,200 pesos, cantidad depositada en el almacén de la casa del comerciante José Canevaro, uno de los grandes beneficiados por la consolidación, donde trabajaba como doméstico. Fue absuelto en esa oportunidad por falta de pruebas. A consecuencia del fallo del proceso judicial contra los inculpados del caso del baúl, Paza y Aguilar son condenados a cuatro años de presidio por su acción del 5 de enero⁵⁰. De este caso se puede verificar la actitud de individuos de extracción popular con respecto al desorden ocurrido en ese día violento. Aquellos mismos individuos que atentaron contra la propiedad de sus empleadores, ricos comerciantes y oficiales, como en el caso de Paza y la partida de soldados, se aprovecharon de la ocasión que se les presentó aquel día para 'expropiar' a sus opresores.

Estos excesos alarmaron a los defensores del orden y la propiedad privada, desatándose luego de los sucesos del 5 de enero una represión encabezada por el prefecto castillista de Lima, Juan Buendía. Él publicó comunicados instando a la población a que devuelva las armas arrebatadas a los soldados de Echenique. En dichos comunicados se lee que "el gobierno revolucionario tomó las medidas para salvaguardar las vidas y propiedades de los ciudadanos". Se forman partidas para recuperar objetos robados e imponer el orden. Se llama al servicio a los integrantes de la policía que sirvió bajo Echenique, a pesar de las protestas de ciudadanos que señalaban a dichos individuos como "esbirros, malvados, corrompidos, ladrones, amarradores de los buenos patriotas

50. "Criminal seguido contra Eusebio Aguilar y Rufino Paza por robo. Comenzó en 25 de enero de 1855", Causas Criminales, RP 617, AGN.

amantes de la libertad"⁵¹. Esta represión logró contener el saqueo a instancias de una clase dominante alarmada.

Las causales sociales y económicas del saqueo ocurrido en Lima el 5 de enero de 1855 se originan en el alza abrupta de los precios entre 1854 y 1856. Según cifras de la estadística criminal de Lima en 1856, existían 126 presidiarios y 125 enjuiciados, que hacían un total de 251 reclusos en las cárceles de Lima. De ese total, la mayoría eran hombres, los que sumaban hasta 230. El robo y el hurto eran los motivos del 43% de los encarcelamientos, el homicidio del 24%, la conspiración del 7% y las riñas y heridas del 10%. Sabemos que el robo y el saqueo son formas "primitivas" de protesta popular. Tomando en consideración los acontecimientos del 5 de enero, cuando se produjeron acciones de hurto y saqueo y ante la subida de precios de los años 1854-1856, las siguientes cifras son significativas: el 17% de los encarcelados eran labradores, el 10% sastres, el 9% zapateros, el 4% carpinteros (los artesanos sumaban así el 23%), jornaleros y albañiles 9%, sirvientes 3% y vagos 25%⁵². Se evidencia aquí la predisposición de labradores, artesanos y vagos, los grupos que tal vez sufrieron más los embates del alza de precios, para realizar este tipo de acciones delictivas, debido a la precariedad de sus ingresos ante el incremento de la inflación.

El alza de precios también fue horadando las simpatías a Castilla. Las protestas se sucedieron una tras otra en cantidad e intensidad crecientes. Basadre menciona las siguientes intentonas subversivas durante los primeros años del segundo gobierno Castilla: Arequipa en julio de 1855, Islay en mayo de 1856, Chíncha en abril de 1856, Trujillo en agosto de 1856, la rebelión del general Castillo en Lima en agosto de 1856, Tacna en setiembre de 1856, y otras. La revolución de Vivanco se inicia con amplio apoyo en Arequipa en diciembre de 1856 y es secundada por La Fuente en Trujillo, lo cual trae serias consecuencias a la estabilidad del gobierno de Castilla en 1857. Murieron alrededor de tres mil personas en los encuentros de la revolución vivanquista y se apresó a muchos opositores.

En diciembre de 1858 se desencadena la protesta de los artesanos. Iniciada con seriedad y en forma pacífica, a través de la participación de los dirigentes de los artesanos en la discusión de opciones de política económica para el

51. *El Comercio*, N° 4630, 8 de enero de 1855.

52. Fuentes, *Estadística*, p. 209.

país de la época, derivó luego en una protesta violenta con destrucción de artículos importados para el ferrocarril de Lima-Callao. Los artesanos pedían medidas proteccionistas para "evitar el monopolio extranjero", impedir la importación de artículos de zapatería, carpintería y sastrería, y para que se "dispense a la industria peruana de la protección debida"⁵³. Además, uno de los cinco puntos del manifiesto de los artesanos ante el gobierno era que se repongan las medidas decretadas en febrero de 1855, descritas arriba, que suspendieron el cobro de derechos de importación sobre algunos víveres por 18 meses; esto último demuestra que la crisis de subsistencia todavía producía estragos en la economía de los artesanos hacia diciembre de 1858. En consecuencia, es válido establecer una conexión entre los sucesos violentos de 1855 y los de 1858. Se trata de dos respuestas populares ante las agresiones económicas del grupo en el poder.

Los acontecimientos del 5 de enero de 1855, así como los del 21 y 22 de diciembre de 1858, expresan la reacción popular ante los consolidados, la propiedad privada, la clase dominante y los comerciantes importadores, a inicios de un ascenso dramático de precios que alcanzaría sus mayores proporciones en 1855-1856, dando paso a muchas protestas posteriores. Sin embargo el liberalismo económico, arma de los comerciantes encumbrados de la época, saldrá triunfante de sus encuentros con los sectores populares. Un ideólogo defensor de la libre importación, opinando sobre los participantes de las acciones radicales de los artesanos en diciembre de 1858, dirá:

"Los sucesos del 21 y 22 del actual no son nada más que un triste remedo, una miserable parodia, de las tempestuosas escenas de París en 1848 a nombre del derecho al trabajo (...). Los supuestos artesanos han querido parodiar la conducta del bandido, pidiendo justicia con la violencia y el incendio (...). Sin duda, las cuatro quintas partes de los tumultuarios que vivaban a los artesanos y al pueblo, que se quejaban de no tener trabajo y salario por venir todo del extranjero, pertenecían a esos cinco mil quinientos vagos, que son la gangrena de nuestra sociedad"⁵⁴.

El fantasma del comunismo llegó a rondar las costas peruanas o cuando menos en la mente de ciertos liberales criollos que con tanto desprecio opina-

53. Artesanos, [Manifiesto] "En la ciudad de Lima, reunidos el día diez y nueve de diciembre de 1858..." (Lima, 1859). Para un análisis más específico sobre la condición social y la perspectiva proteccionista de los artesanos, ver Gootenberg, "Artisans and Merchants", capítulos 3 y 4.

54. Silva Santisteban, *Breves reflexiones*, pp. 15-16, 25.

ban sobre los sectores pauperizados. Las reivindicaciones exigidas por los artesanos estaban en realidad bastante lejos de los ideales de radicales como Francisco Bilbao, perseguido, encarcelado y deportado en 1855, como parte del ajuste de tuercas de Castilla luego de su victoria sobre Echenique. Fue la frustración y desesperación frente a la indiferencia del gobierno de Castilla lo que llevó a los artesanos a realizar acciones violentas.

El caudillo, con cierto arraigo popular inicial, debido a la oscura conciencia de sectores populares influenciados, favorece a los comerciantes nativos y extranjeros en desmedro de los sectores populares. La rehabilitación de los vales tachados en 1857 fue otra de las importantes concesiones al influyente sector comercial, como lo fueron la consolidación, conversión y manumisión. Estas prerrogativas, de cierta manera forzadas sobre el Estado, ayudarán decisivamente tanto a los hacendados dependientes del crédito comercial, como a los grandes comerciantes nativos y extranjeros, a incrementar aún más su influencia sobre la economía del guano.

Capítulo 6

HACENDADOS Y RENTISTAS

A pesar del hecho de que grandes comerciantes se apropiaron de sustancial parte de los títulos de la deuda interna, muchos de ellos cedidos por la necesidad y falta de confianza en su valor por hacendados empobrecidos, hubo propietarios de tierras que sí lograron beneficiarse con la consolidación. En el presente capítulo trataremos los casos de aquellos hacendados que supieron negociar con vales sin dejar de proporcionar una parte a los comerciantes. Se trata de aquel sector de dueños que consigue recomponerse al orientar la producción de sus haciendas hacia rubros más comerciales y vincularse con el crédito comercial interesado en la exportación. Esta tendencia dará sus frutos al surgir haciendas especializadas en la producción de azúcar y algodón hacia la década de 1860.

Sin embargo, somos del parecer de que más que la consolidación, la cual -como vimos en el capítulo tercero- alcanzó a un número reducido de hacendados e implicó cantidades relativamente modestas dirigidas hacia el agro, fue la **manumisión** de esclavos la que tuvo efectos más directos y difundidos sobre la producción agrícola de la costa. Necesitamos discutir entonces la forma como se utilizó la manumisión, en medio de un recambio en el régimen laboral costeño, para reforzar el vínculo entre el comercio y el sector agrario de exportación en su inicial recuperación.

En este capítulo analizaremos también a otro sector encumbrado pero, al igual que los hacendados, subordinado al compás impuesto por el capital comercial: los rentistas urbanos de Lima. Marginalmente beneficiados por los efectos de la consolidación, los rentistas y propietarios urbanos pueden, por un lado, realizar negocios pasivos con los especuladores de la consolidación y, por otro, ejemplificar el inicio activo del mejoramiento urbano característico de la época del guano.

6.1 Manuel Aparicio

El hacendado don Manuel Aparicio con intereses agrícolas en el valle de Chancay, recibió 196,500 pesos en vales de consolidación. Esto lo coloca en el puesto número dieciséis entre las personas más beneficiadas por la consoli-

dación de 1850. Se dedicaba principalmente a la crianza de cerdos y de algún ganado lanar y caprino, al cultivo de alfalfares y pan llevar (maíz, cebada, frijoles), así como a la venta de manteca proveniente de sus haciendas en un establecimiento comercial que administraba en Lima, lugar donde residía. El caso de Aparicio es lo suficientemente relevante como para tratarlo en forma particular, debido a su significación en el análisis de los efectos de la consolidación sobre el agro costeño. Por fortuna se cuenta con fuentes disponibles para su estudio.

La cantidad que obtuvo en vales a su nombre fue consolidada íntegramente durante la gestión Echenique. Se realizó una conversión a deuda externa de 55 mil pesos en 1854 y se amortizaron, en 1855, 500 pesos por concepto de derechos de aduana, con sus vales. Luego, la Dirección del Crédito Nacional, durante el segundo régimen de Castilla, amortizó 59 mil pesos de la siguiente forma: 28 mil pesos en 1859, 16 mil pesos en 1860 y 15 mil pesos en 1861, quedando por amortizar 82 mil pesos en los años siguientes¹.

Según los informes emitidos por la Junta de Examen Fiscal, en el expediente levantado por Manuel Aparicio, se alegaba indemnización por daños y perjuicios causados por el Ejército Libertador en 1821 en sus haciendas Laure y Esquivel, situadas en el valle de Chancay; este expediente fue tachado por no cumplir con los requisitos de la ley de 1850².

Las conexiones de Aparicio con altos funcionarios del gobierno Echenique le valieron, según Domingo Elías en 1853³, el reconocimiento de su expediente. Elías y Arnaldo Márquez señalan que don Bartolomé Herrera, rector del Colegio de San Carlos, autoridad religiosa y a la sazón ministro de Justicia, Instrucción y Beneficencia, intercedió ante Echenique para que se le reconociese el expediente a Aparicio. Herrera, juntamente con Juan Crisóstomo Torrico, influía decisivamente en los rasgos más conservadores del gobierno Echenique. En un codicilio del 10 de abril de 1857, Manuel Aparicio deja por albaceas testamentarios a "su sobrino el canónigo Bartolomé Herrera" y al futuro obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle⁴. Esto indica una fuerte vinculación entre Aparicio y altos jefes políticos y eclesiásticos.

1. Dirección de Crédito Nacional, "Libro de la deuda interna consolidada", tomo 2, f. 1539, Libros Manuscritos Republicanos, H.-4-1967, AGN.
2. Junta de Examen Fiscal, *Informes*, expediente N° 4640.
3. Basadre, *Historia*, tomo 4, p. 30.
4. Escribano Felipe Orellana, año 1857, protocolo 488, f. 812, AGN.

Aparicio fue además un ferviente echeniquista que apoyó la postulación presidencial del caudillo en las elecciones de 1850. Se le consideraba en la época un "ardiente obrero del general Echenique" y, en los desórdenes callejeros en Lima el 17 de febrero de 1850, día de elecciones, en los que se enfrentaron vivanquistas y echeniquistas, participó "el mantequero de Santa Ana, don Manuel Aparicio, con el negro torero Estevan Arredondo, Mariluz y su hijo y todos sus criados que trajo de Chancay a caballo y a pie"⁵.

Las propiedades de Manuel Aparicio se inventariaron a su muerte en 1857. Tenemos por lo tanto información de su situación económica en los años inmediatamente posteriores a la consolidación, a través de sus testamentos, codicilo e inventarios y participaciones de 1856 y 1857. Se puede contrastar la situación de sus propiedades en 1857 con la condición de las mismas en 1845, es decir, con anterioridad a la consolidación, pues, en dicho año, Manuel Aparicio recibe la herencia de su hermano y socio José Aparicio, que muere el 10 de octubre de 1845⁶. Es así posible detectar en qué medida lo benefició la consolidación y hacia dónde dirigió las cantidades que de ella recibió. Se cuenta pues con los datos mínimos para esbozar la dinámica económica de un hacendado costeño -dedicado básicamente a la producción para el consumo interno-, en relación con los vales de consolidación que recibió en 1852.

Los hermanos José y Manuel Aparicio eran hijos legítimos de don Joaquín Aparicio y doña Josefa Vélez, de quienes heredaron las haciendas Esquivel -comprada por don Joaquín en 1790- y Laure⁷. Además, los Aparicio tenían control sobre la chacra Quipullín, en el distrito de Aucallama (Chancay), por derecho de enfiteusis otorgado por la Recoleta dominica⁸. Ambos hermanos establecieron una sociedad de compañía para el manejo de sus propiedades. A la muerte de José, crecidas deudas gravaban sobre los bienes comunes. Guiándonos por la contabilidad empleada en los inventarios y particiones, las deudas por concepto de censos, préstamos a interés y otros gravámenes sobre sus haciendas, ascendían a un 70% del valor total de sus propiedades en Chancay. Tal era el grado de endeudamiento de los hermanos Aparicio que José de-

5. Martínez, *Relación sucinta*, p. 21.

6. Escribano José Selaya, año 1845, protocolo 703, f. 137v, AGN.

7. Idem. Esquivel, situada en el valle de San Juan de Huaral, contaba con 4 riegos; Laure estaba en el valle de Chancay y tenía 4 riegos: Córdova y Urrutia, *Estadística histórica*, pp. 5-6

8. Escribano Felipe Orellana, año 1856, protocolo N° 487, f. 246, AGN.

bía quince meses de arrendamiento de la casa que ocupaba en Lima al momento de su muerte⁹.

Por un documento contencioso sabemos además que los hermanos Aparicio tomaron en arriendo en agosto de 1844 las haciendas Retes y García Alonso en el mismo valle de Chancay. Estas haciendas pertenecían a la señora Manuela Pando de Gonzales, viuda y albacea de don José de la Fuente conde del Villar, prior del Tribunal del Consulado entre los años 1820 y 1822. Las condiciones del arrendamiento eran las siguientes: nueve años de duración del contrato, pago semestral en efectivo, 2,200 pesos anuales por la hacienda Retes y 850 por la hacienda García Alonso. Retes se arrendaba con 41 esclavos hombres y 54 mujeres, además de todas las instalaciones e instrumentos de labranza que constituían su capital. Los hermanos Aparicio debían responder por las pensiones que gravaban sobre el fundo, que incluían alcabala, diezmos, primicias, prorratas, de río, salario de guardas. La Sra. Pando corría a cargo del impuesto anual del 3% sobre el valor del arrendamiento¹⁰. En 1845, según el testamento de José Aparicio, las dos haciendas mencionadas habían sido "subarrendadas" por los Aparicio a yanaconas. Es presumible que los esclavos de Retes y García Alonso hayan sido trasladados a las propiedades de los Aparicio dedicadas a cebar ganado porcino, con el maíz de sus tierras, para producir mantequilla.

Entre los años 1850 y 1852 la señora Pando lleva a cabo un juicio contra Manuel Aparicio exigiendo la anulación del contrato de arrendamiento de 1844 debido a que se le adecuaba 1,525 pesos, importe de un semestre de renta atrasado. Por su lado Aparicio pide una compensación a la señora Pando por daños que Andrés Reyes, dueño de la hacienda Huando, causó al construir un estanque que privaba de agua a las haciendas Retes y García Alonso. El fallo en primera instancia favoreció a la Pando, pero en 1852 los vocales de la Corte Superior sentencian que el contrato no era rescindible¹¹. Esto resulta ser una victoria más de Manuel Aparicio durante el gobierno de Echenique.

De acuerdo al panorama descrito hasta ahora, entre los años 1845 y 1852 Manuel Aparicio se ve cargado de deudas sobre sus haciendas, trabajadas

9. Selaya, op. cit., ff. 461-477, 482-488.

10. Expedientes judiciales, causas civiles, año 1850, legajo 162/RPJ-159, AGN.

11. Ibid. Retes y García Alonso contaban con 16 y 4 riegos respectivamente, mientras que Huando tenía 18. Las tres pertenecían al distrito y valle de Hualar donde residían un total de 562 personas hacia 1839 (118 indígenas, 146 castas y 298 esclavos): Córdova y Urrutia, *Estadística histórica*, pp. 5-6.

por esclavos, al mismo tiempo que arrienda otras propiedades con el objeto de explotaras a través del sistema de yanaconaje. Sus ingresos provenían en esos años de los siguientes conceptos: la comercialización en Lima de la manteca que producían sus haciendas, a través de su tienda-mantequería situada en la Plazuela de Santa Ana¹²; lo obtenido en dinero o especie, de los yanaconas de Retes y García Alonso; el importe del arrendamiento de Quipullín; y los réditos de un patronato de legos y capital que gravaban sobre la hacienda Chancafílo en el valle de Chancay.

Los gastos de Aparicio incluían el mantenimiento de las deterioradas instalaciones de Laure y Esquivel, las que no habían sido renovadas desde 1790¹³; y el costo de mantenimiento de 90 esclavos, entre hombres, mujeres y niños, en Chancay, y 41 trasladados a Lima.

En contraste, en su testamento del 17 de junio de 1856, posterior a la realización de la consolidación y conversión de la deuda interna, Aparicio agrega las siguientes propiedades a las ya mencionadas arriba: la hacienda Chancafílo, comprada en 1855 a la señora Arguedas y Pradas; una casa y dos solares en enfiteusis en la plaza del pueblo de Chancay; una casa de dos pisos y una oficina mantequería en la Plazuela de Santa Ana, Lima; una casa en la cuadra de las Cruces y otra en la de las Piletas de Santa Clara, y una casita huerta en la calle de Santo Cristo, Lima; derecho de enfiteusis sobre un solar del Convento de las Descalzas y finca en San Sebastián; capellanías legas; 22,725 pesos en vales de manumisión recibidos en 1855 por 75 esclavos manumisos; y 24 mil pesos en efectivo¹⁴.

En el codicilo de 1857 Aparicio indica que los vales de manumisión que dejó por bienes en 1856 estaban afectos a una deuda que contrajo con Juan del Busto, uno de sus albaceas testamentarios, junto con Herrera y del Valle, y pide al juzgado de derecho se le entreguen los vales a del Busto por cancelación de la deuda¹⁵. Por su parte, al recibir del Busto los vales señalados aumentó su participación en la manumisión a 31,729 pesos en vales, por los que recibía 1,833 pesos anuales de interés en 1857 (ver cuadros 16 y 17). Este es

12. El precio de la libra de manteca sufre dos subidas significativas, una en 1849 y otra, más pronunciada, en 1855; la venta de manteca resultaba pues un negocio muy rentable en esos años. Ver apéndice 1.

13. En una tasación hecha en 1845 se reduce el valor de las instalaciones de Laure y se estima el de las de Esquivel a los niveles de 1790, año en que fue adquirida.

14. Escribano Felipe Orellana, año 1856, protocolo N° 487, f. 246, AGN.

15. Escribano Felipe Orellana, año 1857, protocolo N° 488, f. 812, AGN.

un claro ejemplo de cómo un hacendado cancela sus deudas con un prestamista utilizando los vales de manumisión.

En otro párrafo del mismo codicillo Aparicio manda se le entreguen a la señora Pando de Gonzales todos los papeles de su propiedad relativos a la consolidación, "pero si en algún tiempo tubiese lugar una nueva consolidación, sus herederos exigirán se llebe adelante el contrato que se labró con la señora por escrituras públicas ante el presente escribano, por haber gastado muchos pesos en la formación de parte de los expedientes"¹⁶. Esto prueba que Aparicio preparaba un nuevo expediente de consolidación, seguramente por las haciendas Retes y García Alonso que alquilaba a la señora Pando, que no prosperó.

Manuel Aparicio fallece en abril de 1857. El detalle del inventario de sus bienes, efectuado en su residencia, establece como sus propiedades lo siguiente: 62 contratos de chinos, el mobiliario modesto de su mantequería, 9 documentos relativos a varios contratos y cuentas canceladas, una finca, dos casas, un solar, cuatro chinos y 70,571 pesos en efectivo¹⁷.

Por tanto, la situación económica de Manuel Aparicio después de la consolidación tuvo un repunte notorio. Se evidencian importantes cambios en sus propiedades y en la forma de explotarlas. Se agrega una nueva hacienda, Chancillo; se cancelan viejas deudas y se adquieren nuevas con garantías distintas. Por otro lado, Aparicio deja de administrar directamente su hacienda Esquivel al arrendarla a J. M. Ramírez, que le prestaba dinero. Contrata los servicios de un administrador para la hacienda Retes, que Aparicio sigue arrendando de la señora Pando, en lugar de subarrendarla a yanaconas. Sobre García Alonso no se tiene información en 1857, siendo verosímil que la haya dejado de alquilar. La disponibilidad en efectivo de Aparicio es alta en 1857, comparada a la de 1845, lo cual le permite explotar y administrar sus propiedades más efectivamente, y dedicarse más intensamente al comercio de la manteca que gozaba por entonces de óptimas condiciones. Esto benefició al productor-comerciante de manteca que, ya sin tanto apuro financiero, compraba más cerdos y guano para sus propiedades.

Un cambio fundamental es el contrato de 62 chinos y la manumisión de sus 131 esclavos, con lo cual se reducen sus gastos de manutención de su fuer-

16. Ibid.

17. Ibid., f. 820.

za de trabajo y se adquiere capital líquido para cancelar deudas pendientes. En conclusión, Manuel Aparicio se afianza en sus propiedades y negocios. No hay evidencias de que en los años 1856 ó 1857 Aparicio todavía guardara o poseyera vales de consolidación. Por lo tanto cabe suponer que había efectuado la conversión y venta de todos sus vales antes de dichos años. Suponiendo que no hubiera compartido sus vales con algún 'consolidado', sus transacciones con la consolidación le hubieran resultado en unos 90 mil pesos en efectivo, según la cotización de los vales en los años 1853 y 1854. La inversión de dicha cantidad debió realizarla en la adquisición de su nueva hacienda, pagando deudas vigentes y racionalizando el régimen de sus propiedades por medio de mejoras necesarias para hacerlas productivas y atractivas al arriendo.

El caso del hacendado Manuel Aparicio nos indica pues, el grado en que la consolidación benefició a unos escasos hacendados costeños que contaron con la influencia suficiente como para hacerse reconocer sumas fuertes por la consolidación. Al librarle de deudas y proporcionarle la capacidad de aumentar sus ingresos y rentas, la consolidación le otorgó la posibilidad de dedicarse al comercio de sus productos en Lima con mayor provecho. Paralelamente va ocurriendo un proceso de sustitución del régimen de fuerza de trabajo que va sentando las bases para un mayor dinamismo en el sector rural de la costa. Como veremos en el caso siguiente, el de Fernando Carrillo de Alborno, la consolidación, el comercio y la manumisión resultaron ser los elementos fundamentales para aquellos hacendados notables dispuestos a modernizar su producción.

6.2 Fernando Carrillo de Alborno

Uno de los más importantes y voluminosos expedientes de consolidación es el que promueven los descendientes de Fernando Carrillo de Alborno y Salazar, miembros de una familia aristocrática de origen colonial. Su importancia radica en que, a través de las vicisitudes de este expediente, podemos apreciar que, en contados casos, hubo una supervivencia relativa de la propiedad terrateniente colonial costeña, en parte debida a mecanismos fiscales y judiciales varios, entre los cuales la consolidación ocupó un lugar clave.

El expediente, que llevó el nombre de uno de los promotores iniciales, Fernando Carrillo de Alborno y Zavala, hijo de Alborno y Salazar, fue consolidado en 1852 durante el gobierno de Echenique. Se alegaba indemnización a la testamentaría Alborno y Salazar por perjuicios sufridos en las haciendas San José y San Regis de Chíncha con motivo de la guerra de la independencia,

y por el secuestro (confiscación) de fincas situadas en Lima, Bellavista y Callao¹⁸. En consecuencia los herederos de Alborno y Salazar recibieron 900 mil pesos en vales de consolidación, de los cuales se convirtieron a deuda externa 611,400, se amortizaron 4 mil en aduanas, 10 mil en tesorías y 78,200 por la Dirección del Crédito Nacional en los años 1857 y 1858¹⁹.

Este reclamo de indemnización nos permite indagar el destino económico de la familia Carrillo de Alborno desde finales de la colonia y los primeros cuarenta años republicanos. Para evaluar propiamente el grado en que la consolidación sirvió efectivamente para la reconstitución de esta familia, caída en desgracia con la independencia, los herederos del mayorazgo de los títulos nobiliarios de Montemar y Monteblanco deben ser estudiados por tres generaciones: el abuelo, Fernando Carrillo de Alborno Bravo de Lagunas y Bedoya; el padre, Fernando Carrillo de Alborno y Salazar; y el hijo, Fernando Carrillo de Alborno y Zavala, ex conde de Montemar y Monteblanco en la época de la consolidación, gestor del expediente de consolidación junto con su hermano José y su madre Petronila Zavala.

El abuelo consolidó el patrimonio familiar durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. El padre, por defender la causa realista, fue despojado de sus propiedades por las autoridades triunfantes con la independencia y tuvo que emigrar a España. El hijo logró reconstituir su patrimonio desperdigado y expropiado, a través de incontables pleitos con muchas partes interesadas, incluidas las de su propia familia, incurriendo en gruesas deudas. Veamos en detalle cómo se realizó esta evolución.

Don Fernando Carrillo de Alborno Bravo de Lagunas y Bedoya se casó con doña Rosa Salazar, condesa de Montablanco. Doña Rosa era sucesora del título que fundó su padre, don Agustín Salazar, y heredera de la hacienda cañaveral San José, las chacras Lurin Chíncha, un pedazo de playa y sus accesorios, todos situados en el valle de Chíncha. Don Fernando trajo a su matrimonio una casa-panadería, una bodega de depósitos de trigo y una casa, situadas en Bellavista. Al morir los padres de don Fernando, Diego Carrillo y Mariana Bravo de Lagunas, heredó una casa en la esquina de Concepción y el título de Montemar²⁰.

18. Junta de Examen Fiscal, *Informes*, expediente N° 5570.

19. Ver cuadro N° 4 de cantidades consolidadas en el capítulo tercero del presente estudio.

20. Datos consignados en el testamento de doña Rosa Salazar: escribano Munarrís, año 1811, protocolo N° 452, AGN.

Durante el matrimonio don Fernando compra a la corona la hacienda San Juan Francisco Regis en el valle de Chíncha, ex propiedad jesuita del ramo de Temporalidades. Al morir doña Rosa en 1811 se hace la primera adjudicación de bienes, según un testamento hecho por don Fernando por poder que le otorgó doña Rosa. En dicho instrumento se establece que el hijo mayor de ambos, don Fernando Carrillo de Albornoz y Salazar, en ese entonces alférez real, adquiera la posesión legítima del mayorazgo de la testamentaría, pues sus hermanas ya habían recibido sus dotes correspondientes. En 1817, al morir Albornoz Bravo de Lagunas, su hijo queda como poseedor de considerables bienes del mayorazgo que se consignan en el cuadro 15.

CUADRO 15

**Propiedades del mayorazgo y testamentaría
Carrillo de Albornoz, 1817**

Bienes inventariados	Valor según tasación (pesos de a ocho)	
Hacienda San José	79,142	
Esclavos en San José	68,168	
Hacienda Oja Redonda	25,527	
Hacienda Lurin Chíncha	14,786	
Hacienda San Regis	402,690	
Subtotal propiedades mayorazgo:		591,313
Efectivo	165,737	
Haber en cuentas de tesorero	15,606	
Casa-panadería, bodega y casa huerta en Bellavista	29,677	
Alhajas	5,561	
Subtotal propiedades testamentaría:		216,581
TOTAL		807,894

Fuente: inventarios tasaciones en escribano Munarris, año 1811, protocolo 452, AGN: escribano Vicente García, año 1817, protocolo 970, AGN.

Los bienes de la testamentaría Carrillo en 1817, ascendientes a 216,581 pesos de plata, fueron repartidos en partes iguales entre los herederos de Albornoz Bravo de Lagunas. Tanto a su hijo mayor y albacea, como a sus hijos Francisca, Petronila, Rosa y Juan Paredes, les tocó 43,316 pesos a cada uno²¹.

Así tenemos que, entre la herencia del mayorazgo y el de la testamentaría, a Fernando Carrillo de Albornoz y Salazar le tocó heredar propiedades por un monto de 634,629 pesos según la detallada exposición de arriba. Si comparamos esta última cifra con la de 900 mil pesos reclamados en 1852, y teniendo en consideración que no todos los bienes de Carrillo fueron secuestrados en 1822, se comprobará que existió una evidente exageración de lo que se pidió como restitución a la Caja de Consolidación.

Fernando Carrillo de Albornoz y Salazar, conde de Montemar y Monteblanco, se casó con doña Petronila Zavala Pardo de Figueroa Bravo de Rivera, natural de Lima e hija legítima de don Pedro Nolasco y Zavala Pardo de Figueroa y Esquivel, marqués de San Lorenzo de Valle Umbroso, y de doña Ana Micaela Bravo de Rivera y Zavala. Petronila Zavala no llevó dote alguna al matrimonio porque sus legítimas paterna y materna quedaron en poder de su hermano Pedro Nolasco y Zavala, marqués de San Lorenzo de Valle Umbroso.

Albornoz y Salazar, consecuente con la causa realista se ausentó del país en 1822 y, considerado como 'emigrado', se le secuestraron la mayoría de sus bienes. En 1827 Petronila Zavala presenta un recurso legal reclamando los bienes secuestrados en nombre de su menor hijo José Carrillo de Albornoz y Zavala. En el recurso doña Petronila expone la triste situación en la que se encontraban las propiedades secuestradas, y la pobre condición en la que ella vivía:

"...los bienes secuestrados por el abandono en que se hallan [...] caminan a su total y absoluta ruina: los esclavos están dispersos y no se trata de recojerlos. En una palabra, es sabido que el valor de los fundos pasaba de seiscientos mil pesos y en el día quizá no llegan a ciento cincuenta mil. El hijo que por su nacimiento y por la ley debe ser rico, está como un mendigo y su suerte llega a tal extremo, que a las veces no hay ni cómo costearle un par de zapatos y se ve precisado a estar con el pie en el suelo"²².

21. Escribano Vicente García, año 1817, protocolo N° 254, AGN.

22. Juzgado de Secuestros, años 1826-1833, legajo 11, AGN: apuntes proporcionados gentilmente por Alberto Flores Galindo. Ver también Flores Galindo, *Aristocracia y plebe*, capítulo 7.

En consonancia con la reversión de la política de secuestros iniciada hacia 1826, cuando se devolvieron propiedades a los herederos de los emigrados, los bienes de Carrillo de Albornoz y Salazar quedaron libres de secuestro en 1827 y parte de ellos se le retornaron a doña Petronila en función de su hijo José. Entre los años 1833 y 1839 José Carrillo y su madre promueven solicitudes por indemnización de las haciendas San José, Lurin Chíncha y San Regis, por daños y perjuicios durante las contiendas de la independencia. Sin embargo, estos reclamos no prosperaron sino hasta 1852, esta vez con la decisiva participación del otro gran interesado en los reclamos, el hijo mayor, don Fernando Carrillo de Albornoz y Zavala. En 1851, en un poder para testar otorgado a su hijo José, Petronila declara:

"...no poseo en el día alhajas, plata labrada ni prendas de valor, porque todas las que tube, he tenido que venderlas en las diferentes épocas de miseria a que estuve reducida, ya en el sitio del Callao, a donde tube necesidad de ir, por ser consecuente con la opinión de mi marido, ya fuera de él, en que se secuestraron todos los bienes de la casa, y tube que echar mano para sostenerme y sostener al sobre dicho mi hijo José, de cuanto tenía; y últimamente, en los distintos tiempos en que sólo he contado con los auxilios de mi citado hijo José, que tenía a su cargo el gasto de varios pleitos de la casa"²³.

Petronila Zavala tuvo con Albornoz y Salazar cinco hijos, de los cuales sólo tres llegaron a edad adulta: Fernando, Pedro y José. Fernando se casó con doña Catalina Mendoza y Boza; el segundo, Pedro falleció en Madrid en 1850 dejando a su madre como heredera; el tercero permaneció al lado de su madre cuando el padre se exilió. Carrillo de Albornoz y Salazar fallece en España en 1839, tocándoles la parte principal de su herencia a sus hijos Fernando y Pedro. A doña Petronila le tocó una cuarta parte de la herencia total denominada "gananciales o cuarta marital" de los bienes de su finado esposo, pero ésta permaneció bajo la administración de su hijo Fernando. Además, doña Petronila hereda de su hijo Pedro un derecho avaluado en 231,331 pesos y la tercera parte de la hacienda San Regis, según el instrumento de hijuelas otorgado en Lima en febrero de 1847. Las haciendas San Regis y San José estaban, sin embargo, bajo la administración de Fernando. Otra hijuela que se practicó en Madrid, en 1848, arrojó a favor de Petronila 223,280 reales de vellón que se colocaron a censo en España. Además, hereda de su hijo Pedro dos casas, un pajar y una huerta en Navarra, España.

23. Escribano Manuel Uriza, año 1851, protocolo N^o 1851, f. 365v., AGN.

A pesar de existir divisiones de los bienes del finado conde de Montemar y Monteblanco, el poseedor del mayorazgo, Fernando Carrillo de Albornoz y Zavala, sigue concentrando la propiedad de las haciendas de Chíncha, y disputa judicialmente con su madre en las cortes de Lima y Madrid los derechos parciales sobre ellas. Hacia 1858 Fernando no le había entregado todavía a doña Petronila su parte de la hacienda San Regis, no le "había rendido cuenta de lo que habían producido los bienes de su finado hijo don Pedro en todo el tiempo que los ha tenido en su poder", y no quería abonarle 129 mil pesos que se adjudicaron a Pedro en la hacienda San José, "por cuyos reclamos... le sostiene varios litis"²⁴. A todo esto doña Petronila agrega que lo que le producían sus bienes en España se consumía en los pleitos promovidos por su hijo Fernando.

En consecuencia, doña Petronila no tendrá acceso a sus derechos sobre las haciendas que celosamente administra su hijo. Sin embargo, en 1852 se le adjudican judicialmente tres casas en Lima de la testamentaría Carrillo de Albornoz, así como 200 mil pesos en vales de consolidación, parte del total de 900 mil reclamados en el expediente promovido hábilmente por Fernando Carrillo de Albornoz y su apoderado legal el comerciante Federico Pheiffer. Además, a doña Petronila se le dieron en 1855 un total de 14,025 pesos en vales de manumisión, y 4,565 pesos en moneda por concepto del valor de los esclavos a que tenía derecho en la hacienda San Regis.

En 1852 doña Petronila encarga al Dr. José Gregorio Paz Soldán, ministro de Echenique, que recabe del Gobierno los 200 mil pesos en vales que se le habían adjudicado. En noviembre del mismo año 91,177 pesos en vales pertenecientes a doña Petronila son entregados al comerciante genovés José Canevaro, según lo establecía un contrato firmado con anterioridad. Este contrato está probablemente relacionado al pago de una deuda contraída con Canevaro, o por venta de vales de baja cotización o por una participación proporcional en el expediente reconocido. Nos inclinamos a suponer lo primero, pues doña Petronila tenía necesidad de recurrir a préstamos constantemente, como veremos más adelante. Cualquiera haya sido el motivo, se evidencia una vez más el poder de los comerciantes para concentrar vales de consolidación. En este caso el comerciante acapara cerca del 45% del monto reconocido al deudor original, casi inmediatamente después de haberse emitido los vales.

Ahora bien, ¿qué sucedió con los 108,823 pesos en vales de consolidación y 14,025 en vales de manumisión que le quedaron a doña Petronila des-

24. Codificio de doña Petronila Zavala de Carrillo: escribano Manuel Uriza, año 1858, protocolo N° 977, f. 352, AGN.

pués de su transacción con Canevaro? Según su propia declaración en 1858:

"...en el tiempo de sus escaseces, para sostén de la vida de decencia a que ha estado acostumbrada, y para la defensa de sus derechos tuvo que abrir muchos créditos, los más de ellos con intereses sumamente fuertes, y que agobiada por sus acrehedores tan luego como supieron que había heredado a su finado hijo don Pedro, tuvo que vender la casa de la calle de Presa con todo su accesorio; los vales de consolidación, y los vales de manumisión, con cuyo producto se ha sostenido hasta el presente: ha pagado sus deudas y ha hecho gastos que le originan los pleitos"²⁵.

Por tanto, fueron los comerciantes prestamistas, los "acrehedores" de doña Petronila, los que más se beneficiaron con este reconocimiento de deuda interna, al cobrar deudas con altísimos intereses a una familia acostumbrada a un nivel de vida alto, aunque estuviera rodeada de dificultades económicas. Al dinero obtenido en la consolidación y al cedido a sus acreedores, se agregaron otros 47 mil pesos provenientes de la venta de la casa aludida arriba, importe que también es absorbido por sus prestamistas. Hacia 1858 doña Petronila tenía por entradas solamente lo que le producían sus dos fincas en la calle Caridad, y el interés del 3% anual en una finca de la calle Toribio, "y no siéndole suficiente para atender a los gastos de su convalecencia en Chorrillos, a donde tuvo que ir, se vio en necesidad de pedir seis mil pesos al interés del uno por ciento mensual, que se los proporcionó la señora Manuela Pando"²⁶.

Así pues, a pesar de los ingresos mediatizados que obtuvo doña Petronila de la consolidación y manumisión, esta rentista seguía dependiendo de préstamos. Podemos comprobar con ello que el sector que realmente absorbía los vales otorgados a rentistas con deudas fue el dinámico, que poseía liquidez para realizar préstamos a alto interés y comprar vales de consolidación, es decir, principalmente los comerciantes y algunos rentistas desahogados. El caso de doña Ignacia Novoa, analizado más adelante, muestra similares características al de doña Petronila y su relación pasiva con los prestamistas comerciales.

Otra fue la situación del hijo mayor de Petronila, Fernando Carrillo de Albornoz y Zavala, cuya vinculación con el capital comercial fue más activa. Del inventario de sus bienes en 1864 sabemos que Fernando firmó gran canti-

25. Ibid., f. 352.

26. Idem.

dad de cartas-crédito a favor de los más importantes comerciantes de Lima²⁷. Estos papeles, junto con los que representan créditos y depósitos en cantidades de oro y pesos, y otros valores, demuestran una fuerte vinculación del hacendado con el capital comercial, particularmente intensa entre los años 1851 y 1858. Carrillo otorgaba dichas cantidades, en calidad de depósito e inversión, a los más importantes comerciantes, entre los que destacaba don Pedro Gonzales Candamo, que mantuvo fuertes relaciones de negocios con Carrillo. Entre las vinculaciones que guardaba este gran comerciante y financista con Carrillo eran prioritarias las de custodia de fondos y tesoros, con lo cual se le proporcionaba a Gonzales Candamo mayor liquidez para aumentar sus negocios comerciales y financieros.

Por otro lado, Gonzales Candamo atendía al hacendado Carrillo en múltiples necesidades comerciales que iban desde la compra de chinos para sus haciendas, comercialización del azúcar y panes de azúcar de sus haciendas, hasta la venta y compra de bergantines, realización en el mercado de vales de manumisión y descuento de letras. Otros importantes comerciantes y rentistas como Julián Zaracondegui, Antonio Fernández Prada y la Sociedad Barreda-Rodrigo, también se contaban entre los que se relacionaban con este hacendado. Llama la atención lo temprano, años 1842-1844, que establece relaciones crediticias y comerciales con Barreda-Rodrigo. Carrillo necesitaba invertir sus fondos en negocios rentables y en la modernización de sus haciendas que se va evidenciando hacia 1860²⁸.

Un ejemplo de la forma en que el capital comercial acude en auxilio del hacendado, con miras de lograr altos beneficios, lo constituye la intervención de Gonzales Candamo en el arreglo de la deuda que don Fernando tenía con su tía doña Josefa Carrillo de Albormoz, viuda del marqués de Castrillón. El 15 de julio de 1845 doña Josefa establece un acuerdo con su sobrino Fernando para que éste le pagase la cantidad de 97 mil pesos, por concepto de su legítima herencia paterna y materna, que retuvo en la hacienda San Regis el finado conde de Montemar y Montebanco, padre de Fernando y hermano de Josefa. El arreglo condonaba réditos atrasados del capital en cuestión y liberaba de embargo a la hacienda San Regis. Por su parte, Fernando levantaría un fuerte préstamo a

27. Testamento e Inventario de bienes de Fernando Carrillo de Albormoz y Zavala, agosto de 1864, escribano José Selaya, año 1864, protocolo N° 986, f. 1370, AGN. Carrillo de Albormoz nombra al gran comerciante Pedro Gonzales Candamo como su primer albacea, y como segundo albacea a Antonio Fernández Prada, importante terrateniente, pero ambos declinan el nombramiento aduciendo tener edad muy avanzada. Accede ser su albacea don Pablo Patrón.

28. Para una clasificación detallada de los valores y documentos inventariados de Carrillo y Albormoz ver: Quiroz, "La Consolidación", pp. 328-330.

interés y pagaría a su tía 20 mil pesos al contado, compromete toda la producción de azúcar de la hacienda, y promete abonar en el futuro el monto restante adeudado con un interés del 4% anual²⁹. Sin embargo todo vuelve a fojas cero en el año de 1846, pues ambas partes rescinden el contrato por incumplimiento. Apreciamos pues que, para mantener el control sobre sus haciendas fuertemente gravadas, Fernando recurre en tiempos de dificultad económica a la dilación y postergación en el servicio de los derechos reclamados por su tía, madre y hermano.

Recién en 1845 se llega a un acuerdo satisfactorio en la disputa de los Carrillo con la intervención de Pedro Gonzales Candamo. Doña Josefa cede y traspasa sus derechos sobre la referida hacienda, que ascendían a 85 mil pesos a la fecha, a su sobrino y a Gonzales Candamo, por la cantidad de 35 mil pesos, de los cuales recibe 20 mil al contado, y los quince mil restantes al plazo de dos años con interés del 9% anual. Así, la señora Josefa, según su propia declaración, prefiere asegurar el pago líquido de sus derechos, considerando que el interés vigente en la plaza era del 18% anual, contra el exiguo 4% que nominalmente le producía su capital en San Regis. Interesante argumento tratándose de una señora rentista³⁰. La renta de la tierra todavía es menor que el interés comercial. Carrillo paga parte de la deuda a su tía en esclavos, dos hombres y una mujer entre los doce y catorce años, valorizados en trescientos pesos cada uno.

Según los papeles inventariados de Gonzales Candamo, su participación en las acciones de la hacienda San Regis era de 33 mil pesos vigentes en 1866, y de 42 mil pesos en años anteriores. En momentos en que ocurre un postergado dinamismo de las haciendas costeñas, la inversión de Gonzales Candamo en San Regis resulta provechosa si consideramos que sólo desembolsó 17 mil pesos entre los años 1854-1856, según el contrato arriba mencionado entre doña Josefa, Carrillo y Gonzales Candamo.

Como resultado de la transacción, la rentista, doña Josefa, queda satisfecha con una renta segura de su capital; el hacendado, Carrillo, se libra de una deuda apremiante más sobre su propiedad, y el comerciante, Gonzales Candamo, realiza una buena inversión con mínimo desembolso que le resultará bastante rentable en años posteriores.

29. Escribano Lucas de la Lama, año 1845, protocolo N° 327, f. 493v, AGN.

30. Escribano José Selaya, año 1854, protocolo N° 711, ff. 480-481v, AGN.

Poco a poco las propiedades de Carrillo en Chíncha se van modernizando, en lo referente a la producción de los derivados de la caña de azúcar, sobre todo su hacienda San José, según los inventarios del 6 y 7 de junio de 1864³¹. Ahora Carrillo puede derivar algunas de sus colocaciones a interés hacia sus propias haciendas. En consecuencia aparecen herramientas, maquinarias—incluido un trapiche a vapor importado—y demás utensilios de cobre y hierro, entre las instalaciones inventariadas, a diferencia de las antiguas piezas de madera que predominaban en 1811.

La hacienda San Regis, con instalaciones más modestas, presenta como característica que los algodones, cultivados en compañía de otros hacendados de Chíncha -Toribio y Juan Chávez, Andrés Zavala-, y sus otros terrenos, se hallaban distribuidos en arrendamientos a diferentes yanacunas. Deducimos que esta hacienda fue descapitalizada en parte antes de 1854, pues entre los papeles inventariados de Carrillo se encuentra un legajo en que se hacía cesión de las instalaciones de dicha hacienda a los acreedores de su padre. Además, entre los bienes tasados en 1866 no hay correspondencia con el valor de 402,690 pesos tasados en 1811.

La hacienda Oja Redonda, que constaba entre los bienes de la testamentaría Carrillo y Salazar en 1811, no se consigna como propiedad de Carrillo en 1864, figurando en cambio como propiedad de Domingo Elías, según el testamento de este último en setiembre de 1864³². Es obvio, por todo lo anterior, que los secuestros y las deudas lograron afectar considerablemente el patrimonio de los Carrillo de Alborno, pero que síntomas de recuperación se hacían evidentes en las décadas de 1850 y 1860 con el asesoramiento de comerciantes notables.

Si comparamos los bienes, en metales preciosos, de Carrillo y Salazar en 1817 -exiguas piezas de plata-, con la abundante cantidad de piezas y joyas de oro de Carrillo y Zavala en 1864, se puede argumentar que hubo un auge en el atesoramiento de oro y circulante de esta familia. Así, se infiere que lo que Carrillo y Zavala obtuvo de la consolidación probablemente se dio en calidad de depósito a los grandes comerciantes, luego de convertir los vales en moneda y oro -parte no despreciable de lo heredado por su viuda doña Catalina y sus hijos María Luisa y Julio-, de lo que obtuvo intereses producto de manejos financieros. Se libró además de deudas e invirtió a la larga en el mejoramiento de las instalaciones de su hacienda San José para la producción de azúcar, después

31. Escribano Uriza, año 1864, protocolo N° 986, AGN.

32. *Ibid.*, f. 1388, 5 de setiembre de 1864.

de haber saneado sus otras propiedades en Chincha. Sin embargo la manumisión de esclavos pudo haber tenido un efecto más directo sobre las propiedades agrícolas de Carrillo, según se verá seguidamente.

6.3 Manumisión

Nos detendremos brevemente en el análisis del fenómeno de la manumisión de esclavos ya que guarda similitudes importantes con la consolidación, y porque puede ilustrarnos acerca de las bases de recomposición de un importante sector de hacendados. Sin embargo, un estudio específico que profundice en la importancia de la manumisión para el agro costeño está todavía por hacerse.

La manumisión de esclavos se decreta en Huancayo en plena revolución de 1854 pero empieza a aplicarse efectivamente por la contabilidad fiscal, es decir, con la emisión de vales, a partir del año 1855. Se repartieron 3,479 vales de manumisión a un total aproximado de dos mil personas. Los vales rendían un interés del 6% anual. Los esclavos se indemnizaron a razón de 300 pesos cada uno sin tomar en cuenta sus edades. El total implicado en la manumisión representó unos 7'947,000 pesos que sumaban los expedientes aprobados: 2'744,175 pesos fueron indemnizados directamente al contado y 5'181,225 en vales que otorgaban alrededor de 275 mil pesos anuales por intereses³³.

En 1858 se asignó un fondo de amortización de vales que ascendía a 1'500,000 pesos anuales; en 1859 quedaban por amortizar solamente 1'800,000 pesos en vales, los que se cancelaron definitivamente hacia 1861. La cotización de los vales de manumisión se mantuvo siempre alta, a diferencia de los altibajos de los vales de consolidación, y en 1860 se llegaron a cotizar casi a la par, entre el 95 y el 99%³⁴. Esta alta cotización hacía de los vales de manumisión instrumentos especialmente negociables, lo cual permitió a muchos hacendados cancelar sus abultadas deudas del periodo anterior, reflotando así su prestigio y crédito.

En el cuadro 16 se exhibe la lista de los principales indemnizados por la manumisión entre 1855 y 1857, con la cantidad reconocida en vales y el número de esclavos que se les indemnizó. Por ser estas personas las que recibieron directamente los vales de manumisión, reconocemos en ellas a los propietarios de esclavos que en su mayoría eran hacendados. Algunos de estos hacendados

33. *El Peruano*, 11 de octubre de 1856 y 31 de mayo de 1857.

34. Leubel, *El Perú en 1860*.

como Carrillo de Albornoz, Domingo Elías y otros, ya habían sido beneficiados por la consolidación y la conversión entre 1850 y 1854. Empero, no debemos subestimar a los propietarios de esclavos urbanos en Lima, pues cerca del 44% de la población esclava residía en esta ciudad. La mayoría de los esclavos urbanos se desempeñaba como sirvientes. Las 116 personas consignadas en el cuadro 16 recibieron el 57% de los vales de manumisión por un total de 9,677 esclavos.

En el cuadro 17 el panorama cambia. Se trata de las personas a quienes se les asignan entre 1857 y 1860 nuevos vales por concepto de intereses devengados de los años 1855-1856. Estos nombres son distintos a los del cuadro anterior. Entre los nuevos nombres se distinguen comerciantes extranjeros y nativos que adquirieron al contado o recibieron vales de manumisión en pago de deudas contraídas por los hacendados; los hacendados no son mayoría en esta nueva lista de nombres, sino que lo son las personas pertenecientes al ramo del comercio. Así mismo se evidencia una mayor concentración de vales entre menos personas: las 88 personas del cuadro 17 concentran el 65% del total de vales de manumisión.

Los grandes acreedores de los hacendados eran los comerciantes limeños, quienes recibieron entre 1857 y 1861 las sumas más importantes por concepto de intereses de los vales de manumisión.

Esta transformación en la composición social de los principales poseedores de vales demuestra que la manumisión sirvió para indemnizar tanto a los hacendados como a los comerciantes, estableciéndose así un vínculo entre el terrateniente rentista y el comerciante, prestamista e importador, que permitió a un grupo de hacendados dar el paso necesario para modernizar sus haciendas. Aquellos hacendados son los que entienden la necesidad de aliarse a los comerciantes en materia de financiación, administración comercial de su producción, colocación de sus productos en el exterior e importación de insumos. En este sentido creemos que la manumisión, así como la consolidación, aunque esta última en menor grado, sirvieron como vínculo entre el hacendado y el capital comercial para aceitar las viejas bisagras de la dependencia entre el hacendado costero y el crédito comercial. Esta evolución se ha visto perfilarse en los casos de Aparicio y Carrillo de Albornoz. Con algunos detalles peculiares se puede también percibir en los casos Elías y Tristán tratados a continuación.

CUADRO 16

Principales indemnizados por la manumisión de esclavos
en 1855

Nombres	Cantidad recono- cida en vales (pe- sos nominales)	Número de es- clavos manu- misos
Convento de la Buena Muerte	155,100	517
Carrillo de Albornoz, Fernando	116,700	389
Eliás, Domingo	110,925	370
Convento de San Agustín	106,800	356
Congregación de San Felipe Neri	106,200	354
Fernández Prada, Antonio	85,950	286
Mariátegui, Francisco	73,350	244
Lavalle, José Antonio	72,450	241
Osma, Mariano	64,125	213
La Torre y Urraca, Agustín	54,900	183
Concurso de la Molina	53,100	177
Reyes, Andrés	46,575	155
Ramos, Antonio Joaquín	43,650	145
Miranda, Martín	41,400	138
Salinas de Salas, Isabel	40,000	133
Denegri, Pedro	37,575	125
Paz Soldán, Pedro	36,675	122
Salinas, Luis	36,000	120
Mendoza, Andrea	34,650	115
Sayán, Pedro	34,425	114
Moreno, Juan de Dios	33,975	113
Ramírez de Zuloaga, Rosa	32,400	108
Urquiaga de Sarratea, Josefa	31,500	105
Carrillo, Domingo	31,275	104
Soria y Muñoz, Manuel	29,475	98
Pérez, Isidro	29,475	98
Torero Idelfonso	29,025	96
Delgado Hermanos	28,800	96
Quintana, Juan de Dios	28,575	95
Tagle, Francisco	27,000	90
Galdeano, José María	26,100	87
Retes, Francisco	25,875	86
Días, Ramón	25,650	85
Unanue, José	24,975	83
Convento de Santo Domingo	24,900	83
Caramona, Petronila	24,075	80
De las Casas, Manuel Lorenzo	24,750	82
Pando, Nicolás	23,625	78
O'Higgins, Demetrio	23,625	78
Aparicio, Manuel	22,725	75
Zorrilla, Nicolás	22,500	75
Risco y Oyague, Josefa	22,275	74
Salinas, Antonio	22,275	74
Tedemonte, Manuel	22,050	73
Prada y Hurtado	21,825	72
Falconi, José Gregorio	21,150	70
Borgoño, Pedro Antonio	20,925	69
Convento de la Recoleta Dominica	29,100	67

Iturregui, José Ignacio	20,025	66
Ausejo José	19,800	66
Cavero y Cavero, Manuel	19,575	65
Hurtado, Manuel Alejo	19,350	64
Navarro, Mariano	19,125	63
Delgado de Buenaño, Clara	19,125	63
Derteano, Dionisio	18,900	63
Baca, José Antonio	18,825	63
Vivero, Pablo	17,550	58
Cárdenas, Sebastián	17,325	57
Lisarzaburu y Hermanos, Antonio	17,325	57
La Puente, José María	16,875	56
Sancho Dávila, José María	16,650	55
Durango de Dufío, Isabel	16,425	54
Moreyra, Francisco de Paula	15,975	53
Donayre, Encarnación	15,750	52
La Torre, Mariano	15,300	51
Ganoza, Fernando	14,850	49
Forcelledo, Manuel	14,175	47
Vega, Carmen	13,950	46
Godoy, José Candelario	13,950	46
Montero, Juan	13,725	45
Borda, Gregorio	13,650	45
Madalengoitia, Juan	13,500	45
Elías Isidoro	12,825	43
Elguera, Manuel	12,600	42
Pomar, Antonio	12,600	42
Boza, Gerónimo	12,600	42
Elguera, Ignacio	12,600	42
Real, Benito	12,150	40
Pizarro Natividad	12,150	40
Elguera, Ceferino	12,000	40
Laos, Mariano	11,925	39
González, Alfonso	11,500	38
Pinillos, Francisco	11,475	38
Bracamonte, Encarnación	11,250	37
Quevedo, Martín	11,250	37
Suárez, María Josefa	11,250	37
Muñoz, Agustín	11,250	37
Armero, Cristóbal	11,250	37
Ortiz del Campoo, Bárbara	11,025	36
Blanco, Modesto	11,025	36
Cabrera, Blaz	11,025	36
Navarro Rufino	11,025	36
Lomparte, Manuel	11,025	36
Terry, Pedro	10,800	36
Calmet, Tonbio	10,800	36
Lafuente, Santiago	10,800	36
Laos, Manuel	10,800	36
Zavala, Juan	10,575	35
Canaval, José Mansueto	10,575	35
Herrera, Juan Gualberto	10,575	35
Mendiola, Martín	10,575	35
Izaga, Mateo	10,575	35
Asin, José	10,575	35
Salazar, Juan	10,500	35
Aramburu, Isidro	10,350	34
Sotomayor, José María	10,350	34
Gereda, José Fidel	10,125	33
Vargas, Isidro	10,125	33

Navarro, José María	10,125	33
Moyano, Clemente	10,125	33
Arguelles, Benito	9,900	33
Espinoza, Juana	9,900	33
Arguedas, Claudio	9,675	32
Neyra, Juan José	9,675	32
Zavaleta, Manuel	9,225	30
Vidal, Francisco	9,225	30
Total	2'964,775	9,677

Fuentes

"Cuenta corriente con los acreedores de la manumisión tomada por la Dirección del Crédito Nacional en el año de 1857", Tomo I, 600 ff. Libros Manuscritos Republicanos H-4-2032, AGN. En este libro de contabilidad manuscrito aparecen el nombre del acreedor, la foja del manual donde consta el reconocimiento, la fecha del mismo, el número del vale, el capital reconocido e intereses.

"Relación de los acreedores por la deuda de manumisión, intereses diferidos que se han liquidado sobre sus capitales hasta fin de diciembre de 1856 y los que se han abonado en dinero". Libros Manuscritos Republicanos H-4-2029, AGN.

"Cuadro de los capitales amortizados vigentes y de los intereses corrientes de la deuda de manumisión". Libros Manuscritos Republicanos, años 1860-62, H-4-2055, AGN.

CUADRO 17

Nuevos propietarios de los vales
de manumisión en 1867

Nombres	Cantidad en vales (pesos nominales)	Intereses devengados 1855 - 86
Delgado Hnos. e hijos	254,300	30,200 7
Pedro Gonzales Candamo (poseía los vales originales de F. Carrillo de Albornoz)	171,825	20,404
José de la Riva Agüero (poseía los vales originales del Convento de la Buena muerte)	155,100	18,484 4
Graham Rowe y Cía.	146,000	17,340 1
Congregación San Felipe Neri	106,200	12,656 3
Manuel Antonio López y Goytizolo	103,350	12,270
Delgado, Vicente	92,400	9,966 7
José Vicente Oyague y Cía.	86,925	10,321 7
Juan Renner	78,725	9,348
Gerónimo Gonzales	75,525	8,967 6
Convento de San Agustín	64,500	7,680 5
Aramburu, Isidro	65,250	7,747 6
Martín Miranda	62,700	7,445 2
Nicolás Rodrigo	61,600	7,314 5
Pedro Sayán	59,250	7,035 4
Pedro Denegri	56,775	6,741 4
Naylors Conroy y Cía.	47,700	5,664 3
Juan e Isabel Salinas	47,025	5,584 1
Juan Gallagher	46,800	10,364 7
José Ventura Sorozábal	44,250	5,284 4
Rafael Saco	43,725	5,191 2
Linch y Ortiz, Diego y Joaquín	42,575	5,437 4
Mariano Miguel Ugarte	39,900	4,738
Francisco Sagastabeitia	39,225	4,657 6
Guillermo Gibbs y Cía.	38,775	4,604 3
José Valdelomar	37,275	4,426 2
Antonio E. San Martín	36,675	4,254 7
Lembeck y Cía.	36,150	4,292 5
Antonio Salinas	36,000	4,275 3
Clement Dindabure	35,925	4,265 6
María Andrea Mendoza	34,650	4,114 5
Antonio Joaquín Ramos	33,650	3,815 3
Antonio Pol	32,775	3,811 1
Enrique Pearce	32,475	3,856 2
Testamentaría de María Cruces de Revoredo	32,475	3,856 2
Juan Revoredo	32,100	3,811 5
Juan del Busto	31,729	3,767 1
Felipe Barreda	30,250	3,592
Manuel Espantoso	29,650	3,519 7
Isidro Pérez	28,500	3,384 3
José Manuel Amunátegui	26,625	3,161 4
Carlos Elizalde	26,200	3,110 7
Martín Mendiola	26,850	3,188 3
Palmer y Patrone	26,100	3,098 7

Ignacio Osma	26,100	3,099 3
José María Galdeano	26,100	3,188 3
Geraldo López	26,025	3,090 2
Manuel Alejo Hurtado	25,950	3,081 1
Mariano Salaverry	24,975	2,964 6
Felipe S. Gordillo	24,750	2,940
Manuel Lorenzo de las Casas	24,750	2,939
José López Hornillo	23,850	2,831 7
José Sarmiento	23,625	2,805 3
Nicolás Ríos	22,500	2,671 7
Canevaro, Pardo y Barrón	22,350	2,655 1
Santiago Chávez	21,700	2,576 4
Luis Salinas	21,000	2,458 1
Francisco Javier Mariátegui	21,000	2,493 6
Manuela Pando	20,700	2,458 1
Benito Argüelles	20,475	2,431 1
José Ausejo	19,800	2,351 2
Julio A. Pflucker	18,825	2,235 2
Ramón Aspillaga	18,450	2,190 5
Manuel I. Oquendo	18,225	2,163 5
Francisco de Paula Moreyra	18,000	2,137 3
Manuel Sánchez Concha	18,000	2,137
José María Sancho Dávila	16,650	1,977 1
José María de la Puente	16,875	2,003 7
Isabel Durango	16,425	1,950 3
Juan Manuel Iturregui	16,650	1,977 1
Ugolino Lisson	16,050	1,905 5
Máximo Pinillos	15,750	1,870 1
Guillermo H. Lings (funcionario de Graham Rowe y Co.)	14,625	1,736 3
Fernando Ganoza	14,625	1,736 5
Juan Montero	13,725	1,629 6
Bernardino León	13,725	1,629 6
Pedro Paz Soldán	13,350	1,529 6
Bates Stockes y Cía.	13,575	1,612
Ignacio Elguera	12,600	1,496
Antonio Pomar	12,600	1,496
Pedro Terry	11,475	1,302 5
Juan Antonio de la Riva	11,250	1,335 7
Bárbara Ortiz del Campoo	11,025	1,309 1
Fernando Uganza	11,025	1,309 1
Juan Antonio Menéndez	10,350	1,228 7
Juan Ondarza	11,975	1,540 5
José María Sotomayor	11,025	1,309 1
Pedro Delgado y Cotera	10,200	1,211 2
Total.....		413,052 4

Fuente: "Liquidación de los intereses devengados desde 5 de enero de 1855 hasta fin de diciembre de 1856 por los vales de manumisión emitidos en conformidad de lo dispuesto en 3 de diciembre de 1854: lo cual se verifica en cumplimiento de la ley de 11 de marzo de 1857". Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2030. AGN.

6.4 Domingo Elías y Pío Tristán

Don Domingo Elías combinaba sus funciones de hacendado en Ica con las de comerciante en vinos y aguardientes, y estuvo muy activo en la política de la época. Cumplió un papel muy importante en la denuncia de la consolidación como un fraude al fisco. Sin embargo él mismo tuvo una participación digna de destacarse en los negocios de la consolidación. Nuestra información lo sitúa como receptor de 37,900 pesos en vales en 1851 y 1852, durante el gobierno de Echenique, de los cuales convirtió 19,400 a deuda externa en 1853 y 1854³⁵. La Junta de Examen Fiscal tachó 9 mil pesos en vales a su nombre, provenientes del expediente 5077, cuyo interesado original era Teresa Bustamante de la provincia de Camaná³⁶. Esto prueba que Elías gestionó expedientes de consolidación por otras personas, obteniendo así provecho como cualquier otro negociante de la consolidación.

José Rufino Echenique lanza serias acusaciones contra Elías en su *Vindicación* de 1855. En varias de sus páginas se hace explícita una especial animadversión hacia Elías, acérrimo enemigo en 1854, al señalar como una de las causas expresas de la caída del gobierno Echenique la codicia de Elías. Incluso en sus más reposadas memorias, escritas en 1879-1880, Echenique sigue acusando a Elías de resentimiento en sus acciones de 1854, debido a que Echenique no le otorgó los favores que solicitó con respecto a la consolidación, y porque, además, tenía intenciones de encubrir malos manejos en el carguío y separación del guano bajo contrato con el gobierno. Según Echenique, Elías se alió por estas razones con Castilla para hacer la revolución de 1854. Escribe Echenique:

"...y ese Elías, que no pudo hacerse del expediente de la Novoa, a quien no se satisfizo en el todo sus exigencias en el reconocimiento de otro expediente que presentó de unas cargas de petacas de plata y otras cosas, y otros expedientes presentados también por él, en los que hubo rebajas: ese Elías, que lleno de furor y de codicia pelea en la calle pública con el señor Oyague por la participación de diez mil pesos de vales que exigía de un expediente del Sr. García del Río, o qué sé yo de quien; que pidió una cantidad a Concha por el expediente de la Novoa, y quiso que el general

35. Dirección del Crédito Nacional, "Libro de la deuda interna consolidada", tomo 2, f. 1333, AGN.

36. Junta de Examen Fiscal, *Informes; El Peruano*, 7 de julio de 1855.

Torrico le prestara 200,000 pesos en vales (...), debía ser el precursor del desarrollo de esa envidia"³⁷.

En su afán por demostrar la bancarrota que amenazaba a Elías, exhibiéndola como prueba del interés de éste por hacer la revolución y así salvarse de la ruina segura, Echenique realiza un análisis de las propiedades y situación financiera de don Elías. Este ejercicio reviste especial interés, no tanto por la discusión política que yace en su fondo, ni porque le demos absoluta credibilidad a sus afirmaciones, sino porque expresa la forma en que un contemporáneo evalúa y conceptúa lo que constituye un capital en la época. Echenique empieza diciendo lo siguiente:

"Don Domingo Elías no posee un peso en dinero en su poder ni en el ageno, y sus propiedades son la hacienda Urrutia, que compró de don Juan Aliaga en treinta mil pesos, las haciendas San José y San Javier de Nasca, que ha dividido en cuatro, compradas del Estado en billetes [durante el gobierno de Santa Cruz cuando el billete se cotizaba a un 10% de su valor nominal] con más de seis cientos esclavos, en ciento diez mil pesos, y de cuyos esclavos no habría últimamente doscientos, porque todos los demás han sido vendidos aumentándoles el precio de su tasación contra lo prevenido por la ley. Las tierras de Ocucaje, que compró a la señora Novoa en cuarenta mil pesos ahora cuatro años más o menos, cuya cantidad no sabemos si la habrá pagado. La hacienda Oyas que valdrá unos treinta o cuarenta mil pesos"³⁸.

Echenique agrega a estas propiedades de Elías una bodega para depósito de vino y aguardientes, 25 mil pesos, una casa en Pisco y otra en Ica (Elías vivía en Lima en una casa arrendada y no poseía propiedades en la ciudad), el camino de hierro de las islas Chincha, y algunos esclavos y enseres avaluados por Echenique en 40 mil pesos. Sumados los valores calculados por Echenique, concluye que Elías debía poseer en 1855 un capital total de 285 mil pesos que, con exageraciones [!] podía calcularse en 500 mil pesos.

Con el objeto de comprobar las aseveraciones de Echenique, se consultó el testamento de Domingo Elías hecho en setiembre de 1864, cuando Elías contaba 59 años de edad. En el testamento Elías declara como sus bienes los siguientes: (i) la hacienda Santa Cruz de Ojos en Pisco, avaluada en 18 mil pesos, que junto con la cantidad de 7 mil pesos, constituía la herencia en 1835 de su esposa Isabel de la Quintana, hija de Antonio Nasario de la Quintana y hermana de Juan de Dios Quintana, poderoso terrateniente de la zona;

37. Echenique, *Vindicación*, p. 102.

38. *Ibid.*, pp. 118-119. Ver también Echenique, *Memorias*, tomo 1, p. 104.

Elías no llevó bien alguno al matrimonio; (ii) durante la sociedad conyugal adquirió las haciendas Oja Redonda, San Matías y otras en el valle de Chíncha, las haciendas Urrutia, Palto, Chacarilla en el distrito de Córdor, tierras El Totoral y Navarro, la hacienda Buenavista, los fundos Chacarilla, Santa Rosa, La Mejorada y el Sapo en el valle de Ollas, las haciendas Tinquina y Ocucaje en el valle de Ica, las haciendas San Javier, San José, San Pablo, Ventanilla y Santa Isabel en el distrito de Nasca, tierras Laurel en el valle de Palpa, unas tierras en Funga y Tumaná; (iii) una bodega en la playa, una casa y dos solares para la fabricación de vinos, en el pueblo de Pisco; (iv) créditos activos a su favor³⁹.

La lista de propiedades rurales de Elías es impresionante. Debió haber sido muy activo y emprendedor para haber acumulado tal cantidad de tierras entre 1835 y 1864. Sin embargo en el testamento aludido no se consignan los valores de sus propiedades ni se indica la cantidad de lo que Elías adeudaba como "créditos pasivos". Brillan por su ausencia propiedades urbanas, cantidades en efectivo, capital movable, oro, joyas y alhajas, visibles entre otros representantes socialmente encumbrados.

Tomando en consideración que Echenique escribe en 1855, y que los datos del testamento de Elías son de 1864, se puede constatar que los cálculos de Echenique no incluyen muchas de las propiedades de Elías. Aún así, hay obvias bases para pensar que Echenique subestimó en sus cálculos. Continuando su análisis, Echenique nos informa que "todo el mundo sabe" que el capital fijo en fundos rústicos no producía en el Perú de 1854 ni el 5% al año. En otras palabras, la renta de la tierra era muy exigua antes de la transformación del agro con el cultivo comercial del azúcar. Por tanto, Elías debió haber encontrado en el giro comercial, el endeudamiento o dilación en el pago de contratos de compra, y en los negocios con el Estado, los fondos necesarios para adquirir sus numerosas propiedades agrícolas.

Echenique menciona además que Elías debía alrededor de 800 mil pesos a un interés del 24% anual. Así, Echenique llega a la conclusión de que entre los productos de sus fincas y sus egresos existía un déficit de por lo menos 40 mil pesos al año, y entre los valores de sus propiedades y sus deudas existía un déficit de 300 mil pesos. Es difícil probar estas afirmaciones.

Lo cierto es que hacia 1864 Elías había logrado concentrar abundantes propiedades, tal vez aprovechando lo deprimido del valor de la tierra, a través

39. Escribano Manuel Uriza, año 1864, protocolo 986, f. 1388, AGN.

de transacciones comerciales arriesgadas, entre las cuales no faltaba la especulación con vales de consolidación, manumisión y billetes de deuda interna. No olvidemos además su participación activa en peligrosa política, en los primeros contratos para traer culis chinos a trabajar en las haciendas costeñas, y otros contratos con el Estado peruano que seguramente lo ayudaron a consolidar su patrimonio. Elías representa pues el caso del hacendado emprendedor y arriesgado que supo negociar con particulares y el Estado en su provecho.

Pío Tristán, un influyente arequipeño en 1857, logró concentrar por su parte 124 mil pesos en vales de consolidación, lo que lo hace figurar entre los diez primeros poseedores de vales en dicho año. Además, Tristán, se contaba entre los primeros acreedores del Estado en el ramo de arbitrios entre los años 1852 y 1855, junto con sus hermanas Victoria, Francisca y Josefa (ver cuadro 3). ¿Cómo logró Tristán ser tan conspicuo acreedor entre 1850 y 1857? Antes de 1850, Tristán no figuraba entre los principales acreedores del Estado. Sabemos por la correspondencia de Tristán con su sobrino, el coronel Pascual Saco, que don Pío residía en Lima desde 1847, por lo menos, manejando sus negocios rentistas en Arequipa a través de su apoderado Miguel Pareja⁴⁰.

Sus vinculaciones en Lima con funcionarios del Estado, como lo fuera su sobrino, sus inversiones en préstamos al Estado y su ausentismo de Arequipa hacían de Pío Tristán un propietario rentista que vivía de los intereses de sus propiedades e inversiones en préstamos. Tenemos aquí un ejemplo de propietario provinciano que hacia 1850 empieza a trasladar sus capitales a operaciones rentistas y especulativas que le proporcionaban una ganancia mayor en la ciudad de Lima.

El mismo Pascual Saco tenía intereses tanto en Arequipa como en Lima. Saco recibió 78 mil pesos en vales de consolidación en 1852, convirtió a deuda externa 20 mil, y 50 mil le fueron tachados por la Junta de Examen de 1855. Según el inventario de sus bienes en 1868, él poseía una finca en Lima, un rancho en Chorrillos, una hacienda en Camaná avaluada en 13,910 pesos, tierras en Pampa Colorada compartidas con Nicolás de Piérola, el que fuera uno de los ministros de Hacienda de Echenique, otras tierras compradas al mismo, una parte de las lomas de Ocoña, y 48 mil pesos en vales de consolidación según su valor nominal⁴¹.

40. Colección Plácido Jiménez, Nº 147, AHRA.

41. Ibid., Nº 123.

Podemos observar en este caso que gran parte de los vales que Saco recibió seguían ganando intereses en 1868. Por su vinculación con otros acaparadores y negociantes en vales, a Saco lo sindicamos como uno de aquellos personajes que pertenecían al grupo de los "consolidados".

Los casos de Elías, Tristán y Saco son los de hacendados y rentistas que, gracias a una "ayudita" de sus conexiones con el Estado y sus negocios de especulación, lograron beneficiarse con la consolidación para, por un lado, aumentar su propiedad rural, y por otro garantizar seguros ingresos rentistas. Fue este tipo de rentistas más activo el que logra aprovecharse de los rentistas más pasivos, como fue el caso de doña Ignacia Novoa, el que analizaremos a continuación.

6.5 Doña Ignacia Novoa

La señora Ignacia Novoa viuda de Arredondo ocupó el segundo lugar entre las personas que recibieron mayor cantidad de vales de consolidación, con 948,500 pesos nominales a su favor. El 74% de los vales emitidos a su nombre en 1852 se convirtieron a deuda externa en los años 1853 y 1854. ¿Quién era esta señora y por qué se le consolidó tan alta suma?⁴²

En un testamento cerrado, dado en Chorrillos el 6 de julio de 1860, declara que era natural de Guayaquil, Ecuador, hija legítima de Ignacio Novoa y Ana Arteta. Fue casada con Manuel Rubianes, quien fuera oidor de la ex Audiencia de Quito, posteriormente en segundas nupcias con Juan Avendaño, oidor de Lima, y en terceras nupcias con el brigadier real Manuel Arredondo y Mioño, matrimonios en los que no tuvo hijos. Además señala que sus bienes los había heredado de su finado esposo Arredondo y de su tío el marqués de San Juan Nepomuceno⁴³. Al respecto, Basadre nos informa sobre los bienes que hubo de poseer Arredondo en Cañete e Ica:

" El militar español Manuel de Arredondo heredó de su tío el Oidor de la Audiencia de Lima Manuel Antonio de Arredondo que llegó a regir el Virreinato al fallecer el Virrey Demetrio O'Higgins, las haciendas de Montalván y Cuiva en el valle de Cañete y las tierras de Ocucaje en Ica. Ellas habían pertenecido a su esposa doña Juana Herce Dulce, viuda de Juan Fulgencio de Apesteguía y Ubago, segundo Marqués de Torre hermosa [sic]. El brigadier Arredondo casó con doña Ignacia Noboa... Al luchar contra

42. Dirección del Crédito Nacional, "Libro de la deuda interna", tomo 2, ff. 1372-1373.

43. Escribano Lucas de la Lama, año 1860, protocolo N° 345, f. 51v; protocolo 346, f. 1, AGN.

los patriotas, le fue aplicada la ley de secuestros y perdió esos bienes. Montalván y Cuiva fueron obsequiados por el Estado a Bernardo O'Higgins. Pero la señora Noboa o Novoa reclamó insistentemente contra este despojo varios años después de que pasó la guerra de la independencia. [...] Pero las haciendas no le fueron devueltas aunque sí pagadas en la época de la aplicación pródiga de la ley de conversión de la deuda interna"⁴⁴.

Pero, ¿qué se hizo de la suma erogada en vales por el pago de las haciendas? El destino de esta suma está indesligablemente unido a los negocios especulativos de la consolidación y al escándalo político. Elías denunció en una carta publicada en *El Comercio*, en agosto de 1853, como fraudulento el reconocimiento de la Novoa. A ello Echenique replica desde su destierro en Nueva York: "[Elías] solicitó que se le reconociese por su valor el expediente de la Sra. Novoa, importante millón y medio de pesos, que el mismo Elías me declaró haber logrado en cuarenta mil"⁴⁵. La denuncia pública de Elías se habría debido, según Echenique, a que no se asintió a sus pedidos especulativos. Tratemos pues de indagar a través de otras fuentes menos partidarias el posible derrotero de la suma consolidada a la señora Novoa.

En el citado testamento, en 1860, doña Ignacia Novoa enumera sus bienes de la siguiente manera: 47 mil pesos, a un interés de 500 pesos (1.06%) al mes, que se hallaban en poder de Domingo Elías (!); una casa grande en arrendamiento en la calle Mascarón y otra en la calle del padre Gerónimo; varios créditos en el Consulado, Cabildo, Minería y antiguo estanco de tabacos; 2,500 pesos en efectivo y una renta de 600 pesos al mes. Sus seis herederos recibirían cantidades en efectivo del "préstamo a interés" otorgado a Elías. Se distingue entre sus herederos una tal Mariana Palacios, que, en mayo de 1857, cobró intereses devengados de vales de consolidación a nombre de Ignacia Novoa por un monto de 102 mil pesos en vales, y por 70 mil pesos en vales que había recibido como cesión⁴⁶.

Si nos guiamos por los indicios a nuestra disposición debemos suponer que la cantidad en vales que doña Novoa logró preservar para sí y su heredera, 172 mil hacia 1857, dista mucho de la cantidad nominal que teóricamente obtu-

44. Basadre, *Introducción a las bases*, tomo 1, pp. 219-220.

45. Echenique, *Vindicación*, p. 57.

46. Lucas de la Lama, op. cit.; Dirección del Crédito Nacional, "Liquidación de intereses devengados en los años de 1855 y 1856", H-4-2031, Libros Manuscritos Republicanos, AGN. La liquidación de los intereses devengados de los vales de Ignacia Novoa ascendía a 18,354 pesos y los de Mariana Palacios a 12,600; ver cuadro 19. Principal e intereses de los vales de Novoa y Palacios fueron amortizados en los años 1858 y 1860-1862.

vo en 1852, alrededor del millón de pesos en vales. ¿Qué se hizo de los otros 776,500 pesos? Sabemos que doña Novoa no invirtió ninguna cantidad en bienes raíces después de la consolidación, porque las dos casas a que se refiere su testamento en 1860 ya las poseía antes de 1850. Por tanto se descuenta la posibilidad que parte de lo consolidado a doña Novoa se haya dirigido a la compra de propiedades urbanas. Adicionalmente sabemos, por el libro mayor de la deuda interna, que de los vales emitidos a nombre de Novoa se convirtieron a deuda externa 703,500 pesos. Sin embargo, en su testamento no se menciona que exista en poder de la señora Novoa bono de deuda externa alguno. Por tanto es presumible que el expediente de la señora Novoa se repartiera entre negociantes de la consolidación que prontamente convirtieron los vales a deuda externa. Si a todo esto, nos fijamos en que Elías se había encargado de gestionar el expediente, que era acreedor de doña Novoa por 47 mil pesos y que pudo también haberle comprado la hacienda Ocucaje, es factible que Elías se haya beneficiado grandemente con lo consolidado a doña Novoa.

Se repite por tanto, una vez más, el patrón de cesión de derechos sobre expedientes o venta a vil precio, que resultan desventajosas para el acreedor original, y muy favorables para los negociantes de la consolidación y conversión. Es probable que se haya negociado con este expediente otorgándole a la señora Novoa solamente un 20% de los vales que legalmente le correspondían, y el resto se haya repartido entre "consolidados". El ejemplo de la señora Novoa, cuyo interés estuvo en invertir su capital en rubros que le garantizaran una renta segura, nos muestra que la consolidación por sí misma, sin estar apoyada por una actividad comercialmente activa, no pudo crear capitales aprovechables para rentistas urbanos.

Otro caso de rentista urbano pasivo lo constituye el Convento de la Concepción de Lima, que ocupa el puesto catorce entre las cantidades consolidadas, con 212,900 pesos en vales. Según el informe de la Junta de Examen, esa deuda reconocida por el gobierno Echenique se componía de 186,077 pesos, valor del terreno que se tomó del convento para la plaza del mercado durante el primer gobierno de Castilla, y 26,892 pesos que eran el importe de intereses corridos desde 1847. Sin embargo, a partir de 1851, en lugar de amortizarse esta crecida deuda, el convento recibía la fuerte suma del 6% de interés anual hasta la década de 1860. Igual situación de inmovilidad de capitales en la consolidación caracterizaba a la Beneficencia de Lima y otras beneficencias de provincias.

En contraste, hubo rentistas urbanos como don Antonio Chacón que demostraron cierta actividad e individualismo en sus negocios de consolidación

y bienes raíces. Recibió 36,500 pesos en vales reconocidos durante los gobiernos de Castilla y Echenique, de los cuales logró convertir 17 mil a deuda externa en el año 1854⁴⁷. Según su testamento a octubre de 1855, declaraba ser natural de Panamá, no era casado ni tenía hijos, descendientes legítimos ni naturales; sus bienes fueron adquiridos "por título propio e industria personal sin sociedad ni participación de persona alguna", y no debía a nadie⁴⁸. Sus bienes consistían en 29 propiedades urbanas (5 casas de altos y bajos, 13 casitas, 2 corralones, 9 tiendas) en Lima y Callao; 50 vales de consolidación por la suma nominal de 80 mil pesos, 16 mil a su nombre y el resto a nombre de otras personas; y artículos de plata labrada.

Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de propiedades urbanas poseídas por Chacón. La actividad de este señor parece haber sido el corretaje y comercio de fincas. El inventario de sus bienes nos indica además que se dedicó a la compra y venta de vales de consolidación en los años 1854 y 1855, cuando dichos valores se cotizaban todavía bajos, para después especular con la subida de su cotización, operación que pareció haber sido difundida entre rentistas activos que poseían cierta liquidez. Si consideramos que la mayor parte de su inversión se dirigía a adquirir bienes raíces, es muy probable que parte de lo reconocido a Chacón se haya dirigido a ese rubro.

En conclusión, los casos que tratamos en este capítulo nos demuestran que sólo aquellos hacendados y rentistas que supieron inyectar dinamismo a su actividad, vinculándose ya al sector comercial, ya al apoyo político, a la especulación, o a los bienes raíces ágilmente administrados, lograron obtener algún provecho visible de la consolidación, cancelar así sus deudas pasadas y garantizar seguras rentas. En el centro de este dinamismo y especulación se encontraban los negociantes y grandes comerciantes y prestamistas, a los que trataremos detalladamente en lo que sigue.

47. Dirección del Crédito Nacional, "Libro de la deuda interna", tomo 1, f. 74.

48. Escribano Felipe Orellana, año 1855, protocolo 488, AGN.

Capítulo 7

GRANDES COMERCIANTES

"Al comercio le importaba muy poco o nada que, al cobrarle al Estado antiguas o modernas deudas, se cometiesen fraudes, ya fuese aumentando los particulares a su cargo, ya recortándoseles el Gobierno a ojo de buen cubero, a ésta la mitad, a aquel la tercera, cuarta o sexta parte. El comercio estaba a los resultados y desde que se pusieron en circulación los vales, comprólos y los vendió, con más o menos estimación, según la alta o baja de la plaza; ni más ni menos como toda mercadería"

Anónimo, *Al Gobierno ...*
(1856)¹

Los grandes comerciantes de influencia, importadores y prestamistas con vinculaciones en el exterior, negociaron los vales de consolidación y diestramente jugaron con la cotización de éstos en el reducido mercado de valores de la época. Estos comerciantes resultaron ser los mayores favorecidos por la consolidación utilizando para ello medios que, a veces, iban más allá de los puramente económicos. La cita de un contemporáneo, con la que se encabeza este capítulo, describe, a nuestro parecer, fielmente la manera como el comercio encaró en forma pragmática el negocio de los valores de deuda interna. Faltaría, sin embargo, penetrar en el teje y maneje de esta importante actividad que los comerciantes supieron dominar. Asimismo, resta aún el enigma de hacia dónde se dirigieron los beneficios que dichos comerciantes obtuvieron de la consolidación. El estudio de su actividad mercantil, y de sus designios económicos, nos brindará una pista segura para dilucidar hasta qué punto se aprovechó productivamente la porción de la consolidación que los grandes comerciantes acapararon.

Nuestra investigación sobre la identidad de los principales personajes relacionados a la consolidación, así como el difícil rastreo del destino de las sumas repartidas por esta medida fiscal, nos condujeron a la asombrosa actividad del gran comerciante Pedro Gonzales Candamo, quien se desempeñó en el comercio de Lima entre los años 1824 y 1866. La biografía de Gonzales Candamo, ilustra excepcionalmente la actividad económica y mercantil de esos años, sobre todo en lo relacionado a la evolución del capital comercial que va cimentando la introducción del capitalismo en el país.

1. Recopilación de artículos aparecidos en *El Comercio*.

7.1 La práctica de Gonzales Candamo

Tal vez la evidencia más relevante de la vida de Gonzales Candamo, para efectos del presente estudio, es su estrecha relación con Ramón Castilla, el gobernante que dio origen a la política de la consolidación de la deuda interna. Gonzales Candamo conoció a Castilla en 1817 cuando el entonces oficial realista se encontraba en Valparaíso, luego de haber caído prisionero en la batalla de Chacabuco. Por recomendaciones epistolares cursadas entre las familias de estos dos personajes, el joven chileno ayudó al militar a trasladarse a Montevideo, desde donde logra escapar al Brasil². Desde esa fecha hasta 1866, año en que fallece Gonzales Candamo, la amistad de ambos fue constante. Múltiples acontecimientos en la vida de las dos personalidades ilustran los vínculos que se establecen entre un hombre de negocios y un caudillo militar durante los primeros años de la República. Así tenemos que en Arequipa, en el año 1828, Gonzales Candamo interviene a favor de Castilla en un pleito entablado por deudas que reclamaban dos vecinos, Pedro María Ocharán y Pascual Flores. Es más, don Pedro llegará a mencionar a Castilla en su primer testamento cerrado hecho en Lima, el 30 de marzo de 1865. En esta su última voluntad escrita, estipula, acerca de un proyecto industrial de difícil realización debido a la implantación de un liberalismo económico implacable, lo siguiente:

"... que de sus bienes se saque la parte que sea bastante y que debe designar el indicado su hijo don Carlos para que se establezca la fábrica de tocuyos que le ha sido adjudicada como acrehedor en el concurso formado a los bienes de la viuda de Santiago e hijo, para que en esta fábrica se dé trabajo a mujeres pobres, previniéndose de que el testamento dispone que la administración de esta obra corra a cargo de su buen amigo el Gran Mariscal don Ramón Castilla, que tendrá la facultad de nombrar las personas que después de su fallecimiento la administren"³.

La cita de arriba nos informa no sólo acerca de la estrecha amistad entre Gonzales Candamo y Castilla; se transparenta además la idea de don Pedro de dar solución al problema de la fallida fábrica de tocuyos, tanto más sincera y anhelada por cuanto la comunica como deseo testamentario. En realidad, la fábrica fue tal vez uno de los pocos negocios fracasados que emprendió Gonzales Candamo, en el que inmovilizó no poco de su capital. Según él, la solución consistía en emplear fuerza de trabajo femenina y barata en la fábrica, administrada por una autoridad fuerte e ilustre.

2. Clavero, J. G. *El coronel de milicias don Pedro Gonzales Candamo* (Lima: Tip. El Lucero, 1904), p. 38.

3. Escribano Felipe Orellana, año 1865, protocolo N° 500, f. 224v, AGN.

La historia de la primera fábrica textil en el Perú tiene su origen dos décadas antes del testamento de Gonzales Candamo, y desde sus inicios interviene en ella el gran comerciante. En 1846 don Pedro firmó con Jorge Moretto, pionero industrial que tenía ya establecida una fábrica de cristal, y la señora viuda de Santiago, un contrato para fundar una fábrica de tocuyos. Esto sucedía cuando las condiciones para las primeras fábricas en Lima eran propicias en mayor grado que en años posteriores. Sin embargo, ante una propuesta de Castilla para financiar una oficina estatal de salitre en Iquique, Gonzales Candamo cede a la compañía Viuda de Santiago e hijo el negocio de la fábrica, prestando además cien mil pesos al crecido interés de 1% mensual, con el exclusivo objeto de establecerla. Los derechos sobre la fábrica que don Pedro menciona en su testamento provienen de este abultado préstamo. En 1847 se forma una compañía entre la viuda de Santiago, C. de Cagigano y Juan Norberto Casanova, el mismo que escribió en 1849 uno de los ensayos pioneros sobre la industrialización en el Perú⁴. Esta compañía logra financiar la importación del primer telar y su maquinaria a vapor. La fábrica se plantificó en 1848 en la casa molino de la Perricholi, a la entrada de la Alameda de los Descalzos en Lima, utilizando la fuerza motriz de la acequia Peines y el contrato de mano de obra femenina⁵.

El deseo de Gonzales Candamo de restablecer la fábrica no se llegó a realizar porque él mismo se encargó de revocar la estipulado en su testamento de 1865, según un posterior y definitivo testamento dado en Piura en 1866. Tal vez se percató finalmente de la dificultad de la empresa en aquellos años. En concordancia con su sentido práctico, la altruista idea de don Pedro de construir escuelas de instrucción para los hijos de las mujeres que trabajaran en la fábrica de tocuyos, se modificó en la promesa de un hospicio para niñas pobres, establecido efectivamente en 1871 con el nombre de Santa Rosa, y otras obras de caridad, para las cuales donó 100 mil pesos a la Beneficencia Pública de Lima, único canal establecido para tales obras⁶.

-
4. Casanova, J. N. *Ensayo económico y político de la industria algodonera fabril en el Perú* (Lima, 1849).
 5. En Carrasco, E. *Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año de 1850* (Lima: Imp. J. Montoya, 1849), p. 82, se lee: "Artes e Industrias. Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón: el año de 1847 se trajo de Europa por la compañía de comerciantes empresarios compuesta por la Sra. Viuda de Santiago e Hijos [sic], ss. C. de Cagigano, y el Dr. J. N. Casanova, el primer telar con la maquinaria correspondiente y operarios fabricantes para hilados y tejidos de algodón. En 1848 se planificó en la casa molino de la Perricholi..." Se agregan además las siguientes fábricas existentes en la época: fábrica de seda del Sr. Sarreatea, fábrica de papel del Sr. Villote, y las fábricas de velas y blanqueo de ceras de Laviosa y Tovalló.
 6. Orellana, op. cit.

La actividad mercantil que Gonzales Candamo había desarrollado a lo largo de su vida lo entrenó a desistir de proyectos no viables o menos rentables que otros⁷. Es esta actividad, de más constancia en Gonzales Candamo, la que nos interesa con el fin de seguir el destino de lo repartido a los comerciantes por la consolidación.

Don Pedro Gonzales Candamo era pues un notable comerciante de Lima, práctico y efectivo, que escogía con muy buen criterio sus negocios, de acuerdo a la elitizada tendencia de enriquecimiento de la época. Uno de sus buenos negocios, pero de ninguna manera el mejor ni el más cuantioso, fue el de la consolidación. Recibió 173,600 pesos en vales en 1850 y 7,600 en 1851, durante el primer gobierno de Castilla, que hacían un total de 183,900 pesos. Con esta cifra ocupa el puesto número 18 entre los que recibieron mayor cantidad de vales de consolidación, y el segundo lugar, después del Ejército Restaurador chileno, en la lista de aquellos que recibieron reconocimientos durante dicho gobierno de Castilla. Cabe señalar que ningún reconocimiento hecho a Gonzales Candamo provenía de expedientes de consolidación, pues éstos no se procesaron durante la administración Castilla sino en la posterior de Echenique. Lo reconocido a don Pedro provenía de billetes, cédulas, y cédulas de reforma, que eran valores que circulaban a bajo precio en el mercado de Lima y que Gonzales Candamo se dedicó a adquirir en el más puro ejercicio comercial-financista. Los vales emitidos a su nombre, por tanto, no fueron objeto de tacha u observación alguna y solamente la cantidad de 3,200 pesos de esos vales se convirtió a deuda externa⁸.

Gonzales Candamo participó, eso sí, en la compra de vales convertidos de la deuda interna a externa en los años 1853 y 1854. Figuró entre los principales tenedores de bonos de la deuda trasladada, convirtiéndose así en acreedor 'externo' del Estado peruano. Gonzales Candamo recibió además una privilegia-da amortización de su acreencia interna a través de la Tesorería Departamental

7. Gonzales Candamo también desistió de realizar un proyecto de una fábrica de papel en Lima, a pesar de haber formado sociedad en 1827 con los tenientes coroneles chilenos Pedro Gonzales Landeo y José M. Monterola, y el teniente peruano retirado Carlos Sánchez. Parece ser que la razón por la cual desistió en esta oportunidad fue porque encontró una mejor ocasión para invertir su capital mercantil. La fábrica la estableció finalmente otro chileno, Manuel Amunátegui, propietario del diario *El Comercio*, junto con Alejandro Villote, en 1846.

8. Caja de Consolidación, "Libro auxiliar donde constan los vales de la deuda interna convertida en externa de las casas Uribarren y Montané", Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2010, AGN.

de Lima, por la cantidad de 72,300 pesos en efectivo, aparte de otras amortizaciones por concepto de aduana, en los años 1851 y 1852.

Don Pedro también se dedicó a comprar vales de consolidación durante el gobierno de Echenique, lo que constituía una práctica absolutamente legal, como lo atestigua el hecho de que Gonzales Candamo figuraba entre las personas que, juntamente con comerciantes extranjeros, reclamaban en contra de la distinción entre los vales emitidos antes de abril de 1851 y los emitidos después de dicha fecha. Entre estos últimos, muchos habían sido trasladados a la deuda externa de 4.5% de interés anual (ver capítulo 2). Al crearse la Dirección del Crédito Nacional y empezar ésta a amortizar y pagar los intereses de todos los vales sin distinción alguna en 1857, las ganancias de Gonzales Candamo se incrementan notablemente al subir la cotización de los vales en el mercado.

7.2 Cotización de los vales

La fluctuación de la cotización de los vales de consolidación se puede apreciar en el cuadro 18, elaborado en base a las distintas fuentes indicadas. Antes de 1850, cuando se otorga el 6% de interés a los billetes y demás valores del Estado en circulación, la cotización era de un 10% del valor nominal, según escribe Echenique en sus memorias. Gonzales Candamo se dedica a acumular estos valores entre 1839 y 1850, comprándolos al reducido precio de esos años, para luego realizarlos ventajosamente después de 1850.

En el cuadro 18 se observa una evolución positiva, en la cotización de los vales, entre los años 1849 y 1854, a excepción de una momentánea baja en 1852. Hacia 1854 la cotización decae sensiblemente y se mantiene baja durante los años 1855 y 1856. Luego empieza a subir a partir de 1857 y, sobrepasando los límites alcanzados en 1854, se mantiene en sostenido ascenso hasta 1865, año en el que se logra amortizar casi la totalidad de los vales.

Tratar de explicar estas alzas y bajas en la cotización de vales nos lleva al terreno de la política fiscal de los tres gobiernos en los cuales, en forma sucesiva, se dio origen, se ejecutó y finalmente se canceló la consolidación. El tránsito de una cotización irrisoria del 10% de los billetes, previamente a la consolidación de 1850, a una del 25% al convertirse los billetes en cédulas de reconocimiento en 1850 y parte de 1851, se debió, según Echenique, al hecho de que se les asignó a estas cédulas un interés del 6% anual durante el primer gobierno de Castilla. Ese interés contrastaba con el alto interés de 1 ó 2% mensual que se le asignaba a los préstamos de dinero. Sin embargo, la nove-

dad de un interés sobre los reconocimientos del Estado avivó la demanda comercial de los valores de deuda interna⁹.

En 1851 se experimentó un alza en la cotización de los vales de consolidación -expedidos a cambio de cédulas de reconocimiento y para cancelar expedientes de consolidación aprobados-, del 25% al 45 ó 46%. La amortización de vales en aduanas y tesorerías estaba dando como resultado la elevación del valor real de los vales. Sin embargo, hacia principios de 1852 la cotización de los vales decae. Efectivamente, en una carta al ministro de Hacienda de Echenique, Manuel de Mendiburu, en febrero de 1852, el Mariscal Ramón Castilla, muy influyente todavía a pesar de su momentáneo alejamiento del poder, se queja de la caída en el precio de compra de los vales. En la carta se lee:

"Habría Ud. sabido la baja excesiva de los vales de la Caja de Consolidación, pues habiendo estado el 45 y aún el 46%, no ha mucho tiempo, hoy creo que se encuentran al 35 ó 37. Es regular que Ud. haya conocido la verdadera causa de esta perjudicial baja del crédito en la deuda interna, a saber: en la última ley del Congreso, el proyecto del nuevo reglamento de comercio, que parece extingue el privilegio de la bandera o, lo que es igual, el de las procedencias directas*. Como la amortización directa ofrecía al comercio el aliciente de un negocio seguro, que le permitía amortizar anualmente 500 mil pesos, de que resultaba una ventaja al tenedor directo del papel, nada de extraño debe sernos que los vales hayan bajado y bajen el 25%, si oportunamente el gobierno no dicta una medida que restablezca el crédito y le dé mejor posición"¹⁰.

Comprobamos así que Castilla criticaba, en favor de intereses comerciales ligados a la deuda interna, algunas de las medidas de Echenique. Estas críticas no dejaron de tener resultados. A raíz de la baja coyuntural de los vales, el 29 de mayo de 1852, se resolvió que la aduana del Callao diese 20 mil pesos mensuales, y las demás aduanas 6 mil, a la Caja de Consolidación para realizar amortizaciones de vales¹¹.

9. Echenique, *Memorias*, tomo 2, p. 200.

* La aduana, previamente al reglamento de comercio de 1852, hacía amortizaciones preferenciales por hasta un total de 500 mil pesos anuales, al recibir vales de consolidación a cambio del pago de derechos de efectos que se importaban en buques procedentes directamente del Atlántico, sin tocar otros puertos que no fueran los peruanos, así como de mercancías traídas en buques peruanos.

10. Mendiburu, "Memorias" (inéditas), p. 523.

11. Ibid., p. 525; *El Registro Oficial*, 29 de mayo de 1852.

CUADRO 18

Cotización de los vales consolidados, 1849-1865
(% del valor nominal)

Año	Cotización (%)	Año	Cotización (%)
1849	10 ^a	1857	—
1850	25 ^a	1858	50-58 ^f
1851	45-46 ^b	1859	70.99 ^{g,h}
1852	35-37 ^b -44 ^c	1860	85.3 ^g
1853	51 ^a	1861	85.1 ^g
1854	53 ^a -29 ^d	1862	84 ^g
		1863	91.9 ^g
1855	28-30 ^e	1864	87.6 ^g
1856	28-30 ^e	1865	89.8 ^g

Fuentes:

- a Echenique, *Memorias*.
- b Carta de Castilla en Mendiburu, "Memorias".
- c Contrato compra-venta, escribano Escudero, octubre 1852, protocolo 227, AGN.
- d Casós, *Para la historia*, abril 1854.
- e Anónimo, *Al Gobierno*.
- f *El Peruano*, 25-4-1858, tomo 34, Nº 23.
- g Promedios anuales en base a promedios mensuales obtenidos de las propuestas aceptadas: "Libro de actas de la Dirección del Crédito Nacional", Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2039, AGN.
- h Leubel, *El Perú en 1860*.

La cotización del 44% en octubre de 1852 queda atestiguada por una protocolización de compra-venta en los archivos notariales de la época. Se trata de la transacción realizada entre el coronel Miguel Saldívar, 43 años, natural del Cusco, soltero; y Rafael Saco, natural de Lambayeque, "vecino del Comercio de Lima". En la minuta transcrita por el notario se lee:

" Sírvasse usted estender en su rexistro una Escritura por la que conste, que el señor coronel del Ejército don Miguel Saldívar me da en venta una Cédula del Crédito Público reconocida en la Caja de Consolidación espedida a favor de dies y siete mil pesos número seis mil noventa y nueve al precio corriente de quarenta y cuatro por ciento, que importa la suma de siete mil quatrocientos ochenta pesos que le tengo entregados y de los que se da por recibido [...] Lima, octubre siete de mil ochocientos cincuenta y dos"¹².

Esta ventas se efectuaban según disposición del 28 de setiembre de 1850, y el decreto de 23 de marzo de 1853, que convirtieron en vales al portador los papeles del crédito público, con lo cual se contribuyó a elevar marginalmente la cotización de esos valores.

Igualmente, Echenique, tal vez presionado por las demandas de Castilla o de sus asesores interesados, ideó una forma muy polémica para elevar la cotización de los vales y alcanzar así los fines que él concebía debía tener la deuda interna, es decir, la reconstitución de la riqueza local. Refiriéndose a la deuda interna, Echenique escribe:

"Para [aumentar] su valor y llenar tales fines, concebí la idea de trasladar una parte de esa deuda interna a externa, disminuyendo así de un lado, el gravamen de la nación y, de otro que aquel crédito tomara mayor valor en favor de los tenedores"¹³.

Como resultado de esta conversión realizada por los contratos Uribarren y Montané, los vales de consolidación se elevaron a un 53%, según el mismo Echenique, ó 51%, según Casós¹⁴. La cotización se mantiene estable en 1853. Sin embargo, hacia abril de 1854 se evidencia una baja de 51% a 29%, debido a la excesiva oferta de vales en el mercado, al no realizarse más contratos de conversión y desatarse los efectos de la guerra civil de dicho año. Casós brinda su propia versión del fenómeno:

12. Escribano Escudero de Sicilia, años 1852-1853, protocolo 227, f. 105, AGN.

13. Echenique, *Memorias*, p. 200.

14. Casós, *Para la historia*, p. 110.

" Los tenedores salían a plaza pública, no a solicitar el precio ordinario de su papel, sino a suplicar la preferencia por medio de la baja: así se vio que sin motivo alguno y cuando el gobierno pagaba puntualmente los réditos, los vales en plaza bajaban de día en día, sin que nada, ni las reflexiones, ni los consejos privados del gabinete bastasen a contenerlos; porque devorados los favoritos con la calentura del oro, no pensaban más que en hacer una ostenta insultante, de las enormes sumas de que cada uno disponía"¹⁵.

En los años 1855 y 1856 los vales continúan con un valor bastante bajo debido a la depuración radical que efectúa la Junta de Examen Fiscal. En consecuencia, arrecian las protestas de los tenedores de bonos de la deuda convertida, como lo evidencian los artículos que insistentemente aparecían en *El Comercio* en 1856, que apelaban a argumentaciones jurídicas para hacer levantar la tacha impuesta a muchos vales que fueron convertidos a bonos de la deuda externa. A partir de 1857, con el inicio de la satisfacción de los intereses atrasados por parte de la Dirección del Crédito Nacional, y la dación de la ley de marzo de ese año, que igualaba en condición los vales tachados con los vales emitidos antes del 20 de abril de 1851, los vales inician una subida constante en su cotización.

De esta evolución en la cotización de vales se desprende que los que más se vieron beneficiados fueron los que compraron valores de deuda interna en los momentos de más baja cotización, para realizarlos en el mercado o recibir amortizaciones e intereses en los tiempos más propicios. Este fue el caso de Pedro Gonzales Candamo que, desde 1839, empieza a realizar dicho negocio al comprar derechos de sueldos y montepíos adeudados, y convertir papel de crédito del Estado a moneda nacional¹⁶. La compra-venta de derechos de montepío y otras acreencias contra el Estado era algo bastante difundido entre los comerciantes. Las condiciones de venta se pueden apreciar en el siguiente contrato realizado en Lima en el año de 1850:

"Sea notorio como yo doña Francisca García, vecina de esta ciudad y madre legítima del capitán graduado del ejército don Sebastián Ramírez: por el tenor de la presente otorgo que vendo y doy en venta a don Pedro Vásquez de Velasco, de este propio vecindario, todas las acciones y derecho que tengo y me pertenecen con motivo de la muerte del referido mi hijo, tanto al montepío desde el día posterior a su fallecimiento hasta el que se me expida la cédula, como en lo relativo a sus ajustes y a los demás que

15. Ibid., pp. 64-65.

16. Clavero, op. cit., p. 26.

pueda haber por sueldos dejados de percibir por descuento de guerra y todo en el precio de mil pesos que tengo recibido en dinero contante y sonante"¹⁷.

Así, los negociantes y comerciantes activos en transacciones con valores del Estado, irán desplazando a los acreedores originales en apuros, y se perfilarán como un grupo de presión e influencia respetable.

7.3 Acreedores hacia 1857

En la lista que a continuación ofrecemos aparecen los nombres de las principales personas o compañías a las que se les pagan intereses atrasados de los años 1854-1856, por sus capitales en vales de consolidación. Estas personas son las que quedaron en posesión de vales luego de la conversión y de la crisis de cotización evidente desde 1854. Por lo tanto son, a fin de cuentas, los que realizarían en moneda los valores de deuda interna en las mejores condiciones.

Las personas que aparecen en el cuadro 19 no son necesariamente los dueños originales de los vales, sino aquellos que cobraron los intereses devengados hacia 1857 y, por lo tanto, los que poseían los vales en dicho año. Se evidencia así un cambio notable en la propiedad de los vales entre los años 1850/1852 y 1857. Es pertinente señalar que por los intereses atrasados no se recibe efectivo todavía, sino que se expiden vales adicionales que luego serán debidamente amortizados. Las cantidades que se muestran en el cuadro 19 suman 4'603,670 pesos en vales, por concepto de capital, lo que representa alrededor del 42% de la deuda interna vigente de once millones en 1857, y 797,244 pesos por concepto de intereses devengados.

Según la muestra del cuadro 19, los comerciantes, entre los cuales se encuentran varios consignatarios del guano e importantes casas extranjeras, concentraron alrededor de 2'350,000 pesos en vales. Esta cantidad representa un 50% del total de la muestra. Si nos guiamos por este indicio se debe concluir que los comerciantes aumentaron su participación como poseedores de vales del 38%, en 1852 (ver Capítulo 3), al 50% en 1857. Por su parte, los hacendados y propietarios poseían 620 mil pesos que representan el 14% de la muestra de 1857, reduciendo así su participación del 29% de 1852. Dos instituciones eclesiásticas poseen un 5%, dos instituciones de beneficencia un 6% y un abogado-político el 1.5% del valor total de la muestra. No se pudo determinar, por tan-

17. Escribano José Ayllón Salazar, año 1850, protocolo N° 70, f. 212, AGN.

to, la ocupación de personas dueñas del 23.5% en vales de la muestra, pero nos inclinamos a considerar que el porcentaje de los comerciantes aumentaría si se obtuviera más datos sobre este residuo sin clasificar.

Este palpable cambio en la identidad social de los acreedores de vales, producto de un libre juego de compra-venta y especulación con las cotizaciones de los vales, se da en beneficio de aquellos que ejercieron un poder de concentración mayor. Nos referimos a los grandes comerciantes nativos y extranjeros que se van perfilando como un grupo de prestancia tanto económica como política. Ya no vemos aparecer funcionarios públicos en posesión de fuertes sumas de valores extendidas por el mismo Estado a favorecidos. Se ha realizado hacia 1857 un cambio a favor del capital comercial en desmedro del acomo-
modo de una casta oficiosa influyente.

Se ha podido pues apreciar hasta aquí que los vales de consolidación se concentraron en un grado mayor que en el periodo 1850-1852 debido a que, dejados los vales en libertad de transacción, siguieron el ciclo de acumulación del capital comercial de la época. ¿Cómo surge ese ciclo y cuáles son sus características? Creemos que el historiar la actividad de don Pedro Gonzales Candamo nos dará una clave que contribuirá a esclarecer esta pregunta.

7.4 Una actividad mercantil exitosa

"El señor Candamo, nacido de padres pobres, sin haber heredado bienes de fortuna y sin más capital que su trabajo, consiguió hacer una fortuna como pocas se encuentran en América"¹⁸.

"Una laboriosidad sin ejemplo y grandes conocimientos mercantiles, hicieron al señor Candamo uno de los más acaudalados comerciantes. El fue el introductor de los ferrocarriles en el Perú"¹⁹.

Las citas de arriba se publicaron en dos importantes periódicos de la época con motivo de la muerte de Pedro Gonzales Candamo. No cabe duda que hacia 1866 Gonzales Candamo era una leyenda viviente de progreso económico y éxito mercantil. Sin embargo, es necesario separar el hombre del mito, lo cual intentaremos a continuación.

18. *El Comercio*, año 28, Nº 8862, martes 23 de enero de 1866.

19. *El Nacional*, Nº 55, 23 de enero de 1866.

CUADRO 19

Mayores acreedores en vales de consolidación hacia el
año 1857

Nombre	Fecha de liquidación	Capital en pesos	Intereses pesos	Ocupación
Lembeck y Cía.	1-5-1857	27,400	4,620	comerciantes
Juan de Dios Calderón	"	34,300	6,174	comerciante
Aquiles Allier	"	65,600	11,808	comerciante
Tomás Lachambre	"	93,600	18,907	comerciante
Nicolás Rodrigo	"	52,800	9,504	comerciante
Darthez Hermanos	"	55,500	9,990	—
Manuel Espantoso	"	95,000	16,650	—
Rafael Saco	"	39,300	7,074	comerciante
Ancelmo Centeno	"	32,700	6,078	—
José de la Riva Agüero	"	92,500	16,650	propietario
Ignacia Novoa	"	102,000	18,354	propietaria
Mariana Palacios (cedidos por Novoa)	"	70,000	12,600	propietaria
Montané y Cía.	2-5-1857	177,400	29,787	comerciantes
Andrade y Cía.	4-5-1857	28,400	5,112	comerciantes
Delgado Hs. e hijos	"	243,430	45,094	comerciantes
Baltazar Bezada	"	35,400	6,360	—
Manuel Amunátegui	6-5-1857	102,000	18,462	comerciante
Enrique Witt	4-5-1857	86,600	15,480	—
Canevaro, Pardo y Barrón	"	129,800	24,924	comerciantes
Juan Gallagher	"	97,000	17,460	comerciante
Graham Rowe y Cía.	13-5-1857	346,100	57,064	comerciantes
L.D. Laory por Gibbs y Cía.	"	228,600	40,724	comerciante
Pío Tristán (representado por Gibbs y Cía.)	"	124,000	21,848	—
Dionisio Puch (representado por Gibbs y Cía.)	"	59,900	10,782	—
Samuel Went (representado por Gibbs y Cía.)	"	63,100	11,358	—
José María Tejada (representado por Gibbs y Cía.)	"	103,300	18,594	—
G. Anderson por Manuel María Cotes	"	120,700	20,652	comerciante
V. Sorozábal (por Juan Manuel Iturregui)	"	92,600	16,433	—
Palmieri y Patroni	"	58,400	10,596	comerciante
Naylors Conroy	"	69,600	12,136	comerciante
José G. Paz Soldán	"	70,000	11,250	abog. político
Convento de Buenamuerte	11-5-1857	28,700	5,166	inst. eclesiast.
Beneficiencia Pública de Lima (F. Caveró)	"	200,200	30,030	inst. pública
Julio Pflücker	"	67,500	12,136	—
Huth Gruning y Cía.	13-5-1857	24,800	4,464	comerciante
José Martiarena	"	60,000	10,800	—
José Vicente Oyaque	"	8,700	1,566	comerciante
M. A. López y Goytizolo	"	75,400	13,750	—
Felipe Barreda	18-5-1857	54,000	9,720	comerciante
Sebastián Cardena	"	41,300	6,824	—
Monasterio de la Concepción: síndico J. Dávila C.	"	212,900	19,161	inst. eclesiast.

Agustín Lequerica	22-5-1857	29,400	5,292	_____
Antonio Cucalón	"	83,200	16,560	propietario
Gilberto Brandon	"	72,900	15,122	_____
Juan Rodríguez Silva	"	51,000	9,336	_____
Manuel María Román	3-6-1857	56,200	10,116	comerciante
Beneficencia del Cuzco	"	71,200	12,816	inst. pública
Belloc Hs. y Sescau	4-6-1857	76,500	12,965	comerciantes
José López Homillo	"	51,500	9,099	_____
Juan Renner	"	106,900	18,678	comerciante
Clemente Villate	"	57,000	10,260	comerciante
Pedro Gonzales Candamo	"	90,000	18,500	comerciante
Ignacia Elguera	"	50,000	9,000	hacendada
Tomás Lamas	18-6-1857	36,400	6,006	_____
Total		4'603,670	797,244	

Fuente: "Liquidación de los intereses devengados en los años 1854, 1855 y 1856 por los vales de consolidación emitidos desde 20 de abril de 1851 hasta que se cerró la inscripción de los libros de la caja, lo cual se verifica en cumplimiento de la ley de 11 de marzo de 1857 y supremo decreto de 24 del mismo mes y año", Libros Manuscritos Republicanos, H-4-2031, AGN.

Existe un antecedente importante de la actividad de Gonzales Candamo en Lima, y éste es el giro comercial que desarrolló su padre Alonso Gonzales Candamo, natural de Asturias, entre Valparaíso y Lima durante los primeros años del siglo XIX, cuando ambos centros todavía se encontraban bajo dominación española. Así lo atestigua el inventario de bienes que se hizo en la casa que habitaba don Alonso, nombrada Padilla en la calle de Bodegones, el 10 de junio de 1811, luego de su repentina muerte y a solicitud de su hijo Gaspar Candamo, que declara:

"falleció anoche repentinamente; y respecto a que y solo me allo en esta ciudad pues su mujer [Petronila Astorga] y mi madre con mis otros ermanos residen en el puerto de Valparaíso..."²⁰.

El referido inventario nos permite apreciar, a manera de corte inesperado en la actividad de un comerciante, los elementos constituyentes de sus negocios. Don Alonso residía en Valparaíso, pero su radio de acción alcanzaba mucho de la costa del Pacífico sudamericana. Se desempeñaba como intermediario de pedidos directos a Valparaíso de sebo, fierro, cobre, pólvora y hasta de esclavos, que vendía en Lima y Guayaquil. También hay evidencias de que prestaba dinero a cambio de prendas empeñadas. Se equivoca pues la primera nota necrológica citada arriba, pues los padres de Gonzales Candamo no fueron pobres ni

20. Escribano Munarrís, año 1811, protocolo 452, f. 214v, AGN.

mucho menos. Más acertada nos parece la segunda cita acerca de los conocimientos mercantiles que debió poseer don Pedro a raíz de la experiencia comercial de más de veintiún años de su padre.

Así pues, la actividad de Pedro Gonzales Candamo en Lima, a partir de 1824, tenía importantes bases para prosperar rápidamente como efectivamente lo hizo, sustentada en una red de conexiones que tenían su origen en actividades mercantiles de finales del periodo colonial. Sin embargo, esa no fue la única razón de su éxito posterior, ni el motivo por el cual Gonzales Candamo llegó a Lima. El arribó con el ejército de San Martín como coronel de milicias chilenas, bajo las órdenes del general Juan Gregorio Heras, para participar en la contienda por la independencia peruana en 1820. Su biógrafo nos cuenta una anécdota acerca de su participación en la lucha: fue él quien comunicó al general San Martín la inminente llegada de las tropas de Canterac a Lima el 4 de setiembre de 1821. Ese mismo año fue nombrado gobernador de Jauja, con la misión de reducir a los indios de esa zona al dominio republicano. En octubre de 1821 se le nombra fundador de la Orden del Sol²¹.

Sus primeros contactos en Lima, desempeñándose todavía como militar, fueron con el topiquero chileno Agustín Barder, dueño de una botica, quien lo hospedó en su casa junto con Roberto Kay, cirujano mayor del ejército de San Martín, y el capitán de infantería Felipe Santiago La Rosa, quien más tarde sería su primer socio comercial. Barder viaja a Chile en 1822 y trae un cargamento de quincallería a Lima para abrir una covachuela o tiendecita en la calle La Rivera, al costado del Palacio de Gobierno. Una vez más el comercio entre Chile y Perú le va abriendo a Gonzales Candamo una considerable veta para explotar, en esos años difíciles de la guerra de la emancipación. Después de la batalla de Ayacucho, a la edad de treinta y un años, se separa del servicio militar y se dedica al comercio de lleno.

Su actividad comercial progresa auspiciosamente con negocios muy ventajosos que le sirvieron para cimentar su posterior fortuna. Entre diciembre de 1824 y diciembre de 1825 importa trigo y otros productos de primera necesidad, procedentes de Chile, desembarcados en el puerto de Chorrillos, para venderlos a precio de mercado negro en el Callao, que en ese entonces era ocupado por españoles al mando de Rodil. En 1826 Gonzales Candamo se comprometió en sociedad con La Rosa para formar una caja especial de ahorros que pudiera acumular los fondos necesarios para una casa de amparo de niños abandonados. Encontramos aquí una similitud con los aparentes motivos piadosos

21. Clavero, op. cit., pp. 20-25.

que exhibió en su testamento para escudar un negocio que prometía. En 1828 fue suscriptor inaugural de la Sociedad Filarmónica y más adelante se vinculó con la Beneficencia Pública de Lima. Con la respetable reputación así lograda, el ex militar inicia con pie seguro su ascenso de pequeño a gran comerciante.

Traslada su local a otra covachuela en la misma calle La Rivera, y continúa su actividad de importación hasta ingresar a la primera categoría de comerciantes según la matrícula de patentes. En 1838 Gonzales Candamo realiza una extraña aventura en busca de tesoros cerca de Trujillo. Al no encontrar metales preciosos se limitó a extraer huacos que luego exportó a Europa en regular cantidad, según su biógrafo. Tal vez debido a este entretenimiento no participó en la misión restauradora emprendida por Gamarra con ayuda de destacamentos militares chilenos. Luego de regresar a Lima procedente del norte en 1839:

"continuó su giro de dar dinero a interés, descontar compromisos [letras y escrituras], cambiar plata de arbolito [boliviana] por peruana, en comprar chafalonía, sueldos, montepíos y, en general, en convertir papel de crédito del Estado a moneda nacional; operaciones que ejecutaba escrupulosamente, que dieron margen a anécdotas mil, dignas de un volumen especial. En ese año estableció la mosonería [sic] comercial con don Pedro Denegri, genovés comerciante de Lima y don Pedro Kossuth, triunviro que monopolizó la pignoración y emprendieron el negocio de cambio de moneda, que los elevó del populeo de los tres Pedros ricachos a la fascinadora realidad de millonarios"²².

Tratándose de su propio biógrafo, que a lo largo de todo un libro dedicado a su memoria lo trata con mucho respeto y reverencia, debemos dar crédito a las afirmaciones arriba citadas que, por otra parte, definen operaciones comunes y legales en ese entonces y que, a nuestro criterio, constituyeron las bases del crecimiento del capital comercial en el Perú de la época. Además, Clavero, el autor de las líneas citadas, da indicios a lo largo de su obra biográfica - muy valiosa por las informaciones que contiene sobre la vida y actividad de Gonzales Candamo - de haberse basado en documentos personales de la familia Candamo, llegando a mencionar un copiadore de cartas que le hubo de proporcionar datos de primera mano llenos de detalles esclarecedores.

Sabemos pues de buena fuente cuales fueron las bases especulativas y comerciales que permitieron a Gonzales Candamo realizar grandes negocios

22. Ibid, p. 26.

con el Estado peruano, especialmente cuando ocupó la presidencia su gran amigo Ramón Castilla. Llegó a participar en los contratos para los ferrocarriles de Lima-Callao y Lima-Chorrillos, la consolidación, consignaciones de guano y salitre, grandes préstamos al Estado, etc.

El 19 de febrero de 1842 participó, junto con Francisco Quirós, Aquiles Allier, Puymorol y Montané, y Gibbs, en el tercer contrato del guano celebrado con el gobierno por 126,000 toneladas²³. En 1848 se aprueba en licitación pública la propuesta de Gonzales Candamo y José Vicente Oyague para la construcción del ferrocarril Lima-Callao. Las condiciones del contrato estipulaban: veinticinco años de privilegio, términos de propiedad gratuitos, doce meses para empezar y tres años para concluir la obra, importación de maquinaria y efectos exenta de todo derecho, reembolso del capital erogado en caso de anulación del contrato y tarifas prefijadas para el transporte ferroviario²⁴.

La obra de ferrocarril costó alrededor de un millón de pesos (200 mil libras esterlinas) y su ejecución hubo de dilatarse más allá de los términos del contrato original. Mendiburu señala que en 1852 Castilla presionó a Echenique en favor de los empresarios "de la compañía encargada de la construcción de la estación de ferrocarril en el Callao", es decir, la compañía de Gonzales Candamo y Oyague, a raíz del hostigamiento que sufría dicha compañía por parte de la administración de Echenique, con motivo del incumplimiento del contrato y la adjudicación indebida de terrenos²⁵. Esta es una ocasión más en que Gonzales Candamo recibe el apoyo de Castilla.

Oyague traspasó en 1852 todos sus derechos sobre la empresa a José Hegan, el mismo que en agosto de 1852 contrató con el gobierno la construcción del ferrocarril Tacna-Arica financiado a través de una conversión de deuda interna a externa. Sin embargo Gonzales Candamo no traspasó sus acciones y derechos sobre el ferrocarril sino hasta el año 1865, cuando los vende a José Pickering. Hegan y Gonzales Candamo, aparte de ser socios del ferrocarril Lima-Callao, también lo fueron del de Lima-Chorrillos a partir de 1856. Las acciones de dicho ferrocarril las adquirió de Felipe Barrera y las traspasó así mismo a Pickering en 1865. Como resultado de estos traspasos y ventas, se forma en 1866 una sociedad anónima de responsabilidad limitada, la "Compañía de los Ferrocarriles de Lima", dominada por accionistas ingleses: José Pickering,

23. Yezpez del Castillo, *Perú 1820-1920*, p. 298-299.

24. Clavero, op. cit., p. 35.

25. Mendiburu, "Memorias", p. 589.

Juan y Carlos Juan Hegan (herederos de José Hegan), y los residentes en Londres Adam Steimnetskenard, Carlos Stubbs, E. J. B. Kendall, Carlos J. Lambert y Tomás Collet Sandars²⁶.

Termina pues el monopolio de Gonzales Candamo sobre los ferrocarriles a manos de intereses ingleses, en parte porque Castilla ya se había alejado del poder, y en parte porque los negocios de Gonzales Candamo se orientaban en otras direcciones que, debido a su avanzada edad y las altas rentas que recibía, le resultaban más provechosas: las inversiones en contratos del guano con extranjeros y los créditos externos contra el Estado.

Todas estas actividades de altas finanzas las hizo manteniendo al mismo tiempo su local comercial y residencia en los altos y bajos de una casa ubicada en la calle de la Coca N° 111, en la esquina con la calle Villalta (esquina de los jirones Carabaya y Ucayali), hasta el día de su muerte el 22 de enero de 1866, causada por "reblandecimiento al cerebro"²⁷.

7.5 El patrimonio del gran comerciante

¿Cuáles fueron los bienes, valores y propiedades que Gonzales Candamo dejó a su muerte? Un análisis detenido de los documentos y valores inventariados judicialmente el 6 de febrero de 1866 en su local comercial y domicilio, nos ayudará a contestar esta pregunta y, así mismo, a deducir la complicada red de actividades comerciales que desarrollaba Gonzales Candamo, en la que se funde sus tramitaciones con la consolidación que tan exitosamente realizó.

Obtuvimos el pormenor que se muestra en el cuadro 20 de los rubros a donde se dirigieron las inversiones de Gonzales Candamo (aparte de los bienes raíces, joyas y mercadería importada que abarrotaban su local comercial).

De las cifras exhibidas en el cuadro 20 resulta evidente que el grueso de las inversiones de Gonzales Candamo se concentraba en valores y acciones en el exterior: bonos de la deuda anglo-peruana y acciones en consignaciones de guano con compañías inglesas y francesas, principalmente, así como acciones en compañías en Chile que le proveían artículos importados. Este rubro de sus intereses en el exterior constituyó un 66% del total de los valores de Gonzales Candamo. Estas transacciones parecían las más rentables en los años 1864-1865, aunque todavía constatamos un crecido monto de capital, alrededor

26. Escribano Felipe Orellana, 13 de abril de 1866, protocolo N° 502, f. 124v, AGN.

27. Escribano Felipe Orellana, año 1866, protocolo N° 503, AGN.

del 17% de sus colocaciones en valores, asignado a créditos a su favor y préstamos a interés; así como una no despreciable inversión, cerca de 11% de sus valores, en acciones y depósitos en compañías y bancos en el Perú. Se observa así en avanzado estado de transición el capital comercial de Gonzales Candamo, pero todavía se detectan rasgos de su anterior actividad de negociante con valores del Estado. En este último rubro el monto es reducido, 2% de los valores inventariados, en comparación con otros conceptos, pero prueba su pasado interés en este negocio, tal vez todavía prometedor, si consideramos que la deuda del gobierno español no había sido consolidada.

Entre las personas a las cuales Gonzales Candamo prestaba dinero o extendía créditos encontramos que, en 1864 y 1865, una cantidad considerable se dirigió hacia hacendados como Manuel Elguera (de intereses agrícolas en Chancay), Antonio Fernández Prada (Cafete), Domingo Elías (Ica y Chíncha, al cual prestó entre los años 1857 y 1861) y Demetrio Olavegoya (de intereses agrícolas y mineros en la sierra central); también se aprecian las importantes acciones de Gonzales Candamo en la hacienda San Regis de Cafete, de propiedad de Fernando Carrillo de Albornoz. Los intereses de Gonzales Candamo en el agro, en sectores que se van modernizando con el cultivo del azúcar en dichos años, ascienden, si sumamos los préstamos a estos grandes hacendados, a 241,223 pesos. Otros importantes préstamos estaban otorgados a: Manuel Amunátegui, dueño del periódico *El Comercio*, accionista de una fábrica de papel y, en 1862, consignatario del guano a China y Japón, quien obtuvo un crédito por cerca de 100 mil pesos en 1860; la viuda de Santiago, para la fábrica de tocuyos, 85,563 pesos desde el año 1848; el mariscal Ramón Castilla, 30 mil pesos en 1864; y el concurso de Juan Antonio Menéndez, en 1860. El resto de los préstamos, pagarés y escrituras de obligación, se derivan de los vínculos de Candamo con otros comerciantes y particulares con necesidades de capital.

Nos inclinamos a afirmar que estas inversiones de Gonzales Candamo, en los vertiginosos años 1860-1865, tuvieron su acumulación y concentración inicial en actividades de préstamo y especulación comercial realizadas entre 1824 y 1848, año este último en que se firma el primer contrato con el Estado peruano para la construcción del ferrocarril Lima-Callao. De allí en adelante los negocios con el Estado y sus intereses en el exterior tomarán paulatinamente la preeminencia.

Al parecer estos fueron los orígenes de muchos capitales que formarían luego compañías dedicadas a negocios de mayor envergadura financiera. Tal es

CUADRO 20

**Clasificación de los valores y acciones
de Pedro Gonzales Candamo, año 1866**

Concepto	Valor en pesos	% del total
I. Préstamos: escrituras de obligación, pagarés, créditos a particulares (con intereses anuales variables del 1.5 al 18%)	1'055,990	17
II. Acciones: en compañías o establecimientos al interior del país (con dividendos variados: del 5 al 12.5%)	724,733	11
III. Intereses en el exterior: participación en consignaciones, compañías comerciales, préstamos al Estado peruano, bonos de la deuda anglo-peruana; Comercio en Chile (Alsop, José Cervero, Agustín Edwards)	504,387	
Comercio en Inglaterra (Gibbs, Huth; 315,862 libras esterlinas)	1'509,820	
Bonos deuda anglo-peruana	2'070,796	
Comercio en Francia (Quesnel, Abaroa y Uribarren)	37,133	
Préstamo al Estado en libras esterlinas (20 mil)	95,600	
suman	4'217,736	66
subtotal	5'998,459	94
IV. Papeles-valores del Estado: cédulas de consolidación y de reforma, créditos del gobierno español y consulado, expediente	119,669	2
V. Efectivo: existencia en caja	226,240	4
TOTAL	6'344,358	100

Fuente: Inventario de bienes, escribano Felipe de Orellana, año 1866, protocolo N° 503, AGN.

el caso del comerciante de origen italiano, José Canevaro, natural de Génova, que desempeñaba el cargo de cónsul del reino de Cerdeña, y que combinaba su labor diplomática con la actividad mercantil. En el protocolo 227 del escribano Escudero de Sicilia del Tribunal del Consulado, que abarca los años 1852-1855, encontramos varios contratos de préstamos y otras transacciones realizados por Canevaro. Por ejemplo, el 15 de mayo de 1852 compra un papel de la antigua deuda del gobierno español contraída con el Real Tribunal del Consulado, en un 6% de su valor nominal de 16 mil pesos; en ese mismo documento se indica que dichos papeles de la deuda antigua española se vendían en el mercado a un 2, 3 y 4% de su valor nominal²⁸. Recordemos que, a pesar de los intentos de Torrico por hacer reconocer este tipo de valores, no se logró la suficiente presión por parte de los tenedores para concretar su consolidación. Por otro lado, Canevaro era dueño hacia 1855 de dos barcos, el "Beatriz" y el "Carlos Alberto", que hacían viajes de carácter comercial a Génova.

El 27 de marzo de 1853 establece la sociedad mercantil José Canevaro, Miguel Pardo y José Barrón, más conocida como Canevaro, Pardo y Barrón, que fue constituida con un capital de 162 mil pesos, de los cuales Canevaro puso 112 mil pesos en créditos que se le adeudaban y 30 mil pesos en efectivo. Por su lado Pardo y Barrón pusieron entre los dos 20 mil pesos en efectivo. Una de las cláusulas del contrato estipulaba que Canevaro, por ser el accionista mayor, participaría en la sociedad como socio pasivo, es decir que los otros socios tendrían a su cargo el trabajo de administración y dirección cotidiana de la compañía. Así pues se constituía una empresa sobre la base de adeudos que habían contraído setenta y dos personas con Canevaro, que había realizado actividades de prestamista antes de 1853²⁹. Posteriormente, la compañía Canevaro, Pardo y Barrón obtuvo la consignación de guano para el mercado de Holanda en 1861. Además, Canevaro sería uno de los principales accionistas del Banco del Perú fundado en 1863. Podemos comprobar de esta manera que la actividad comerciante-prestamista-especulador sentó las bases de una primera acumulación anterior o paralela a la medida de la consolidación y, a largo plazo, fue indudablemente más importante que esta última en la formación de capitales nativos y extranjeros en el Perú.

28. Escribano Escudero de Sicilia, año 1852, protocolo 227, f. 996, AGN.

29. Entre los principales deudores de Canevaro encontramos a: José Santos Rodríguez (pagaré de 3,674 pesos); testamentaría de Mariano Santos Quiros (escritura por 4,167 pesos; Antonio José Cot (pagaré más interés por 11,486); Fernando Exhelmes (escritura e interés por 2,346); José Campo de Centro América (escritura por 16,590 pesos). Se trata de préstamos a muy alto interés y de cantidades no excesivamente altas.

En este sentido los negocios de Gonzales Candamo relacionados a la consolidación de la deuda interna se insertan dentro de una dinámica que tenía sus inicios en 1824. Esta es la actividad de un comerciante y prestamista, que le proporcionó la liquidez suficiente como para comprar, a bajo precio, papeles y valores emitidos por el Estado, en espera de que sus cotizaciones mejorasen y ejerciendo presiones a nivel del alto gobierno, para realizarlos con amplios márgenes de ganancia, años después, en las mejores condiciones. Si comparamos este negocio de los valores del crédito público con la práctica del prestamista, no encontraremos en lo esencial mayor diferencia. Las dos actividades hacen uso de una liquidez disponible para especular con cierto riesgo con el valor obtenido a bajo precio debido a la necesidad económica del dueño original.

En el caso de Gonzales Candamo podemos afirmar, entonces, que la consolidación no fue el origen principal de su capital, sino que fue un negocio anexo a su labor principal de comerciante y prestamista. Lo prueba el hecho de que, inclusive hacia 1866, poseía cédulas de reforma, vales, billetes, etc., de terceras personas y dueños originales, los que había obtenido o en garantía de préstamos, o por el pago de créditos e intereses, o por simple compra en el mercado. Luego de acumular estos valores de deuda interna durante por lo menos una década, Gonzales Candamo recibe en 1851 como amortización directa de sus vales por la Tesorería Departamental de Lima la cantidad de 72,300 pesos en efectivo. Además, entre los años 1857 y 1859 se le van cancelando los 75,400 pesos en vales de consolidación, con intereses, que aún le restaban por amortizar. Los vales emitidos a su nombre no participaron mayormente en la conversión de la deuda interna a externa, pero hacia 1857 don Pedro figuraba entre los principales poseedores de vales convertidos, los cuales había adquirido desde 1853.

Si nos atenemos a la fecha en que obtuvo la amortización de sus vales de la deuda interna y sus intereses, es muy probable que haya invertido dicho monto en: (a) la construcción del ferrocarril Lima-Callao, que seguramente le sirvió de base para obtener la amortización extraordinaria de tesorería en 1851, y en la de Lima-Chorrillos, que emprendió con su socio José Hegan, según el contrato entre ambos en 1856, durante el segundo gobierno de Castilla, con lo cual recibió un fuerte apoyo financiero para sus grandes contratos ferrocarrileros; (b) otorgar y renovar préstamos a particulares; (c) la importación de insumos para su red ferrocarrilera Callao-Lima-Chorrillos, así como de mercancías para la venta al por menor en su establecimiento.

En diciembre de 1858 los artesanos de Lima realizan una serie de reclamos contra la franquicia concedida a la importación de artículos de madera du-

rante el segundo gobierno de Castilla. Se trataba de una protesta contra las ventanas, puertas y otros accesorios traídos por la compañía de Gonzales Candamo y Hegan para los ferrocarriles bajo su contrato. Ante la negativa de las autoridades de acceder a las peticiones de los artesanos, se desató una reacción violenta que tomó la forma de destrucción de dichos artículos importados. En el fondo se trataba de una pugna entre los sectores que producían artesanalmente para el exiguo mercado interno de Lima, y los comerciantes-importadores nativos y extranjeros, que realizaban ganancias en la venta de artículos importados destinada a captar los excedentes de los sectores privilegiados y el Estado, todo esto en medio de una crisis de subsistencia que se analizó en el capítulo 5 del presente estudio.

A pesar de sus fabulosos negocios en inversiones en el exterior, préstamo a hacendados, rentistas y comerciantes, y contratos oficiales, Gonzales Candamo continuaba hacia 1866 con su rentable negocio de importación y venta al por menor de quincallería. En el inventario de sus bienes encontramos en 'stock', en los depósitos de su establecimiento comercial, abundantes artículos que importaba del exterior. Se trata principalmente de prendas de vestir, artículos de consumo diario y de lujo.

Al morir, Gonzales Candamo deja, en su testamento definitivo dado en Piura el 5 de enero de 1866, como herederos a las siguientes personas: a su hijo Carlos le deja la décima parte de sus bienes; a su hermana María del Carmen Candamo y a los dos hijos de ella, residentes en Santiago de Chile, deja 150 mil pesos; a sus sobrinos, hijos de su hermano Juan, residentes en Asturias, 100 mil pesos; a su sobrino Leopoldo, residente en Lima, 20 mil pesos; a su sobrino, Francisco de P. Boza, le deja 40 mil pesos; a su dependiente, Carlos Rosas Morales, le encarga la liquidación e inventario de sus bienes, y "habiéndole prometido a éste la mano de su hija Virginia, sin haber podido efectuar el enlace, mande se tome el consentimiento de su hija lo antes posible"; declara en el mismo testamento que nunca se casó pero que tuvo tres hijos naturales, Carlos, Virginia y Mercedes Gonzales Candamo³⁰. El nombre de Manuel Candamo aparece en un poder extendido por Carlos Gonzales Candamo para que lo represente en trámites judiciales relacionados con el inventario de bienes de don Pedro³¹. Manuel Candamo -uno de los civilistas más influyentes y acaudalados después de la Guerra del Pacífico, futuro presidente de la Cámara de Comercio de Lima, entre los años 1896 y 1903, y presidente de la

30. Escribano Felipe Orellana, año 1866, protocolo N° 502, f. 1154v. AGN.

31. Ibid, protocolo N° 503.

República desde el año 1903 hasta su fallecimiento en 1904-, fue también un hijo natural de don Pedro, aunque no vemos la razón por la cual no lo incluyó en su testamento de 1866. Según Basadre don Manuel "nació en Lima el 14 de diciembre de 1841. Su padre, Pedro Gonzales Candamo, fue considerado en su época el hombre más acaudalado de Perú"³². Así la fortuna de don Pedro tuvo un ilustre continuador en Manuel Candamo, que incursionó exitosamente en política, a diferencia de su ascendiente que, aunque con contactos políticos a través de su amistad con Castilla, no figuró mayormente en la política pública, como sí lo hicieron comerciantes y propietarios famosos del corte de Francisco Quirós y Domingo Elías, contemporáneos de don Pedro.

En conclusión, los verdaderos beneficiados por la consolidación resultaron ser los grandes comerciantes como Pedro Gonzales Candamo que, después de utilizar la consolidación para asegurarse el pago de deudas pendientes del Estado y particulares, ejerciendo una acumulación especulativa relacionada a la profesión mercantil y prestamista, se convirtieron eventualmente en acreedores externos del tesoro público, e inversionistas de la mayor proporción de sus patrimonios en el exterior. Dejaron así mismo dignos continuadores de sus actividades que sentaron las bases para la formación, particular al Perú, de una clase dominante nativa.

32. Basadre, J. y Ferrero R. *Historia de la Cámara de Comercio de Lima* (Lima: Ed. Valverde, 1963), p. 63. En el *Diccionario histórico y biográfico del Perú* de C. Milla Batres (Barcelona, 1986), tomo 2, pp. 250-255, se consigna que Manuel Candamo fue hijo de Pedro G. Candamo y Mercedes Iriarte.

CONCLUSIONES

Orígenes y destinos de la consolidación

1. La consolidación de la deuda interna de 1850 tuvo, entre sus principales orígenes, aquellas obligaciones contraídas por el Estado con particulares a través de empréstitos forzosos y requisitorias habidas durante las campañas de la emancipación y las caudillescas de los primeros años de la República. El déficit fiscal, crónico antes de la aparición del guano, impidió la cancelación de aquellas obligaciones que se descuidaron durante décadas en medio de una persistente crisis productiva.
2. Antes de 1850 hubo básicamente dos tipos de acreedores contra el Estado: aquellos marginados que cifraban sus esperanzas en la satisfacción de los valores de la deuda interna, republicana y colonial (hacendados empobrecidos, mineros, propietarios provincianos); y los privilegiados prestamistas que exigían garantías sólidas de ingresos fiscales provenientes de los ramos de arbitrios, Casa de Moneda y aduanas, a cuyos préstamos de elevado interés el Estado debía acceder ante la escasez de capitales y el pésimo crédito externo e interno del tesoro público. Antes de 1850 se podía vislumbrar la parcialidad en la cancelación de la deuda interna debido a que existía esta tajante distinción entre los acreedores del Estado.
3. Los grandes comerciantes nativos y extranjeros forman un poderoso grupo de presión que logra influir decisivamente sobre la legislación de la consolidación. Al declararse la libre compra y venta de los vales de consolidación, se refuerza la especulación en desmedro de los acreedores originales de expedientes y en favor de los negociantes en vales. La legislación de la consolidación tuvo una importancia fundamental para que la medida no tuviera los efectos redistributivos clamados por algunos sectores productivos empobrecidos.
4. En la repartición de los vales, entre 1850 y 1852, hubo una distribución parcializada. La mayoría de vales se concentró en pocas manos: de un total de alrededor de 2 mil personas teóricamente beneficiadas por la consolidación, 126 individuos recibieron el 66% del total de la deuda reconocida, mientras que

los 1,800 restantes recibieron sólo el 34%. A lo más, los acreedores modestos y más numerosos obtuvieron un mínimo porcentaje tangible de sus créditos en deuda interna al venderlos a destiempo, cuando la cotización de los mismos era baja. Muchos vendieron a terceros cuando la cotización de los vales llegaba sólo a un 10% del valor nominal. La consolidación, en lugar de contribuir a una mejor distribución del ingreso, reforzó la desigualdad social.

5. Los **consolidados** representaron un grupo de negociantes en expedientes de consolidación, que obtuvieron gruesos reconocimientos en nombre de los marginados acreedores originales, apropiándose luego de dichas cantidades y participando del estupro y venalidad de algunos funcionarios echeniquistas. Según nuestra investigación, este grupo logró concentrar cerca de cuatro millones de pesos en vales, es decir, el 16% del total de la deuda consolidada. Alrededor de las dos terceras partes de los consolidados identificados se desempeñaba como comerciantes en Lima, y cerca de un tercio como funcionarios públicos y militares.

6. Otro de los destinos significativos de la consolidación lo constituyó la conversión de la deuda interna a externa. Los contratos de conversión Uribarren, Montané y Hegan, comprometieron un 46%, u once millones, del valor total nominal de la deuda consolidada. A una cotización promedio estimada en un 35% del valor nominal de cada vale, los tenedores que los vendieron a los contratistas de la conversión y sus allegados, en los años 1853 y 1854, recibieron alrededor de cuatro millones en moneda, lo que representó un 16% de la deuda efectivamente amortizada. Los acreedores externos que obtuvieron bonos de la deuda convertida a cambio de vales de consolidación adquiridos entre 1853-1854, lograron percibir intereses sobre un 30% del total de la consolidación, que fue amortizado como deuda externa a partir de 1857. Varios residentes y nativos de Lima participaron de la conversión y se convirtieron en acreedores externos, como fueron los casos de Pedro Gonzales Candamo, José Vicente Oyague, y otros.

7. La consolidación resultó ser un factor secundario en el alza de precios que ocurrió en la década de 1850 en Lima. La emisión de los vales de consolidación no aumentó en sí la oferta monetaria, pues el Estado no los amortizó plenamente sino entre 1857 y 1865. La conversión pudo contribuir, a corto plazo, en los años 1853 y 1854, a una inflación pasajera, al repartir cerca de cuatro millones en moneda a los que vendieron vales a los negociantes de la conversión. La guerra civil de 1854, la manumisión de esclavos, el encarecimiento de la fuerza de trabajo, junto con el aumento persistente del consumo de Li-

ma, y los arreglos monetarios que forzaron una devaluación de la moneda, influyeron más que la consolidación en el alza de precios de los artículos de primera necesidad que se acelera significativamente en los años 1855 y 1856.

8. En medio de un clima general de descontento, la consolidación jugó un rol más político que económico en la escalada de protestas populares del periodo 1854-1858. Las violentas reacciones de la muchedumbre enfurecida contra los consolidados, ocurridas en Lima, fueron aprovechadas por los opositores de Echenique. En 1855, la amenaza de tacha a los vales adquiridos fraudulentamente durante el gobierno de Echenique sirvió sólo como una pose moralizadora ante el repudio difundido contra la consolidación. Después de un inicial apoyo popular al manejo de cuestiones sociales, como la abolición de la esclavitud y del tributo indígena, realizada por Castilla buscando salir victorioso de la guerra civil de 1854, los sectores populares de Lima y las poblaciones provincianas pronto se desengañarán del caudillo. Castilla prefiere beneficiar a los grandes comerciantes rehabilitando los vales tachados en 1857, ante la presión de las flotas británica y francesa que lo protegen contra las pretensiones de Vivanco y defienden, al mismo tiempo, los intereses de los acreedores externos tanto extranjeros como nativos. En consecuencia, Castilla se ve obligado a amortizar en efectivo, entre 1857 y 1862, los reconocimientos excesivos y fraudulentos del periodo Echenique.

9. Sólo aquellos hacendados y rentistas que dinamizaron sus propiedades ligando los productos que obtenían de ellas a la esfera comercial, y establecer importantes vínculos con grandes comerciantes de Lima, lograron garantizar su participación exitosa en la consolidación. Casos notables los constituyen los hacendados Manuel Aparicio, que tuvo conexiones echeniquistas; Fernando Carrillo de Albornoz, ligado a Pedro Gonzales Candamo; y la rentista Ignacia Novoa, de cuya pasividad aprovechó Domingo Elías, su representante en su expediente de consolidación. La consolidación fue en gran parte utilizada por los hacendados endeudados de la costa para pagar los onerosos préstamos que se vieron obligados a contraer con los comerciantes y prestamistas limeños. Así mismo, la manumisión le sirvió a los hacendados para cubrir deudas al comercio e iniciar una relativa reconstitución de sus propiedades. Según nuestras muestras, en los años 1850-1852 se destinó un 17% del valor de los vales emitidos a los hacendados y el 12% a rentistas urbanos. Estos dos grupos bajaron su participación conjunta en la consolidación a un 14% de los vales vigentes en 1857.

10. Los mayormente beneficiados por la consolidación fueron los grandes comerciantes, quienes desplazan a dueños originales de los vales y a la casta oficiosa corrupta, a través del juego de la libre cotización de los vales en plaza. El caso de Gonzales Candamo ilustra la forma como se utilizó la consolidación para la acumulación especulativa, el ejercicio mercantil de importación, el apoyo financiero de contratos oficiales, traslado de inversiones al exterior y el crédito externo contra el Estado. Las actividades mercantil y prestamista anteceden a la consolidación en la formación y acumulación inicial de capital comercial local, el cual otorga la liquidez necesaria para emprender los negocios con los valores de deuda interna. Según nuestras evidencias, los comerciantes concentraron un 38% de los vales al iniciarse la consolidación entre 1850 y 1852 y, luego, a través de la especulación y libre compra-venta de vales, lograron controlar alrededor del 50% de los vales en circulación en 1857. Es justamente a partir de 1857 que los once millones -el 45% del monto total consolidado-, que restaba por amortizar, sin incluir intereses acumulados, se irán pagando con los ingresos del guano, hasta 1865-1868, en las mejores condiciones de cotización para los tenedores de vales.

Apéndice 1

PRECIOS DE ALIMENTOS EN LIMA, 1847-1865

Para obtener los datos exhibidos en el cuadro y en los gráficos de este apéndice, hemos consultado en el Archivo de la Sociedad de Beneficencia de Lima los libros de contabilidad de los hospitales San Andrés y Santa Ana de la época. Allí se ubicaron las listas, casi diarias, de los precios de artículos de primera necesidad utilizados para la elaboración de la alimentación de los enfermos en dichos hospitales. A parte de este material, en esos libros se encuentran las cuentas generales realizadas por el ecónomo del respectivo hospital, la planilla de dietas para los distintos enfermos, inventarios de despensa, así como recetas y costos de botica y medicamentos.

Los datos suministrados por estos papeles, siendo bastante valiosos e informativos, no dejan de tener sus inconvenientes y vacíos. Se trata en primer lugar de instituciones que adquieren algunas de sus provisiones al por mayor y a través de contratos globales con comerciantes, lo que impide, a veces, apreciar cabalmente las fluctuaciones cotidianas de los precios. Sin embargo, muchas cuentas incluían listas de artículos comprados directamente en el mercado con sus respectivos precios del día al por menor. Hemos tratado, en lo posible, de tomar los datos de precios de dichas listas de precios al por menor.

En segundo lugar está el problema de la veracidad de las cuentas, de si fueron llevadas correctamente por el contador del hospital; al respecto existía un control ejercido por la Beneficencia de Lima, que planteaba observaciones a las cuentas cada año. Además, las cuentas se detallaban con recibos y facturas, que han sido de nuestra preferencia al recopilar datos sobre precios.

En tercer lugar, existen vacíos en la secuencia de las cuentas para ciertos meses cuyas cuentas parecen haberse extraviado. Esto hace que algunos promedios anuales se hayan elaborado contando con menos de doce cuentas mensuales. Además, para algunos años no se encontró cuenta alguna. Así pues los años que carecen de datos son: 1852, 1854, 1857 y 1862. Para el año 1851, el promedio anual se obtuvo sobre la base de seis meses; para 1853, sobre tres meses; para 1856, sobre dos meses. Son importantes vacíos que limitan por tanto nuestras conclusiones.

Con todas estas consideraciones, los datos obtenidos se pueden agrupar en el siguiente cuadro. El método utilizado para elaborar las cifras consigna-

das en el cuadro partió de obtener, en base de los precios diarios, promedios mensuales de precios para cada artículo de primera necesidad señalado, verificar que las medidas y pesos de cada artículo fueran constantes a lo largo de los años, y, en base a los promedios mensuales, finalmente obtener los promedios aritméticos anuales. Con los datos expuestos en dicho cuadro elaboramos los gráficos 1 y 2, el primero a escala normal y el segundo a escala semi-logarítmica, con el objetivo de ilustrar los cambios porcentuales en el nivel de precios.

Cuadro del Apéndice 1

Precios promedios anuales de artículos de primera necesidad, 1847-65
(en reales)

Artículos y unidades de medida	1847	1848	1849	1850	1851	1853	1855	1856	1859	1860	1863	1864	1865
Pan, unidad	--	0.20	0.20						0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
Carne de carnero, c/u	--	13.50	16.9	18.8	18.5	20	--	--	(libra) 1	1	1	1	1
Carne de vaca, arroba	13.36	13	13	14	14.2	16	15	--	27	27	28	28	28
Azúcar, arroba	18.57	17.75	17.25	20	19	14.5	--	23	28	--	21	20	
Arroz, carga	112.7	113.8	196.2	182	127.2	141.3	144	232	174	237	--	--	140
Fideos, arroba	17.63	23.5	20	20	20.56	24	21	22	22	20	20	24	26
Frijol, fanega	43.50	39.5	47.5	46.2	44	44.6	--	116	44	--	--	--	--
Manteca, libra	1.31	1.2	1.25	1.25	1.5	1.12	1.75	2.75	2.58	2	2.18	1.75	1.8
Camotes, serón	10.40	10.8	10.2	12.7	10.5	10							
Zapallo, serón	11.72	11.2	13	13.2	15								
Chuño, arroba	23	23.6	32	34.75			28		30.6	28	36.66	--	28
Quinoa, carga	114	113.2	136	--	116	114	--	224					
Leche, qtal.	--									48	48	48	48
Papa, serón	23	--	18	18.6									
Pallar, fanega	--					60	44						
Garbanzos, fanega	39.81	42	--	57.33	49	52	44	92.5					
Carbón de piedra, qtal.		18									136		
Gallina, c/u		6.62	6.62	--		8	10	9	9				
Lana, arroba		11.8	9.41	11.3							33.33		
Maíz, fanega		22				27							
Leña de algarrobo, qtal.			7	7	7			7					
Harina amarilla, fanega			40	33.77	30.4			58					
Harina blanca, fanega				45.43									
Sueldo de peón, día			2	3									

Fuente: Libros de los Hospitales San Andrés y Santa Ana. Archivo de la Sociedad de Beneficencia de Lima.

GRAFICO 1

Evolución del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865.

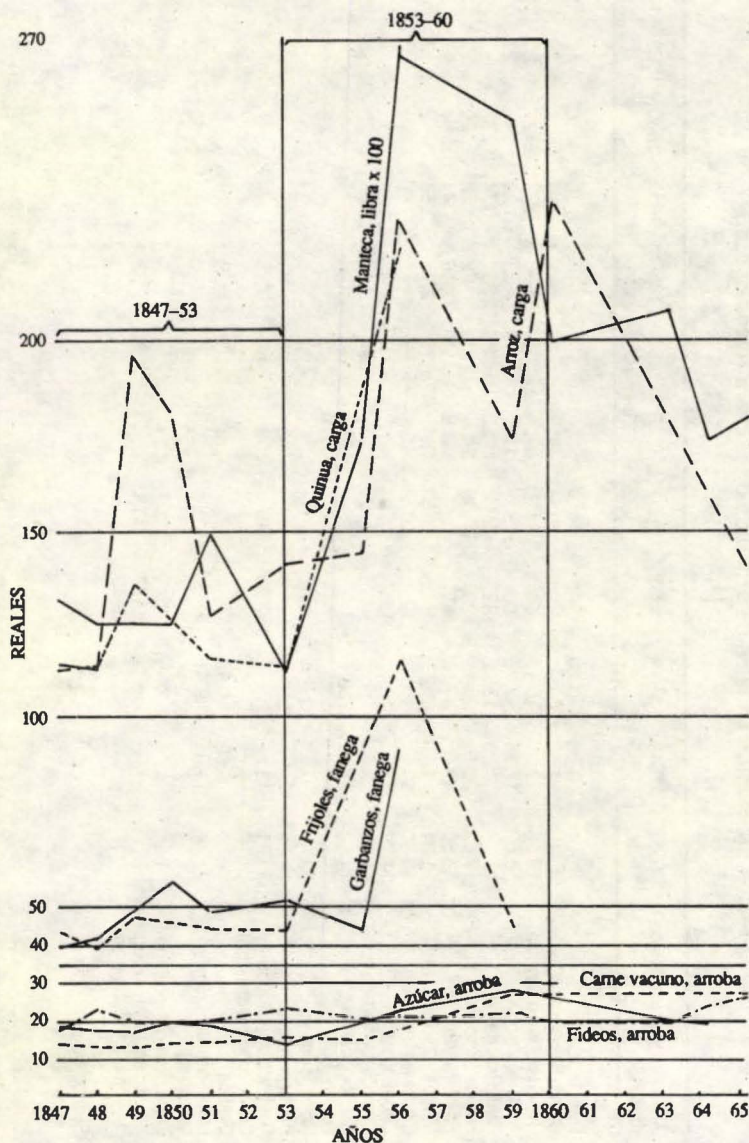
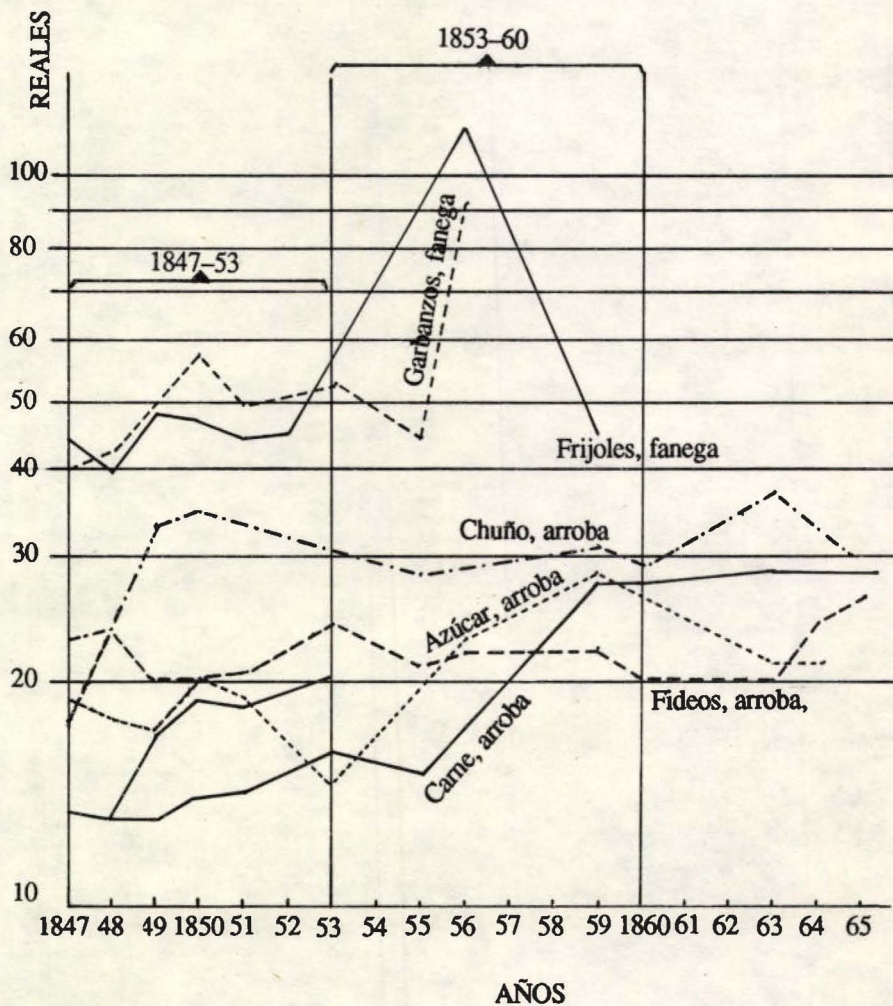


GRAFICO 2

Fluctuación del promedio anual de precios, en reales, de artículos de primera necesidad, 1847-1865. Escala semilogarítmica.



Apéndice 2

EXPEDIENTES OBSERVADOS POR LA JUNTA DE EXAMEN FISCAL*

EL PERUANO.

173

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO.

RECAPITULACION DE LOS EXPEDIENTES OBSERVADOS.

Núm.	Interesados.	Provincias.	Cantidades.	Individuos á quienes se emitieron los Vales.
3648	Antonio Rivero	Arequipa	10350	Mariano Rivero, 10,400.
3691	Domingo Arzubiades	Ayacucho	30908	Juan Manuel Iturregui 5,000 José Mariano Roman 25900
3810	Manuel Salazar y Vicuña	Chancay	135272	Rollin Thorne,
3811	Alejandro Brandon	Perú	13447 3	al mismo.
3904	Juan Bautista Andraca	Lima	61761 2	al mismo 61,700
3911	Manuel Salazar y Baquijano	Jauja	21371	Joaquin José de Osma 2000, Manuel Teodoro del Valle 19,400
4038	Francisco Goitzolo	Lima	365 2	al mismo.
4166	Dolores Puente y hermanos	Perú	7411	Miguel Winder.
4267	Trinidad Jimenes	Idem	20578 5	á la misma 20,600.
4371	Jacóba Boza	Chancay	98000	Juan de Dios Carrion 52,000 Maximiliano Albertini 46,000
4376	Eduardo Perez	Idem	14789 3	al mismo.
4379	Manuel Valdiviezo	Piura	12400	Miguel Taboada.
4383	Pia de la Hoz	Chancay	34900	Abrahan Wendell.
4430	Marcelino Córdova	Santa	5380	al mismo.
4426	José Antolin Rodulfo	Callao	58000	José Manuel Menacho 28,000, Juan Basombrio 20,000 Juan de Dios Lozano 10,000
4640	Manuel Aparicio	Chancay	196530	al mismo.
4868	Joséfa Vasquez de Velasco	Pasco	8600	á la misma.
4935	Andres Revoredo	Canta	132000	al mismo.
4954	Gaspár Orúe	Ica	59904	Demétrio O'Higgins 39,900, Antonio Saldaña 20,000.
4821	Carmon Salinas	Chancay	178370	Felipe Cox.
4959	Julian Cáceres	Perú	6500	Petronila Cáceres de Romero.
4991	Rosendo Gao	Chancay	128430	Miguel Winder.
4992	Pedro Abadía	Lima	79819	Baltazar Bezada 59,900, Andres Arce 19,900.

4994	Antonio F. Prada.....	Cañete	105000	al mismo.
4995	Estevan García.....	Chancay	110247	Juan José Concha.
5002	Mariano y Domingo Laos.....	Idem	66200	á los mismos.
5006	Santiago Canawero.....	Perú	42372	Juan José Concha.
5013	Juan Aliaga.....	Chancay	19245	Felipe Cox 6,400, al interesado 12,800
5077	Terresa Bustamante.....	Camana	9000	Domingo Elias.
5078	Maria I. Ramirez de Arellano.....	Lima	17894	á la misma.
5096	José Simeon Ayllon Salazar.....	Idem	15000	al mismo.
5094	Herederos del General Egusquiza.....	Idem	15000	á los mismos.
5097	Domingo Rolando.....	Idem	22983	al mismo.
5143	José María Sanchez Dávila.....	Idem	17560	al mismo.
5149	Maria Asuncion Jauregui.....	Idem	100961 4	á la misma.
5151	Josefa Latorre de Sagastabeitia.....	Idem	20000	á la misma.
5164	Sebastian Hurtado.....	Chancay	20000	al mismo
5166	Jacoba Boza.....	Idem	42858	Antonio G. de la Fuente.
5177	Santiago y Manuel Basurco.....	Idem	10000	á los mismos.
5197	Andrés Gamarra.....	Lima	15000	al mismo
5158	Juan y Julia Elizalde.....	Chancay	80000	á Juan y Julia Elizalde é hijo
5222	Manuela Quintanilla.....	Pasco	20901	á la misma.
5233	José Castañeda.....	Lima	2000	al mismo.
5242	Monasterio de Jesús María.....	Pasco	4864 6	al mismo.
5246	Lorenzo Lequerica.....	Lima	189000	al mismo.
5249	Francisco A. Goytizolo.....	Idem	9370	al mismo.
5253	Isabel Robles.....	Ica	60000	Baltazar Caravedo.
5264	Empresa de las Minas.....	Huancavelica	74145 3	Demétrio Olavegoya 68,500, Samuel Tracy 5,600.
5306	Accionistas de la Moneda.....	Pasco	112439	José Manuel Piedra.
5376	Isidro Aramburu y otros.....	Lima	141254	al mismo.
5391	Mariano F. Rivero.....	Arequipa	6855	al mismo.
5411	Manuel Carranza.....	Huancavelica	46480	Pedro Vasquez de Velasco.
5437	Isabel Negrete de Merino.....	Idem	142891	Antonio G. de la Fuente 34,000; Pedro V. de Velasco 108,900.
5454	Mariano Jurado Reyes.....	Ica	42732	al mismo.
5457	Magdalena P. Rubianes.....	Huancavelica	71220	Juan Grimé.
5459	Fernán Matos.....	Trujillo	8828	Juan Salazar, 5000; Diego Salazar 3800.
5469	José María Echenique.....	Jauja	5791	al mismo.
5479	Mariano y José Torres.....	Huaylas	30160	Benito Dorca.
5480	Martin Daniel de la Torre.....	Castro-virreyna	36800	Felipe Rivas.
5481	José Ramos Idiazquez.....	Ica	106957 4	Simon G. Paredes 6,200; José María Irigoyen 4,000; Bernardo Roca y Garzon 53,400, y á los interesados 43,400.
5482	Manuel Valdiviezo.....	Piura	29425	Bernardo Roca y Garzon 22,100; Miguel Taboada 7,300.
5501	Juan F. y Juliana Arrillaga.....	Cajatambo	147941	Juan José Concha.
5521	Julian Saracondégui.....	Lima	62186	Manuel Lasarte 15,600; Julian Saracondégui 46,600.
5524	Simon Bolivar.....	Perú	1000000	Antonio L. Gusman.
5540	Manuel Ulloa.....	Cajatambo	31042 1	al mismo.
5544	Martin Cassaro.....	Lima	11783 3	José Eleorrobarrutia.

5545	Juan Bautista Gamarra.....	Cajatambo	24580	Juan José Concha.
5546	Martin Daniel de la Torre.....	Huancavelica	53000	José Zavala 15,000, al interesado 38,000.
5557	Juan Mancebo.....	Canta	104980	Manuel Elguera.
5569	Pedro Acuña.....	Cajatambo	12522 4	al mismo.
5570	Conde de Monteblanco.....	Cañete	900000	al mismo.
5597	Francisco G. Via.....	Huánuco	68310	Gerónimo Cisneros 28,000, Francisco Casós 10,000, Lino Mariano Barrera 8,000, P. Condorena 2,400, J. Valderamey 4,600, Pedro Antonio Cisneros, 9300.
5665	Sebastian Vera.....	Huaylas	34360	Benedicto Valdivia.
5666	Manuel Sulvaagat.....	Santa	90000	Gregorio Videla 52,000: Manuel Suaroz 38,000
5681	Juan Bautista Garcia.....	Perú	250000	José Zavala 20,200, José Manuel Piedra 40,000, G. Videla 189,800
5697	Manuel Garcia del Barco.....	Camaná	38772	José Zavala 15,000, Felix Sotomayor 23,800.
5709	Manuel Vargas.....	Ica	10050	al mismo.
5716	Luis José Orbegoso.....	Huamachuco	7444 7 1	al mismo.
5717	Maria y Manuela Cuadros.....	Arequipa	4431 4	Mannela Cuadros.
5722	Mariano C. Quetzada.....	Idem	2308 1	al mismo.
5735	Ventura de la Hoz.....	Chancay	39957	Maximiliano Albertini.
5737	Nicanor Gonzales.....	Santa	253852 4	al mismo.
5742	Pedro Rojas.....	Pasco	79310	Gregorio Videla.
5743	Andres Osorio.....	Cajatambo	100444	Idem id.
5747	José I. Valdizan.....	Huánuco	93462	Idem id.
5748	Sebastian Hurtado.....	Chancay	10000	al mismo.
5756	José Maria Carrillo.....	Chota, Cajamarca, Pataz y Lambayeque.	168380	Manuel Bahamonde.
5766	Juan Ordoñez.....	Cajatambo	109039	Felipe Cox.
5771	Vicente Claro y Juan Beg.....	Lima	17563 7	Gregorio Videla.
5774	Ignacio Novoa.....	Cañete	900000	al mismo.
5779	Pedro José Arce.....	Cajatambo	79875	Felipe Cox.
5781	Juan Valle.....	Jaenja	9532 6	Casimiro Valle.
5782	Hilario Bustos.....	Tacna	2109	Manuel Bustos.
5784	Mariano Delgado.....	Castro-virreyna	20158	José Francisco Arrece.
5790	Pedro Abadia y Francisco Ubille.....	Lima	50066	Pedro Abadia 25,000, Francisco Ubille 25,100.
5797	Juan del Campo.....	Trujillo	80000	al mismo.
5806	Andres R. Mejia.....	Chancay	8017	Antonio Mejia.
5848	Santiago Pineda.....	Cajatambo	82970	Gregorio Videla.
5861	Ventura Ugarte.....	Jaenja	2903 5	Manuel Teodpro del Valle.
5864	Maximiliano Zevallos.....	Idem	30000	al mismo.
5868	Nicanor Gonzales.....	Pasco	47000	Camilo Gonzales.
5871	Lorenzo A. Cárdenas.....	Jaenja	22505 6	al mismo.
5873	Andres del Castillo.....	Canta	500000	Domingo Solar 250,000, al interesado 250,000
5883	Martin Daniel de la Torre.....	Cañete	58407 6	José Zavala 17,000, al interesado 36,400.
5891	Josefa M. Vasquez.....	Tacna	5050	José Manuel Vazques.
5893	Manuel Maria Qotes.....	Chota	21551 4	al mismo.

5894 Ramon Herrazuri	Perú	40118 4	al mismo.
5895 Manuel J. Marquez	Cajatambo	133282	Pascual Saco 50,000; José Aransibia 30,000; José Pérez Vargas 38,000 Nicanor Gonzales 15,300.
5905 José de la Vía	Chancay	65390	al mismo.
5908 Matías Castillo	Cuzco	7333 4	Eugenio Solar 3700, al interesado 3,600.
5921 Mariano Jurado Reyes	Chuquibambá	2556 4	al mismo.
5926 José A. Gamarra	Huaylas	80000	Felipe Cox.
5927 Antonio Cervero	Chancay	40900	al mismo.
5928 Manuel Heros	Perú	171558	Juana Rosa Heros.
5938 Miguel Abad	Tayacaja	20000	Andrés Arias.
5939 Luis Reyes	Cajatambo	9570	al mismo.
5947 Carmen Trujillo	Huaylas	50868	José Romualdo Urbina.
5958 Lucas S. Rodríguez	Cajatambo	51785	Gregorio Videla.
5959 Mariano Jurado Reyes	Chuquibambá	106000	al mismo.
5977 Francisco Suarez	Huancavelica	71707	Juan Crisóst. Mendoza 17,000 Ant. Chacon 17,000 Fep. Rivas 37,000.
5983 José Barceña	Chancay	150000	Manuel Gonzales.
5984 Concurso de San Antonio	Jaña	120000	Francisco Cox 40,000, Francisco Larco 17,000, Manuel Larco 18,000 José Selaya 2000, Sebastian Dianderas 3,000, Camilo Artola 14,000, Francisco de Paula Casós 26,000.
5985 Antonio Terry	Huailas	67300	José Antonio Terri 36,100, Bernardo Roca Garzon 31,200.
5989 Antonio Cespedes	Cajatambo	78310	Lino Barreda 60,000, Juan José Concha 18,300.
5991 Hermenegilda Carbajal	Lima	20900	Simón Gregorio Paredes 7,000, la interesada 6,000, Manuel Gonzales 4,900, Aparicio Chavez de la Rosa 3000.
5992 Francisco Ruiz	Huailas	40000	Fernando Martínez 24,000, Francisco Forcelledo 16,000.
5994 Antonio José Cox	Perú	52997	Gregorio Elizalde 17,000, Juan José Concha 36,000.
5996 Pedro Vazquez	Huancavelica	67200	Martín Daniel de la Torre 44,200, Francisco Forcelledo 23,000.
5997 Manuel Ostolaza	Callao	134150	Viviano Gómez Silva.
6000 José Gregorio Videla	Conchucos	90087	Demétrio O'Higgins.
6003 José María Carrillo	Cajamarca, y Lambayeque	80800	Juan de Dios Carrion.
6004 Ramon Noriega	Chota	156758	José Pérez Vargas.
6005 Juan Campbell	Perú	12850	al mismo.
6006 José Luis Morales	Huancavelica	89200	José Castañeda.
6007 Francisco Roman	Ica	145410	Camilo Gonzales.
6008 Patricio Fernandez	Huancavelica	306710	José Castañeda.
6009 Paula Salazar	Cajatambo	132486 4	Felipe Cox.
6013 Gregorio Videla	Conchucos	192225	Nicanor Gonzales.
6014 Monasterio de la Concepción	Lima	212900	á la misma.
5104 Mariano Mantilla	Idem	5660	Juan José Concha.

11.728,911 1

Aquí debe agregarse el valor de cuatro expedientes que no ha observado la Junta, por haberse sustraído y que según notoriedad, merecían examinarse.

5154 Testamentaria de Orde.....
5379 Joaquin Velasquez.....
5452 Isidro Vargas.....
5593 José Buitron.....

Chancay
Idem
Idem
Idem

185000
148156
62913
54892 4

Total.... \$ 12.180,172 5

Felipe Cox, 114,060, Tomas Concha 71,060.
Julian Eguren 148.500.
Manuel Oyague 32,000, Juan Jo-é Concha 30,900.
Nicanor Gonzales 54,900.

Lima, a 7 de Julio de 1855.

* El Peruano

31 de octubre 1857, año 16, tomo 33, Nº 37, p. 173; y
04 de noviembre 1857, Nº 38, p. 178

BIBLIOGRAFIA

I. Fuentes primarias manuscritas

- Archivo de la Beneficencia Pública de Lima (ABPL)
Papeles de los hospitales San Andrés y Santa Ana, cuentas de alimentos y medicamentos, 1847-1865.
- Archivo General de la Nación, Lima (AGN)
Libros Manuscritos Republicanos, 1843-1865
Archivo Histórico de Hacienda, 1800-1855
Archivo Histórico del Ministerio de Justicia, Corte Superior de Justicia, causas criminales, 1854-1855
Papeles del Tribunal del Consulado, República, 1830-1850
Registros Notariales, siglo XIX, 1800-1865
Testamentos y Tasaciones Terán, siglo XIX, 1800-1865
- Archivo Histórico Riva Agüero, Lima (AHRA)
Colección Plácido Jiménez, 1868
- Biblioteca Nacional, Lima (BN)
Sección Manuscritos, Sala de Investigaciones, 1849-1858
- Biblioteca del Museo Nacional de Historia, Lima (BMNH)
Documentos, 1845

II. Fuentes primarias impresas

(a) Documentos, folletos, memorias, descripciones de la época

- Agripa (seudónimo), *El Perú en 1834 y 1854*. Lima: Imprenta E. Aranda, 1854.
- Amunátegui, Manuel et al, *Señor, los abajo firmados propietarios y comerciantes de esta ciudad y tenedores de vales de consolidación ante el Soberano Congreso respetuosamente exponen....* Lima, 1862.
- Anónimo, *Al Gobierno, a la Convención Nacional y a la opinión pública*. Lima: Imprenta Libre J. Infanta, 1856.
- Anónimo, *El tratado de 21 de mayo, o el Protectorado anglo-francés*. Arequipa, 1857.
- Anónimo, *Refutación del folleto titulado vindicación de don José Rufino Echenique*. Lima: J. Sánchez Silva, 1856.
- Artesanos, [Manifiesto] *En la ciudad de Lima, reunidos el día diez y nueve de diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho....* Lima, 1859.

- Barriga y Alvarez, Felipe [seudónimo: Timoleón], *El Perú y los gobiernos del general Echenique y la Revolución*. Lima, 1855.
- Camacho, Juan Vicente, *Apuntes para la biografía del gran mariscal d. Blas Cerdeña dedicados a su hijo el señor mayor de artillería don José Cerdeña*. Lima: Tipografía de El Herald, 1854.
- Casanova, Juan Norberto, *Ensayo económico-político sobre el porvenir de la industria algodonera fabril del Perú*. Lima: J. Masías, 1849.
- Casós, Fernando, *Para la historia del Perú : revolución de 1854*. Cuzco: Imprenta Republicana, 1854.
- . *Romances históricos, los hombres de bien, los amigos de Elena*. París: Renée Schmitz, 1874.
- Clarete, Ibrahim (seudónimo), *Consolidación*. Lima: Imprenta de Justo Montoya, 1853.
- Comisión Especial del Crédito Público, *Informe de la Comisión Especial del Crédito Público sobre los vales consolidados y tachados*. Lima: Imprenta de Félix Moreno, 1856.
- Concejo Provincial de Lima, *Datos e informes sobre las causas que han producido el alza de precios de los artículos de primera necesidad que se consumen en la capital*. Lima: Imprenta del Estado, 1870.
- Dancuart, Emilio, *Anales de la Hacienda Pública*, tomos 1-6. Lima: Imprenta Guillermo Stolte, 1902; Imprenta de la Revista, 1903.
- Echenique, José Rufino, *El general Echenique, presidente despojado del Perú en su vindicación*. Nueva York, 1855.
- . *Memorias para la historia del Perú*. Lima: Ed. Huascarán, 1952.
- E.M[?], *La moneda en el Perú*. Lima: Tipografía Aurelio Alfaro, 1859.
- Humphreys, R. A. (editor), *British Consular Reports on the Trade and Politics of Latin America, 1824-1826*. Londres: Office of the Royal Historical Society, 1940.
- Junta de Examen Fiscal, *Informes de la Junta de Examen Fiscal creada por resolución suprema en febrero de 1855 para revisar los expedientes relativos al reconocimiento de la deuda interna consolidada de 20 de abril de 1851, publicación oficial*. Lima: Imprenta del Estado, 1857.
- Martínez, M. (editor), *Relación sucinta de los principales hechos ocurridos en algunos pueblos del Perú, con motivo de la injerencia de los funcionarios políticos en la renovación de los colegios electorales*. Lima: Impreso por Francisco García, 1850.
- Mendiburu, Manuel de, *Consideraciones sobre el empréstito de 1853*. Londres: T. F. Newell, 1853.
- . "Noticias biográficas de los generales que ha tenido la República peruana desde 1821", *Revista Histórica* tomo 15 (1960).
- . "Memorias", inéditas. Versión mecanografiada del Dr. Félix Denegri Luna, Lima.

- Pando, Jose María, *Memoria sobre el estado de la Hacienda de la República peruana, en fin del año 1830, presentada al Congreso por Jose María Pando*. Lima: José Masías, 1831.
- . *Reclamación de los vulnerados derechos de los hacendados de las provincias litorales del Departamento de Lima*. Lima: Imprenta J. M. Concha, 1833.
- Pflucker, Carlos Renardo, *Exposición que presenta Carlos Renardo Pflucker al Supremo Gobierno, con motivo de las últimas ocurrencias acaecidas en la Hacienda Mineral de Morococha*. Lima: Imprenta del Correo Peruano, 1846.
- . *Observaciones de d. Carlos R. Pflucker sobre la refutación de d. Juan Federico Lembcke con respecto a los operarios alemanes amotinados en la Hacienda Mineral de Morococha*. Lima: Imprenta del Correo Peruano, 1846.
- Quirós, Francisco, *Demostración legal que presenta el ciudadano Francisco Quirós sobre que es inalterable la sentencia pronunciada en tercera instancia absolutoria del comiso denunciado contra el bergantín inglés Mackarell...* Lima: Imprenta Republicana, 1827.
- Rivero, Mariano y Piérola, Nicolás, *Memorial de ciencias naturales y de industria nacional y extranjera*, 2 tomos. Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1828.
- Silva Santisteban, José, *Breves reflexiones sobre los sucesos ocurridos en Lima y Callao con motivo de la importación de artefactos*. Lima: Imprenta de la calle Nazareno, 1859.
- Távora, Santiago, *Abolición de la esclavitud*. Lima: Imprenta de El Comercio, 1855.
- Tristán, Flora, *Peregrinaciones de una paria*. Lima : Ed. Cultura Antártica, 1846.
- Ulloa, José Casimiro (seudónimo : un peruano), *El Perú en 1853: un año de su historia contemporánea*. París: Imprenta de Maulde y Renou, 1854.
- Valdivia, Juan Gualberto, *Memorias sobre las revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866*. Lima: Imprenta de la Opinión Nacional, 1874.
- Vidal, Francisco, "Memoria escrita en 1855, después de la Batalla de La Palma", *Fénix* 6 (1949) : 595-640.

(b) Guías y estadísticas de Lima

- Cabello, Pedro M., *Guía del Perú para 1858*. Lima: Imprenta Masías, 1858.
- Carrasco, Eduardo, *Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año de 1850*. Lima: Imprenta de Justo Montoya, 1849.
- Córdova y Urrutia, José María, *Estadística histórica, geográfica, industrial y comercial de los pueblos que componen las provincias del departamento de Lima*, 2 tomos. Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1839 y 1840.

- Fuentes, Manuel Atanasio, *Estadística general de Lima*. Lima: Tipografía Nacional de M. N. Corpancho, 1858.
- . *Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres*. París: Librería Fismin Didot Hnos., 1867.
- Leubel, Alfredo G., *El Perú en 1860 o sea anuario nacional*. Lima: Imprenta de El Comercio, 1861.
- Schutz, C. Damián y Moller, Juan, *Guía de domicilios de Lima y Callao para el año de 1853*. Lima, 1854.

(c) Periódicos consultados

El Comercio, 1850-1858.

El Peruano, 1855-1858.

El Registro Oficial, 1851-1854.

III. Bibliografía secundaria citada

- Basadre, Jorge, *Historia de la República del Perú*, 6ta. edición, 17 tomos. Lima: Ed. Universitaria, 1969.
- . *Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú*. Lima: Ed. P. L. Villanueva, 1971.
- . *Perú: problema y posibilidad*. Lima: Banco Internacional, 1978.
- Basadre, Jorge y Ferrero, Rómulo, *Historia de la Cámara de Comercio de Lima*. Lima: Ed. Santiago Valverde, 1963.
- Bonilla, Heraclio, *Guano y burguesía en el Perú*. Lima: IEP, 1974.
- . "La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú", *Desarrollo Económico* 12, Nº 76 (1972): 305-331.
- . "La expansión comercial británica en el Perú", *Revista del Museo Nacional* 40 (1974): 253-275.
- Burga, Manuel, *De la encomienda a la hacienda capitalista: el valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX*. Lima: IEP, 1976.
- Clavero, José G., *El coronel de milicias Pedro Gonzales Candamo*. Lima: Tipografía de El Lucero, 1904.
- Dávalos y Lisson, Pedro, *La primera centuria*. Lima: Imprenta Gil, 1926.
- Deustua, José. *La minería peruana y la iniciación de la República*. Lima: IEP, 1986.
- Flores Galindo, Alberto, *Arequipa y el sur andino*. Lima: Ed. Horizonte, 1977.
- . *Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830*. Lima: Mosca Azul, 1984.
- Fontana, Josep, *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Ariel, 1973.
- Gootenberg, Paul, "The Social Origins of Protectionism and Free Trade in Nineteenth-Century Lima", *Journal of Latin American Studies* 14 (1982): 329-358.

- Hobsbawn, Eric, *The Age of Capital*. Londres: Windenfeld & Nicholson, 1976.
- Leguía, Jorge Guillermo, *Estudios históricos*. Santiago: Ed. Ercilla, 1939.
- Macera, Pablo, *Trabajos de historia*, 4 tomos. Lima: INC, 1977.
- Mallon, Florencia E., "Minería y agricultura en la sierra central, formación y trayectoria de una clase dirigente regional, 1830-1910", en "Lanas y capitalismo en los Andes centrales". La Molina: Universidad Nacional Agraria, 1977.
- Manrique, Nelson, "El desarrollo del mercado interior en la sierra central, 1830-1910". La Molina: Taller de Estudios Andinos, 1979.
- Mendiburu, Manuel de, *Diccionario histórico-biográfico del Perú*. Lima: Imprenta de Enrique Palacios, 1931-1934.
- Milla Batres, Carlos (ed.), *Diccionario histórico y biográfico del Perú: siglos XV-XX*. Barcelona: Ed. Milla Batres, 1986.
- Moreyra Palacios, Carlos, *La deuda anglo peruana 1822-1890*. Lima: Librería Studium, 1983.
- Moreyra Paz Soldán, Manuel, "El oro de California y Australia y su repercusión monetaria en el Perú", *Revista Histórica* 26 (1962-63) : 236-258.
- Mörner, Magnus, *Notas sobre el comercio y los comerciantes del Cusco desde fines de la colonia hasta 1930*. Lima: IEP, 1979.
- Nadal, Jordi, *El fracaso de la Revolución Industrial en España*. Barcelona: Ariel, 1975.
- . "The Failure of the Industrial Revolution in Spain", en Cipolla, C. (editor), *The Fontana Economic History of Europe*. (Glasgow: Collins Sons & Co., 1975), vol. 4.
- Platt, D. C. M., *Latin America and British Trade, 1806-1914*. Edinburgo: T. & A. Constable, 1972.
- Romero, Emilio, *Historia económica del Perú*. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1969.
- San Cristóbal, Evaristo, *Apéndice al diccionario histórico-biográfico del Perú [de Mendiburu]*. Lima : Imprenta Gil, 1935.
- Tamamés, Ramón, *Estructura económica de España*, décimo segunda edición. Madrid: Alianza Ed., 1978
- Tamayo Herrera, José, *Historia social del Cusco republicano*. Lima: Talleres Industrial-Gráfica, 1978.
- Tantaleán Arbulú, Javier, *Política económico-financiera y la formación del Estado: siglo XIX*. Lima : CEDEP, 1983.
- Tauro del Pino, Alberto, *Diccionario enciclopédico del Perú ilustrado*. Lima: Ed. Mejía Baca, 1975.
- Vicens Vives, J. *An Economic History of Spain*. Princeton: Princeton University Press, 1964.
- Yepes del Castillo, Ernesto, *Perú 1820-1920: un siglo de desarrollo capitalista*. Lima: IEP, 1972.

IV. Tesis

- Alvarez, María, "Capital comercial y capital industrial en la minería, sierra central siglos XIX y XX". Tesis de Bachiller: UNMSM, 1979.
- Engelsen, Juan Rolf, "Social Aspects of Agricultural Expansion in Coastal Peru". Tesis Doctoral: UCLA, 1977.
- Gootenberg, Paul, "Artisans and Merchants: the Making of an Open Economy in Lima, Peru, 1830-1860". Tesis de Maestría: Oxford University, 1981.
- . "Merchants, Foreigners and the State: the Origins of Trade Policies in Post-Independence Peru". Tesis Doctoral: University of Chicago, 1985.
- Quiroz Norris, Alfonso W., "La consolidación de la deuda interna peruana, 1850-58: los efectos sociales de una medida financiera estatal". Tesis de Bachiller: Universidad Católica, 1980.

**Este libro se terminó
de imprimir en Lima,
noviembre de 1987**



**EDITORIAL Y PRODUCTORA GRAFICA "NUEVO MUNDO" E.I.R.L.
Av. Brasil 3959 - Lima 17 - Telf: 61-2428**

La consolidación de la deuda interna decretada en 1850 ha sido considerada como un ejemplo del mal uso dado a fondos fiscales. Este libro analiza detalladamente tanto a los beneficiarios de esta medida como el destino de los ingresos provenientes de la explotación del guano repartidos por la consolidación. Se enjuicia, por tanto, el rol del Estado en torno a la confianza y crédito públicos, y el apoyo que pudo brindar a la clase dominante peruana en formación.

Alfonso W. Quiroz, Ph. D. (Universidad de Columbia), graduado de la Universidad Católica (Lima), actualmente profesor del Departamento de Historia de Baruch College,

City University de New York, es autor especializado en historia económica y bancaria peruana.

